Loris Zanatta

Historia de América Latina

De la Colonia al siglo XXI



siglo veintiuno editores

biblioteca básica
de historia

Dirigida por Luis Alberto Romero

Traducción de la introducción
y los capítulos 1-4: Alfredo Grieco y Bavio

Traducción de los capítulos 5-12: Guillermo David

Loris Zanatta

Historia de América Latina

De la Colonia al siglo XXI

siglo veintiuno editores





siglo xxi editores, méxico
CERRO DEL AGUA 248, ROMERO DE TERREROS
04310 MÉXICO, D.F.
www.sigloxxieditores.com.mx

siglo xxi editores, argentina
GUATEMALA 4824, C1425BUP
BUENOS AIRES, ARGENTINA
www.sigloxxieditores.com.ar

salto de página
ALMAGRO 38
28010 MADRID, ESPAÑA
www.saltodepagina.com

biblioteca nueva
ALMAGRO 38
28010 MADRID, ESPAÑA
www.bibliotecanueva.es

anthropos
DIPUTACIÓN 266, BAJOS
08007 BARCELONA, ESPAÑA
www.anthropos-editorial.com

ganz1912

Zanatta, Loris
Historia de América Latina. De la Colonia al siglo XXI.-
1ª ed.- Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2012.
288 p.: il.; 16x23 cm.- (Biblioteca básica de historia / dirigida por Luis Alberto Romero)

Traducido por Alfredo Grieco y Bavio y Guillermo David

ISBN 978-987-629-213-9

1. Historia de América. I. Grieco y Bavio, Alfredo, trad. II. David, Guillermo, trad. III. Título
CDD 980

Título original: *Storia dell'America Latina contemporanea*

Edición al cuidado de Yamila Sevilla y Valeria Añón

Diseño de colección: tholön kunst

Diseño de cubierta: Peter Tjebbes

ISBN 978-987-629-213-9

Impreso en Altuna Impresores // Doblas 1968, Buenos Aires,
en el mes de mayo de 2012

Hecho el depósito que marca la ley 11.723
Impreso en Argentina // Made in Argentina

Índice

Introducción

Este libro responde a criterios precisos y es consecuencia de difíciles elecciones. Conviene especificarlas antes de iniciar su lectura, de modo que quien se disponga a leerlo quede advertido de antemano acerca de las técnicas empleadas para construirlo. De hecho, el título es de por sí tan vasto y ambicioso que se presta a expectativas excesivas o distorsionadas, y por ende a desilusiones. En lo que respecta a sus límites, son prácticamente los mismos de la colección en la cual se halla incluido: de allí se infiere la inevitable renuncia a toda completitud. A ello se debe la elección de limitar al máximo todo recurso a nombres, fechas y circunstancias demasiado específicas, y la decisión de no seguir paso a paso la trayectoria de las tantas repúblicas latinoamericanas, cuyos pasajes históricos clave se evocan en detalle allí donde plantean encrucijadas determinantes para comprender los rasgos generales de una época dada. Cualquiera podrá entonces –no sin razón– lamentar esta o aquella omisión y criticar las inclusiones o exclusiones de ciertos personajes y acontecimientos; sin embargo, este ha sido el criterio elegido.

A los mencionados límites de este libro sirve de contraste una ambición; declararla resulta una cuestión de honestidad intelectual. A pesar de su sesgo informativo y de divulgación, ofrece una peculiar clave de lectura de la historia latinoamericana, que el lector no tendrá dificultad en descubrir desde las primeras páginas y reencontrar a medida que avanza en el volumen. Una clave que también presupone elecciones precisas y está fundada sobre la particular atención dirigida a la historia política, a las ideologías y a la historia religiosa, así como a su entrecruzamiento, en la convicción de que, en dicha trama, se encuentra la vía más eficaz para acceder a las dependencias más íntimas de la gran casa de la historia latinoamericana y comprender sus fibras más profundas. De allí que esta historia avance a partir de algunas premisas fundamentales: por una parte, se aproxima a América Latina adoptando lo que podríamos llamar un principio de heterogeneidad, es decir, el reconocimiento de los rasgos más contrastantes del panorama humano y geo-

gráfico de la región. Por otra parte, considera la evidente existencia de un principio de unidad; reconoce, en suma, que la historia ha marcado a América Latina con una impronta unitaria, con mayor o menor peso según los casos y los lugares.

Dado que, si dicho principio de unidad no existiera, esta historia no sería posible, conviene explayarse acerca de su significado. En el origen de la unificación de esta inmensa área, antes privada de lazos internos, existe un acontecimiento traumático por todos conocido: la conquista española y, luego, la colonización y evangelización conducida hasta fines del siglo XVI por las coronas de España y Portugal. Sólo a partir de aquel momento comienza a ser percibida –y, con el tiempo, a percibirse a sí misma– como una unidad política y espiritual lo que hoy llamamos América Latina. La unidad política fue, con mucho, virtual, dada la extensión del territorio y la imposibilidad, en las condiciones de aquellos siglos, de gobernarla con eficacia desde Madrid o Lisboa. Esto no quita que el rey, sus funcionarios y sus leyes no implantaran allí un principio de unidad, que consistía en la pertenencia a un único y gran imperio, y en la lealtad a un mismo soberano. De este principio de unidad política fue corolario clave la unidad espiritual. En efecto, desde los comienzos de la conquista fue misión de los imperios ibéricos expandir a las nuevas tierras la frontera de la cristiandad, convirtiendo al catolicismo, por las buenas o por las malas, a quienes vivían en ellas o allí se instalaban. Así, los latinoamericanos –unos por amor y otros por la fuerza– crecieron unidos en la obediencia a la iglesia de Roma, de la cual los reyes ibéricos y el clero a sus órdenes eran los garantes.

De estos poderosos principios de unidad resulta importante individualizar éxitos y fracasos, resultados y límites. Quizás el éxito principal y más duradero se encuentre en el hecho de que hoy se habla de esta área entera e inmensa empleando un término común: América Latina (Hispanoamérica o Iberoamérica antes). Es decir, no sólo que toda ella sea una unidad lingüística y religiosa, lo que es determinante, sino que toda entera sea vivida y entendida, en el imaginario colectivo, como un conjunto. En suma, América Latina sigue siendo una comunidad imaginada, una civilización con rasgos propios que la distinguen de otras; como tal, también es un mito. Tanto en la historia como en la actualidad, en el mundo político e intelectual y en el de la vida cotidiana, en los estudios o en la retórica, permanece vivo el mito político y espiritual de la unidad latinoamericana.

Todo lo anterior no quita, sin embargo, que la realidad acabara por dividir aquello que los mitos y el imaginario contribuían a mantener

unido; lo cierto es que, con el tiempo, el principio unitario puso en evidencia sus propios límites. Para empezar, la unidad política no sobrevivió al derrumbe o declinar de aquello que la había hecho posible: la caída del imperio español y la decadencia del imperio portugués. Los proyectos unitarios y las invocaciones a la cohesión no impidieron la fragmentación política del continente en los numerosos estados de los que hasta hoy se compone. En cuanto a la unidad espiritual, la fe en gran parte común y la retórica de la hermandad latinoamericana nunca han subsumido por completo el trauma de la conquista. Hay que señalar la existencia de mundos espirituales separados, como también de diversos conglomerados étnicos y sociales, en especial en los países donde la población es de origen más heterogéneo. Tendencias centrípetas y fuerzas centrífugas han escandido siempre –y continúan haciéndolo– el movimiento de la historia latinoamericana. Por un lado, están las pulsiones fuertes y recurrentes a la cooperación y a la integración, a la unidad política y a la comunión espiritual; por el otro, igualmente fuertes y recurrentes, permanecen las razones de la fragmentación.

Por lo tanto, unidad y pluralidad son los dos polos de la historia latinoamericana entre los cuales transcurrirá este libro. Se entiende por unidad la idea de América Latina como concepto histórico, es decir, como el área del continente americano donde, desde el siglo XVI, fue implantada la civilización ibérica, la cual dejó allí como herencia la lengua y la religión, que a la vez son ejes de una visión del mundo y de un sistema de valores que han plasmado sociedad y mentalidad, y donde la pluralidad se vuelve evidente en las formas diversas que esa cepa común asume de país a país, e incluso de región a región. Esto resulta inevitable, considerando que, antes de la colonización ibérica, existían allí tanto grandes civilizaciones como pueblos en estado nómade, tierras muy pobladas y otras semidesiertas; y que gigantescos obstáculos naturales han hecho que la fragmentación sobre la unidad prevaleciera, aun durante los siglos del dominio ibérico; y que el comercio de los esclavos antes y las grandes olas migratorias europeas después afectaran de manera diferente las diversas áreas. A esto se suman los heterogéneos climas, los variados productos de la agricultura y los del subsuelo, los desiguales niveles de desarrollo y bienestar.

Por su historia y por su naturaleza, el curioso mosaico humano que durante siglos se ha ido formando en América Latina se presta a reforzar el principio de unidad o bien a dar un impulso ulterior a la fragmentación. Favorece la unidad en la medida en que se vuelve *melting pot*, es decir, la mezcla étnica y cultural capaz de dar vida a un conjunto

humano original, mestizo por naturaleza propia. Favorece en cambio la fragmentación cuando las barreras entre sus componentes permanecen infranqueables. En tal caso, la etnia puede volverse etnonacionalismo, es decir, identidad excluyente y autosuficiente. Por estas y otras razones, el plural permanece en esta historia no menos que el singular. Y sobre la historia de América Latina conviene evitar las generalizaciones simplificadoras. Esto no implica que no sea preciso buscar también el hilo común, procurando hallar aquello que hace de ella una historia y no historias numerosas y diversas a las que nada une.

El último y fundamental paso para atravesar el umbral que introduce al estudio de América Latina contemporánea se refiere a su ubicación en el horizonte de las civilizaciones modernas. Al respecto conviene aclarar que América Latina, por su historia y cultura, es parte integrante de Occidente. Lo integra a su manera, con las peculiaridades impuestas por el modo traumático al que debe su ingreso y sin negar que permanecen allí los ecos de edades remotas y culturas diversas. De la civilización occidental y de su parábola ha sido protagonista durante siglos: desde que fue incluida en los imperios ibéricos compartió todos los trances de la civilización occidental, que se plasmaba en ella y la imbricaba en su desarrollo. Conquistada por los reyes de España y de Portugal, la América ibérica no fue para ellos un mero botín o una avanzada desde la cual extraer las riquezas locales. Fue eso, naturalmente, pero también fue mucho más. La América ibérica se volvió ella misma España y Portugal, y como tal permaneció durante casi tres siglos. Constituyó entonces parte de los imperios metropolitanos, los que la usufructuaron pero poblándola, la dominaron pero gobernándola, la controlaron como una parte de ellos mismos. Estos imperios proyectaron allí tanto las propias ansias de grandeza material como el impulso civilizador. En términos concretos, esto significa que la moderna historia política, social, económica, cultural y religiosa de América Latina es parte de la más general de Occidente, por el cual ha sido forjada y al cual ha dado aportes clave.

Dicho esto, es necesario aclarar aún de qué Occidente es parte la historia latinoamericana, ya que la de Occidente no es una noción unívoca ni inmutable en la historia. Ante todo, América Latina entró en Occidente volviéndose Europa, de la cual durante siglos fue parte significativa. Europeos eran sus soberanos y sus socios comerciales; europeo era el clero que la evangelizaba y los orígenes de sus instituciones. Europeas, por orígenes y cultura, ideas y costumbres, eran las elites que dirigían sus fortunas y destinos. Lo que la geografía colocaba en Amé-

rica, la historia lo hacía parte de Europa. De esto toma su impulso el largo camino de la unión entre geografía e historia recorrido en este libro; un trayecto que indica la progresiva deseuropeización y americanización. Sin embargo, decir que América Latina entró en Occidente por la puerta europea sería algo vago y engañoso si no se aclarara que esa puerta fue la de la Europa latina o, para ser aún más precisos, la de la Europa católica, en una época en la cual la Reforma protestante dividía a la cristiandad occidental. La que ahora comienza, entonces, es la historia de la vertiente americana de lo que es lícito llamar el Occidente latino.

1. El patrimonio espiritual de la Colonia

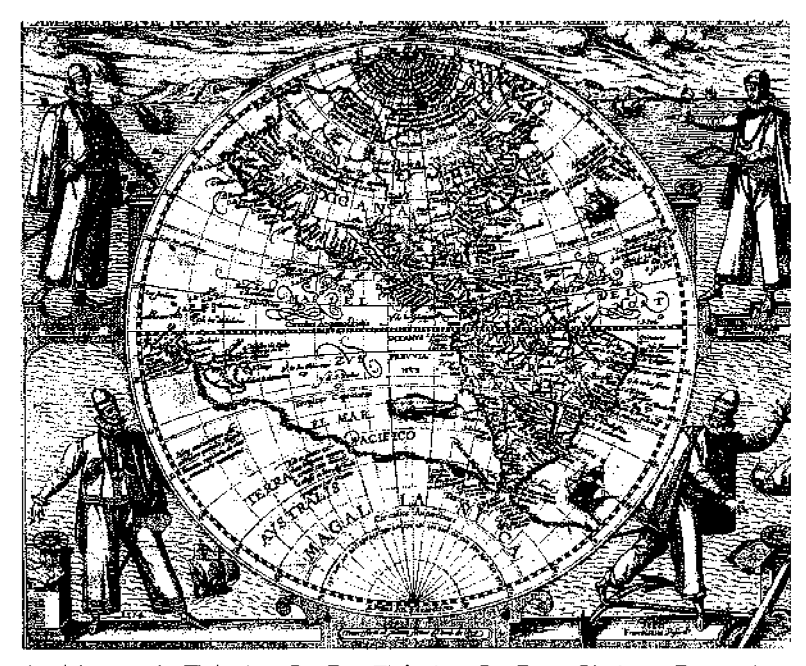
En el curso de la extensa era colonial, España y Portugal implantaron en Iberoamérica las hondas raíces de su civilización: tanto las estructuras materiales como las espirituales quedaron profundamente impregnadas por ella. Así conformadas, las sociedades coloniales americanas desarrollaron los rasgos que no sólo condicionaron el posterior tránsito a la independencia, sino que plasmaron una densa herencia con la cual la entera historia de los periodos posteriores tuvo que ajustar una y otra vez las cuentas. Entre aquellos rasgos se destacan la naturaleza conciliadora del vínculo entre los reinos americanos y los soberanos europeos, la tensión entre la unidad política y la segmentación social, la organización y la concepción corporativa del orden social, la superposición entre orden político y homogeneidad espiritual y el nacimiento de una economía periférica, vale decir, dirigida hacia los mercados transatlánticos. La consolidación de las sociedades coloniales, por un lado, y el esfuerzo de las coronas ibéricas por acrecentar su poder en los territorios imperiales para extraer de ellos más recursos y triunfar sobre el desafío de las potencias nacionales en ascenso, por otro lado, resquebrajaron durante el siglo XVIII el tradicional vínculo entre la parte europea y la americana de los imperios ibéricos. No obstante, dicha unión no llegó a romperse.

La herencia política

A lo largo de casi tres siglos (desde que, en la primera mitad del siglo XVI, la conquista se volvió colonización hasta que, en los inicios del siglo XIX, las colonias lograron su independencia) América Latina fue Europa. Tres siglos durante los cuales cambió el mundo y, con él, se transformó Iberoamérica. Cambiaron ideas y tecnologías, las mer-

cancías y su modo de circulación, las sociedades y las formas de organización social. Se modificó el equilibrio entre las potencias europeas, dado que las potencias ibéricas entraron en un progresivo declinar, mientras que otras, en especial Gran Bretaña y Francia, emergieron.

Expresar de manera breve pero completa qué fueron esos tres siglos para América Latina es una tarea casi imposible. Por lo pronto, los casos de la América hispana (en aquella época sin duda la más extensa, rica y poblada) y el de la portuguesa (aún poco habitada y, al menos hasta el siglo XVIII, concentrada sobre las costas) son distintos. No obstante, es preciso aclarar algunas cuestiones, en especial respecto de su herencia. En primer lugar, nos referiremos a su patrimonio espiritual, sin el cual la historia de los períodos siguientes perdería sus coordenadas. La primera observación clave es que en esos siglos nació en esa parte de América una nueva cultura. Aquella América compartió desde entonces rasgos y destinos de la civilización hispánica, cuyo elemento unitario y principio inspirador residía en la catolicidad, en la cual encontraba, además, su misión política.



América según Théodore De Bry. Théodore De Bry y Girolamo Benzoni, "America Sive Novus Orbis Respectu Europaerum Inferior Globi Terrestris Pars", Fráncfort, 1596.

Hermosa u horrible, coaccionada o consensual, controvertida como toda cultura, este dato parece sin embargo fuera de toda discusión. Porque por civilización se entiende un complejo conjunto de instrumentos materiales y valores espirituales, de instituciones y costumbres capaces de plasmar tanto la organización social y política como el universo espiritual y moral de los pueblos que pertenecen a ella. En este sentido, la civilización hispánica en América no fue una excepción. Tanto es así que sus características fueron heredadas por los estados y poblaciones protagonistas de la historia latinoamericana contemporánea.

En términos políticos, los imperios ibéricos –en especial el de los Habsburgo, quienes ocuparon el trono de España desde 1535 hasta 1707– fueron organizados y concebidos para dejar en herencia tanto un principio de unidad como uno de fragmentación. Sobre una dosificación sabia y delicada de ambos principios se basó de hecho el régimen pactista que gobernó las relaciones entre el soberano y sus reinos. Todos sus reinos o posesiones, tanto los peninsulares como los americanos, quedaban sometidos a parejo régimen. Ahora bien, ¿en qué consistía ese pacto no escrito, fruto de una probada costumbre? Ante todo, en la unidad imperial. Imperio universalista regido por la misión universal de expandir la cristiandad, el imperio español se concibió a sí mismo en perfecta sintonía con el imaginario religioso que lo animaba: como un inmenso organismo que, en la armonía entre sus partes, ponía de manifiesto el ordenamiento divino. Un orden de cuya unidad política y espiritual el rey era el garante, corazón batiente y terminal único de aquel organismo, titular de la ley y protector de la iglesia.

Claro que, como ocurre con todo pacto, a cambio del reconocimiento de su propia soberanía, el rey realizaba importantes concesiones a estos súbditos. En principio, les otorgaba eso que vulgarmente es señalado por medio de la fórmula popular "la ley se acata, pero no se cumple": la ley del rey era reconocida en signo de sumisión a su legítimo poder; el gobierno era otra cosa, fundado sobre usos, costumbres y poderes de las elites locales. Estas eran parte integrante de un imperio unitario, que se extendía desde los altiplanos mexicanos hasta los andinos, unido por la obediencia a un solo rey y a un solo Dios. Sin embargo, dichas elites gozaban de amplia autonomía. Los reyes, que en verdad no podían gobernar efectivamente desde Madrid sus remotas posesiones, se resguardaban del peligro de que ellas, en caso de que se sintieran oprimidas por el poder central, desearan seguir sus propios caminos. Pero los monarcas admitían también el principio de fragmentación, el cual prevaleció una vez caído el imperio: para mantener unidos con eficacia

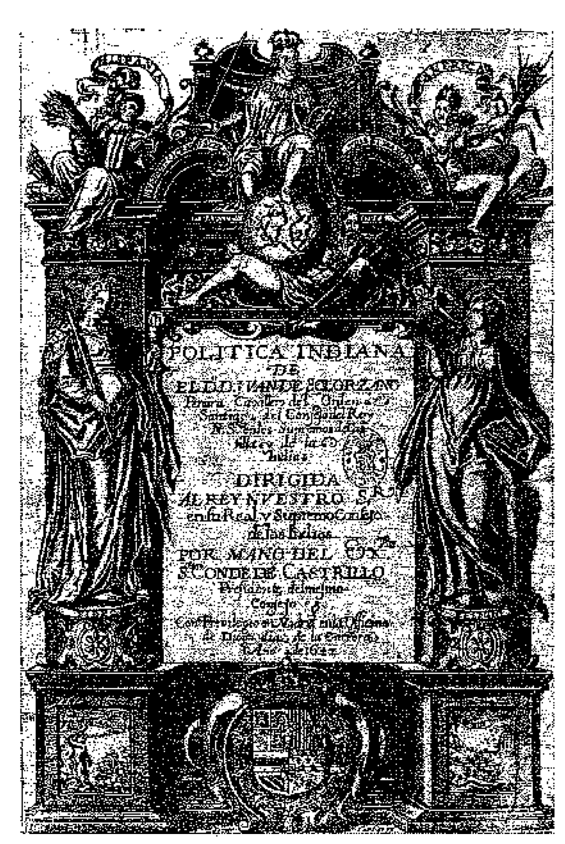
aquellos miembros, extraños o extranjeros unos de otros, sólo existía la obediencia al rey, a lo que se añadía la pertenencia a una misma civilización, concepción fuerte en lo espiritual, aunque débil en términos políticos.

La sociedad orgánica

A lo largo de tres siglos, las relaciones entre las partes de estas sociedades, tan distintas de una zona a la otra, fueron complejas, articuladas y ricas en variantes. Por ende, no existe un único modelo social válido para todos y cada uno de los tantos territorios gobernados por las coronas ibéricas. Para reunir los rasgos de las relaciones sociales que tanto impregnaron las estructuras y las mentalidades de la América ibérica, y que más tarde hicieron sentir su peso sobre la historia de América Latina independiente, resulta conveniente atenerse a ciertas consideraciones de carácter amplio. En términos generales, es posible afirmar que el espíritu y los instrumentos sobre los cuales se asentó la arquitectura de las sociedades ibéricas en América forjaron un orden corporativo, el cual era la norma para las sociedades de la época en Occidente, pero asumió un sentido y formas peculiares en una América de caracteres espaciales y humanos particulares. Las leyes que regularon dichas sociedades y, más aún, las costumbres y las normas implícitas del régimen de pacto con la Corona dotaron de vida a una sociedad de corporaciones. Una sociedad donde los derechos y los deberes de cada individuo no eran iguales a los de cualquier otro, sino que dependían de los derechos y deberes del cuerpo social al cual se pertenecía. Esto ocurría tanto en los vértices de la sociedad, donde funcionarios, clero, fuerzas armadas poseían sus propios fueros, es decir, sus privilegios y sus obligaciones, como en la base, donde las masas populares, en su mayoría indias, tenían también derechos y obligaciones. Como todas las sociedades occidentales de aquella época, también la ibérica en América era orgánica, y presentaba dos rasgos fundamentales: era una sociedad "sin individuos", en el sentido de que los individuos se veían sometidos al organismo social en su conjunto; y era jerárquica, porque, como en todo cuerpo orgánico, tampoco en este todos sus miembros tenían la misma relevancia, ya que se consideraba que cada uno debía desempeñar el papel que Dios y la naturaleza le habían asignado.

Estas sociedades orgánicas, sin embargo, eran ricas en contrastes y ambivalencias. Contrastes porque, a pesar de haber sido fundadas sobre

desigualdades profundas e institucionalizadas, sobre roles de dominantes o dominados establecidos desde la conquista, se veían sujetas a revueltas recurrentes y a una sorda hostilidad contra el orden establecido. Ambivalencias porque la naturaleza orgánica de la sociedad dejaba a los más oprimidos (por ejemplo, las comunidades indias) amplias posibilidades de autogobierno una vez satisfechas las obligaciones preestablecidas, ya fuera prestando pesados tributos con su fuerza de trabajo o pagando impuestos. Es decir, aunque atravesadas por fuertes tensiones internas, aquellas sociedades presentaban también en sus rígidos estratos algunos aspectos que luego serían idealizados (sentido comunitario, autonomía, protección), que es necesario tener en cuenta para comprender la extraordinaria resistencia al cambio y al paso del tiempo de ciertos rasgos de aquel orden antiguo.



Portada de *Política indiana*, de Juan de Solorzano Pereira, Madrid, 1648.

Un orden corporativo que en América Latina asumió rasgos inéditos o más marcados que los de cualquier orden análogo y cuya característica más evidente es su naturaleza segmentaria. Las frecuentes barreras entre un estado y otro de aquella sociedad de hecho no eran sólo el fruto de la riqueza o del linaje, pero eran acumulativas: también eran barreras étnicas y culturales que, en especial donde más numerosa era la población india o esclava, equivalían a compartimentos que separaban mundos extraños entre sí, aunque constreñidos a vivir en estrecha relación. Estas eran, a grandes líneas y en su esencia más íntima, las sociedades que los nuevos estados de América Latina heredaron de los imperios ibéricos: atravesadas por fallas profundas y peligrosas, también estaban unidas por estrechas redes de antiguos vínculos. En ellas, "el nacimiento del individuo" –la política moderna fundada sobre el primado de los derechos individuales– cayó como un golpe de maza sobre una pieza de estaño.

Españoles, indios y esclavos africanos

En toda América, la población blanca de origen europeo ocupaba los vértices superiores de la jerarquía social, y controlaba la política y la economía, la justicia, las armas y la religión. Vivía concentrada en los centros urbanos. En su interior, sin embargo, resultaba heterogénea, rasgo que se acentuó a medida que, en el curso de la era colonial, nuevas olas migratorias arribaron a las orillas americanas desde la Península Ibérica. Al núcleo originario de encomenderos –esto es, de los conquistadores o de sus descendientes que en un primer momento habían recibido en dotación del soberano un territorio definido por términos que también incluían a la población autóctona que lo habitaba, y con el tiempo se transformaron en grandes terratenientes, propietarios de numerosos esclavos o indios– se añadieron poco a poco nuevas figuras. Con el tiempo, emergieron entre ellas los artesanos, los funcionarios y los profesionales, organizados en corporaciones que definían la naturaleza de oficios, profesiones y funciones públicas, al tiempo que sancionaban sus derechos y deberes. También eran numerosos los blancos que se dedicaban al comercio y a la actividad mercantil en general, o se hallaban empleados en otras ocupaciones menores. Esto hacía de la sociedad blanca el compartimento más alto de aquellas sociedades, aunque muy heterogéneo y diferenciado. En su interior y con el tiempo, se volvió cada vez más nítida la distinción entre criollos nacidos en América y pertenecientes a la

sociedad local, y peninsulares llegados con el uniforme de funcionarios de la Corona. En especial, desde el siglo XVIII, cuando las reformas introducidas por los Borbones implicaron un estricto control sobre todos cargos civiles, militares o eclesiásticos más importantes.

En tanto, la población india estaba separada con nitidez de la blanca. Tanto socialmente, sometida a severos regímenes de explotación de su trabajo, como territorialmente, ya que, en su mayoría, se hallaba relegada a los márgenes de la ciudad o a las zonas rurales. A esta población era común referirse como la "República de Indios". Al mismo tiempo, la población india de la Nueva España (el futuro México) se mezcló más a fondo con la población blanca que las poblaciones indias del área andina, donde los contornos étnicos se mantuvieron más definidos. Confinado a las propias comunidades, el grueso de la población india conservó en su interior gran parte de las antiguas distinciones entre nobles y plebeyos, de sus costumbres, y de la organización familiar y el uso de las tierras comunitarias, ya en auge antes de la conquista ibérica.



Felipe Guaman Poma de Ayala, "Negros / Cómo lleba en tanta paciencia y amor de Jesucristo los puenos negros y negras y el uellaco de su amo no tiene caridad y amor de prógimo. / soberbioso", en *El primer nueva corónica y buen gobierno*, México, Siglo Veintiuno Editores, 1980.

Por último, en cuanto a la población africana que llegó a la América ibérica a través de la trata de esclavos –según las estimaciones más atendibles, fueron cerca de tres millones y medio de individuos durante la era colonial–, tendió a concentrarse en las áreas tropicales, donde la población india era escasa o ausente, o donde, como en las Antillas, había sido diezmada y desapareció a causa de las epidemias causadas por el contacto con los conquistadores. En un primer momento, en los territorios de la Corona española, su importación fue concebida como un sistema capaz de preservar a los indios de la esclavitud. Estos eran jurídicamente libres, y a su protección y evangelización estaba destinada explícitamente la conquista.
El grueso de los esclavos africanos terminó trabajando en las plantaciones, integrando las numerosas filas del servicio doméstico, o bien sirviendo de intermediario a los dignatarios blancos, en zonas habitadas mayoritariamente por indios. Su elevado valor comercial y la gran resistencia física los volvieron, en muchos casos, codiciables a los ojos de la elite criolla. Esto les permitió, con alguna frecuencia (en especial en la América española), separarse del plano más bajo de la escala social. Finalmente, por segmentadas que fuesen aquellas sociedades, entre sus compartimentos no se erigían muros totalmente impermeables y, tanto a través de los frecuentes nacimientos de mestizos o de mulatos, cuanto por el creciente ingreso de indios o esclavos africanos en la vida social de la república de españoles, con el tiempo aquellas sociedades fueron asumiendo contornos cada vez más complejos y diversos de región en región.

Una economía periférica

La América ibérica ingresó a los imperios de España y Portugal para desarrollar una vocación económica complementaria a sus necesidades globales. Para citar el ejemplo más famoso: es sabido que los metales preciosos americanos fueron decisivos para financiar las grandes ambiciones y las reiteradas guerras europeas de la corte española y, en cierta medida, para alimentar la acumulación originaria gracias a la cual levantó vuelo la Revolución Industrial. Esto no significa que hayan faltado reciprocidades entre la orilla americana y la europea de aquellos imperios, dado el intenso intercambio de productos que modificó radicalmente los consumos en uno y otro sentido. Esto hizo, por ejemplo, que los europeos "descubrieran" el tomate, la papa, el tabaco o el ananá; otro tanto les ocurrió a los americanos con el café, la caña de azúcar o la banana, cultivos de los cuales se convirtieron en grandes

productores y exportadores, hasta el punto de incidir sobre la historia alimentaria (y, por lo tanto, demográfica) de Europa.

Lo que resulta más relevante a la hora de comprender la herencia económica que dejó la era colonial a la América independiente es que, en esos siglos, esa parte de América se volvió periferia de un centro económico lejano. Un centro (el español bastante más que el portugués) que ejercitó el monopolio comercial con los territorios americanos y que buscó conservarlo, puesto que se entendía –en una política nada original para una época dominada por las doctrinas mercantilistas– que el monopolio económico sobre las propias posesiones era un decisivo instrumento de poderío, que debía salvaguardarse a toda costa de la competencia de las otras naciones. Dicha concepción dejaría impresos caracteres perdurables y peculiares en la economía latinoamericana. Esto es así, también, porque las potencias ibéricas eran tan poderosas en el siglo XVI como declinantes dos siglos más tarde. En suma, poco a poco dicho centro se volvió periferia de otro centro, el que desde el norte de Europa guió la revolución en el comercio y en la industria desde el siglo XVIII en adelante.

Esta condición de periferia figura entre las principales herencias económicas de la era colonial. La economía de la América ibérica tendió a organizarse hacia el exterior en función del comercio, tanto para obtener ingresos financieros de la exportación de materias primas como para dotarse, a través de la importación, de numerosos bienes fundamentales que el centro del imperio le proporcionaba. Esta vocación periférica continuó caracterizando a la economía latinoamericana aun cuando el monopolio comercial con la Península Ibérica comenzó a peligrar bajo el impulso de la competencia inglesa, francesa u holandesa y, con mayor razón, cuando el cordón umbilical con España y Portugal se cortó por completo y la economía de América Latina quedó huérfana de un vínculo del que era más que nunca dependiente –hasta que volvió a anudarlo con la nueva potencia hegemónica, Gran Bretaña–.

Todo esto tuvo también otros corolarios, de los cuales la historia económica de América Latina mostró pronto profundos signos. El primero, la debilidad intrínseca del mercado interno, obstaculizado en su desarrollo por los enormes espacios continentales y por la estructura política del imperio, pero aun más por la proyección hacia el exterior de la economía del área, y continuando con la propensión a la especialización productiva dirigida a la exportación y los escasos incentivos al desarrollo de las actividades manufactureras, inhibidas por la complementariedad económica con un centro lejano.

En síntesis, América Latina recibió en herencia empujes unitarios incluso de la economía, al menos en el sentido de que sus diversas áreas compartieron un mismo "síndrome de la periferia", esto es, problemas y oportunidades análogos. Más aún, se trataba de fuerzas centrífugas, dada la natural tendencia de cada una de las regiones a establecer vínculos con el socio exterior más conveniente, dando la espalda a los territorios que la confinaban, frecuentemente tan vecinos como extraños.

Crecimiento económico y nuevas potencias

Cómo, cuánto, en qué medida y por qué creció la economía de la América ibérica durante la era colonial, en especial desde el siglo XVIII, cuando los Borbones en España y el marqués de Pombal en Portugal introdujeron profundas reformas, es un tema que aún divide a los historiadores. Las estadísticas de la época, más confiables que las de épocas anteriores, revelan que el crecimiento existió y que, en la mayor parte de los casos, obedeció a la fuerte recuperación de la actividad minera, tanto en Perú y Nueva España, donde la extracción era mayormente de plata, como en Brasil, donde el *boom* fue el oro. Este crecimiento, a su vez, fue el resultado de otro que, en términos más amplios, abarcó a la Europa del momento, donde creció la demanda de metales preciosos y el desarrollo productivo de la industria incipiente indujo a buscar en las colonias nuevos mercados de exportación. Con el tiempo, sin embargo, las transformaciones que ocurrían en Europa en los albores de la Revolución Industrial dieron un estímulo inédito no sólo a la demanda de plata y de oro, sino también a la de productos agrícolas y de otros minerales de la América ibérica, lo cual indujo a la especialización en función de la demanda externa y profundizó aún más las fracturas en el seno del heterogéneo imperio español. Fracturas que las reformas comerciales introducidas por la Corona, en función de las cuales los americanos se veían destinados al papel de productores de materias primas para la naciente industria española y de consumidores de sus productos, no hicieron más que agudizar. De todas estas fracturas y de la demanda americana de liberalización del comercio ofrecerían pruebas abundantes las guerras por la independencia.

Sin embargo, fue en el curso de este siglo cuando en México se aceleró el crecimiento demográfico y de sus cajas llegaron dos tercios del total de los ingresos fiscales españoles en América. Entonces, Cuba escaló las cimas de los productores mundiales de azúcar, los comerciantes de

Caracas se enriquecieron vendiendo cacao y los rioplatenses se hicieron conocidos por primera vez. La apertura de nuevas rutas –en especial la del Cabo de Hornos, que allanaba el camino hacia los puertos del Pacífico– y los progresos del comercio interoceánico, más económico y seguro gracias a nuevas y más sólidas construcciones navales, crearon condiciones que acercaron, como nunca antes, a Europa y América. Esta circunstancia acrecentó la competencia de España, donde el monopolio andaluz tuvo que ceder a las presiones para liberalizar el comercio americano, abriéndolo a nuevos puertos y a los intercambios con colonias de otros países, en especial, a la competencia de las potencias europeas emergentes.

Un régimen de cristiandad

De todo cuanto la América Latina independiente heredó de la América ibérica de la era colonial, lo que quizá pesó más sobre su historia posterior fue lo menos visible y mensurable: el imaginario social de tipo religioso que la impregnó hasta en sus pliegues más íntimos. Este diseñaba una sociedad organizada como una comunidad orgánica, entendida a la vez como reflejo de un orden divino revelado, y en la cual no existía ningún distingo lícito entre unidad política y unidad espiritual, entre ciudadano y feligrés, entre esfera temporal y esfera espiritual. A su modo, los imperios ibéricos fueron regímenes de cristiandad: lugares donde el orden político se asentaba sobre la correspondencia de sus leyes temporales con la ley de Dios y donde el trono (el soberano) estaba unido al altar (la iglesia).

No obstante, no fue tanto la naturaleza de este imaginario lo que diferenció a la América ibérica del resto de Occidente, donde la convergencia entre política y religión era la norma. En todo caso, diferentes fueron las formas y la intensidad que asumió allí ese imaginario por efecto de su historia peculiar. Para entenderlo, debe tenerse presente un par de aspectos clave. El primero es que la América ibérica quedó fuera de la Reforma protestante y, por tanto, ajena a la ruptura de la cristiandad occidental. Esto significa que, mientras Europa –tras violentas guerras– ingresaba en la época de la difícil convivencia entre diversas confesiones religiosas, la América ibérica –posesión de reyes católicos al reparo del océano Atlántico– volvía aún más sólida su catolicidad. Se tornó así tierra de Contrarreforma, baluarte extremo de la cristiandad católica, impermeable al disenso religioso y trinchera de la

coincidencia absoluta entre unidad política y religiosa. Más que nunca antes, el fundamento del orden político y social de la América ibérica fue la unanimidad religiosa.


DOCTRINA
CHRISTIANA,
Y CATECISMO PARA INSTRVC-
cion de los Indios, y de las demas perso-
CON VN CONFESSIONARIO, Y OTRAS COSAS
DVLCE TVVM NOSTRO
NOMINE NOSTRA SALVS
IHS
Impresso con licencia de la Real Audiencia, en la
AÑO DE M.D.LXXXIIII AÑOS

Portada de *Doctrina cristiana y catecismo para instrucción de los indios*, Lima, 1584.

El segundo aspecto clave es que, en virtud de lo anterior, la iglesia católica asumió en estos territorios un rol sin parangón. Ello no se debió a que el clero fuese numeroso (en verdad, era más bien escaso); tampoco a que la iglesia fuera una institución cohesiva, dado que la de aquella época era todo menos unida, disciplinada y obediente a las órdenes del Papa, ni a que fuera rica y poderosa (aunque donde el poder imperial era más sólido, como en México y en Perú, sin lugar a dudas lo era). Se debió, en primer lugar, a que constituía el pilar ideológico de aquel orden político. Legitimar la soberanía del rey sobre estas tierras era la obra de evangelización que habían emprendido los misioneros en América, así como su preservación del cisma religioso; asimismo, el peso único de la iglesia se debía a que la catolicidad era el eje de la unidad de un territorio y una comunidad muy fragmentados en todo otro aspecto.

¿Qué volvió a esta herencia tan pletórica de consecuencias para la América Latina independiente? Aunque volveremos sobre este tema en los capítulos siguientes, algo debe ser anticipado aquí. Antes que nada,

el ingreso de América Latina en la modernidad política, de por sí complejo, resultó todavía más traumático. Aclaremos que por modernidad política se entiende el proceso –común a todo Occidente– de progresiva secularización del orden político; esto es, de progresiva separación entre esfera política y esfera religiosa. No por azar suscitó en América Latina poderosas reacciones, hasta el punto de que la desvinculación quedó inhibida por largo tiempo. Por lo demás, otro tránsito clave de la modernidad, el que va del unanimismo al pluralismo político, económico, religioso, resultó arduo. En la historia de América Latina, el mito originario de la unidad política y espiritual resistirá con extraordinaria fuerza la creciente diferenciación de las sociedades modernas.

Iglesia y estado en la era colonial

Un aspecto clave de la relación entre poder político y poder espiritual en los territorios de la América española durante la era colonial está representado por el Real Patronato. Este era un privilegio concedido por el pontífice de Roma a los reyes católicos de España en virtud de la obra de evangelización que desarrollaban en América. Dicho privilegio consistía en reconocer a la Corona española amplias facultades en el gobierno de la iglesia e incluso en el nombramiento de los obispos, lo cual robusteció la trama que volvía la religión y la política casi indistinguibles la una de la otra. Así como hizo que echara raíces en los poderes públicos la idea misionera de tener una función espiritual, del mismo modo se difundió en la iglesia americana la idea de que desempeñaba también funciones políticas y, por lo tanto, que tenía derecho a ejercitar una especie de tutela sobre la unidad política y religiosa del imperio.

Estos rasgos peculiares de la relación entre política y religión en la América española dieron forma –más que muchos otros– a instituciones y mentalidades. No es casual que los estados independientes nacidos en el primer cuarto del siglo XIX no quisieran renunciar a ese privilegio y reivindicaran la herencia del imperio que acababan de abatir. Esto fue así aunque la Santa Sede no deseaba reconocerles lo que en su momento había concedido a los reyes católicos. En el caso de los gobiernos conservadores, el patronato los dotaba de una autoridad extraordinaria y de la capacidad de emplear a la iglesia como un *instrumentum regni*, pero también ocurrió algo similar con numerosos gobiernos liberales y anticlericales, los cuales consideraban que afirmaban la soberanía del nuevo estado y podían tener bajo control a la temible fuerza e influencia de la

iglesia. La mentalidad de íntima unión entre política y religión, y entre estado e iglesia, inscripta en el Patronato, permaneció durante mucho tiempo difundida entre el mismo clero, que encontraba en ella el explícito reconocimiento de su asociación con el poder político y de su extraordinaria función social. Costó a la Santa Sede innumerables conflictos disciplinar y reconducir a la iglesia de América Latina, desvinculándola de la antigua unión con el poder local.

La erosión del pacto colonial

Las reformas que en el siglo XVIII realizaron los Borbones (que ocuparon entonces el trono de España) y el marqués de Pombal, ministro en la corte de Portugal, erosionaron el pacto que hasta entonces había mantenido unidos a los imperios ibéricos. Si bien no fueron causa de la independencia, crearon algunas premisas para que esta se volviera imaginable.

Para entender cómo y por qué ocurrió esto es necesario aclarar cuáles fueron las reformas, cuál fue su sentido, por qué fueron adoptadas y qué efectos tuvieron. Las reformas afectaron los centros vitales de la vida imperial. Los ganglios políticos, de los que Madrid y Lisboa acrecentaron los poderes; los militares, donde incrementaron el poder del ejército real; los religiosos, donde favorecieron al clero secular, sujeto a la Corona, y penalizaron al regular, hasta la expulsión de los jesuitas; y los económicos, donde racionalizaron y aumentaron los intercambios, acentuando sin embargo la brecha entre la Madre Patria, encargada de producir manufacturas, y las colonias, relegadas al rol de proveedoras de materias primas. El espíritu y el sentido de tales reformas no fue un misterio ni en el territorio metropolitano ni en el de ultramar. Tanto es así que quienes las llevaron a cabo fueron héroes en su patria, pero tiranos a los ojos de muchos en las colonias. Lo que buscaban era encaminar un proceso de modernización de los imperios y de centralización de la autoridad a través del cual la Corona pudiera administrarlas mejor, gobernarlas de manera más directa y extraer recursos de modo más eficiente.

Si así lo quisieron los reinos ibéricos no fue sólo porque lo imponía el espíritu de los tiempos, el clima progresista del Siglo de las Luces, sino también porque buscaban enfrentar la decadencia que los acechaba y las nuevas potencias que los desafiaban, presentándose como modernos y agresivos estados-nación antes que como los imperios universales del pasado. Para poder seguirles el ritmo y contener las crecientes incursiones

militares y comerciales en la América ibérica, España y Portugal debían modernizarse, volviendo más estricto el control e intensificando la explotación de aquellos enormes imperios, gobernados de modo obsoleto.

En honor a la verdad es preciso señalar que las reformas no siempre fueron eficaces ni alcanzaron el objetivo esperado, en especial en la América hispánica. Lo que aquí importa, no obstante, es lo que en efecto se logró con ellas. En las Américas, difundieron la percepción de que el vínculo con la Madre Patria había cambiado y que, si en un tiempo todas las partes del imperio habían vivido sujetas por igual a un soberano, ahora existían evidentes jerarquías entre las metrópolis y las colonias, donde las primeras detentaban, de ahora en más, la primacía. A esto se sumaba la idea de que ya no era la obediencia al rey lo que mantenía unidas a las partes: había sido sustituida por la obediencia a España y a Portugal, a partir de entonces unidos en su interior y entendidos como modernos estados-nación. Las elites criollas en América empezaron a sentirse traicionadas en el plano político y perjudicadas en el económico. Traicionadas, porque se veían privadas de sus antiguos derechos (su autonomía y de sus poderes); perjudicadas porque se encontraban sujetas a las necesidades económicas de la Corona. De aquí a la pérdida de confianza en el pacto colonial faltaba aún mucho, pero las condiciones para que esto ocurriera maduraron con rapidez.

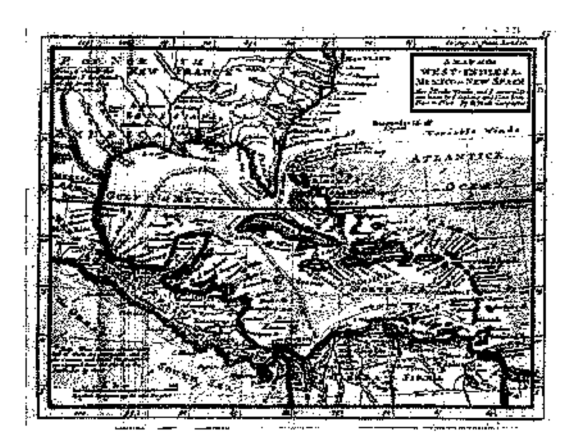
Valgan, por último, dos anotaciones. La primera consiste en indicar que, entre los americanos de fines del siglo XVIII –aunque en términos abstractos antes que políticos–, fueron brotando vagos sentimientos patrióticos. Agudizados por reacciones a la centralización ibérica, esos modos de sentir se convirtieron en embriones de las futuras naciones. Lo segundo es que el panorama económico y demográfico americano empezó a cambiar y, al flanco de los viejos núcleos coloniales donde el poder ibérico se hallaba mejor arraigado, surgieron otros, nuevos y vibrantes, en especial en torno a las ciudades de Caracas y Buenos Aires, donde la herencia hispánica era más tenue y superficial, el comercio inglés alcanzó más rápidamente sus primeros objetivos y donde, no por azar, los movimientos independentistas emergieron con más fuerza.

Las reformas borbónicas

El principal objetivo de las reformas introducidas en la primera mitad del siglo XVIII y desarrolladas luego en forma sistemática por Carlos III –típico déspota ilustrado en la Europa de su tiempo, quien reinó entre

1758 y 1788– era el cobro efectivo de más impuestos en las posesiones americanas, tanto para abastecer la creciente demanda de la Corona, como para asegurar la defensa de las colonias. La Guerra de los Siete Años, que terminó en 1763, durante la cual los ingleses conquistaron La Habana y a cuyo fin España tuvo que cederles Florida, confirmó hasta qué punto eran vulnerables. Dado su objetivo, no sorprende que las reformas se ocuparan de manera particular de la economía y de la administración pública, en el intento de volverlas más eficientes. En este sentido se encaminó la reorganización del imperio, donde a los virreinatos del Perú y de la Nueva España se sumaron los de Nueva Granada y el Río de la Plata. Resultados no faltaron, dado que aumentó la presión fiscal, lo que en algunos casos consiguió triplicar los ingresos de las cajas reales, lo cual se confirmó, además, debido a las protestas antifiscales desencadenadas en diversas partes de las posesiones imperiales. Sin embargo, un eje de la reforma administrativa fue la institución de las intendencias, a imagen y semejanza del ordenamiento francés. Buscaban así crear una administración más racional y centralizada, y quebrar los fuertes lazos entre las autoridades coloniales y las elites criollas, fuentes de corrupción, malas prácticas e ineficiencia. No obstante, el resultado no fue el esperado. Si por una parte los nuevos órganos en muchos casos no pudieron siquiera asentarse o funcionar como estaba previsto, el intento centralista suscitó enormes resistencias y sospechas acerca de las intenciones del rey.

En cuanto a las reformas militares, se tornaron más urgentes debido a las presiones ejercidas sobre las colonias españolas por las flotas inglesas y francesas que se estacionaban en el mar Caribe, donde las dos potencias en ascenso también poseían colonias. El hecho de que el continente americano se hubiese convertido en un campo de batalla para las guerras de las potencias europeas y que la debilidad española engolosinara a las potencias emergentes no hizo más que acelerar los tiempos. El ejército fue reorganizado y modernizado; el aumento de su fuerza y de su poder tuvo efectos imprevistos. Por un lado, generó descontento entre la mayor parte de la población criolla, a la que disgustaban el largo servicio militar y el pesado costo del mantenimiento de las tropas, que de hecho la Corona les hacía pagar. Por otro lado, la americanización del ejército, sometido sin embargo a oficiales peninsulares, con el tiempo representó un peligro para los mismos españoles: precisamente de esas fuerzas surgieron los oficiales que guiaron las guerras de independencia.



Mapa de las Indias Occidentales, México o la Nueva España, 1736.

Por último, la reforma religiosa respondió a razones más amplias. En primer lugar, numerosos intelectuales de la corte juzgaban a la iglesia un lastre para el desarrollo económico y para los planes de modernización de la Corona, tanto a causa de su doctrina como de sus inmensas riquezas improductivas. En segundo lugar, consideraban que su enorme poder –en especial el de aquellas órdenes religiosas que, como los jesuitas, dominaban la enseñanza superior– limitaba la autoridad del rey y sus funcionarios. Entendían, además, que la racionalización del imperio y la concentración del poder, que era su ineludible corolario, requerían la erradicación de aquel auténtico estado dentro del estado que eran las órdenes religiosas en general y los jesuitas en especial. En este contexto, en 1776 los jesuitas fueron acusados en España de haber urdido un motín contra el soberano y Carlos III decretó su expulsión. A ella le siguió, en América, la secularización de sus conspicuas propiedades, es decir, la expropiación de sus bienes, y el potenciamiento del clero secular, sobre el cual el rey ejercía jurisdicción a través del Real Patronato, con respecto al clero regular, sobre el cual no contaba con ningún privilegio.

Estas medidas generaron reacciones diversas. Parte del clero superior, empapado de ideales reformistas, las consideró necesarias y las recibió con beneplácito. Pero tanto el bajo clero como vastos estratos populares en muchos puntos de la América española se sublevaron contra las autoridades enviadas por la Corona, acusándolas de impiedad. Formaron de este modo lo que con el tiempo se constituyó como una alianza recurrente en otros momentos de la historia latinoamericana.

2. La independencia de América Latina

El inicio del derrumbe de los imperios ibéricos en América fue desencadenado por la invasión de los ejércitos franceses de Napoleón, primero en Portugal y luego en España. Mientras que la corte portuguesa encontró refugio en Brasil y creó así las condiciones para una independencia indolora, bajo el signo de la continuidad monárquica, la caída del monarca español, en cambio, provocó un enorme vacío de poder en la América hispánica. Ausente el soberano, se inició una crispada discusión acerca de los fundamentos del orden y de la soberanía política; mientras tanto, la América hispánica hizo su propio ingreso en la política moderna del pueblo soberano y de las elecciones, tanto en la parte de América que había permanecido sujeta a la Constitución española de Cádiz como en la que proclamó desde entonces su independencia. La Restauración absolutista impuesta por Fernando VII acabó con el último vínculo entre los reinos americanos y la Madre Patria, abriendo la puerta a las guerras de independencia propiamente dichas, al término de las cuales los ejércitos de Simón Bolívar y José de San Martín expulsaron a los españoles de América del Sur.

Las invasiones napoleónicas

El impulso que terminó por hacer añicos a los viejos imperios y condujo a la independencia de América Latina fue desencadenado en gran medida por acontecimientos europeos, algo inevitable por otra parte, ya que la América ibérica era por entonces parte integrante de Europa. Quien arrojó el fósforo que encendió el gran fuego del incendio, para el cual las reformas borbónicas y pombalianas habían preparado el terreno, fue Napoleón Bonaparte. Tanto por sus guerras, que entre los siglos XVIII y XIX arrastraron a España en los conflictos europeos y blo-

quearon por largo tiempo las comunicaciones entre la Península Ibérica y América, como, sobre todo, por sus invasiones: la de Portugal en 1807, y la de España el año siguiente. Así, en los reinos americanos de España y Portugal comenzó a desarrollarse un proceso histórico largo, complejo y con frecuencia violento, que cambió la faz de la tierra. Ello se debió a numerosas razones: porque sancionó el declinar de los grandes imperios católicos y universales de las potencias ibéricas; porque allanó el camino al ascenso político, comercial y militar de los modernos estados-nación europeos, empezando por Gran Bretaña; porque abrió por completo las puertas de aquella parte de América a las ideas modernas del Siglo de las Luces; finalmente porque, favoreciendo la emancipación política del Nuevo Mundo, dio un abrupto corte al cordón umbilical que la había unido a Europa e instauró las premisas para su americanización: vale decir, el inicio de un camino destinado a hacer coincidir tiempo y espacio, historia y geografía, a lo largo del cual la América ibérica buscó plasmar una civilización propia y original. Hija de la civilización ibérica, aunque también diversa e independiente de ella.



José María Casado del Alisal, *Juramento de los diputados de las Cortes de Cádiz en 1810*, Madrid, 1862. Congreso de los Diputados.

Ahora bien, ¿por qué las invasiones napoleónicas –que, aunque se prolongaron durante algunos años, culminaron de forma definitiva con la derrota francesa de 1815– encendieron tal pandemónium en las Américas? Para responder a esta pregunta, resulta fundamental distinguir el caso de Brasil del de la América hispánica. Porque, protegida por los ingleses, la corte portuguesa de los Braganza logró abandonar Lisboa antes de la llegada de Bonaparte y, debido a ello, a su imperio no le tocó la misma suerte que al hispánico: la decapitación. En otros términos, aunque sufrió la invasión napoleónica, el imperio de Portugal no fue privado de aquello que garantizaba su unidad y su legitimidad, el rey, el cual, por otra parte, al ponerse a salvo con la familia reinante en Río de Janeiro, dio su sanción al peso y a la importancia de la Colonia brasileña. Premisa, como se verá, de una independencia indolora.

Bien distinto y aun opuesto fue el caso de España y de su imperio. En Madrid, Napoleón encarceló al rey Carlos IV y al hijo en favor del cual este monarca había abdicado, Fernando VII. Hecho esto, impuso en el poder a su hermano José. Así, la figura del soberano, que durante siglos había garantizado la unidad de aquel inmenso imperio, desaparecía en un instante. En su lugar, se encontraba un monarca impuesto por la potencia invasora. Además, aquel rey al cual los americanos se habían sujeto por un pacto de obediencia estaba en prisión. Es cierto que muy pronto en España se organizó una encarnizada resistencia contra los franceses y que en el puerto atlántico de Cádiz se formó una Junta que reivindicó el poder en nombre del rey prisionero y reclamó obediencia a los súbditos americanos. Pero la caída del rey Borbón había formulado de por sí en la América hispánica preguntas clave que nadie, en la portuguesa, tenía por qué hacerse, las cuales se dirigían tanto a la elite criolla como a los funcionarios de la Corona. Ausente el rey legítimo, ¿quién guiaba el reino y sobre qué derechos? ¿Acaso el rey usurpador, José Bonaparte, o bien la Junta de Cádiz, que se había arrogado la suplencia del soberano? ¿O acaso todos, ciudades o reinos, en España y en América, volvían a ser libres y eran amos del propio destino y de la propia soberanía hasta que el rey recuperara el trono? Por lo demás, ¿por qué obedecer a Cádiz? Imperio orgánico, desmesurado y heterogéneo, cuyos miembros eran mantenidos juntos por un rey ahora sin trono, el español encontró que había perdido su principio de unidad.

Las causas y el método

Como ocurre con todo acontecimiento histórico cuyas dimensiones marcan o delimitan una época, también sobre las causas que provocaron el derrumbe de los imperios ibéricos en América y el desmembramiento del imperio español existen numerosas interpretaciones, con frecuencia contrastantes entre sí. Por lo demás, es normal que un proceso histórico de tal alcance tenga raíces complejas y que ninguna causa baste por sí sola para explicarlo. Existen entonces causas estructurales, es decir remotas, sin las cuales es impensable que las invasiones de Napoleón provocaran los efectos en cadena que tuvieron lugar. Forman parte de este ámbito las reformas borbónicas y las reacciones a ellas, pero también la consolidación de usos, intereses, vínculos sociales e identidades de largo alcance, capaces de configurar protonaciones en América. No son menos importantes las causas coyunturales y es de igual modo plausible que dichas premisas remotas no habrían bastado de por sí para causar la ruptura del vínculo americano con España si Napoleón no hubiera provocado, con su invasión, un vacío de poder. Claro que las causas pueden clasificarse de otro modo, y entonces se imponen algunas endógenas, es decir, aquellas que atribuyen la independencia, en primer lugar, a los profundos cambios producidos en la sociedad y en la política española a medida que el imperio católico intentaba la ímproba metamorfosis en un moderno estado-nación. Se la atribuyen también a los cambios que contemporáneamente afectaban a las sociedades criollas. No obstante, debe enfatizarse la relevancia de las causas exógenas, que encuentran un adecuado resumen en el clima revolucionario de aquellos tiempos, que ya habían visto a los Estados Unidos separarse de la Corona británica y a Francia agitarse en la Gran Revolución. Clasificación y catalogación que podrían continuar aún más, si se atiende a las causas políticas y sociales, sin mencionar aún las ideales o espirituales. Por último, sería lícito y factible observar que no todas las causas obraron con igual intensidad en todas partes, y que las vías que condujeron a la independencia de la América ibérica fueron en realidad variadas y diferentes entre sí. Por tanto, lo que importa es establecer un método e indicar que, para el estudio de un proceso histórico complejo, se requiere la conciencia de que sus causas también fueron múltiples y complejas.

La fase autonomista

Llegada a América con el retardo y la incertidumbre que imponían la época y sus medios, la noticia de la prisión de Fernando VII sembró desconcierto, precisamente porque su imprevista caída del trono planteaba numerosos interrogantes espinosos. Los acontecimientos ulteriores no siguieron un orden lineal sino frecuentemente caótico y, lejos de replicar en todas partes un mismo patrón, los hechos se encaminaron por vías diferentes.

Sin embargo, dos rasgos los caracterizan en general. El primero es que, una vez conocida la caída del rey y aun antes de plantearse el problema de quién tenía ahora el derecho de ejercer el poder de modo legítimo, los principales centros administrativos americanos reaccionaron de la misma manera que lo habían hecho las ciudades españolas: creando juntas, esto es, órganos políticos encargados del ejercicio de la autoridad, aunque después sólo algunas de ellas se consolidaron –en particular las de Caracas y Buenos Aires– mientras que otras, de Quito a Ciudad de México, cayeron, en especial debido a las disidencias entre criollos y españoles, o entre los mismos criollos. Disidencias tanto sobre la naturaleza y el alcance de los nuevos poderes, como acerca de la relación con la Junta de Cádiz, que pronto se vio sustituida por un Consejo de Regencia que reclamó la obediencia de las colonias, hasta el punto de llamarse de España e Indias.

El segundo rasgo general es que las juntas nacidas en América declararon que asumían el poder como solución transitoria; es decir, lo hacían en nombre de Fernando VII –llamado entonces El deseado–, y hasta tanto retornara al trono, pero no proclamaron la intención de separarse de la Madre Patria ni de abandonar para siempre el imperio. Salvo algunos raros casos, quienes las formaron e integraron no expresaron voluntad de independencia. Los criollos que guiaron aquellas juntas fueron conscientes de las implicancias de sus actos: aun sin amenazar el pacto político que los ligaba al soberano en el seno del imperio, tenían muy claro que dicha ausencia les brindaba la oportunidad de recuperar la autonomía perdida o reducida a causa de la voluntad centralizadora de los Borbones, y de reformular, con ventaja, el vínculo con la Corona.

Tanto fue así que, además de declararse soberanas y de ejercer los poderes del estado, en muchos casos dichas juntas revocaron el monopolio comercial con España y liberalizaron el comercio con los ingleses. Por este motivo la primera fase del proceso de independencia, que se prolongó hasta la restauración sobre el trono de España de Fernando VII

en 1814, suele ser llamada "autonomista", dado que la autonomía –y no la independencia– era, en la mayor parte de los casos, el horizonte de las elites criollas que por primera vez en América asumieron el poder en primera persona, en lo que, sin embargo, se configuraba ya como una revolución política.

Este cuadro general resultaría parcial y distorsionado si no incluyese lo que ocurría entretanto en España: en Cádiz, el Consejo de Regencia –colocado ante los mismos dilemas que las juntas americanas– llamó a la elección de las cortes, es decir, a una asamblea de representantes encargada de redactar una Constitución. Votada en 1812, la Constitución de Cádiz tenía la expresa función de crear un poder legítimo en ausencia del rey, pero también debía poner límites al poder absoluto del soberano una vez que este, expulsado por los franceses, hubiera retornado al trono. En este sentido, se trataba de una Constitución liberal. En un hecho sin duda excepcional, a los debates de la asamblea constituyente de Cádiz fueron invitados también representantes americanos. Por ello, en América –con la excepción de aquellos territorios que en Venezuela y en el Río de la Plata permanecían bajo el control de las respectivas juntas– comenzaron los preparativos para elegir a los constituyentes que se enviarían a España.



Portada de la Constitución de Cádiz, 1812.

Aquella experiencia fue de gran importancia por dos motivos. El primero es que gran parte de la América hispánica vivió su primera experiencia electoral, en la que tomaron parte incluso vastos estratos populares. El segundo es que, aun cuando manifestaban buena disposición respecto de los pedidos de los americanos, los constituyentes españoles reafirmaron el principio de la primacía peninsular, con lo que asestaron un nuevo golpe a la fe y las expectativas de los criollos de ultramar.

Los criollos y Cádiz

A comienzos de 1810, la Junta de Cádiz promulgó un decreto por el cual convocó a elecciones para las cortes. Precisó también que toda provincia americana podía enviar un diputado como representante y que en las elecciones –que tuvieron lugar entre ese año y el siguiente– tenían derecho a participar también indios y mestizos. Los criollos de América vieron cómo se abría ante sus ojos una encrucijada: o se rehusaban a reconocer la autoridad del Consejo de Regencia de Cádiz y gobernaban de modo autónomo por medio de sus juntas, desafiando así a las autoridades españolas, o bien adherían a la invitación recibida y aprovechaban la ocasión para enviar sus delegados a la Península y tutelar los intereses de las colonias en los debates constituyentes. La que comenzó a sesionar en Cádiz fue, en efecto, una asamblea moderna que reunía a los representantes del orbe español en su conjunto, animada, además, por un fuerte espíritu liberal, dada la composición social y el perfil intelectual de la mayor parte de sus miembros y en la que, en el curso del tiempo, participaron trescientos diputados, de los cuales sesenta y cuatro eran americanos.

Las reivindicaciones presentadas por los enviados americanos se referían a la representación igualitaria entre españoles y americanos, la libertad de producción y de comercio, el libre acceso a los cargos civiles, eclesiásticos y militares, y la garantía de que la mitad de ellos recayeran en residentes locales. Estos pedidos fueron objeto de encendidos debates y el partido americano muchas veces se vio aplastado por la mayoría española.

El resultado final no fue el que esperaban los americanos. Por una parte, en verdad, la Constitución aprobada en Cádiz era liberal. Esto agradó a los liberales americanos, pero resultó menos digerible para las elites criollas, más vinculadas a España y más conservadoras, como las de Perú y Nueva España, las cuales demoraron y obstaculizaron la aplicación de la nueva Constitución. Esta demolía el viejo absolutismo e instituía la monarquía constitucional, que imponía severos límites al rey. Establecía

además disposiciones explícitas sobre el principio electoral, las libertades individuales y el derecho de ciudadanía de indios y mestizos, y abolía el tributo de los indios, los trabajos forzados y la Inquisición. Al mismo tiempo, sin embargo, era una constitución centralista, al punto de que fue entendida por las elites americanas como una réplica del espíritu centralizador de las reformas borbónicas. Los criollos no encontraron en ella una tutela suficiente del derecho de representación igualitaria y de acceso a los cargos públicos en los términos en que la reclamaban, como tampoco resguardaba las libertades económicas que reivindicaban desde hacía tiempo.

La política moderna

Antes de analizar cómo la que había nacido como una reacción antifrancesa "en nombre de Fernando VII" se volvió contra España hasta derrumbar su imperio, conviene aclarar algunas cuestiones clave en juego entonces y sobre las cuales los historiadores continúan debatiendo. Según algunos, los móviles que dirigieron a los americanos a la independencia eran liberales; así, las revoluciones hispanoamericanas habrían formado parte de una ola revolucionaria mucho más amplia y general, que en los Estados Unidos y en Francia había desplazado al *Ancien Régime,* como también de las nuevas corrientes de ideas que en todo Occidente aspiraban a abatir el absolutismo, invocando la soberanía del pueblo. No hay duda, en efecto, de que los líderes independentistas estaban pletóricos de ideas liberales, ni de que proclamaban la necesidad de derrumbar los fundamentos de la sociedad corporativa para crear una sociedad de "iguales", es decir, fundada sobre individuos autónomos, responsables, propietarios, todos dotados de los mismos derechos civiles, hasta prescindir de su ubicación en la escala social o en el espectro étnico. Eje de aquel nuevo mundo, del advenimiento de la política moderna que ellos deseaban hacer nacer de las ruinas del absolutismo español, era la Constitución, de la cual, además, corrieron a dotarse las juntas que progresivamente habían surgido en América, tal como hicieron los liberales en España. En otros términos: se buscaba un nuevo pacto social y político que codificara, organizara y delimitara el poder político, y lo legitimara en nombre del pueblo soberano y no de la mera voluntad de Dios.

En cambio, otros historiadores afirman que la situación fue diferente. El golpe decisivo asestado al vínculo de América con España habría

sido resultado de la progresiva transformación de esta última: de imperio católico a moderno estado-nación. Esto ocurrió desde las reformas de los Borbones que, al centralizar el poder, racionalizar la economía, golpear la autonomía de las sociedades locales y atentar contra el poder eclesiástico, habrían violado las antiguas libertades garantizadas para las colonias y de las que los americanos habían gozado en virtud del viejo régimen pactista. La cuestión tiene su importancia porque, en este caso, la independencia de América Latina no habría sido fruto de una revolución liberal contra el absolutismo español que negaba las libertades modernas (civiles e individuales), sino de la reacción americana en defensa de las libertades antiguas (corporativas y coloniales) contra la modernización impuesta por España. En ese caso, las cortes (como las elecciones y las mismas constituciones) no habrían sido órganos de la moderna soberanía popular expresada por ciudadanos dotados de iguales derechos políticos, sino, en cambio, de la antigua soberanía corporativa, donde las corporaciones eran los sujetos del orden político y social, y donde la soberanía, en última instancia, tenía su origen y legitimidad en Dios y en su ley.

El imaginario antiguo

Nuevas y viejas referencias se entrecruzaron sin descanso en el debate intelectual que precedió y acompañó a las luchas por la independencia de la América española. Por un lado, sopló con fuerza entre las elites cultas el viento de la Ilustración, que en el mundo hispánico se manifestó, en especial, como un nuevo modo de concebir la vida a través de los ideales de la libertad individual y la afirmación de la razón sobre el dogma religioso. Hijas de aquel clima fueron, durante las guerras contra España, las invocaciones de los revolucionarios a los conceptos sobre los cuales deseaban construir el nuevo orden independiente: el pueblo, la constitución, la libertad, la representación, la patria. Por otro lado, en todos los niveles de la sociedad colonial permanecía arraigada la tradicional concepción organicista del orden social, sobre la base de la cual la sociedad era un organismo o una familia en cuya cabeza estaba el rey o quien lo reemplazara. Privada de esta, el cuerpo social estaba predestinado a la disolución. Aquel organismo se hallaba a su vez formado por cuerpos, cada uno de los cuales desarrollaba funciones precisas para mantener la armonía del conjunto. Los nobles debían conducir la guerra, el clero debía elevar plegarias al cielo por su éxito, los ricos contribuir con

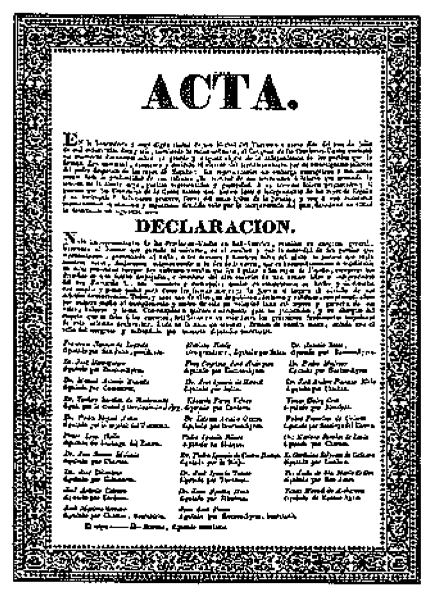
generosas donaciones, los hombres de letras luchar con la pluma, las mujeres asistir a los heridos, las comunidades indias dar hombres y pagar tributos, y así siguiendo. El cemento de aquel orden era la religión, a la que se invocaba como fundamento de la sociedad. Fue precisamente a la religión y a su defensa a las que, en muchos casos, apelaron los mismos revolucionarios para movilizar a un pueblo al que sus ideas resultaban ajenas. Finalmente, estas fueron absorbidas o neutralizadas por la fuerza del imaginario antiguo.

El tema es complejo, aunque menos abstracto de lo que parece, y constituye el trasfondo de los grandes nudos históricos de América Latina. No obstante, queda pendiente el interrogante acerca de las dos lecturas –expuestas aquí de modo sencillo– y de sus fundamentos. Aunque salomónica, la respuesta probablemente más correcta sea que ambas son acertadas, ya que, en dosis variables de una región a otra de América, las dos confluyeron en la reacción a aquello que, aunque por diversos motivos, comenzó a ser vivido como la dominación española, es decir, una dominación colonial donde antes había existido una cohabitación en un mismo espacio imperial. Los unos, precursores de los conservadores, movidos por la reacción contra todo lo que destruía el viejo orden; los otros, liberales en potencia, impulsados por lo que esa dominación negaba por anticipado. Más aún, el hecho de que tales corrientes confluyeran es quizás la explicación de la brusca caída de un edificio histórico tan antiguo. Derrumbado el imperio, no fue azaroso que los estados independientes se fundaran sobre la constitución y la soberanía del pueblo, pero tampoco que, detrás de esos ropajes nuevos, quedara más que sólida y vital la antigua sociedad corporativa.

Las guerras de independencia

Derrotados los franceses y retornado Fernando VII al trono de España en los primeros meses de 1814, el monarca español hizo que muchos de quienes lo habían añorado y "deseado" se arrepintieran pronto. Cómplice del nuevo contexto creado en España y en Europa por la caída de Napoleón –el mismo que al año siguiente culminó en la Restauración del Congreso de Viena–, el rey declaró nula la Constitución de Cádiz y restauró el absolutismo, traicionando las expectativas de los liberales de España y de América, a quienes, además, persiguió con encarnizamiento. En lo que toca a América, ordenó el envío inmediato

de tropas para restablecer el orden y la obediencia a la Madre Patria, en especial donde más había sido contestada su autoridad: en Venezuela, donde los refuerzos de España obligaron a la fuga al ejército republicano de Simón Bolívar, el líder independentista local; también en el Río de la Plata, donde, sin embargo, los criollos locales –artífices ya de la Revolución de Mayo de 1810– proclamaron la independencia en 1816 y quedaron fuera del alcance de los ejércitos del rey.


ACTA.

DECLARACION.

Reproducción facsimilar del acta de la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, que se declaró en San Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1816. Afiche impreso en 1910 por la Comisión Nacional del Centenario.

Desde aquellos territorios se inició la guerra propiamente dicha por la independencia americana, contra la dominación española, es decir, la guerra contra un imperio que se había vuelto abiertamente hostil a las reivindicaciones de mayor igualdad, libertad y autonomía. Un conflicto que durante años, hasta el acto conclusivo que fue la batalla de Ayacucho en 1824, sembró la muerte y la destrucción en América del Sur –aunque no en todas partes con la misma intensidad– y que, con frecuencia, corrió el riesgo de seguir otras vertientes, como la de transformarse de revolución política por la independencia de España en guerra social entre castas o entre grupos étnicos.



Batalla de Ayacucho según boceto de Martín Tovar y Tovar.

Quienes llevaron a su término la guerra de independencia fueron los dos militares más célebres de aquella epopeya combatida en condiciones extremas, entre climas insalubres y enormes obstáculos naturales. Se trató de Simón Bolívar, quien, habiendo penetrado en Nueva Granada, guió la liberación de las actuales Colombia y Venezuela, antes de dirigirse a los actuales Ecuador y Perú, donde se había encastillado la última fortaleza del poder español y las elites criollas se mostraban en general menos propensas que en otras partes a abrazar la causa liberal e independentista; y José de San Martín, el general argentino que, partiendo del Río de la Plata, atravesó los Andes y liberó Chile, para después dirigirse también él rumbo al Perú, donde proclamó la independencia y asestó duros golpes a los españoles, aunque sin lograr el derrumbe de su poderío.

Finalmente, en 1822, los dos libertadores, bloqueados por la última resistencia española, se encontraron en Guayaquil y reunieron sus ejércitos. Se trató de un encuentro histórico, sobre cuyos detalles aún hoy sobrevuela el misterio, con la excepción de las conocidas diferencias entre ambos líderes respecto del futuro del continente. En verdad, Bolívar era el animador de una confederación de repúblicas independientes y San Martín tendía a buscar una solución monárquica constitucional bajo la Corona de un príncipe extranjero. En cualquier caso, mientras que el segundo salió de escena, Bolívar asumió la conducción de las operaciones y dirigió el último asalto contra los españoles en la sierra peruana. Su éxito se debió también a las profundas diferencias que entonces escandían el ejército realista y la elite criolla de Perú. Unos y otros divididos y desorientados por las noticias sobre los hechos que entonces conmovían a España –donde, en 1820, el general Riego había impuesto nuevamente a Fernando VII

la Constitución de Cádiz y las libertades modernas que no todos en América estaban ansiosos por introducir–. Finalmente, también esa trinchera cayó, poniendo fin al imperio español en América del Sur.

Simón Bolívar

Nacido en Caracas en 1783, era de origen aristocrático y de formación intelectual ilustrada. Más allá de su actuación militar, Bolívar dejó una profunda impronta en la historia política e intelectual de la época y un legado que, transformado en mito, no deja de ejercer una fuerte influencia en gran parte de la región. Sus funciones políticas fueron innumerables y de importancia creciente: fue enviado a Europa en busca de auxilios para la Junta de Caracas de 1810, antes de convertirse, en 1819, en presidente de la Gran Colombia, cargo al que en 1824 se sumó el de dictador del Perú. Con tal investidura, abolió la esclavitud y propuso, sin éxito, una gran confederación americana para contrarrestar la fragmentación política sobrevenida tras la caída del imperio. En cuanto a su pensamiento, expresado tanto en escritos y discursos como, sobre todo, en las constituciones de las que fue autor, tuvo como principal tema y problema la legitimidad del poder en el continente que acababa de ser liberado y la busca de la forma constitucional más adecuada a su realidad social. Desilusionado por el fracaso de la Primera República venezolana, en el Discurso de Angostura de 1819 dejó de lado el liberalismo de los primeros tiempos en nombre de un análisis pesimista y desencantado de la sociedad venezolana, a la cual describió como impregnada y recorrida por una ignorancia y un atraso tales que impedían el ejercicio de las virtudes republicanas. De su análisis derivó la defensa de un gobierno fuerte y centralizado, guiado por un presidente-monarca capaz de garantizar el orden y la unidad de los nuevos estados, pero también de "crear" al pueblo con su acción pedagógica. Por estas razones, su figura es controvertida y se presta a diversas lecturas. Conservador según algunos, porque fue defensor de un estado autoritario que pudiera erigirse en garante del orden político; líder revolucionario según otros, por el espíritu jacobino con el que buscó unir al pueblo, murió derrotado, en 1830, sin ver realizados sus proyectos.

Los caminos de la independencia

La independencia para la América ibérica –con la excepción de las islas de Cuba y de Puerto Rico, que por el momento seguirían siendo españolas– no se produjo de manera lineal. Por el contrario, se trató de un proceso rico en convulsiones, en el que finalmente tomaron parte tanto quienes temían una Restauración venida de España como aquellos a los que asustaba la Constitución. Un proceso que, en algunos casos, atendió ante todo a no incitar a la violencia entre las castas, mientras que, en otros, tuvo que movilizarla; un proceso que por momentos fue largo, violento y destructivo, y por otros, breve e indoloro.

Por completo peculiar fue la independencia de Brasil, ocurrida en 1822, con el desdoblamiento de la corona de los Braganza. Regresado a Lisboa João VI por insistencia de las cortes liberales, dejó a su hijo como regente del Brasil. Dada la hostilidad de las elites brasileñas a las pretensiones portuguesas de imponer el centralismo que había prevalecido antes de la fuga de la corte de Lisboa a Río de Janeiro, Pedro I instituyó una monarquía constitucional independiente. Por este motivo y dado que en Brasil no se produjo ningún vacío de poder, el proceso de independencia nacional fue distinto del de las colonias hispánicas: se trató de un proceso pacífico, que no implicó ninguna movilización popular; así, mientras que del imperio hispánico nacieron numerosas repúblicas, bajo la forma monárquica Brasil conservó la unidad territorial, que mantuvo hasta 1899.



François-René Moreaux, *Proclamación de la independencia de Brasil*, óleo sobre tela, 1844. Museo Imperial de Petrópolis.

En cambio, en la América hispánica las cosas no ocurrieron en todas partes del mismo modo. Lo que sucedió en su franja meridional, conmovida por las largas campañas militares de aquellos años, no se replicó en México, de cuyo destino dependió, en un primer momento, toda América Central. También aquí la invasión napoleónica de España suscitó grandes fermentos políticos y estimuló el nacimiento de una junta local, la cual, no obstante, pronto fue disuelta por la autoridad real, lo que indujo a quienes la sostenían –guiados por el padre Miguel Hidalgo– a reunir un ejército popular formado en su mayoría por campesinos indígenas y mestizos, y a desencadenar la guerra contra los españoles. Ni el recurso a la violencia fue suficiente para derrotar al ejército realista, ni la convocatoria de campesinos indígenas agradó a las elites criollas, las cuales, conscientes del baño de sangre blanca que había ocurrido en Haití algunos años antes, en 1804, cuando la independencia se había alcanzado después de una violenta guerra étnica y social, temían una revuelta de los indios mucho más que la dominación española, a la cual por lo demás estaban muy vinculados.



José Clemente Orozco, *Miguel Hidalgo*, mural. Palacio Nacional de México.

El hecho es que los independentistas fueron durante mucho tiempo derrotados por el ejército español, guiado por un oficial criollo conser-

vador, Agustín de Iturbide, hasta que este, enterado de que los liberales españoles habían impuesto a Fernando VII el retorno a la Constitución de Cádiz, se decidió a volverse garante de la independencia mexicana, suscribiendo en 1821 el Plan de Iguala, que por cierto preveía un México independiente dotado de sus cortes, pero decidido a proteger a la iglesia y a tener como soberano un Borbón, con lo que México parece haber accedido a la independencia por la vía clerical y la monarquía. Pero el plan fracasó debido a las resistencias españolas. La pretensión de Iturbide de asumir él mismo el título de emperador cayó en virtud de la reacción liberal y republicana, que lo derrocó e instauró la república.

La Doctrina Monroe

Auténtico manifiesto destinado a orientar las relaciones exteriores de los Estados Unidos con la parte latina del hemisferio, la Doctrina Monroe fue enunciada en 1823 por el entonces presidente de los Estados Unidos, aunque su autor en realidad fue su secretario de estado. Esto se produjo al año siguiente de que los Estados Unidos reconocieran oficialmente la independencia de la América española y cuando el futuro de los nuevos estados surgidos de ese proceso era más incierto que nunca, tanto por su fragilidad interna como por las ambiciones de algunas potencias europeas, en especial Gran Bretaña, pero también Francia y en general la entera Santa Alianza, formada por las autocracias de Austria, Prusia y Rusia. A este contexto hay que referir los dos pilares sobre los cuales se fundaba la doctrina, el primero de los cuales era una advertencia a los estados europeos de que no intervinieran en los asuntos de los nuevos estados americanos. Esto servía a proteger la independencia de ellos, pero estaba expresado de un modo que inauguraba un largo período de unilateralismo por parte de los Estados Unidos. Toda intervención europea del tipo que la doctrina quería conjurar habría sido entendida, de hecho, como una amenaza a la seguridad de Washington, con lo que el gobierno de la Unión Americana se erigía en portavoz del hemisferio entero y se apresuraba a prevenir eventuales alianzas de los nuevos estados americanos con cualquier potencia europea. El segundo pilar consistía en el correspondiente compromiso de los Estados Unidos a permanecer extraños a los asuntos litigiosos europeos y a los de las colonias europeas ya establecidas en América. Síntesis de ambos era la fórmula "América para los americanos", que aludía a los ejes del excepcionalismo norteamericano, de los cuales la doctrina había sido extraída.

Un principio según el cual Europa representaba el pasado, impregnado de absolutismo y constelado de monarquías, mientras que América era el futuro y, por lo tanto, el espacio donde los Estados Unidos habrían proyectado su civilización democrática y republicana. Este último aspecto era un preludio al derecho y a la misión con los cuales los estadounidenses se sintieron desde entonces investidos, en lo que respecta a América Latina: exportar la nueva civilización de la cual eran fundadores y dominar el hemisferio para elevar la condición de los pueblos considerados incapaces de autogobernarse a causa de los siglos que habían vivido bajo el dominio de la monarquía y del clero. Un principio destinado, sin embargo, a permanecer poco más que virtual en el curso del siglo XIX, cuando la influencia de las potencias europeas en América Latina no hizo más que crecer y sus intervenciones militares fueron múltiples, pero que actuó como brújula de la política estadounidense y comenzó a manifestarse en forma concreta antes que nada allí donde los Estados Unidos tenían prioridades estratégicas y fuerza para imponerlas: primero en México y luego en la cuenca del Caribe.

En cuanto a América del Sur, primero las guerras y después la caída del imperio español pusieron a las elites liberales americanas frente a la cruda realidad que, de ahí en adelante, les tocó afrontar. En primer lugar, constataron que el pueblo soberano que invocaban como fundamento del nuevo orden político era imaginario mucho más que real y que aquellas sociedades llenas de indios, esclavos y mestizos de todo tipo eran intrincados rompecabezas y no, por cierto, el pueblo virtuoso presupuesto por los liberales y sus constituciones. Antes bien, eran un volcán pronto a explotar bajo sus pies, ahora que tenían el poder en una tierra donde, por un tiempo, había reinado un rey tan lejano como para parecer frecuentemente benigno a aquellas gentes. En segundo lugar, los líderes independentistas no pudieron impedir que, desaparecido el soberano, es decir, quien había encarnado la unidad política del imperio, el entero organismo se hiciera pedazos, y que cada uno de ellos, libre del pacto de lealtad al rey, se considerara en posesión de una soberanía plena. Tanto es así que de un imperio nacieron numerosos estados, a su vez presa de violentas hostilidades entre ciudades y provincias, todas libres, todas soberanas.

3. Las repúblicas sin estado

Las décadas posteriores a la independencia se caracterizaron por un grado elevado de inestabilidad política y por un escaso dinamismo económico. En el plano político, prevaleció la fragmentación del poder: de los despojos del imperio español surgieron numerosas repúblicas, cada una de las cuales se encontró a su vez desgarrada por largos y violentos conflictos entre centro y periferia, entre capitales y provincias empeñadas en reivindicar la propia soberanía a costa de las otras. Las constituciones sobre las cuales se fundaron los diversos órdenes políticos padecieron una volatilidad crónica y pusieron en escena, una y otra vez, la visión del mundo liberal, que buscaba erradicar el orden corporativo de la era colonial, o bien la conservadora, que pretendía mantener gran parte del esqueleto colonial, empezando por el rol tradicional de la iglesia católica. En el plano económico, la ruptura de los vínculos con España y el surgimiento de otros, todavía lábiles, con Gran Bretaña hicieron de esta época una especie de interregno marcado por la escasa actividad económica, que a su vez fue causa de la escasez de recursos que padecieron los nuevos estados. Sólo hacia la mitad del siglo estas condiciones empezaron a mutar, creando las premisas de las grandes transformaciones de las décadas siguientes.

Inestabilidad y estancación

El ingreso en la vida independiente no fue para los países de América Latina una marcha triunfal. Todo lo contrario. En todas partes, aunque con modalidades y tiempos variables dada su heterogeneidad desde la época colonial y las diversas formas en que se había alcanzado la emancipación política, las distintas regiones entraron en

una era marcada por privaciones, frustraciones y expectativas traicionadas. Las primeras décadas posteriores a las guerras de independencia estuvieron caracterizadas por la inestabilidad política y la estancación económica, al menos como tendencia general.

La inestabilidad política se manifestó en la imposibilidad, por parte de las nuevas autoridades, de imponer el orden y hacer valer la ley y la autoridad de sus constituciones en el territorio de las nuevas naciones, sujetas, en la mayoría de los casos, a continuas luchas entre caudillos. En este sentido, es posible afirmar que los nuevos estados eran más una propuesta o un deseo que una realidad, y que su nacimiento no se había visto acompañado por el de ningún sentido definido de pertenencia a una nación, entendida como una entidad histórica compartida. El mismo principio federalista –adoptado en la mayor parte de los casos por las nuevas autoridades en reacción al centralismo español y causa de ásperos conflictos en varios puntos del continente– puso en evidencia la imposibilidad de fundar un orden estable, así como la fragmentación del poder. En cuanto a la estancación económica, aunque las actividades no se habían paralizado siempre, ni en todas partes, la producción y el comercio se resintieron como resultado de los efectos destructivos de las guerras de independencia y por la ruptura del vínculo con la Madre Patria.

Antes de examinar qué ocurrió en concreto en uno y otro frente, es preciso preguntarse acerca de los motivos por los cuales la independencia reservó sorpresas múltiples y amargas. Claro que no existe una respuesta unívoca ni simple a fenómenos tan complejos y a episodios durante los cuales los nuevos estados empezaron a ajustar las cuentas con los problemas que persistirían de ahí en más. No obstante, adelantaremos algunas hipótesis. Por una parte, es posible vincular esos problemas, de tan enorme gravedad, a factores estructurales. Complementarias durante siglos de las ibéricas y sin poder confiar en mercados nacionales (que en su mayoría sufrían de asfixia o faltaban por completo debido a la ausencia de vías de comunicación interregionales), las economías del área se habrían encontrado de golpe privadas de los ingresos vitales del comercio colonial, y sin alcanzar a sustituirlos, al menos en el corto plazo, a través de las nuevas relaciones comerciales con las potencias en ascenso. A esto siguió una sustancial estancación comercial y, con ella, una drástica reducción de las finanzas públicas, en su mayoría fruto de los impuestos cobrados a dichas relaciones comerciales. Así, los nuevos estados se encontraron privados de los recursos necesarios para construir sus propias estructuras y, por consiguiente, para hacer valer su autoridad en el territorio nacional. Con mayor

razón, estas condiciones inhibieron la formación de una clase dirigente fuerte y cohesiva, capaz de guiar el proceso de *state-building*. El resultado fue la inestabilidad política.

Por otro lado, parece posible explicar estos fenómenos a partir de factores culturales. En términos generales, la desaparición del principio de unidad (es decir, el imperio) impuso a toda aquella inmensa región la cruda realidad de su pluralidad. Si por un lado los principios liberales habían sido lo bastante fuertes para erosionar el viejo orden orgánico, atentando contra sus principios y socavando sus pilares, no pudieron, sin embargo, fundar uno nuevo. A esto debe añadirse que las nuevas elites liberales se encontraron muy pronto con los límites de la revolución, que había generado un gran acontecimiento político, la independencia, pero que se encontraba aún lejos de poder suscitar las transformaciones sociales y culturales necesarias para el triunfo de sus ideales. Al abatir a la monarquía ibérica, las elites criollas liberales no habían erradicado la sociedad orgánica que aquella había plasmado durante tantos siglos. En este limbo, suspendido entre un orden liberal que se esforzaba por afirmarse, enfrentado con un orden corporativo todavía vivaz y resistente, donde la estabilidad parecía posible sólo cuando un líder lograba colocarse a la cabeza, ocupando el lugar del rey en el viejo imperio, prosperó la inestabilidad política, causa a su vez –con las violencias y las divisiones que la caracterizaron– de la estancación económica.

Liberales y conservadores

La historia política de América Latina en el siglo XIX está surcada por el constante conflicto entre liberales y conservadores. No fue el origen social lo que separó a unos de otros: en tiempos en los cuales la actividad política era coto de pocos notables, ambas corrientes nacieron en el seno de las elites criollas, esto es, en el vértice de la pirámide social. Tampoco puede decirse que fueran relevantes en el enfrentamiento los intereses económicos o la adhesión mayor o menor a los principios del libre comercio, en los cuales, grosso modo, todos en el curso del siglo XIX conservaban una fe que conoció pocos quebrantos. Antes que partidos propiamente dichos, dichas tendencias fueron durante mucho tiempo meras representaciones de personalidades bien conocidas, blancas, cultas y económicamente desahogadas. En muchos casos, la adscripción a uno u otro de los dos bandos no dependió siquiera de la ideología, sino del territorio o del grupo familiar de pertenencia. Dicho esto, es preciso

aclarar que la divisoria de aguas entre liberales y conservadores siempre revistió importancia. En un primer momento, se refirió a la forma del estado y a la distribución de sus poderes, temas sobre los cuales los liberales sostuvieron con más convicción los ideales del federalismo y del parlamentarismo, pues consideraban que así provocarían el derrumbe del viejo orden político. Los conservadores, en cambio, favorecieron el centralismo y los gobiernos fuertes, juzgando que, cuanto más se salvara del antiguo orden político, más se garantizaría la estabilidad del nuevo. No obstante, la más profunda razón que separó a liberales y conservadores fue el papel que unos y otros asignaban a la iglesia católica en los nuevos estados. Un papel que los conservadores buscaban reducir y del cual, en cambio, los conservadores se erigían en protectores. Fue precisamente esta la mayor causa ideológica de las violentas guerras civiles que se desencadenaron, en especial a partir de mediados del siglo XIX. Unos y otros experimentaron contradicciones profundas que les impusieron las circunstancias históricas. Aunque favorables a la causa de la iglesia, en la cual hallaban un elemento clave del orden social, y aunque esta se hubiera alineado en defensa del origen divino de la autoridad política, los conservadores debieron hacer propios el constitucionalismo liberal y el principio de la soberanía popular, ya que no existía otra vía que permitiera legitimar el orden político una vez caída la opción monárquica. Aunque impulsaran una sociedad formada por individuos iguales y libres, propietarios e independientes, aligerada del peso de autoridades fuertes y de gobiernos centralistas concentradores del poder, los liberales debieron recurrir con demasiada frecuencia a la fuerza del estado para extirpar el lastre corporativista e imponer la libertad en terrenos poco fértiles para sus ideas.

Las constituciones

A mediados del siglo XIX, y dando por descontadas las obvias diferencias entre un país y otro, el panorama político de América Latina fue dominado por notorios contrastes. Por una parte, caídos la monarquía y el tipo de legitimidad antigua que esta confería al orden político, no quedó a las repúblicas más que fundar una legitimidad nueva, basada sobre el principio liberal por excelencia: la soberanía del pueblo. Un principio que encontraba en la Constitución su expresión lógica; de hecho, no hubo gobierno que no lo invocara como fundamento de su legitimidad. Por otra parte, sin embargo, estas constituciones fueron en buena medida meros instrumentos políticos para legitimar pode-

res conquistados por la fuerza y mantenidos a través de métodos muy distintos de los sostenidos por los principios liberales, hasta el punto que, en un mismo país, diversas constituciones se sucedieron una a otra con un alto grado de frecuencia, y a menudo no fueron mucho más que textos elegantes desprovistos de toda consecuencia práctica. Letra muerta, según algunos. Esto ocurría mientras el poder real, no formal, se organizaba por fuera de aquellas constituciones, se fragmentaba y ruralizaba, es decir, mientras la autoridad política caía en manos de los caudillos, jefes políticos y militares que estaban en condiciones de ejercer el poder con mano de hierro sobre un territorio determinado; y mientras esa autoridad abandonaba las ciudades, como si fuesen simulacros vacíos de instituciones imposibilitadas de imponer sus leyes a los potentados de provincia y de las áreas propiamente rurales. Allí donde parecía afinarse el corazón de la vida local apenas comenzaba la estancación de los intercambios comerciales con el exterior.

No obstante, el hecho de que las constituciones fuesen en buena medida inoperantes no las volvió insignificantes. Antes bien, precisamente a través de ellas y de sus ciclos es posible identificar las encrucijadas históricas de América Latina. Las constituciones de la primera ola, coetáneas con la independencia y con las luchas por conseguirla, en muchos casos expresaron un liberalismo romántico optimista, doctrinario, por momentos tan abstracto como para parecer ajeno a las realidades sociales que estaban llamadas a regular –y sobre las cuales incidieron muy poco–. En cuanto reacciones al absolutismo español y al temor de que una nueva tiranía lo reemplazara, esas primeras constituciones no se limitaron a introducir las libertades civiles individuales y abolir algunos de los legados corporativos, como la esclavitud y los impuestos a las comunidades indias, sino que, además, previeron un poder ejecutivo débil, parlamentos con poderes amplios, estados federales y un extendido derecho al voto.

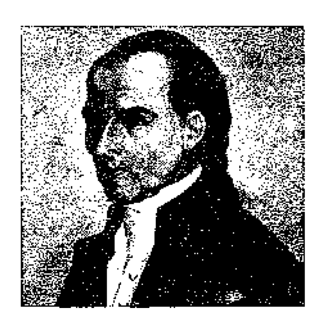
Sin embargo, dada su ineficacia y habiendo constatado que no bastaba con proclamar las virtudes para inducir a los ciudadanos a practicarlas, en especial en contextos donde la segmentación social volvía complejo demarcar los límites de la ciudadanía, una segunda ola constitucional, que había durado más o menos desde las declaraciones americanas de independencia hasta mediados de siglo, expresó principios conservadores y centralistas. A veces, remitiéndose con respeto a la Constitución de Cádiz, bien vista por los profesionales civiles que residían en los centros urbanos; otras veces, declarándose herederas del modelo napoleónico, popular entre los militares. En síntesis, esta nueva ola postuló la necesi-

dad de adaptar el principio liberal de la Constitución a las tradiciones y realidades sociales locales, sobre las cuales prevaleció el juicio amargo y pesimista que ya observamos en Simón Bolívar. No por azar las nuevas constituciones atendieron mucho más al orden que a las libertades, limitaron el acceso al voto sobre la base del censo y dejaron olvidadas las ambiciones de limitar el poder eclesiástico; antes bien, propendieron a ver en la iglesia un eficaz *instrumentum regni*. En definitiva, establecieron gobiernos fuertes y estados centralistas, bajo cuyo peso sucumbió el entusiasmo federalista de los primeros años de vida independiente. Sin embargo, esto no bastó para volverlos más eficaces que los precedentes, sino por breves períodos durante los cuales algunas áreas –con Venezuela, Chile y la vasta provincia de Buenos Aires bajo la férrea dictadura de Juan Manuel de Rosas– vivieron momentos de relativa estabilidad.

Aun bajo la jurisdicción de aquellas constituciones, en la mayoría de los casos el poder político fue ejercido por caudillos, es decir, por jefes políticos y militares de perfil social heterogéneo, con un modo de ejercer el poder mucho más consonante con las viejas costumbres que con el nuevo espíritu constitucional. Aunque muchas veces ejercido por la fuerza, e incluso extendido a nivel social, su fundamento era una amplia red de clientelas informales (familiares, en el sentido más amplio del término) a la cual el caudillo garantizaba protección a cambio de lealtad, prebendas a cambio de obediencia. Dado que su autoridad estaba por encima de leyes y normas, y era arbitraria y personal, puede afirmarse que, si el orden legal posterior a la independencia se pretendía novedoso, continuó siendo en buena medida el antiguo allí donde el fuerte entramado de los cuerpos sociales tradicionales, con la familia y el territorio a la cabeza, regulaba aún la vida pública.

Caudillismo

De los caudillos y de sus gestas épicas rebosa la historia de América Latina en la primera mitad del siglo XIX. Desde Antonio López de Santa Anna, que gobernó México once veces –a veces como liberal, otras como conservador–, hasta Juan Manuel de Rosas, que dominó la Argentina desde 1829 hasta 1852, con el título de Restaurador de las Leyes, pasando por el paraguayo José Gaspar Rodríguez de Francia, teólogo admirador de Robespierre que determinó el destino de su país aislándolo hasta 1840, hasta el guatemalteco José Rafael Carrera, cancerbero conservador que, en 1854, se proclamó presidente vitalicio.



Pablo Alborno, *José Gaspar Rodríguez de Francia*, óleo.

Existían caudillos cultos e incultos, agnósticos y creyentes, liberales y conservadores. En su mayoría, eran hombres que, en virtud de su fuerza y carisma, y en un marco de fragilidad o inexistencia de instituciones capaces de limitar su autoridad, reunían un vasto séquito y se erigían en gobernantes con la violencia del poder. Un poder que ejercitaban según el tradicional modo del uso privado de los recursos públicos, es decir, como un botín con el cual premiar a los secuaces y excluir a los enemigos, como una propiedad privada que gobernaban por encima de leyes y constituciones. Con frecuencia excéntricos, los caudillos ejercían una autoridad de tipo carismático, más cercana a la de líderes religiosos que a la de jefes políticos; la de líderes depositarios de un aura sagrada capaz de prometer y velar por la salvación y la protección de sus devotos, quienes, a su vez, encontraban ventajas concretas en reconocer la autoridad de un caudillo dado y en colocarse bajo su protección, ya que no existían ni leyes ni instituciones capaces de garantizárselas. Es posible afirmar entonces que, en estas sociedades desprovistas todavía de estado, entre el caudillo y sus seguidores tenía lugar una relación de intercambio, aunque desigual, y no se trataba de la mera imposición del poder por medio de la fuerza. La lealtad personal era la clave de esta relación, típica por lo tanto de un orden social tradicional, donde el poder es absoluto y no compartido y donde, en suma, el caudillo ocupaba transitoriamente el lugar simbólico que durante un tiempo había sido patrimonio del rey: el de cabeza de un organismo homogéneo y unánime. Esto no quita que el caudillismo fuera el modo a través del cual se articularan entre sí los diversos niveles del poder. De hecho, era común que los caudillos locales, jefes absolutos en un pueblo, fuesen a su vez clientes de caudillos más poderosos, a los que entregaban, como dote su propio "feudo", a cambio de favores y protección, y así siguiendo, siempre hacia arriba, escalando una

pirámide en cuya cima no pocas veces se encontraba el presidente de la República.

Sociedad y economía en transición

Hemos señalado ya que la independencia no fue para América Latina un lecho de rosas y que la herencia del pasado condicionaba la evolución del continente. Esto no implica que no cambiara nada sustancial en las más profundas fibras del continente en los primeros años posteriores a la emancipación. Antes bien, en términos de estructura social, de relaciones económicas y de vínculos con el mundo exterior, comenzaron a delinearse las hondas transformaciones que llegarían a madurar en la segunda mitad del siglo.

En términos sociales, la más importante fue la lenta desaparición de la esclavitud, en primer lugar donde era sólo una realidad marginal, como en México, Chile y América Central, y mucho más tarde donde era un fenómeno masivo. Esto no ocurrió por influencia decisiva de lo establecido en las nuevas constituciones –dado que en realidad desapareció en forma bastante más gradual que lo que había sido proclamado por ellas–, sino por los crecientes obstáculos a la trata de esclavos, por su escasa productividad y porque a menudo fue el precio a pagar para enrolarlos en las fuerzas armadas. Así, a mediados del siglo XIX, la esclavitud seguía vital sólo en las costas del mar Caribe y en Brasil, donde continuó en vigor hasta 1888.



Caricatura alusiva a los decretos de abolición del tributo indígena y de la esclavitud, Perú, 1854.

Aun para la población de las comunidades indias, la independencia y sus guerras implicaron incipientes, aunque lentos y fluctuantes, cambios, los cuales se dirigían a desmantelar derechos y deberes corporativos, empezando por el tributo indio, con el fin de hacer de todos –al menos en teoría– ciudadanos iguales y libres en las nuevas repúblicas. Dicho objetivo con frecuencia quedó entrampado en los problemas fiscales de los nuevos estados, lo que los indujo en muchos casos, en especial en Perú y Bolivia, a mantener por largo tiempo los tributos indios, que tendieron a producir efectos bastante menos virtuosos que los previstos, dado que, al sustraer a los indios de un régimen social opresivo pero reglamentado, con frecuencia se los dejó a merced de una explotación todavía más intensa. Esto llegó al punto de causar violentas reacciones contra la liberación del yugo corporativo y en defensa de la República de Indios, que era su emblema. Allí donde eran una institución difundida y arraigada –en México y Guatemala por una parte, y en los Andes sudamericanos por la otra–, las comunidades indias no desaparecieron, aunque desde la mitad del siglo la presión sobre ellas y sobre sus tierras se acrecentó en todas partes.

También en la esfera económica y en las relaciones con el mundo exterior (dos ámbitos indisolubles entre sí) empezaron a cambiar las cosas después de la independencia, al principio de manera lenta; luego, consolidando transformaciones definitivas. La novedad más importante fue la introducción y difusión de la libertad de comercio con las potencias europeas en especial; Gran Bretaña fue la primera, ya que los nuevos estados, cortos de finanzas, se endeudaron mucho y muy pronto con los ingleses, en quienes la Revolución Industrial había propiciado un extraordinario dinamismo comercial. Ese dinamismo la indujo a buscar, tanto en América Latina como en otras partes, nuevos mercados y materias primas para las propias industrias y el consumo de las poblaciones urbanas en Gran Bretaña. Sin causar aún el *boom* comercial que sólo la revolución tecnológica en los transportes hizo posible en la segunda mitad del siglo, aquellos factores comenzaron a pesar desde entonces, aunque no tanto en términos de expansión económica, que todavía estaba por venir en esa época de estancación.

Si bien es cierto que, por un lado, la nueva relación con las potencias económicas europeas imprimió una orientación más nítida a la economía regional, atraída por las pingües ganancias prometidas por nuevos y más intensos intercambios comerciales, también lo es que inhibió el ya raquítico desarrollo del mercado interno, pero abrió la perspectiva

de financiar el balance público, que en muchos países era el fruto de los tributos pagados por los indios, a los que se sumaban los impuestos al comercio exterior. Por otro lado, estos nuevos intercambios establecieron las premisas de la creciente influencia política y económica tanto del estrato comercial en crecimiento en las principales ciudades portuarias, como de los terratenientes propietarios capaces de producir para los mercados externos.

El siglo británico

Aunque los progresos en transportes y vías de comunicación fueron en el Atlántico Sur bastante más lentos que los que contemporáneamente revolucionaron el Atlántico Norte, y aunque las guerras civiles latinoamericanas crónicas limitaron o retrasaron en muchos casos el comercio y las inversiones en las décadas centrales del siglo XIX, la fuerza liberada por el creciente poderío económico de Gran Bretaña comenzó pronto a hacer sentir sus efectos en América Latina. Los historiadores no se han puesto de acuerdo sobre dichos efectos: algunos observan que las mercancías británicas que desde entonces llegaron en cantidad relevante a los centros urbanos latinoamericanos expulsaron fuera del mercado al sector artesanal local, reduciéndolo a la miseria. Entonces, el crecimiento de los intercambios con Gran Bretaña bloqueó para siempre la diferenciación de las economías locales y el crecimiento del mercado interno, y favoreció la producción de materias primas requeridas en cantidades siempre mayores por el mercado inglés y europeo, demanda que comenzó a acrecentarse a ritmos vertiginosos hacia mediados de siglo. En cambio, otros consideran que lo primero que hizo Gran Bretaña en virtud de la libertad comercial recién introducida fue empezar a sustituir la asfixia del monopolio español, responsable, a su vez, de haber penalizado con sus exportaciones textiles y de otro género a los artesanos americanos, y de haber inhibido en América Latina tanto el crecimiento del mercado interno como la diferenciación productiva. En este sentido, el capitalismo británico, mucho más vigoroso que el hispánico, habría abierto perspectivas inéditas para las economías locales, gracias al lento pero constante florecimiento del comercio, al cual, desde la mitad del siglo, acompañaron con su inmensa fuerza los grandes bancos de inversión y las empresas ferroviarias. En general, los desarrollos variaron de zona a zona; allí donde, como en México, existía desde hacía tiempo un mercado interno, las manufacturas locales sufrieron el impacto de

la competencia externa, lo que no ocurrió en otras partes. Por cierto, desde entonces empezó a cobrar formar aquello que suele llamarse la "división internacional del trabajo", inducida por la Revolución Industrial, en el seno de la cual le tocó a América Latina el papel de proveedora de materias primas minerales y agropecuarias.



Caricatura de Inglaterra como el pulpo del imperialismo. Obra de un dibujante norteamericano, 1888.

La inflexión de mediados del siglo XIX

Quizá porque los líderes de la independencia estaban desapareciendo y en su lugar ingresaba en la escena política una nueva generación, formada por jóvenes intelectuales y ya no por militares al frente de tropas, o bien porque, tanto en términos políticos como económicos, aquellas primeras décadas de la vida independiente transcurridas entre luchas intestinas y economías estancadas habían cancelado las expectativas de ver a los nuevos estados encaminados en la vía de la civilización y del progreso; quizá porque el legado del pasado colonial se reveló, a los ojos de las elites liberales, mucho más pesado de lo previsto y porque los ecos del 1848 europeo, es decir de las revoluciones liberales que arrasaron el Viejo Continente (al que, por historia y cultura, aquellas elites aún pertenecían), resonaron más allá del

Atlántico, el hecho es que, desde mediados de siglo, algo empezó a cambiar en América Latina. En todos los ámbitos se respiraba un aire nuevo, imperaba un nuevo "espíritu de los tiempos" que prenunciaba grandes cambios y, como siempre ocurre en estos casos, vaticinaba convulsiones políticas y sociales no menos radicales.

Fue un giro complejo de los acontecimientos, ocurrido en modos y tiempos variables en cada país, en el cual resulta posible individualizar un rasgo común en gran parte del continente. Confluyeron las nuevas oportunidades que se abrían a la región a través de la integración comercial y financiera con las más grandes potencias del hemisferio norte, pero aún más importantes fueron la conciencia y la constatación, cada vez más difundidas en amplios estratos de las elites criollas, de que la independencia había quedado a mitad de camino. Los urgía retomar el impulso originario y continuarlo. La nueva y más radical generación liberal de mediados de siglo comenzó a animar el proyecto de edificar en América Latina sociedades liberales y consagradas al progreso, colocándolas entre las más avanzadas de Occidente. Estos proyectos contrastaban tanto con la ola conservadora, culpable de haberse plegado a los condicionamientos del pasado, como con el romanticismo liberal abstracto de los primeros tiempos, que se había ilusionado con cambiarlo todo por el solo hecho de dotar a las sociedades con buenas leyes, aunque sin procurarse la fuerza necesaria para imponerlas.

Para aquellos liberales de nuevo cuño era necesario ir más allá: era preciso cortar de un solo golpe y erradicar para siempre las raíces del pasado, hispánicas y católicas, orgánicas y corporativas, responsables a sus ojos de impedir el desarrollo económico al bloquear el libre flujo de mercancías y de riqueza, y de obturar la afirmación de las libertades civiles, al encerrar a la población en los tradicionales recintos corporativos. Para crear naciones nuevas y progresistas, pobladas de ciudadanos independientes, iguales ante la ley, era necesario adoptar medidas drásticas. En primer lugar, se trataba de atacar el histórico pilar del viejo orden, la iglesia católica, en especial porque sus ingentes bienes, sustraídos a la circulación de la riqueza, eran para aquellas elites los símbolos más evidentes del freno que el pasado imponía al presente. A esto se sumaba su monopolio sobre la educación, que obstaculizaba la difusión de las nuevas ideas, y el nacimiento y formación de ciudadanos fieles al estado y a sus leyes antes que a la iglesia y a las suyas. Finalmente, porque la iglesia y su doctrina eran los más sólidos bastiones de la sociedad orgánica, de la cual los liberales buscaban emanciparse.

No fue por azar que en torno a la iglesia y a su papel político, social y cultural surgieran los conflictos más agudos, a veces contenidos, pero frecuentemente bastante cruentos, en especial donde la iglesia era más fuerte y había echado raíces en todos los estratos sociales, como en México. Conflictos que las leyes liberales, dirigidas a secularizar los bienes eclesiásticos, a laicizar la escuela pública, a reubicar el registro civil, los matrimonios y los cementerios en la esfera estatal, habían prenunciado, y que tanto en América como en Europa estuvieron en el centro de la vida pública durante gran parte de lo que restaba del siglo. Tanto es así que fue por causa de estos, antes que de cualquier otro tema, que la elite social y económica, a pesar de guardar tantas afinidades en su interior sobre otros aspectos, se dividió en dos partidos –liberales y conservadores– y que los otros estamentos sociales fueron llamados con frecuencia a expresarse y a sostener una u otra causa.

Teoría política y debate intelectual

Desde mediados de siglo, las pistas falsas y los pasos en falso seguidos por la mayor parte de los estados latinoamericanos una vez alcanzada la independencia estimularon amplios debates en las clases dirigentes sobre sus causas y sobre el mejor modo de darles remedio. Dichos debates tenían presentes otros, coetáneos, que en Europa se iban imponiendo a medida que la civilización industrial ganaba desarrollo. De ellos fueron reflejo las luchas políticas que, cada vez más a partir de entonces, recorrieron la región, y también una producción intelectual bastante nutrida y con frecuencia de excelente calidad, que se extendía del derecho a la filosofía, de la pedagogía a la literatura y la teoría política. En estos debates se destacaron algunos grandes nombres, como el conservador mexicano Lucas Alamán y el moderado venezolano Andrés Bello –que desarrolló en Chile gran parte de su actividad–, hasta los más brillantes exponentes de la nueva generación liberal, como Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento en la Argentina, los chilenos Francisco Bilbao y José Victorino Lastarria y numerosos otros, diversos entre sí.

Sobre el frente conservador prevalecía la idea de que el orden debía ser el necesario preludio de la liberalización política. Hombres como Andrés Bello miraron con admiración la monarquía constitucional de Gran Bretaña y sostuvieron, espada en mano, la necesidad de un gobierno fuerte y centralista. Su idea era la de un gobierno libre del condicionamiento de los poderes locales y de un pueblo al que se juzgaba poco preparado

para tomar parte en la vida pública. También aspiraban a un gobierno que hiciera suya la misión pedagógica de formar ciudadanos y difundir un sentimiento de nacionalidad, pasos previos a una gradual liberalización política. Esta concepción –además de aquella de que, en vez de cortar de un solo golpe y para siempre las raíces del pasado colonial, convenía fundar sobre él el nuevo orden– hizo de Bello un inspirador de la Constitución chilena de 1833, base del gobierno impuesto en este país por su hombre fuerte, Diego Portales; pero también lo convirtió en uno de los blancos predilectos de los liberales de la generación siguiente.

Los liberales propusieron, en formas más o menos radicales, una especie de trasplante cultural, ya que consideraban que no sólo el orden, sino también el progreso estaban al alcance de América Latina, aunque a condición de suministrarle al continente dosis masivas de liberalismo.

La cultura hispánica, entendida en su estructura clerical y corporativa, era para ellos causa primaria de atraso, por lo que urgía sustituirla por la cultura liberal en auge en las potencias entonces ascendientes, de las que convenía estimular el ingreso de hombres y técnicas, ideas y capitales en las naciones americanas.

Tanto como sus adversarios conservadores, también los liberales partían de un diagnóstico pesimista respecto a la capacidad de autogobierno de los pueblos latinoamericanos, a los que juzgaban incultos y sometidos al clero y la cultura tradicional. Esto los inducía a erigir las nuevas arquitecturas de formas políticas y constitucionales liberales, pero bien atentas a garantizar el gobierno de los mejores y a neutralizar la presión popular, fuente, según esta perspectiva, de demagogia y tiranía.

Los casos nacionales. La norma y las excepciones

Hemos señalado ya que, luego de la independencia, prevalecieron en América Latina la inestabilidad política y la violenta lucha por el poder entre los caudillos nacionales o locales; queda sin embargo por ver si es posible emerger de ese laberinto de conflictos y si, en ese panorama caótico, despunta alguna excepción. Todos los nuevos estados y las viejas unidades administrativas de la era colonial se deshicieron en mil pedazos. Una vez derrocado el rey, cada territorio o ciudad con peso propio se adueñó de su soberanía o retomó la posesión de lo que consideraba una libertad antigua que le correspondía apenas estuviera disuelto el pacto con el soberano, de la cual ningún otro territorio, y menos que nadie una ciudad vecina o una capital amena-

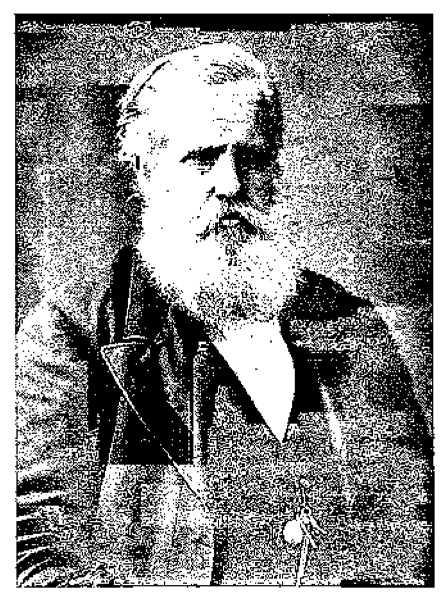
zadora, podía declarar vocación hereditaria. Fue así que en 1840 se disolvió la Confederación Centroamericana nacida en 1823, y de sus ruinas surgieron los estados de Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua y Costa Rica. La Gran Colombia soñada por Bolívar y nacida en 1819 se disolvió en 1830 y dejó la vía libre al nacimiento de Colombia, Venezuela y Ecuador. En tanto, el Virreinato del Perú perdió Chile y Bolivia, cada una de las cuales formó un estado independiente. Por último, las Provincias Unidas del Río de la Plata se disgregaron y la Argentina fue incapaz de mantener junto a sí al Paraguay ni impedir el nacimiento del Uruguay.

Además de estar enfrentados y de no contar con fronteras precisas (fuente de añosos conflictos y tensiones), desde un primer momento los nuevos estados se vieron surcados por profundos desgarramientos, cada uno por motivos singulares, aunque en el fondo todos guardaran similitudes. En verdad, de un modo u otro todos fueron presa de conflictos entre el centro y la periferia, la costa y el altiplano, el puerto y el interior, entre una ciudad y otra; en suma, entre territorios celosos de la soberanía apenas conquistada y en absoluto dispuestos a sustituir la tenue sumisión a un rey lejano por la mucho más rígida a un poder más próximo e invasivo. Los ejemplos son múltiples: el de México tironeado entre centralistas y federalistas; el de Colombia y sus ciudades en perpetua guerra; el del Perú y sus guerras civiles; el de la Argentina y la insanable rivalidad entre Buenos Aires y las provincias del interior son sólo algunos.

Sobre este fondo, que dominó el panorama político de América Latina hasta más allá de mediados del siglo XIX, las excepciones son raras, pero significativas. La primera es la de Brasil, donde la unidad política y territorial fue puesta a prueba por numerosas rebeliones que se alzaron en los márgenes de su inmenso territorio, y donde, con el tiempo, la monarquía perdió terreno ante la ascendente oposición republicana. Sin embargo, allí, los imperios de Pedro I antes de 1840 y el de Pedro II después garantizaron una estabilidad impensable en otras partes del continente, gracias también a la función de poder moderador, esto es, garante de la unidad política y territorial, reconocida al emperador por la Constitución de 1824.

En la América hispánica, la excepción más importante en el cuadro desolador de luchas intestinas fue la de Chile, no porque el país no cayera también víctima –luego de la independencia– de una convulsa década de conflictos análogos a los de los otros nuevos estados, sino porque después de ello encontró un largo período de precoz estabilidad y

consolidación institucional. Si ello se debió a la relativa homogeneidad de sus elites y a la concentración geográfica en lo que por entonces era un territorio bastante más reducido que el actual, limitado a su valle central, es imposible de decir con exactitud. No obstante, es un hecho que, desde 1831, bajo la conducción férrea y conservadora de Diego Portales, a la que se sumaron después los preceptos autoritarios de la Constitución de 1833, Chile asentó, antes que cualquier otro, las bases institucionales de un estado unitario, las cuales, además, sobrevivieron a la caída de aquel régimen en 1861.



Pedro II, emperador del Brasil.

México: un caso extremo

Ningún caso es tan emblemático de los dilemas en los cuales América Latina se vio entonces envuelta como el de México en las décadas posteriores a la independencia, y esto, en especial, por dos razones. La primera es que el suyo fue un caso límite, como era inevitable que ocurriera habiendo sido el corazón vibrante del imperio español y donde, en consecuencia, las raíces de la sociedad colonial eran más profundas. La segunda es su proximidad a los Estados Unidos, en cuya portentosa expansión hacia el oeste se vio implicado de modo traumático.

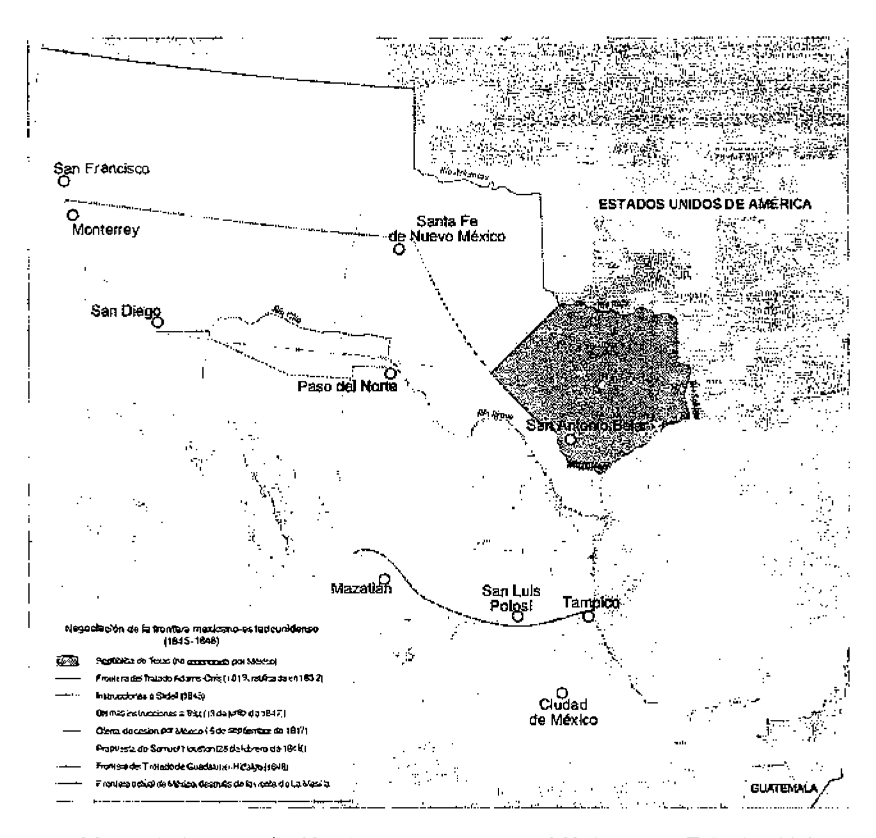
A propósito de la primera razón, no sorprenderá que en México los conflictos entre liberales y conservadores se volvieran más radicales y violentos que en otras partes. El prestigioso líder del liberalismo mexicano fue Benito Juárez, inspirador desde 1855 de La Reforma, un conjunto de leyes dirigido a demoler los privilegios de la iglesia –de la cual confiscó las propiedades–, a laicizar la educación pública y a promover la economía de mercado, liberándola de las trabas corporativas.



Benito Juárez y las Leyes de la Reforma. México, Colección de la Biblioteca Digital del Bicentenario.

Estos objetivos fueron perseguidos también por medio de la abolición de las comunidades indias, sobre la base de la idea –que después se reveló ilusoria– de que, adquiriendo individualmente las tierras, los indios se transformarían en propietarios independientes y en ciudadanos iguales a todos los de la nueva nación mexicana. En contra de tales leyes, condensadas en la Constitución liberal de 1857, se levantaron los conservadores, en auxilio de los cuales, después de años de violenta guerra civil, intervino Napoleón III, quien en 1864 impuso a Maximiliano de Habsburgo en el trono mexicano, creado para este propósito. Dicha medida indujo a Juárez a buscar el apoyo de los Estados Unidos, irritados por la afrenta francesa a la Doctrina Monroe, precisamente cuando estaban en plena Guerra de Secesión. Finalmente, los franceses abandonaron el país, el

Habsburgo no logró mantenerse en el poder y fue fusilado, y Juárez volvió a la presidencia en 1867; ejercía el cargo cuando murió cinco años más tarde, sin poder decir que había pacificado el país.



Mapa de la negociación de la frontera entre México y los Estados Unidos, 1845-1848, en Reynaldo Sodro Cedeño y María Julia Sierra Moncayo, *Atlas conmemorativo 1810, 1910, 2010*, México, Siglo Veintiuno Editores, 2010.

Por lo que toca a la segunda razón –la proximidad a los Estados Unidos–, esta signó desde entonces la historia mexicana más a fondo que la de cualquier otro país de la región. En 1845, cuando el gobierno estadounidense buscó anexar Texas, territorio mexicano que se había proclamado independiente en desafío al gobierno de la Ciudad de México, se desencadenó la guerra entre ambos países. El enfrentamiento puso de manifiesto el contraste entre la fuerza vibrante de los jóvenes Estados Unidos y la intrínseca debilidad de un México des-

garrado por mil conflictos, finalmente causa de su derrota. En 1848, cuando concluyó, también significó el tránsito a la soberanía estadounidense de inmensos territorios antes mexicanos, entre los que se cuenta California, Nuevo México, Colorado y Arizona, con lo que los Estados Unidos se allanaron la vía hacia el océano Pacífico, dejando abierto un gravoso conflicto contencioso con su vecino del sur.

4. La era liberal

En las últimas décadas del siglo XIX, en América Latina se crearon las condiciones para una profunda transformación política, económica, social y cultural que no sólo dio pruebas de la integración a los grandes procesos de modernización incitados en Europa por la Revolución Industrial y por los progresos del constitucionalismo liberal, sino que también profundizó las brechas entre las diferentes vías nacionales transitadas por cada país. En líneas generales, la transformación consistió en el inicio de un largo período durante el cual se consolidaron las estructuras de los estados-nación y se atenuó el caudillismo; se produjo el *boom* de la economía de exportación de materias primas hacia los mercados europeos; los ferrocarriles comenzaron a surcar los inmensos espacios latinoamericanos, favoreciendo la movilidad territorial y social; y millones de inmigrantes europeos llegaron a las costas latinoamericanas revolucionando la composición demográfica de algunos países. En los regímenes liberales que se establecieron en varios países se produjo una momentánea tregua en la antigua disputa entre las ideologías irreconciliables de liberales y conservadores. Sin embargo, los efectos de la agitada modernización promovida por esos mismos regímenes no tardaron en generar reacciones que los pusieron en crisis.

El nacimiento del estado moderno

Tanto si se prefiere colocar el acento sobre los factores sociales y económicos o bien enfatizar los de carácter más ideológico o cultural, todo hace pensar que los elementos que habían causado inestabilidad política y estancación económica en las primeras décadas posteriores a la independencia comenzaron a atenuarse en la segunda mitad de la

centuria y, en algunos casos, directamente desaparecieron hacia fines de siglo. Este fue el preludio de las profundas conmociones que atravesaron todo el período comprendido entre la década de 1870 y la Primera Guerra Mundial, porque allí donde la economía se hallaba en un estado de estancación se inició un largo período de crecimiento, y donde dominaban los caudillos comenzó a ganar vigencia la estabilidad, y a surgir y consolidarse las modernas estructuras del estado-nación. ¿Qué ocurrió exactamente y cómo se desarrollaron estos procesos?

Antes de dar respuesta a estas preguntas clave, resulta necesario realizar una advertencia: si ya antes las vías transitadas por cada uno de los nuevos estados latinoamericanos se habían ido separando, en las décadas a caballo entre los siglos XIX y XX se apartaron con una velocidad aún mayor a medida que toda la región ingresó en un radical proceso de modernización, del cual ningún país quedó excluido. Dicho proceso tuvo, sin embargo, intensidades tan diversas de un lugar a otro que, pocos decenios después de su inicio, las distancias entre los distintos hijos de los imperios ibéricos se tornaron abismales, tanto en términos de crecimiento y desarrollo económicos como de consolidación política, de riqueza y dinamismo culturales. Así, algunos países quedaron a la cabeza –la Argentina el primero de todos, y México, Brasil y Chile inmediatamente después– y muchos otros, en especial en el área andina (incluidos Colombia y Venezuela) y en América Central, quedaron por detrás, presos aún de la violencia y el caudillismo.

¿Qué ocurrió, entonces? En términos generales, por primera vez los gobiernos se vieron en situación de imponer la ley sobre el territorio nacional entero o sobre buena parte de este, al menos en los países más ricos y poderosos, los cuales pudieron garantizar la unidad política, es decir, unificar la soberanía y obligar a la obediencia tanto a caudillos como a territorios rebeldes. En este sentido, por primera vez en América Latina cobraron forma estados modernos, con las funciones que les son típicas, empezando por el ejercicio del monopolio legal de la violencia, que adquirieron imponiéndose a los ejércitos privados y locales, o a través de la profesionalización de los ejércitos nacionales con el auxilio de las misiones militares alemanas y francesas. A ello siguió la creación de una administración fiscal, judicial y escolar nacional, premisas necesarias para recaudar impuestos, impartir justicia, formar ciudadanos y construir la nación a través de las escuelas. Las constituciones se volvieron entonces más duraderas y eficaces, y el horizonte de la acción pública se amplió de un modo antes impensable, gracias también al *boom* de la prensa y de los ferrocarriles, que reducían las distancias

entre lugares, personas y costumbres. En este sentido, lo que ocurrió en América Latina no fue tan distinto de lo que tuvo lugar en el resto de Occidente, aunque con sus peculiaridades.

No obstante, la pregunta que se impone es por qué empezó a producirse en esos años aquello que antes había sido imposible... En principio, tanto la Revolución Industrial europea como la revolución tecnológica instalaron las condiciones para que América Latina se integrara a la economía mundial pronto y a fondo, con lo cual el comercio y las inversiones aumentaron, y con ellos, los ingresos de los estados, que contaron con los recursos para consolidar su propia autoridad. En segundo término –aunque no menos importante–, tuvo lugar un implícito compromiso entre liberales y conservadores (y sus respectivas concesiones políticas y sociales) basado en el común interés por el orden social, la estabilidad política y el progreso económico. Así, entre los grandes sueños liberales de transformación social y el viejo orden corporativo finalmente se alcanzó un pacto.

State-building y Nation-building

Construir el estado no fue en América Latina –como en ninguna región– un proceso breve y sencillo, sino, antes bien, largo y erizado de obstáculos. Lo mismo vale para la construcción de la nación, es decir, para ese delicado proceso de orden pedagógico y cultural a través del cual la población de un determinado territorio llega a sentirse e imaginarse como parte de una misma comunidad. A este propósito, la heterogeneidad étnica y la fragmentación social y territorial resultaron barreras muchas veces insuperables.

El primer e ineludible paso cumplido por gran parte de los estados interesados en sentar sus bases y puntos de partida fue conocer el propio territorio y su población. Para las elites que tomaron en sus manos las riendas del poder, resultaba claro que sin ese conocimiento no había ley que pudieran adoptar para crear la nación. Fue entonces que, en varios países, se realizaron los primeros censos nacionales y floreció la avidez estadística por cuantificar, medir, catalogar a la población y los bienes naturales comprendidos entre los confines de la nación, premisas de leyes científicamente fundadas y, por lo tanto, más racionales. A este cambio quedó enlaza la educación pública y, más tarde, el envío hacia las zonas más remotas de cada país de un gran número de formularios públicos encargados de censar a los habitantes, armar padrones

electorales o dar fe de los datos del registro civil y otras actividades similares. Con mayor o menor éxito según los casos, y con mayores dificultades en los países más heterogéneos, empezó a configurarse una arena pública nacional que tendió a atenuar el peso de los localismos e incluso a horadar la impermeabilidad de las barreras étnicas y sociales. Tanto en la progresiva unificación del espacio nacional como en la concreta ocupación del territorio, en muchos casos los militares desempeñaron funciones clave, que por ello mismo asumieron un espíritu de cuerpo y una imagen de sí mismos y de su propio papel que en el futuro estaban destinados a tener una importante gravitación sobre los destinos políticos de la región. Así como en la administración de la justicia y en la tutela de los derechos constitucionales fue decisivo el papel del poder judicial tanto a nivel central como local. Por entonces, en muchos países se sancionaron nuevos códigos civiles y penales, y la magistratura se volvió un cuerpo más autónomo y profesional.

El modelo primario exportador

Desde mediados del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, una ola de globalización envolvió con fuerza a América Latina. Impulsado por la revolución comercial e industrial, y hecho posible en dimensiones antes impensables por las innovaciones tecnológicas –en especial por la navegación a vapor en el océano Atlántico y por los ferrocarriles–, aquel fenómeno tuvo consecuencias enormes en las naciones latinoamericanas. Sobre esas naves y trenes viajaron mercancías a precios más bajos, en tiempos más rápidos y en condiciones de mayor seguridad, a tal punto que el comercio alcanzó ritmos constantes y potentes, y los capitales llegaron en abundancia. En aquellos nuevos vehículos marítimos y terrestres transitaron también millones de hombres, que dejaron Europa por América. Con ellos arribaron historias, culturas, costumbres, ideas, ideologías, tradiciones que enriquecieron y volvieron aún más compleja la ya intrincada trama social latinoamericana. En pocas palabras, fue como si las olas levantadas por los extraordinarios cambios producidos en Europa llegaran a las orillas del Nuevo Mundo, arrastrándolo consigo hacia la modernidad que Occidente estaba creando. América Latina se encaminó desde entonces hacia un turbulento proceso de transformaciones económicas, causa de cambios sociales radicales, que pronto hicieron sentir su efecto sobre la política, la cultura, la religión, las costumbres...



Inmigrantes en el puerto de Buenos Aires. Archivo del Museo Nacional de Inmigrantes.

¿Cómo se produjo la integración de América Latina al Occidente moderno, el de la Revolución Industrial, que había encontrado su guía en Gran Bretaña; a ese Occidente empapado de ética protestante y espíritu capitalista que lo volvía tan distinto del Occidente hispánico del que esta América siempre había sido parte? En términos económicos, se integró como la periferia de ese arremolinado centro, del cual era necesario complemento, a tal punto que el nexo que se creó entre ambos ha sido definido muchas veces como un pacto neocolonial. Eje de dicho nexo fue el modelo económico primario exportador, basado en el libre comercio, en el que América Latina se especializó en la exportación de materias primas hacia Europa –minerales para la industria y agropecuarias–. En sentido contrario, viajaron hacia América las manufacturas europeas, en especial británicas; al mismo tiempo, arribaron capitales europeos y norteamericanos, necesarios para crear las infraestructuras sin las cuales la corriente vigorosa del intercambio atlántico pronto se habría secado. Se trataba de capitales destinados a proyectos que implicaban excavar puertos de agua profunda, tender miles de kilómetros de vías férreas, sentar las bases de un moderno sistema crediticio, realizar túneles en los lugares más inhóspitos, explotar las minas, y otros emprendimientos similares. En síntesis, los capitales fueron el lubricante y el carburante de aquel modelo y, por lo general, obtuvieron ganancias gigantescas.

Como todas las grandes transformaciones, también esta tuvo sus luces y sombras, lo que explica que el juicio de los historiadores esté di-

vidido al respecto y que aún hoy sea fuente de encendidas polémicas. Hay quienes ven allí el emblema de un nuevo y letal dominio colonial, que distorsionó y volvió estructuralmente dependiente a la economía local, sometiéndola a las potencias del extranjero. Otros, en cambio, perciben el inicio de una prometedora modernización que, aunque atravesada por fragilidades, le permitió a América Latina salir de una producción encallada en el autoconsumo, y sostener y consolidar el orden constitucional liberal.

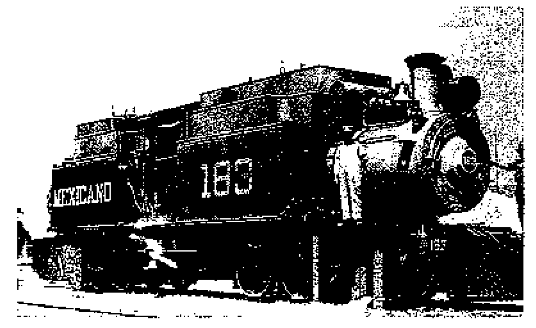
A modo de síntesis, puede afirmarse que, por un lado, América Latina vivió entonces una impetuosa fase de crecimiento económico que trajo consigo el *boom* del comercio, la creación de infraestructuras vitales, la incorporación a la agricultura de nuevas y muy extensas tierras fértiles en las inmensas fronteras interiores, el inicio de la urbanización y la expansión de las ciudades: todas premisas de la consolidación institucional y económica de los nuevos estados y de la erosión de los lazos sociales premodernos, típicos del mundo rural. Por otro lado, ese tipo de crecimiento fue también causa de distorsiones y vulnerabilidades: como las economías fueron inducidas a especializarse en la producción de los bienes requeridos por el mercado mundial, (en general no más de uno o dos por país), cada economía nacional se volvió dependiente de la fortuna de esos pocos bienes, lo cual incentivó la concentración de la riqueza y de la propiedad de la tierra, y agudizó aún más las ya profundas fragmentaciones sociales. Por último, las bruscas oscilaciones de los precios de dichos bienes con frecuencia hicieron temblar a los dependientes presupuestos nacionales.

La divisoria de aguas económica

Nada como los números desnudos puede dar la medida de la divisoria de aguas que los treinta o cuarenta años del período que transcurre entre los siglos XIX y XX representaron al separar la antigua América Latina de la moderna. Nada como algunos datos dispersos puede dar la idea de cuán diverso fue entre un país y otro el peso de las transformaciones ocurridas entonces. Finalmente, nada como algunas cifras clave da la proporción de la intensidad del vínculo de América Latina con las mayores potencias europeas y con los Estados Unidos. A este respecto, el caso de la Argentina fue único y no conoce parangón. Tanto en sí mismo –porque ningún otro país se integró tanto con la economía internacional ni fue tan revolucionado por sus efectos– como por la importancia especialísima

que asumió como proveedora de carne y grano para la gran potencia mundial de la época, Gran Bretaña, de cuyo imperio informal la Argentina fue parte fundamental. Baste con decir que el millón y medio de libras esterlinas que las islas británicas importaban en 1860 se había transformado en casi 41 millones en vísperas de la Primera Guerra Mundial; que los 730 kilómetros de vías férreas tendidas en 1870 superaron la marca de 33 000 kilómetros cuarenta años después; que la superficie cultivada, que en 1888 sumaba cerca de 2,5 millones de hectáreas, en 1914 se había multiplicado por diez, llegando a 24 millones.

Pero si el caso argentino fue único y extremo en algunos aspectos, no menos impresionantes son los números para los restantes países, en especial los más grandes y atractivos para la economía mundial. El crecimiento de los ferrocarriles en México fue, por ejemplo, igualmente impresionante, dado que en 1910 superaba los 19 000 kilómetros, algo nada desdeñable en un país con una geografía tan enrevesada, donde las vías férreas favorecieron, entre otras cosas, el nacimiento de un auténtico mercado nacional, cuya vigencia impulsó el gran crecimiento económico de la década y media que transcurre entre los siglos XIX y XX, cuando el PBI mexicano creció más del 50%. Si la Argentina enlazó su economía con los capitales británicos, México se vinculó con los de los vecinos Estados Unidos, que pronto monopolizaron la industria minera.



Locomotora de los ferrocarriles mexicanos, en el trayecto que une Ciudad de México y el puerto de Veracruz, entre 1873 y 1925.

Relatos semejantes pueden construirse en casi todos los otros países, cada uno con sus peculiaridades. Empezando por Brasil, donde el *boom* exportador se debió al café y se concentró en los estados de San Pablo y Minas Gerais. Las inversiones británicas y norteamericanas crecieron allí con prisa y más que nunca antes, y se multiplicaron por siete entre 1880 y la gran crisis de 1929. El resultado fue que el área cultivada se elevó

en forma exponencial y Brasil terminó por dominar el mercado mundial del café, del que hacia 1929 poseía cerca de los dos tercios de todos los cultivos existentes. Como el café también proporcionaba las tres cuartas partes de las ganancias producidas por las exportaciones, se comprende que la entera economía nacional dependiera de los ciclos de sus precios. Esta exposición panorámica podría continuar de un punto a otro del continente: desde el Perú, donde la llegada hasta los Andes de los ferrocarriles dio nuevo impulso a la vocación minera del país, pero donde la explotación de cobre, zinc y plomo –dados los ingentes capitales y las modernas tecnologías que requería– acabó por quedar bajo el control de las grandes empresas norteamericanas; hasta Bolivia, donde al nuevo *boom* de la plata sucedió el del estaño y donde la elite local que controlaba la producción se asentó en el vértice de la escala social del país, que vivió entonces un período de relativa estabilidad. Desde Chile, cuyas exportaciones aumentaron y llegaron a depender en un 80% de los productos de sus empresas mineras, en primer lugar del nitrato, dada la elevada demanda de fertilizantes en el mercado europeo, seguido por el cobre, del que se volvió primer productor mundial; hasta Ecuador, donde las exportaciones de cacao crecieron cuatro veces entre un siglo y otro, pasando por Venezuela y Colombia, donde el detonador de las transformaciones económicas fue el despegue de las exportaciones de café. Cabe agregar, además, que el café y otros productos típicos de las áreas subtropicales, como cacao, azúcar de caña y bananas –en cuya producción ingresaron no sin prepotencia las grandes empresas norteamericanas–, estuvieron en la base del *boom* de las exportaciones en América Central y en el Caribe, así como del poder de las elites políticas, que en muchos casos lograron imponer su dominio.

Una sociedad en transformación

Tanto los efectos de la modernización económica como los cambios sociales que suscitaron tuvieron profundidad diversa de país a país o de región en región; extensos y veloces en los que más se integraron a la economía mundial, y más limitados en los que lo hicieron en forma más tardía o lenta, es decir, en países como Colombia y Venezuela, y en vastas áreas de las repúblicas andinas y centroamericanas. Más allá de ajustes y ritmos diferentes, el modelo económico fue análogo en todas partes, y lo mismo puede decirse respecto de las transformaciones que generó en la vida social. Así, las naciones de América Latina entraron

en una larga y con frecuencia agitada época de modernización social, que se intensificaría en el curso del siglo XX.

Esto implicó la brusca aceleración de algunos fenómenos destacables: ante todo, el crecimiento demográfico, en ciertos casos debido a la inmigración europea, pero en realidad extendida a la región entera, incluso a los países donde fue fruto del incremento natural de la población; la urbanización, particularmente intensa en la Argentina, Chile y Venezuela, que afectó a una o pocas ciudades erigidas en nudos clave del enlace con el mundo exterior, las cuales –como Ciudad de México o Buenos Aires– pasaron, en pocos años, de ser una gran aldea a devenir vibrantes metrópolis. A ello se sumó la escolarización, al menos en los centros urbanos y donde el estado más avanzó en su proyecto de crear sistemas educativos nacionales; la tercerización, por la proliferación de nuevas profesiones, tanto en el ámbito público como en el privado, vinculadas a las necesidades de una economía y una sociedad más articuladas; por último, una incipiente industrialización, al menos en países como Brasil, México o la Argentina, donde las elites dirigieron hacia la industria los capitales acumulados, y en aquellos donde el crecimiento de la producción minera indujo a la conformación de importantes centros industriales.

En síntesis, las sociedades de América Latina comenzaron a diferenciarse y se volvieron más complejas, aunque en todas sobrevivió la sociedad tradicional, en especial en las regiones que permanecieron ajenas o menos afectadas por la apertura al mundo exterior y al mercado mundial. Si en un comienzo se habían visto polarizadas hacia los extremos de la escala social, con una limitada elite criolla en la cima de la pirámide y una indistinta masa rural en su base (autóctona o mestiza), ahora esto empezaba a cambiar, en especial donde la inmigración masiva revolucionó las jerarquías sociales tradicionales. El largo y sostenido crecimiento de la economía ofreció nuevas oportunidades y estimuló la movilidad social y el nacimiento de nuevos estratos sociales, aunque no extirpó las profundas raíces de vastos sectores sociales premodernos, puesto que la movilidad social quedó a menudo imbricada en las barreras étnicas y culturales.

Aun con estos límites, los cambios fueron profundos, precursores de otros aún mayores. Se transformaron las elites, dado que al flanco de las más tradicionales, animadas de espíritu aristocrático, surgieron otras nuevas, más atraídas por los valores burgueses. No obstante, estas también se hallaron –como las elites anteriores– vinculadas a la propiedad de la tierra, de la que en esta época se produjo, en general,

una enorme concentración, no entendida ya como mera fuente de estatus social, sino como fuente de progreso y riqueza, cuando no base de incursiones, para sus dueños, en el comercio, las finanzas y la industria. Cambiaron los estratos populares, en especial en los centros urbanos, o en sectores como los ferrocarriles y los transportes en general, las plantaciones y las empresas mineras, donde con frecuencia surgieron sólidos y combativos núcleos proletarios, sobre los cuales cayeron las primeras represiones violentas; también tuvieron lugar transformaciones en parte de las áreas rurales, al menos donde declinó la vieja hacienda y el trabajo se volvió más libre, es decir, sujeto al mercado y a sus intemperies. Asimismo, crecieron las capas medias de la sociedad, con frecuencia conformadas por mestizos o por migrantes, diferenciadas y distribuidas en oficios, empleos y profesiones que iban desde el comercio y la administración pública hasta los bancos, la escuela y el ejército. Capas medias muchas veces próximas al proletariado urbano –por sus ingresos y sus condiciones de vida–, pero formadas también, en número creciente, por profesionales e intelectuales deseosos de afirmación, prestigio e influencia, bien dispuestos a moverse en la arena política.

La gran ola migratoria

Las grandes migraciones mundiales que desde mediados del siglo XIX hasta la crisis de 1929 transformaron gran parte de mundo, diseminando millones de hombres y mujeres provenientes de casi cada paraje de Europa, produjeron en algunos países efectos revolucionarios, dado que conmovieron el perfil demográfico, económico y cultural. En la era liberal, aunque en distinta medida, todos los estados latinoamericanos buscaron atraer inmigrantes, exhibiendo razones económicas, enfatizando que el arribo de migrantes de las zonas más desarrolladas del planeta incentivaría el progreso técnico y productivo; aduciendo motivos culturales más elaborados, en particular la idea de que los fustazos de ética capitalista que los inmigrantes tendrían a su cargo proporcionar habrían sacudido las bases de la tradicional indolencia latinoamericana. También acudieron al típico arsenal racista tan caro a muchos positivistas y científicos de la época, según el cual la heterogeneidad étnica representaba en América Latina un lastre para el progreso, y para la cual una copiosa inyección de sangre blanca que iniciase un virtuoso proceso de "blanqueo" de la población habría aportado un saludable rejuvenecimiento. Sean las que

fueren las razones para favorecer la inmigración, esta se dirigió de modo masivo sólo hacia algunas zonas, evitando aquellas donde vivía una numerosa población campesina indígena o donde todavía existía una tradición de trabajo esclavo.



Inmigrantes en el comedor del Hotel de Inmigrantes, Buenos Aires, *circa* 1910. Archivo del Museo Nacional de Inmigrantes.

En este sentido, resultaron típicos los casos de México y Perú, donde, aunque los inmigrantes ejercieran una influencia económica notable, ya que se trataba, en su mayoría, de empresarios y comerciantes franceses y españoles, su número fue exiguo. En cambio, los grandes flujos migratorios se dirigieron hacia las zonas del hemisferio austral, donde el clima era templado y se abrían amplias perspectivas de oportunidades de mejoras económicas y sociales, dada la desproporción entre los inmensos espacios existentes y la escasa población. La Argentina y Uruguay, entonces, y luego el Brasil meridional y en parte también Chile fueron los países que se vieron más revolucionados con la recepción masiva de migrantes europeos. En primer lugar la Argentina, donde, según algunas estimaciones, entre 1857 y 1930 ingresaron hasta 6 millones de migrantes, en su mayor parte italianos y españoles, más de la mitad de los cuales (unos 3,3 millones de individuos) se instaló allí y echó raíces. Fue así como un país que a mediados del siglo XIX contaba apenas con un millón de habitantes, en 1930, y en buena medida gracias a la migración, contaba ya con 11 millones. Uruguay vivió una transformación análoga a la Argentina, aunque en mucha menor proporción, dada su extensión. En tanto, la política migratoria de

Brasil estuvo dirigida a alterar el perfil étnico de la población, en gran parte negra o mulata, y a reemplazar el trabajo esclavo con el de europeos asalariados. En buena medida, consiguió sus objetivos, atrayendo una enorme cantidad de italianos y portugueses, los cuales tendieron a concentrarse en el área de más rápido crecimiento: San Pablo.

La ilusión de las oligarquías

Los regímenes políticos de la era liberal eran denominados "oligárquicos", concepto a la vez correcto y engañoso. Es correcto en el sentido de que se trataba de regímenes políticos donde la participación estaba limitada y donde el poder político y el económico, concentrados en una elite restringida, tendían a superponerse. Además, de este modo se alude al hecho de que, más allá de la pertenencia a un partido u otro, los miembros de la elite constituían una oligarquía social, casi siempre blanca y culta, en la cima de una sociedad fragmentada sobre bases étnicas. En cambio, es engañoso si no se tiene en cuenta que así era la política en Occidente antes del advenimiento de la sociedad de masas: una actividad desarrollada por personajes notables y prósperos; y que la violencia, la corrupción y los fraudes que solían caracterizar a las elecciones en América Latina eran por entonces fenómenos comunes en Europa. Resulta aún más engañoso si no se advierten los cambios en curso en estas décadas a medida que la economía, la sociedad y la cultura se transformaban, en especial, una clara tendencia a la ampliación de la esfera pública, a la liberalización del debate político, a la expansión del sufragio y a competencias políticas más virulentas que en el pasado, al menos en las áreas urbanas.

Dicho esto, es preciso añadir que, con todas sus diferencias –a veces enormes–, los regímenes de la época fueron modernizadores en el campo económico pero conservadores en el político, ya que procuraron mantener el monopolio del poder hasta el punto de convertir con frecuencia a las constituciones en pactos entre oligarquías y a las elecciones en ficciones democráticas, donde legitimar órdenes políticos poco o nada representativos de los diversos estratos sociales. Se trataba, en verdad, de pactos entre las mismas elites que se habían combatido entre sí en los tiempos del caudillismo y que ahora encontraban en las oportunidades económicas y en el común interés por la estabilidad política y la paz social un sólido punto de encuentro.

Se producía así una convergencia entre liberales y conservadores, y entre sus imaginarios políticos y sociales, el más racionalista e individualista de los primeros, y el más religioso y organicista de los segundos. Una concordancia de la cual fue emblema la ideología de estos regímenes: el positivismo (cuyas palabras clave están todavía inscritas en la bandera brasileña, "Orden y Progreso"), que desde México hasta la Argentina, pasando por el istmo centroamericano y las naciones andinas, se expresó en la invocación de Paz y Administración. En efecto, el positivismo se prestó a conjugar las dos tradiciones políticas y filosóficas que hasta entonces habían intentado suprimirse y anularse recíprocamente. Si es cierto que los positivistas eran cultores de la razón y el progreso, y por lo tanto distantes de la primacía del espíritu y la fe cara a los conservadores, ambos concebían la sociedad como un organismo natural. El organicismo cientificista encontró así un sólido punto de contacto con el católico.

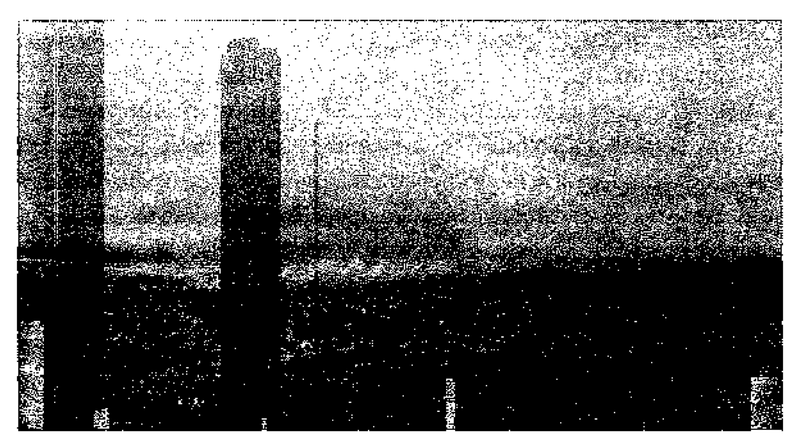
De la sociedad entendida como un organismo, los primeros encomiaban el conocimiento de las leyes científicas que lo animaban, y los segundos, el del plan divino al cual se correspondía. Unos y otros deducían del organicismo el derecho natural de guiar a la sociedad, es decir, ocupar su centro neurálgico, la cabeza que en un tiempo había sido el rey. Así, la ideología positivista legitimó el pacto implícito entre liberales y conservadores, y la progresiva suspensión de los furibundos ataques de los primeros contra las corporaciones tradicionales, las cuales –con la iglesia y el ejército a la cabeza– se tornaron aliadas de la estabilidad política y social. Dicha ideología –a veces fue erigida como dogma público de las nuevas clases dirigentes– legitimó aún más la costumbre de gobernar prescindiendo de la política, entendida como la artificiosa división de una sociedad que Dios o la naturaleza habían concebido unida y armónica. En este sentido, dichos regímenes inauguraron una larga y robusta tradición antipolítica, con hondas repercusiones en la historia latinoamericana posterior.

Precisamente en esto consistió la ilusión de las elites de la época, las cuales con el tiempo ajustaron cuentas con los efectos de la modernización que ellas mismas estaban promoviendo. Al transformar a fondo la sociedad y la cultura, la modernización creó el terreno para que nuevas capas sociales y nuevas ideologías se asomaran a la vida pública: contestando el orden conservador, exigiendo una distribución más equitativa de cargas y honores, o pretendiendo introducir la política donde las oligarquías la habían prohibido. Desde fines del siglo XIX, el nacimiento de nuevos partidos políticos en diversas partes de América Latina, e incluso de numerosos y combativos movimientos obreros –anarquistas

y socialistas en su mayoría, pero también católicos, desde México hasta Chile, desde la Argentina hasta Cuba–, fue síntoma de las primeras y profundas grietas que estaban abriéndose sobre la superficie estable de los regímenes liberales.

Historias de guerras y límites

Época de asentamiento de los estados-nación, de ocupación y delimitación de sus territorios y definición de las jerarquías entre los países más y menos poderosos, la que se extiende entre los siglos XIX y XX se vio sujeta a fuertes tensiones en las fronteras. En muchos puntos, los límites internacionales habían quedado indefinidos desde la independencia: entre la Argentina y Chile, Perú y Ecuador, Colombia y Venezuela, y así en gran parte del continente, por no hablar de casi todos los límites de Brasil.



Cándido López, *Batalla de Tuyutí* (detalle). Museo Nacional de Bellas Artes. El enfrentamiento tuvo lugar el 24 de mayo de 1866, en las cercanías del lago Tuyutí, en territorio paraguayo, en el marco de la guerra entre Paraguay y los países que conformaron la Triple Alianza.

En algunos casos, tanto los problemas de límites como los precarios equilibrios entre las potencias desembocaron en cruentas guerras entre vecinos, que causaron drásticos cambios territoriales. Este fue el caso de la guerra del Paraguay, combatida de 1865 a 1870 entre los ejércitos de la Argentina, Brasil y Uruguay de un lado, y el ejército paraguayo del otro. Una guerra donde delicadas cuestiones geopolíticas y el problema del acceso a las grandes redes fluviales de la región se entrelazaron y desem-

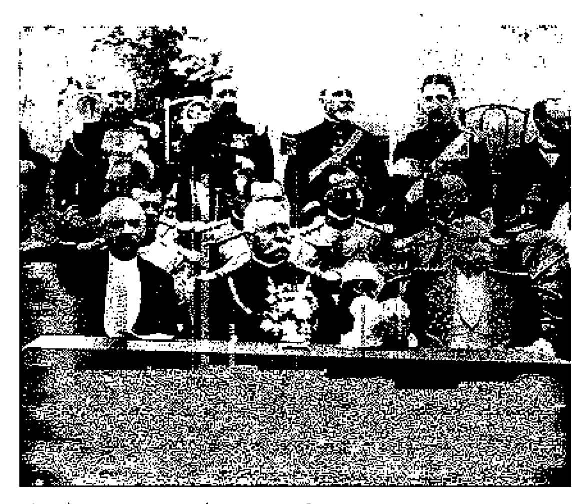
bocaron en la trágica derrota de Paraguay, que perdió 200 000 hombres –cerca de la mitad de la población– y vastas porciones de territorio, que se repartieron entre la Argentina y Brasil.
No fueron menores las consecuencias sobre el mapa de América del Sur de la Guerra del Pacífico, que se libró entre 1879 y 1883, desencadenada por el control de los ricos yacimientos de salitre del desierto de Atacama, en la que Chile reveló su mayor fuerza militar y solidez estatal, y derrotó a los ejércitos de Perú y Bolivia, ampliando así su territorio. Los derrotados, en cambio, perdieron zonas conspicuas y, en el caso de Bolivia, incluso la salida al mar a través del océano Pacífico, que reivindica aún hoy.

Juntos pero diversos: México, Brasil, Argentina

En las décadas que conducen de un siglo al otro, América Latina vivió procesos análogos, aunque en modos e intensidad tan variables como para configurar historias muy diversas. Desde entonces, las historias nacionales comenzaron a distinguirse de manera cada vez más nítida de la historia de la región en su conjunto, y se volvieron tan diferentes como múltiples eran los países nacidos de su unidad política originaria.

En México, el período estuvo dominado por Porfirio Díaz, a partir del cual se lo denomina Porfiriato. Fue un régimen longevo, que se extendió desde 1876 hasta 1910, salvo un paréntesis breve. En términos políticos, se trató de una autocracia: un régimen personalista y autoritario que impuso el orden después de largas guerras civiles. Una vez depuestas las banderas de la reforma liberal que tantas reacciones había causado, Porfirio Díaz volvió a pacificar el país para explotar a pleno las oportunidades de progreso económico ofrecidas por la rápida apertura de los mercados. Para hacerlo, suturó las relaciones con la iglesia y se ganó el apoyo de los grandes terratenientes, beneficiados por el despegue de las exportaciones y por las tierras sustraídas a las comunidades indias, contra las cuales –como contra las primeras agitaciones anarquistas en las minas– Díaz no titubeó en usar la fuerza, aunque la represión no fue el único instrumento de su gobierno, para el cual empleó en abundancia también métodos bien probados: las redes familiares y territoriales. En el campo económico, el suyo fue –como otros de la época– un régimen modernizador, capaz de atraer inversiones ingentes, hacer subir las exportaciones agrícolas y mineras, hacer crecer la economía y los ingresos fiscales, y promover la difusión de los ferrocarriles. No por azar se produjo entonces un gran *boom* de-

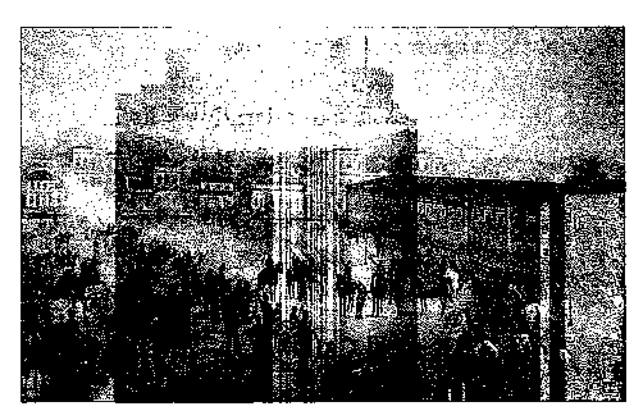
mográfico, incluso a pesar de que los bajos salarios y otros factores inhibieron la inmigración de masas. En términos ideológicos, el Porfiriato fue un típico régimen positivista, hasta el punto de que sus brillantes intelectuales eran denominados "los científicos". Con el tiempo, tantas transformaciones lo sometieron a una dura prueba, a medida que las reivindicaciones sociales y las demandas de democracia política se volvieron más intensas y acuciantes. Además, con la vejez de Díaz se impuso el problema de la sucesión: dado que la suya era una dictadura desprovista de canales representativos, la crisis asumió formas traumáticas; para hacerlo caer fue preciso una revolución.



Porfirio Díaz (a la izquierda), durante los festejos del Centenario de la independencia de México, en 1910. Fotografía de Aurelio Escobar Castellanos.

Análogo aunque diverso fue el caso del Brasil, donde Pedro II, sometido por un lado a la hostilidad de los republicanos y por el otro a la de los grandes latifundistas contrarios a su decisión de abolir la esclavitud, cayó en 1899 debido a un golpe de estado militar. También el Brasil se volvió entonces una república y los militares heredaron el rol de poder moderador que hasta entonces había encarnado el monarca. Nació así la *República Velha*, que se extendió hasta 1930. Se trató de un régimen cuya naturaleza encontró expresión política en la Constitución de 1891, que sancionó la naturaleza federal del estado y, con ella, la amplia autonomía de los estados que lo integraban. Un eje que sustentó aquel régimen fue la regular alternancia en el poder entre los dos estados más ricos, San Pablo y Minas Gerais. En este sentido, el de Brasil fue

un pacto entre oligarquías, en el cual las más débiles aceptaron la guía de las más fuertes a cambio de la libertad de acción en el ámbito local, donde las estructuras sociales cambiaron poco. La clave económica de aquel régimen que a la larga resultó estable (también impregnado de positivismo) fue el café, un bien del cual Brasil llegó a controlar gran parte del comercio mundial y sobre el cual fundó su modernización económica, a la que dieron gran impulso los capitales ingleses y los inmigrantes, que arribaron en gran número y proveyeron mano de obra abundante y un gran aporte al nacimiento de una nueva burguesía. De por sí elitista en un país todavía en gran parte rural y atrasado, con el tiempo el régimen sufrió los coletazos de la rápida modernización, algo perceptible en la incipiente agitación de los trabajadores urbanos, en la insubordinación de los jóvenes oficiales del ejército, los *tenentes*, ante ese régimen al que faltaba un baricentro nacional, pero sobre todo en el ascenso de un nuevo estado, Rio Grande do Sul, que acabó por descompaginar las reglas y hacer emerger las grietas.



Benedito Calixto, *Proclamación de la República*, óleo, 1893. Pinacoteca Municipal de San Pablo.

Entre todos, el caso de la Argentina es el más impresionante. La transformación que vivió en aquellos años tiene en verdad pocos paralelos en la historia –o acaso ninguno–. No tanto por su régimen político, que encontró expresión en el Partido Autonomista Nacional, y que fue también un pacto entre oligarquías, es decir, entre las poderosas elites de la capital y las del interior del país, a las que las primeras impusieron su propia hegemonía, poniendo fin a los añosos conflictos del pasado. Tampoco por su ideología, no menos positivista que la de otros regímenes coetáneos. La transformación se debió a la profundidad sin paran-

gón con la que la nación fue revolucionada por la inmigración y por la intensidad impar de su integración al capitalismo británico. Todo ello produjo importantes cambios sociales y económicos, que hicieron de la Argentina uno de los países más ricos del mundo, al cual todos pronosticaban un gran futuro. Dado que los inmigrantes europeos le confirieron una elevada homogeneidad étnica y cultural, ausente en otras partes, y dada la civilización mayormente urbana que nació allí, no sorprende que sus elites cultivasen cierto "destino manifiesto", es decir, un espíritu misionario y una vocación al liderazgo regional. Tampoco que los efectos de la modernidad se sintieran allí en primer lugar, y con más fuerza, por ejemplo, en el precoz nacimiento de los modernos sindicatos y partidos políticos. Por eso, cuando en 1912 la Ley Sáenz Peña introdujo el voto secreto y obligatorio, el argentino parecía haber sido el único régimen de un gran país latinoamericano a punto de pasar de la era liberal a la democrática sin excesivos traumas.

El comienzo del siglo americano

La guerra de 1898 entre los Estados Unidos y España por la isla de Cuba, tan expedita para los primeros como trágica para la segunda –a tal punto que quedó inscripta como "el desastre" en la historia española y como una pequeña y espléndida guerra en la estadounidense– representó un revés radical para las relaciones internacionales de América Latina, aunque lo fue en mucha mayor medida para América Central y el Caribe que para los grandes países de América del Sur. El Caribe se volvió entonces un lago norteamericano, cuando antes era mayormente europeo, coronando así el antiguo sueño norteamericano de ejercer allí el control y, con ello, garantizarse la seguridad de la frontera meridional.

Con aquella guerra no sólo se derrumbó lo poco que quedaba en pie del imperio español en América –a partir de entonces huérfano también de Cuba y Puerto Rico–, sino que comenzó a tambor batiente la expansión militar y económica estadounidense en la parte latina del hemisferio. Empezando por Cuba, a la cual Washington reconoció independencia al precio de reservarse el derecho de intervenir en sus asuntos internos; siguiendo con Panamá, donde, en 1903, las tropas estadounidenses ayudaron a los irredentistas locales a obtener la independencia de Colombia a cambio de la concesión del derecho de construir un canal interoceánico, inaugurado en 1914; siguiendo con numerosos

países del área donde se proyectó la influencia estadounidense, desde Nicaragua hasta la República Dominicana, desde Guatemala hasta Haití. Sea a través de las robustas inversiones de las multinacionales agrícolas y mineras, o del incremento de la propaganda cultural y las misiones protestantes, o bien por medio de las intervenciones crónicas de los *marines* para llamar al orden a los pequeños y mayormente pobres países de la región, el nuevo estadio de las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina encontró en 1904 su expresión en el corolario del presidente Theodore Roosevelt a la Doctrina Monroe. Como señalamos ya, se trató de un documento en el cual reivindicó para su país el derecho de intervenir en el resto de las Américas para garantizar el orden político y difundir la prosperidad norteamericana, para mantener alejadas a las potencias europeas y completar la obra de civilización a la que los Estados Unidos se consideraban destinados. Por lo tanto, aquella fue la época en la cual la Doctrina Monroe se volvió emblema de la tutela política y militar estadounidense en el área más próxima a los propios confines meridionales, objeto predilecto de la hostilidad del embrionario nacionalismo latinoamericano, del cual fue un numen, entre otros, el padre de la independencia cubana, José Martí.

La independencia de Cuba

En 1898, mientras en Cuba ardía la guerra de independencia de España liderada por los patriotas locales –muchos de ellos exiliados en las costas norteamericanas–, el gobierno de Washington decidió la intervención militar en la isla para preservar la paz y proteger los intereses y la vida de los ciudadanos estadounidenses. El Congreso añadió a este objetivo el de favorecer la independencia de Cuba, en sintonía con el supuesto excepcionalismo de los Estados Unidos y con la vasta simpatía que la causa cubana despertaba en la opinión pública. En los hechos, lo que insinuó el Tratado de Paz con el que se cerró la guerra fue la institución de una especie de protectorado estadounidense en la isla, ejemplo y prueba del tipo de influencia que los primeros se aprestaban a estabilizar en aquella región. La fórmula que sancionó estas soluciones fue la Enmienda Platt, que tomó el nombre del senador a cargo de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Washington y que fue insertada directamente en el texto de la nueva Constitución cubana. El documento reconocía a los Estados Unidos el derecho de intervención en la isla para preservar la paz interior y la independencia, y limitaba el derecho cubano de contraer

libremente deudas y estipular alianzas estratégicas que representaran una amenaza para la seguridad del gran vecino, derecho que, en los años posteriores, los Estados Unidos no dejaron de reclamar.
Entretanto, en 1895 había muerto combatiendo a las tropas españolas José Martí, el escritor y patriota cubano elevado a la dignidad de padre de la independencia. Martí, exiliado en los Estados Unidos, donde vivió escribiendo para la gran prensa en lengua española, teorizó sobre la necesidad de conciliar la revolución nacional con la democrática en Cuba. Fue un agudo crítico de los regímenes oligárquicos del continente, a los que contrapuso la necesidad de dar voz a los sectores populares, y de su ideología positivista, a la que opuso la necesidad de integrar los componentes étnicos. Liberal idealista, imaginó y defendió un proceso de construcción nacional nacido de las bases, de la sociedad civil, idealizando a veces su poder y su rol. Estos fueron los principios que trasplantó en el Partido Revolucionario Cubano, del cual fue fundador en 1892 e ideólogo; se trató de uno de los primeros partidos nacionales, que se radicaron en varios y vastos sectores sociales de la América Latina. Típica de Martí fue la precoz conciencia con la que advirtió los signos de las aspiraciones hegemónicas de los Estados Unidos, un país del cual, por lo demás, admiraba las instituciones y la cultura democrática. La amenaza que este representaba lo indujo a postular, antes que tantos otros, la lucha de los pueblos latinoamericanos por una "segunda independencia".



José Martí.

5. El ocaso de la era liberal

La gran transformación que tuvo lugar en América Latina durante la época liberal plantea, a inicios del siglo XX, los clásicos problemas de los procesos de modernización. En el plano político, el crecimiento de la escolarización y la ampliación de la ciudadanía política sometieron a una dura prueba al elitismo de los regímenes liberales y se expresaron en el crecimiento de nuevos movimientos políticos decididos a combatirlos. En el plano social, volvieron más evidente la urgencia del conflicto moderno entre el capital y el trabajo, y la importancia del rol del estado para hacerle frente. En el plano económico, el extraordinario crecimiento de las décadas precedentes hizo emerger su lado oscuro: la vulnerabilidad y el desequilibrio de un modelo de desarrollo basado en el comercio exterior. Por último, en el plano ideológico, el clima comenzó a cambiar en forma rápida; el mito del progreso tendió a sustentar una vasta reacción nacionalista, que contribuyó a alimentar tanto el intervencionismo militar estadounidense en Centroamérica y el Caribe como la declinación de la civilización europea en las trincheras de la Primera Guerra Mundial.

La crisis y sus nudos

Fijarle una cronología a la crisis de la era liberal en América Latina resulta arbitrario en la medida en que eran diferentes los caminos de los distintos países, algunos de los cuales ya habían vislumbrado lo que para otros era apenas un tenue resplandor en el horizonte. Los procesos que habían causado la crisis eran de largo plazo e impregnaron la historia de la región durante varias décadas. Por ello, fijarla en los años comprendidos entre la Gran Guerra y la mañana siguiente a la caída de la Bolsa de Wall Street es ante todo una convención. Más

aún puesto que la Primera Guerra Mundial no tuvo para América Latina –que no se involucró en ella en forma directa y ni siquiera fue campo de batalla– el efecto devastador (y periodizante) que tuvo para la historia europea. Sin embargo, una y otra fecha permiten delimitar una peculiar fase de la historia latinoamericana.

Basta anticipar, por un lado, que la guerra hizo sonar los primeros toques de alarma para el sostenimiento tanto de los regímenes oligárquicos como del propio modelo económico. Por otro lado, que la Gran Depresión se inició en América Latina no sólo con el colapso del modelo económico imperante durante varios decenios, sino también con una imprevista ráfaga de golpes de estado en los principales países, en los que comenzó entonces una larga era militar. Tanto es así que el año 1930 suele ser señalado como un momento clave de la historia política de la región.

Pero antes de observar de cerca la causa y modalidad específica de esta crisis –anunciada en los dilemas creados a los regímenes oligárquicos por los efectos de la modernización–, es preciso establecer algunas premisas. La primera es que los problemas que América Latina afrontó no eran, *mutatis mutandis*, sustancialmente distintos de los que enfrentaron las naciones europeas; tampoco las reacciones que prevalecieron fueron tan diferentes de las de los países latinos de Europa, con los cuales América Latina comparte la pertenencia a una misma civilización. Todos –aunque algunos bajo la enorme presión de la guerra y otros no, algunos más modernos y avanzados, y otros más arcaicos y atrasados– comenzaron desde entonces a recorrer el pasaje de la sociedad de elite a la sociedad de masas, del universo religioso al político, del liberalismo de las elites a la democracia del pueblo, del espejismo del progreso a la realidad de los conflictos que este suele traer aparejados. En suma, todos saldaron cuentas con el delicado tránsito a la modernidad, que tanto en América Latina como en Europa generó largas y a menudo trágicas crisis políticas, sociales, espirituales y culturales.

La segunda premisa es que la creciente dificultad de los regímenes oligárquicos para gobernar la cada vez más compleja sociedad surgida tras décadas de modernización reveló su incapacidad de ampliar las bases sociales, es decir, de construir consenso. De este modo, ponía de manifiesto cuán superficial y ajena a la mayor parte de esa sociedad tan fragmentada se mantuvo la ideología liberal que había invocado para legitimarse y cuánto había debido conceder para conciliar con el poder de las corporaciones tradicionales. En otros términos, mostró cuán poco propicia era su aclimatación, ya fuera debido a la estructura social

o a la conformación cultural de América Latina. De hecho, el liberalismo –al igual que los regímenes en los cuales había sido parte– produjo una reacción contraria, que comenzó a cobrar vasta forma, y alzó a menudo las banderas del nacionalismo, detrás de las cuales se asomaban los rasgos clave del antiguo imaginario organicista, listo para tomarse revancha –a menudo, aunque no siempre, a manos de quienes fueron piedra angular: los militares–.

Más singular que raro: el caso de Uruguay

Si hubo un país que desde el comienzo del siglo tomó un camino peculiar que lo distinguió de la mayoría de los de la región de un modo que le permitió atravesar en forma tan rápida como indolora la crisis de los años que van de la Primera Guerra Mundial a la Gran Depresión, ese país fue Uruguay. Enriquecido por el *boom* de la exportación de carnes y granos, en gran parte urbano y poblado por inmigrantes europeos, pasó de forma más virtuosa que otros del liberalismo a la democracia, sentando los fundamentos de un sólido sistema democrático destinado a perdurar hasta la violenta crisis de los años setenta, para luego renacer con renovado vigor. Aquella democracia descansaba en el alto grado de laicismo de la vida pública y en el buen nivel de vida de la mayor parte de la población, en la elevada escolarización y en servicios sociales más extendidos y eficientes que en otros lados, elementos cuyas bases serían establecidas a comienzos de siglo, justamente cuando los demás países tomaban el camino que conduciría al colapso liberal y al impetuoso surgimiento del nacionalismo. Esto sucedía pese a que el Uruguay del siglo XIX no parecía en absoluto destinado a un futuro distinto del de aquellos países con los cuales había compartido las frecuentes guerras civiles entre los caudillos y el bipartidismo elitista. El hombre que encarnó el nacimiento y la institucionalización de ese sistema fue José Batlle y Ordóñez, la figura que dominó la historia uruguaya en los primeros veinte años del siglo XX, ocupando en dos ocasiones la presidencia de la República. De hecho, fue el primero en su país y en el continente en ampliar la base social de los dos partidos tradicionales al conceder precozmente el sufragio universal, luego extendido a las mujeres por sus sucesores en las décadas de los veinte y treinta, mucho antes de que lo hiciese la mayor parte de los países occidentales. Sin embargo, para que fueran eficaces sus reformas políticas y duradero el sistema que creó fueron necesarias numerosas reformas, comenzando por las sociales, que Batlle fomentó cuando en

1905 reconoció el derecho de huelga y sindicalización a los trabajadores urbanos, que en el continente, en general, aún estaban sujetos a restricciones y violencias. En el decenio siguiente, dichas reformas fueron seguidas por la reducción a ocho horas de la jornada laboral y por una moderna legislación social. Batlle no se detuvo ante la resistencia de los grandes propietarios terratenientes y creó un vasto frente social que abarcaba desde las clases medias urbanas hasta el más reducido pero combativo proletariado. La política reformista del gobierno, su firme adhesión a los preceptos constitucionales y el rol de árbitro asignado al estado en los conflictos sociales condujeron ese frente por una vía moderada y gradualista más que por el sendero revolucionario que tendía a imponerse en otros lados. Fue por entonces, en un clima distinto del que en otras latitudes desembocó en sangrientas guerras civiles, cuando fueron introducidas en Uruguay importantes leyes laicas, tanto en educación –con la prohibición de la enseñanza religiosa– como en la legislación civil, de la que formó parte, entre otras, la ley de divorcio.



Montevideo durante el gobierno de Batlle.

Las causas políticas

¿Qué fue lo que causó la crisis de los regímenes oligárquicos de la edad liberal? Una respuesta unívoca es imposible, ya que no todos cayeron y, los que lo hicieron, no se derrumbaron al unísono ni de la misma manera. En tanto que los sistemas de Uruguay y Chile no fueron abatidos por completo, sino que evolucionaron en un sentido más democrático (aunque el primero lo hizo de un modo lineal y el segundo pasó por varias

convulsiones militares), en México el régimen profundizó la revolución, que abrió nuevos escenarios; Perú, en cambio, sufrió un golpe militar que frenó las transformaciones. En Brasil el régimen colapsó por obsoleto, mientras que en la Argentina agonizó durante toda la década de los treinta, y así sucesivamente, incluidos los casos de tendencia contraria, como el de Colombia, donde el dominio clerical de los conservadores fue puesto en crisis al ser sustituido por cierto retorno al liberalismo. Se podría seguir de este modo con una casuística por demás variada; por tanto, la pregunta que se impone es si cada caso se desplegó por su cuenta, o bien si existe un hilo conductor en medio de tanta diferencia...



Como candidato del Partido Constitucional Progresista, Francisco I. Madero obtuvo la victoria en las elecciones de 1911 y fue proclamado presidente. Archivo Memoria Política de México.

En términos políticos, suele afirmarse que lo que más erosionó la estabilidad y legitimidad de esos regímenes fue el incremento de la demanda de "democracia", pese a que, en realidad, en muchos casos se aludía a soluciones que poco tenían que ver con ella. En verdad, sería más correcto decir que se trataba de una demanda de participación, o de cambio, *tout court*, lo que agitaba los tiempos. Expresiones de nuevas clases, en su mayoría de sectores intermedios, aunque a menudo también de parte de la elite insatisfecha de la oligarquía imperante, nacieron o sembraron profundas raíces en los nuevos partidos, como la Unión Cívica Radical en la Argentina o el APRA en Perú, por mencionar dos ejemplos que harían escuela. También el Partido Constitucional Progresista, con el cual Francisco Madero desafió en 1910 a Porfirio Díaz en México. Se trataba de partidos cuyos programas solían

presentar, como primer punto, el reclamo de elecciones libres y transparentes, con lo que intentaban arrinconar a la oligarquía, dejando al descubierto la obvia contradicción al desafiarla a respetar los principios que proclamaban en las constituciones.

¿Ocurrió entonces que los regímenes oligárquicos entraron en crisis y luego cayeron para dejar paso al advenimiento de una era democrática? En absoluto: lo que sucedió antes y después de 1930 en la mayor parte de los casos fue muy distinto. Allí donde la elite en el poder era más sólida, o donde más débil eran las nuevas fuerzas porque el país era más atrasado, se asistía a una reacción autoritaria, con lo cual la democracia política perdió una preciosa oportunidad. En cambio, allí donde la modernidad se había impuesto sobre los viejos regímenes que apenas lograban contener sus efectos, es decir, en los países más modernos y avanzados, surgieron otros fenómenos típicos del advenimiento de la sociedad de masas. Se alzaron, de hecho, los populismos, acaso atribuibles también a la tradición de la democracia liberal y representativa, que en algunos casos perdió por sí sola el tren de la historia. En dichos países se destapó la caja de Pandora de sociedades en plena transformación, que los nuevos partidos surgidos en los primeros decenios –ligados a las capas medias y de impronta en general reformista– no podían representar ni contener. En ambos casos y del mismo modo que acontecía entonces en las naciones latinas de la Europa meridional, la declinación de los regímenes liberales no preparó el camino a la democracia representativa, sino a regímenes de otro tipo.

Emblema de la misma demanda genérica de participación y cambio fue el movimiento de la Reforma Universitaria, surgido en Córdoba, Argentina, en 1918, cuyo programa planteaba la democratización del acceso al gobierno de la universidad. Sus ecos se extendieron por toda América Latina, confundiéndose con los de la revolución mexicana. Al erosionar el frágil fundamento de los regímenes oligárquicos, la Reforma contribuyó también a la emergencia de otros partidos o movimientos, surgidos en el seno de la moderna cuestión social –el conflicto entre el capital y el trabajo–, que también comenzaba a imponerse. Partidos o movimientos que en principio eran, en su mayoría, anarquistas y socialistas, pero que luego de la revolución bolchevique de 1917 y tras la reunión en 1929 de la primera conferencia de partidos comunistas de América Latina fueron también comunistas. Se trataba de reagrupamientos políticos y sociales a menudo de dimensiones reducidas, pero más organizados, motivados y activos que la mayor parte de los otros actores del sistema político, poco vertebrado en general. Por lo demás,

a menudo tenían la capacidad de hacer sentir con vigor los efectos de su lucha, y eran particularmente fuertes en los sectores clave de la economía –aquellos vinculados a la exportación, como el transporte, la minería, la industria frigorífica, etcétera–. Siempre oscilando entre legalidad y clandestinidad, entre parlamentos y sindicatos, entre el camino reformista y la vía revolucionaria, tolerados o bien reprimidos con violencia, no se transformaron en modernos partidos de masas, aunque cumplieron un importante papel al minar las bases sociales y certezas ideológicas del régimen liberal-oligárquico.

El APRA y los partidos radicales

Desde el Partido Radical que en la Argentina alcanzó el poder en 1916 a aquel que en Chile sostuvo en 1920 el gobierno reformista de Arturo Alessandri; desde los primeros movimientos que en la Venezuela dominada por la férrea dictadura de Juan Vicente Gómez desafiaron al poder, a aquellos que en Perú hicieron otro tanto contra el régimen autoritario y modernizante de Augusto Leguía, pasando por los numerosos partidos que en diversas formas, con mayor o menor fuerza y en variados contextos, emergieron de manera profusa en casi toda América Latina, las nuevas formaciones políticas surgidas por entonces en estas sociedades cada vez más complejas fueron un rasgo de la época. Tales partidos encarnaron las vastas expectativas de una incipiente democratización y del nacimiento de un sistema político nuevo e institucionalizado, capaz de brindar una representación articulada de la pluralidad social. No obstante, dichas expectativas se vieron mayormente frustradas cuando la crisis del sistema liberal barrió en muchos países también a los partidos políticos, a menudo suplantados por el poderío de viejas o nuevas corporaciones. Entre ellos se encuentra la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), partido que fundó el joven líder peruano Víctor Raúl Haya de la Torre en 1924, en México, país donde se hallaba exiliado. Se trataba de una formación política con ambición supranacional, expresión de las corrientes que, en diversos puntos de América Latina, buscaban conciliar democracia, reforma social y nacionalismo, transformada luego en protagonista crucial de la atribulada historia del Perú. Con el tiempo, su influencia política e ideológica se hizo sentir en varios países americanos, en especial en el área andina y en otras naciones de América Central y el Caribe. El APRA, cuya base social comprendía principalmente a los sectores medios, aunque incluía también ciertas franjas del proletariado, incitaba a

la lucha contra el imperialismo de los Estados Unidos, lo que comenzaba a ser común en una época de asiduo intervencionismo norteamericano, en especial en un país como el Perú, donde los intereses mineros crecían, y para un joven como Haya de la Torre, exiliado primero en Panamá y luego en la corte del régimen surgido de la revolución mexicana. Además, el programa originario del APRA preveía la unión de lo que su líder definía como Indoamérica, aludiendo al rescate de las raíces indígenas de la región, la nacionalización de las tierras y la minería, y un genérico frente antiimperialista universal. Si bien muchos de estos puntos lo aproximaban en un primer momento a los movimientos marxistas en gestación, la ideología del APRA se caracterizó por un acentuado nacionalismo que conduciría a la teorización de una suerte de tercera vía entre capitalismo y comunismo (rasgo típico de los populismos latinoamericanos). Dicho esto, el golpe de estado que tuvo lugar en Perú en 1930 y los sucesivos encuentros violentos entre el ejército y el movimiento aprista impidieron a su líder llegar al gobierno, que el APRA alcanzó por primera vez recién mucho más tarde, en 1985, en un contexto distante años luz de aquel que le había dado origen.



Mitin del APRA liderado por Víctor Raúl Haya de la Torre.

Las causas sociales y económicas

Al tiempo que el mito del progreso se veía afectado por desagradables efectos secundarios, las certezas de la elite comenzaron a vacilar, dado que los conflictos que los regímenes habían neutralizado reingresaban

en forma de tensión y desorden. Dichos regímenes no se encontraban preparados para hacer frente a estos fenómenos, que solían adjudicar a ideologías y agentes extranjeros, a los que acusaban de amenazar la armonía local. Por ello, buena parte de estas elites, otrora liberales y cosmopolitas, buscaron tranquilizador reparo en el mito nacionalista de la sociedad cohesionada y equilibrada, sometida a los ataques del enemigo externo y de sus aliados internos. En definitiva, los regímenes oligárquicos no estaban preparados para afrontar los modernos conflictos sociales e ideológicos, ni para gobernar el imparable pluralismo político. Prisioneros de la fe ciega en la ciencia y de una intensa hostilidad hacia la política, esos regímenes, de hecho, habían obstruido, en general, los canales necesarios para metabolizar los nuevos desafíos y desactivar el potencial destructivo: los democráticos.

En ese sentido, la Primera Guerra Mundial fue decisiva también en América Latina. Sus potentes ecos no se desvanecieron en el decenio siguiente, ya que derrumbó un andamiaje ideológico central: el mito de la Europa feliz, cuna de la cultura francesa, la democracia británica, la ciencia y los ejércitos alemanes... ¿Cómo podía ser modelo de civilización esta Europa que se desgarraba en las trincheras? ¿Qué quedaba del dogma positivista de las elites políticas e intelectuales que habían legitimado el poder agitando el espejismo de emular la civilización europea? No obstante, más allá de esos efectos abstractos aunque portentosos, la guerra no era algo concreto e inmediato. La gallina de los huevos de oro de los regímenes oligárquicos –el modelo exportador de materias primas– sufrió durante la guerra sus primeros cortocircuitos serios, que comenzaron a resquebrajar sus bases, algo inevitable, por otra parte, dado que la banca europea se hallaba inmersa en el esfuerzo bélico. Esto tuvo consecuencias considerables; algunas, inmediatas, puesto que muchas economías de la región se encontraron de pronto sin salida para sus productos ni bienes para importar; otras, más duraderas, puesto que la guerra aceleró ciertos fenómenos en curso. En primer lugar, indujo a los países americanos con capital a sustituir importaciones, es decir, a crear una red de industrias, cuyo resultado fue impulsar la modernización social y las demandas políticas que asediaban a los regímenes oligárquicos. Facilitó de ese modo la creciente penetración en la región del capital estadounidense, en lugar de los capitales europeos, y sumó con ello nuevo combustible a la vivaz llama nacionalista.

No obstante, lo más destacable es que la totalidad de esos fenómenos lesionó la convicción de que aquel modelo fuese eterno y virtuoso, y se difundió, en cambio, la certeza de que comportaba serios riesgos,

entre los cuales el más evidente era la vulnerabilidad de las economías latinoamericanas, tanto más cuando aquellas crisis económicas se tradujeron pronto en intensos terremotos sociales. La escasez de bienes, la inflación que erosionaba los salarios, los grandes bolsones de desocupación, la ausencia de sistema previsional (al cual sólo en Chile, Uruguay y la Argentina se comenzó a dar forma entonces), entre muchos otros problemas, fueron la base de la gran ola de huelgas, a menudo violentas e incluso con violencia represiva, que atravesó América Latina entre 1919 y 1921, desde la Argentina hasta Perú y de Brasil a Chile –cuando estaba por demás vivo el eco de la revolución en México, que con tanta fuerza había resonado en toda la región–. El clima, en definitiva, había cambiado, y cuando diez años después sobrevinieron los dramáticos efectos de la crisis económica mundial, el terreno ya se encontraba listo para las grandes convulsiones.

La revolución mexicana

La revolución mexicana tuvo una fase armada que se extendió desde 1911 hasta 1917. Se trató, de hecho, de una violenta guerra civil, que costó más de un millón de vidas, cuya estela política y de violencia se prolongó mucho tiempo después de la finalización de los combates. En ella coexistieron realidades y fenómenos diversos, los que a su vez pusieron en evidencia reivindicaciones, grupos sociales y partes del territorio de enorme heterogeneidad. En verdad, la revolución mexicana fue varias revoluciones juntas, a partir de las cuales el Porfiriato alcanzó un final traumático y se echaron las bases de un nuevo orden político y social.

Nació como revolución política, bajo la presión de las elites liberales del norte del país que reivindicaban la democratización del régimen. De esa revolución fue líder Francisco Madero, que desafió a Díaz a elecciones, pero se levantó en armas y llamó a la revuelta junto a toda la resistencia. Obtenido el exilio del dictador y ya en el poder, Madero pronto se vio abrumado por el disenso entre los revolucionarios y la reacción del ejército. De hecho, numerosos revolucionarios, con Emiliano Zapata a la cabeza, no estaban dispuestos a entregar las armas hasta tanto no se hubiera conseguido la reforma agraria por la cual se habían alzado.

Fue entonces, en el apogeo de la violencia y el caos, que el general Victoriano Huerta tomó el poder por la fuerza, habida cuenta de que

a todo el mundo le parecía inminente la restauración del orden prerrevolucionario. Para contradecir ese desarrollo nació en el norte del país un ejército constitucionalista, bajo la guía de Venustiano Carranza, al cual prestó importante sostén Francisco "Pancho" Villa, excéntrico producto de aquel gran movimiento telúrico que fue la revolución, más parecido al típico caudillo latinoamericano que al moderno revolucionario. Mientras tanto, en el sur continuaba la lucha campesina contra Huerta, conducida por Zapata. Esta situación se prolongó hasta que los Estados Unidos –que en un primer momento había confiado en el retorno de la elite depuesta, pero que, con el ascenso a la presidencia de Woodrow Wilson, impuso un cambio de rumbo– decidieron el envío de un contingente militar al puerto de Veracruz, con el objetivo de estrangular al gobierno de Huerta y obligarlo a abandonar el territorio. Los Estados Unidos actuaban con la convicción de que México debía avanzar pronto hacia un cambio profundo y de que sólo el sostén a los ejércitos constitucionales garantizaría un gobierno estable y democrático.





Emiliano Zapata y Pancho Villa.

Huerta cayó bajo la ingente presión de las tenazas que lo sujetaban desde el norte y el sur. México se halló, en la práctica, sin estado, en una desgarradora lucha en la cual el límite entre política y criminalidad, movimientos sociales y hordas de bandidos, era a menudo lábil o

inexistente. Lo que en realidad empezó en ese momento fue el enfrentamiento entre fuerzas extrañas entre sí, que entonces habían combatido al enemigo común: los ejércitos constitucionales de Carranza y las tropas de Zapata y Villa, los cuales terminaron derrotados. Revolución política, la mexicana fue también una gigantesca explosión social encarnada en la poderosa corriente campesina de la cual Emiliano Zapata fue el líder indiscutido. Hombre del sur, mestizo, indígena, en las antípodas –por temperamento y formación– de los ricos y cultos constitucionalistas del norte, su objetivo era obtener la restitución, para la comunidad campesina, de las tierras perdidas en la época del Porfiriato bajo el embate creciente del latifundismo.



Tropas villistas y zapatistas.

Fruto de tantas y tan heterogéneas instancias, la revolución no podía sino concluir con un compromiso entre los vencedores y las reivindicaciones de quienes, si bien habían sido derrotados, le habían aportado una impronta radical a la insurgencia social. Su objetivo era la Constitución de Querétaro de 1917, que por un lado acogió los principios liberales propugnados por los ejércitos vencedores –como la libertad individual y el laicismo del estado impuestos con duras medidas contra la iglesia y su rol social–, y por otro lado introdujo principios sociales y nacionalistas inéditos en la región, como la propiedad de la nación sobre los bienes del subsuelo y las bases de una reforma agraria.

El nuevo clima ideológico

Como siempre sucede, el nuevo clima político fue anunciado primero y acompañado luego por el surgimiento de nuevas ideas en los campos político, social y económico, y antes que en otros, en lo filosófico, artístico y literario. El positivismo comenzó pronto a sufrir los primeros ataques, en especial a partir de 1900, cuando apareció el *Ariel* de José Enrique Rodó, una suerte de manifiesto del nacionalismo y de la reacción antimaterialista continuada por el movimiento estético denominado Modernismo, cuyo representante más destacado fue el poeta nicaragüense Rubén Darío.

La ola de ideas –periféricas o bien estructurales a la ideología– que traspasó la barrera positivista abarcaba una amplia gama de expresiones a menudo diversas e incluso contradictorias entre sí. Lo que aquí importa es captar algunos elementos esenciales y observar cómo, entre tanta divergencia, las nuevas ideas tendieron a confluir hacia un paradigma nacionalista genérico. Si durante la edad liberal la tendencia prevaleciente había sido buscar modelos políticos y culturales fuera de la frontera, donde la civilización moderna era más floreciente, ahora predominaba la tendencia a resguardarse en la búsqueda de la nacionalidad y sus orígenes, a cuya reconstrucción o invención fueron dedicados asiduos esfuerzos. Esto fue así porque los viejos modelos se habían resquebrajado y debido a que, una vez consolidados los estados, era preciso forjar ciudadanos para hacer la nación, inculcando en la población un sentido de pertenencia y destino compartido. Esto fue así a tal punto que, al propiciar la inmigración, la elite positivista intentó atenuar el componente étnico indígena y afroamericano, incrementando el blanco (europeo), con la convicción de que la heterogeneidad era un lastre para el desarrollo de la civilización. En ese nuevo clima maduraron las corrientes indigenistas y la reivindicación de la América mestiza, que ofrecía como peculiar aporte a la civilización su "raza cósmica", el hombre nuevo creado por su excepcional historia, como sostenía el mexicano José Vasconcelos.

Al dogma cientificista le sucedió una reacción espiritualista, madurada a fines de los años veinte, que dio lugar a un verdadero *revival* católico, cuyos protagonistas fueron no pocas veces positivistas conversos, y que alimentó grupos, partidos, movimientos e ideas políticas donde se conjugaron catolicidad y nación en una mezcla típica de muchos países hispánicos. A la fe optimista en el progreso siguió una obsesiva búsqueda de identidad, dirigida en especial a la identificación de las raíces

de una identidad nacional, a menudo mítica. Tanto es así que desde entonces se ha hablado con frecuencia de brasilianidad, cubanidad, peruanidad, y así sucesivamente, con el fin de representar la identidad eterna e incorruptible de una nación.

En lugar de la virtud y de la libertad del individuo, comenzaron a revalorizarse la esencia y los valores de la comunidad, entendida ya como un todo orgánico, formada por corporaciones y cimentada en la unidad religiosa, en el caso de los católicos, o bien como unidad de clase en el caso de los marxistas, entre los cuales comenzaron a emerger corrientes que se esforzaban en nacionalizar aquella ideología, de por sí internacionalista. Ese fue el caso del peruano José Carlos Mariátegui, cuyos esfuerzos tendieron a reconducirla a una suerte de comunismo incaico primigenio, anterior a la conquista española, más allá de cuán verdadero o imaginario fuese.


AMAUTA

SEGUNDO ACTO

SUMARIO

Editorial de la revista *Amauta*, Lima, 1927.

El cosmopolitismo, tan apreciado como teorizado en una época, empezó por entonces a ser objeto de radicales diatribas: era considerado un hábito oligárquico, que se reducía a la imitación de las elites extranjeras, o una costumbre extraña al pueblo. Sobre dicho pueblo florecieron, además, estudios etnográficos y antropológicos, investigaciones interesadas en reconstruir las costumbres alimentarias, musicales, religiosas, en búsqueda de su sentido y de su identidad, y con ello, de los de la nación.

Esas fueron, en el plano ideológico, las premisas de la marea nacionalista que comenzó a propagarse en el continente; aunque ello no ocurrió de manera unívoca: se manifestó también en el plano político, y en casi todas las áreas, más allá de la que específicamente analizamos. Lo cierto es que el clima estaba cambiando.



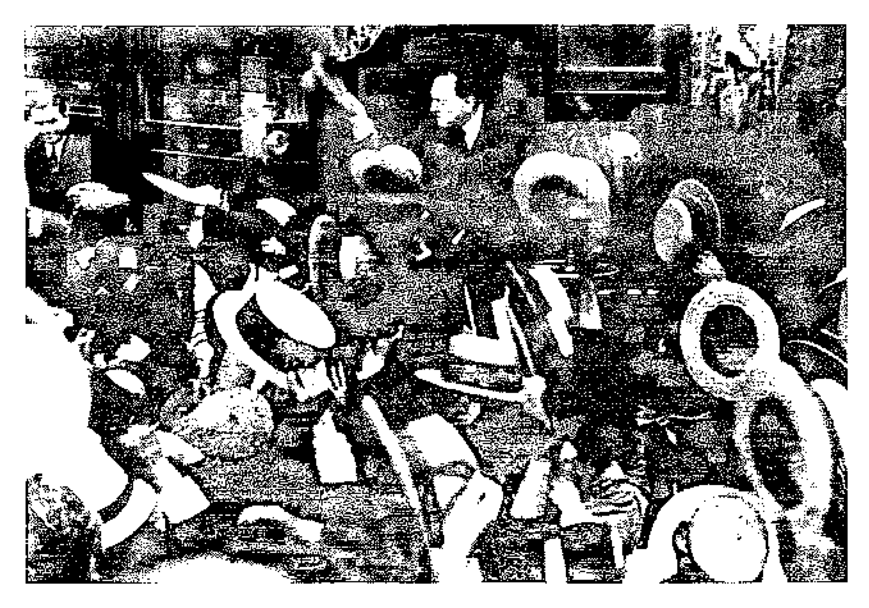
El krausismo

Hoy prácticamente olvidado, y en realidad muy poco conocido fuera del mundo hispánico y alemán, el krausismo ejerció una amplia influencia en América Latina. La doctrina procede del filósofo alemán Karl Krause y consiste en una suerte de liberalismo espiritualista que arribó a América Latina a través de España, donde tuvo numerosos seguidores y divulgadores. El krausismo influyó no poco en la reflexión política de hombres como José Martí y José Batlle y Ordóñez, y acompañó la parábola de muchos de los partidos radicales que llegaron a la madurez en los años veinte. Lo que probablemente lo volvió tan atractivo en el clima cultural de América Latina y susceptible de desarrollos distintos de las premisas liberales de las cuales partió, fue su esfuerzo en conciliar liberalismo y organicismo.

Los derroteros de la crisis liberal

Los caminos seguidos por las crisis de los regímenes oligárquicos fueron múltiples; lo mismo cabría decir de sus resultados, cualquier cosa menos uniformes. El caso más notable, violento y de impacto continental fue el de México, donde el Porfiriato acabó por convertirse en una peligrosa tapa agujereada sobre una olla en ebullición. Esa olla era la sociedad mexicana, en la cual diversas voces, durante mucho tiempo oprimidas, explotaron al unísono y echaron las bases de la transición, larga y violenta, hacia un nuevo orden político, económico y social.

En el extremo opuesto, al menos en lo que atañe a los países mayores, se ubicaba en esa época la Argentina, donde la Ley Sáenz Peña de 1912 abrió las puertas a algo que parecía poder operar la virtuosa metamorfosis del régimen oligárquico en régimen democrático, mediante la elección, con el sufragio universal masculino, del líder radical Hipólito Yrigoyen en 1916.



Hipólito Yrigoyen, en Rosario, durante la campaña electoral de 1926.

En 1922 se ratificó la regular alternancia constitucional, confirmada seis años después, cuando Yrigoyen fue nuevamente electo. Sin embargo, en 1930, un golpe de estado, encabezado por el general Félix Uriburu, puso fin a aquella incipiente experiencia democrática, que cayó víctima de diversas causas. La más evidente fue la reacción conservadora de vastos sectores –de la elite económica a las cúpulas eclesiásticas y militares– contra la democracia política, vinculada además con el rechazo del creciente conflicto social y la difusión de ideologías revolucionarias, ya que se imputaba a la democracia no saber hacerle frente, o se la acusaba de allanarle el camino. En este contexto, nacieron grupos nacionalistas antidemocráticos, se difundieron corrientes ideológicas autoritarias y se formaron movimientos contrarrevolucionarios. Además, la joven e imperfecta democracia argentina sucumbió debido a la tendencia del partido mayoritario, el radical (o por lo menos de una parte de él), a transformarse en un movimiento nacional, es decir, a monopolizar el poder pretendiendo representar la identidad misma de la nación, desnaturalizando de ese modo el espíritu pluralista de la democracia moderna. Sobre esta situación ya compleja cayeron como un rayo los tremendos efectos de la crisis de Wall Street, con lo que el país que se erguía como un baluarte de la civilización europea en América entró en el

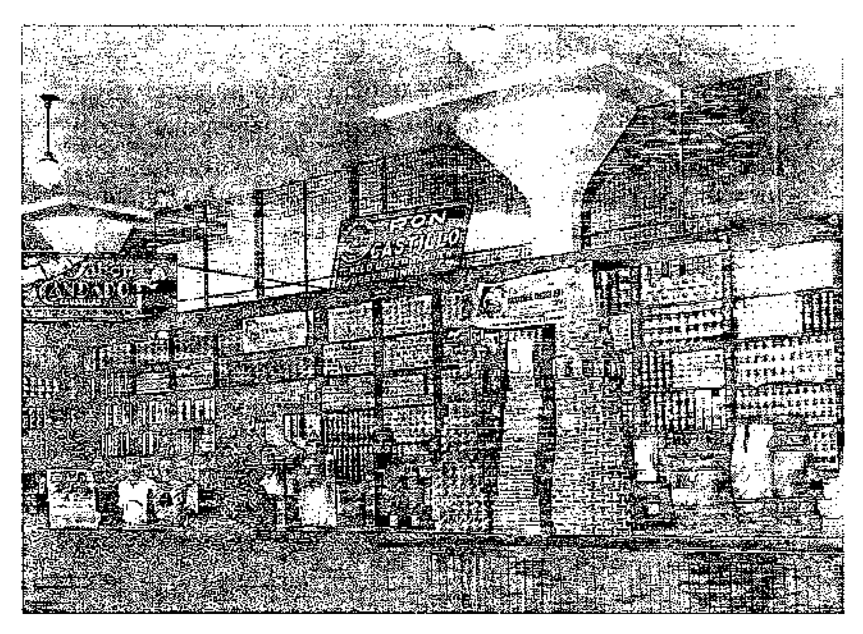
túnel de una crisis no muy distinta de la que afectaba a tantos vecinos latinoamericanos.

No obstante, las masas (o los fantasmas que evocaban) no fueron en todas partes decisivas a la hora de generar la crisis del régimen oligárquico. En principio, en Brasil, donde se sumaron además otros dos factores –más allá de los efectos del *crack* económico de 1929– que incidieron en dicha declinación. El primero fue el emerger a la luz de un nuevo estado, Río Grande do Sul, que horadó la consuetudinaria alternancia en el poder entre las elites de San Pablo y Minas Gerais. Del nuevo estado provenía Getúlio Vargas, el hombre que, derrotado en las elecciones de 1930, denunció la irregularidad y fue luego llevado al poder por los militares, para permanecer allí por largo tiempo. Pero el segundo factor, aún más importante, fueron los militares, especialmente los denominados *tenentes*, jóvenes oficiales de grado intermedio, que ya en los años veinte habían protagonizado varias revueltas, y que ahora encarnaban más que otros el nuevo clima nacionalista, imponiendo la creación de un estado centralizado y decidido a organizar bajo su ala a la población, mientras que la elite había creado un estado disperso en numerosas autonomías, privado de ascendencia popular. Ese fue el sentido del golpe de 1930.

La inestabilidad política sacudió en otras ocasiones los fundamentos del continente. Desde Perú, donde en 1930 cayó la larga dictadura de Augusto Leguía, a Chile, donde en el medio de una etapa de conflictos y convulsiones se impuso la breve dictadura del general Carlos Ibáñez; desde El Salvador, donde en 1931 un golpe blindó el dominio de la oligarquía del café, cuestionada en primer término por los movimientos campesinos, a Venezuela, donde a fines de los años veinte comenzaron a manifestarse los primeros signos de intolerancia hacia la larga autocracia de Juan Vicente Gómez. Los casos son numerosos, aunque peculiares; en general los militares fueron los protagonistas, derrocando o poniendo bajo su tutela las instituciones liberales surgidas durante los regímenes oligárquicos y todo cuanto parecía demasiado frágil para soportar el choque de la modernidad, en especial en aquellas sociedades atravesadas por la fragmentación social, en las cuales los militares parecían la expresión política de una elite blanca (y de su cultura). No obstante, es preciso aclarar que la intervención de los militares no tuvo siempre un solo sentido, es decir, a favor de una clase social específica, sino que fue variando en los diversos contextos.

La edad del intervencionismo norteamericano y el ascenso del nacionalismo

Las intervenciones militares de los Estados Unidos en el área centroamericana y caribeña tuvieron lugar en los primeros treinta años del siglo XX. Aunque en algunos casos fueron breves, en otros duraron varios lustros, como por ejemplo en Nicaragua o en Haití, donde tenían el objetivo de poner fin a las guerras civiles imponiendo un hombre o un partido fiel a Washington, o de proteger a los ciudadanos y las propiedades estadounidenses amenazadas por el desorden local. Se trataba de grandes multinacionales que incrementaban desmesuradamente sus intereses en la extracción minera o en los primeros pasos de la industria petrolífera, o bien en el campo de la producción de bienes típicos de la agricultura subtropical, ámbito en el que descolló la United Fruit Company.



Tienda de víveres de la United Fruit Company.

En otros casos, en especial durante la presidencia de Woodrow Wilson, las intervenciones militares estadounidenses tuvieron mayores ambiciones políticas y expresaron un claro intento paternalista y pedagógico, con el objetivo de sentar las bases institucionales de estados y administraciones más sólidas y eficaces. En todos los casos, sin embargo, la polí-

tica estadounidense en la región fue la puesta en escena de la doctrina del destino manifiesto y comportó no sólo la intervención militar, sino también una profunda expansión comercial, el propósito de minar los intereses europeos en el área, y el esfuerzo por difundir valores de la civilización norteamericana, en general, sin éxito.

El intervencionismo y el sentimiento de superioridad contribuyeron desde entonces a alimentar el nacionalismo que ya había comenzado a crecer en los jóvenes estados de América Latina. El nacionalismo latinoamericano encontró a su enemigo –en contraposición al cual buscaba construir su identidad y su misión– en los Estados Unidos, en su injerencia política, y en las bases mismas de la civilización que aspiraba a exportar. Típico en ese sentido –acaso por su aura mítica– fue el caso del pequeño ejército guiado en Nicaragua contra los *marines* por Augusto César Sandino, una suerte de David nacionalista en lucha contra el Goliat imperialista, asesinado en 1934 por la Guardia Nacional establecida por los Estados Unidos durante la ocupación. Un Goliat del cual el nacionalismo latinoamericano llegó a rechazar tanto el expansionismo como el liberalismo, el capitalismo, la democracia representativa, sumados a tantos otros rasgos de la civilización protestante, individualista y materialista típica de los países anglosajones, contrapuesta a la católica, basada en el comunitarismo y la democracia orgánica.

La Guerra del Chaco

A partir de los años veinte, el establecimiento de estados-nación sobre fronteras a menudo inciertas (lo cual, ya en la segunda mitad del siglo XIX, había sido causa de guerras entre vecinos) y la fragilidad de algunos gobiernos dispuestos a usar el argumento nacionalista para sostener su falta de legitimidad tuvieron un rol clave en las crecientes tensiones entre Bolivia y Paraguay, únicos dos estados privados de salida al mar, perdedores, además, de los conflictos bélicos del siglo XIX. Si bien suele postularse que la guerra tuvo su origen en la competencia entre dos grandes empresas petroleras extranjeras por un territorio cuestionado en los límites entre ambos países, lo cierto es que predominaron otros motivos. En especial, pesó la frustración boliviana por la derrota en la negociación de su salida al Pacífico, que indujo al gobierno a buscar abrir una brecha hacia el Atlántico a través del sistema fluvial del débil Paraguay; a ello coadyuvó el clima nacionalista, que aumentó como nunca en ese período. La guerra culminó en 1935, con la firma del armisticio en

Buenos Aires, lo cual le granjeó al ministro de Relaciones Exteriores argentino el premio Nobel de la Paz, al Paraguay el reconocimiento de la soberanía sobre el territorio en disputa, y a Bolivia una nueva humillación, causa de crisis inminentes. Sobre el terreno, entretanto, yacían los cuerpos de unas cien mil víctimas.

6. Corporativismo y sociedad de masas

La Gran Depresión de los años treinta del siglo XX acentuó la crisis del liberalismo en América Latina así como también contribuyó a hacer descarrilar la ya delicada transición hacia la democracia política en la mayoría de los países. Sin embargo, y al igual que en gran parte de la Europa latina, el pasaje a la sociedad de masas se produjo a través de instituciones e ideologías antiliberales y en muchos casos abiertamente autoritarias. Comenzó entonces una nueva primavera de las concepciones sociales y las prácticas políticas corporativas, de las cuales fue consecuencia el renovado protagonismo político de las fuerzas armadas y de la iglesia católica. La larga noche en la cual entraron la civilización burguesa y la democracia representativa tuvo por correlato la difusión de las grandes ideologías totalitarias del siglo XX, es decir, el fascismo y el comunismo, en las que se inspiraron numerosas corrientes sociales y fuerzas políticas. Nacionalismo político y dirigismo económico fueron rasgos distintivos de la nueva etapa.

La declinación del modelo exportador de materias primas

La caída de la Bolsa de Wall Street en octubre de 1929 reveló cuán interdependiente se había tornado el mundo y el alto precio a pagar por ello; también fue así para América Latina, escenario que rápidamente sufrió un vuelco. Para comprender sus efectos, es conveniente distinguir los visibles e inmediatos de los de más largo aliento, que incidirían más tarde en el modelo de desarrollo de la región.

En cuanto a los efectos inmediatos, fueron pesarosos y tanto más graves cuanto mayor era la exposición al mercado internacional. En general, se manifestaron a través de la repentina caída del precio de las materias primas exportables, la cual, junto con la contracción de los

mercados afectados por la crisis y el agotamiento del flujo de capitales extranjeros hacia la región, provocó en toda América Latina una reducción drástica de los ingresos y del valor de las exportaciones, que alcanzó aproximadamente el 36% en apenas tres años, aunque en los países más nuevos superó directamente el 50%, con diferencias notables entre uno y otro, dado que no todas las materias primas se vieron afectadas en igual grado por la tendencia negativa. Todo esto causó efectos en cadena, tanto en el plano económico como en el social y político.

Por un lado, la caída de los ingresos hasta ese momento garantizados por las exportaciones golpeó la economía local, con sus consecuencias en términos de aumento de la desocupación, agitación social e inestabilidad política. Por otro lado, los presupuestos públicos se vieron reducidos de un día para el otro allí donde la exacción fiscal sobre el comercio internacional componía la mayor parte del ingreso. Esto condujo a que los gobiernos se vieran obligados a recortar el gasto y a disminuir la inversión pública para mantenerse a flote en medio de la tormenta. Sin embargo, en general no lo consiguieron, puesto que el resultado político fue en muchos casos la caída, *manu militari* mediante, del gobierno constitucional. No obstante, hay que añadir que estos efectos no fueron duraderos y que el conjunto de la economía de la región se recuperó con bastante rapidez desde mediados de los años treinta.

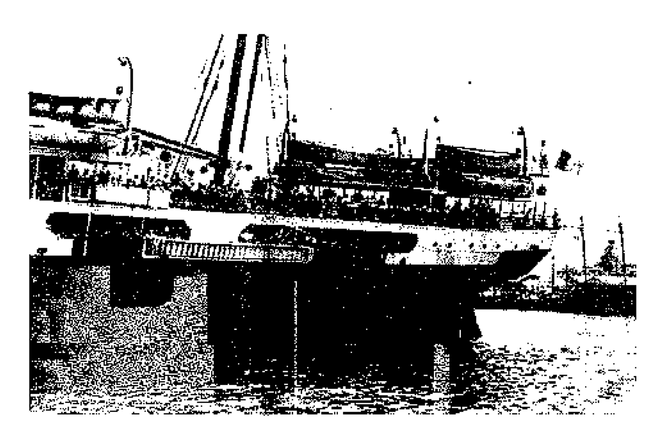
Distinta, en cambio, es la cuestión del modelo de desarrollo. La crisis de 1929 asestó un golpe letal al modelo exportador de materias primas y creó las condiciones para su descarte. Ya fuera porque los cambios en la economía internacional contribuyeron a enterrarlo –dado que las potencias más grandes crearon mercados protegidos por barreras aduaneras–, o porque muchos gobiernos del área, con ritmos y tiempos diversos, reaccionaron a aquella dramática prueba de vulnerabilidad orientándose hacia el nacionalismo económico y abandonando a sus espaldas el liberalismo de tiempos pasados, ahora presentado como emblema del dominio de los intereses oligárquicos. A menudo se recurrió a medidas proteccionistas y, en América Latina, creció la intervención económica del estado. Del mismo modo, en la formación de la riqueza se tendió a reducir el peso del comercio e incrementar el de la industria. Al principio con lentitud, y con mayor rapidez durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el nuevo colapso del comercio interoceánico dio impulso a la producción local, al menos en los países más avanzados, donde mayor era el mercado interno y la disponibilidad de capital. No hay que olvidar, sin embargo, que aquella incipiente industrialización

era, en su mayoría, sustitutiva de las importaciones y estaba orientada a la fabricación local de bienes de amplio consumo, cuya producción no requería moderna tecnología ni capitales ingentes: alimentos, ropa, calzado, etcétera. Claro que su aporte no era muy extendido, por cuanto contribuía casi en todas partes en menos del 20% al producto bruto interno, ni eliminaba el peso estratégico de las materias primas, de cuya exportación la economía local dependía en gran medida.

Hacia la sociedad de masas

Así como cambiaron el perfil económico de América Latina, la Gran Depresión y la guerra mundial modificaron también lo social, a veces imponiendo bruscos giros. Ese fue el caso de la inmigración, que, tras haber trastocado durante décadas el panorama demográfico de buena parte del continente, se empantanó en los bancos de arena de la crisis. De un modo u otro, los principales países que acogían inmigración le impusieron severas restricciones, con lo cual en los años treinta su flujo prácticamente se detuvo. Ello no impidió, no obstante, que con el estallido de la Guerra Civil en España un gran número de refugiados republicanos –a menudo artistas e intelectuales– buscara asilo en América Latina, en especial en México. Tampoco fue obstáculo para que la población continuase creciendo a un ritmo sostenido, casi en un 2% en los años treinta y aun más en el decenio siguiente, debido a la elevada tasa de natalidad y a la significativa reducción de la tasa de mortalidad registrada en muchos países, en particular en el Cono Sur y en México, donde se hicieron importantes intervenciones para la mejora de las condiciones sanitarias en las ciudades y para erradicar ciertas enfermedades endémicas, como el cólera, que de hecho dejó de ser una epidemia recurrente.

En este marco, es preciso mencionar también la inmigración interna, es decir, la masa de población rural que, empujada por el crecimiento demográfico y la concentración de la tierra, abandonó la campaña para radicarse en la ciudad, donde, no obstante, era difícil hallar sustento, dadas las dimensiones limitadas de la naciente industria. Los principales centros urbanos, levantados en general en pocos años, no fueron capaces de hacer frente a la novedad ni de proveer los servicios necesarios, de modo que a su alrededor crecieron cada vez más vastas y numerosas aglomeraciones de ranchos y casuchas de chapa y cartón, a las que cada país les dio un nombre diverso: *favelas*, villas miseria, callampas, etcétera.



El 13 de junio de 1939 llega a Veracruz el primer contingente de exiliados españoles, a bordo del vapor Sinaia.

Este último fenómeno, parte de una urbanización a menudo caótica, se insertaba en las transformaciones en curso debido a la modernización económica iniciada bajo los regímenes oligárquicos. Lo que cambió fue el ritmo, antes que la sustancia, así como los tiempos de un país a otro, vistas las brechas netas existentes entre la Argentina, Chile y Uruguay, por un lado –donde la población urbana superaba el 30%–, y países como México, Perú, Brasil y Colombia, en los que la gran urbanización se produciría después, y donde los habitantes de las ciudades no alcanzaban aún el 15%. Estos datos impactan a su vez en otros indicadores sociales, como por ejemplo la tasa de alfabetización, más elevada entre la población urbana y por lo tanto en los primeros países antes que en los segundos, rurales, donde el analfabetismo era mayoritario.

En síntesis, en la mayor parte de los casos, el grueso de la población continuaba viviendo en el campo, del cual dependía aún en gran medida la actividad productiva. En este contexto, se comprende que el propio ámbito rural fuese el menos interesado en la modernización, pese a que la revolución mexicana y la reforma agraria habían puesto en el centro de atención el problema de la tierra y su pésima distribución. El hecho es que, si por un lado la economía basada en la exportación había favorecido grandes concentraciones de tierras, en su mayoría usufructuadas por monocultivos para el mercado mundial, por otro lado gran parte del ámbito agrícola presentaba un perfil por demás arcaico, en el cual dominaba el autoconsumo y se extendía la miseria, donde el mercado interno permanecía raquítico y la mayoría de la población

carecía de tierra o esta le resultaba insuficiente, donde los contratos de arrendamiento eran a menudo formas legales de servidumbre... Dados los rasgos que asumió la urbanización y las tensiones que atravesaban el mundo agrícola, no sorprende que tanto en el campo como en la ciudad se crearan las condiciones para la explosión de revueltas y conflictos, espontáneos u organizados, ni que ello diera mayor sustancia a las señales lanzadas por las huelgas de 1919, confirmando que el moderno conflicto de clases había desembarcado en América Latina, cuya sociedad comenzaba a presentar los contornos típicos de la sociedad de masas.

En una sociedad en la cual las jerarquías sociales tradicionales estaban a punto de estallar (desde los movimientos campesinos promovidos por el APRA en Perú hasta aquellos ahogados en sangre en El Salvador; desde los de México al grito de "Viva Cristo Rey", a las primeras ligas campesinas brasileñas), el campo sería cada vez más un territorio de enfrentamientos. Si esto sucedía en las zonas rurales, donde imperaba el atraso, con mucha mayor razón sucedería en las ciudades: allí crecían los adherentes a sindicatos de obreros y empleados, que intensificaron las movilizaciones para obtener la jornada laboral de ocho horas junto a un sistema de previsión social para casos de accidente o enfermedad, para lo cual confrontaban con una patronal poco propensa a la negociación (y viceversa), que intentaba atribuir la responsabilidad de los conflictos a la perniciosa influencia de agentes externos. Con ello, culminó la abdicación del liberalismo cultivado otrora por las viejas clases dirigentes, ahora abocadas, mayoritariamente, a abrazar el reaseguro del nacionalismo.

A partir de entonces, comenzaron a prefigurarse las corrientes sindicales que en el futuro se disputarían el espacio en frentes opuestos o en el seno de una misma confederación. Se destacaban los sindicatos clasistas, donde socialistas y comunistas minaron el declinante anarquismo y hacia 1938 convirtieron la Confederación de Trabajadores de América Latina, un organismo colateral, en un frente antifascista, encabezado por la figura carismática del mexicano Vicente Lombardo Toledano. A estos se sumaban los sindicatos católicos, no siempre con capacidad de penetrar a fondo en el mundo obrero, pero de todas formas influyentes por su capacidad para atraer consensos en torno a la invocación de la doctrina social del Papa, es decir, de una tercera vía entre comunismo y capitalismo. Por último, se destacaban los precoces esfuerzos llevados a cabo por los sindicatos estadounidenses para difundir el panamericanismo entre los trabajadores de América Latina, en pugna con las ideologías clasistas.



Vicente Lombardo Toledano, secretario general de la Confederación de Trabajadores Mexicanos y organizador y presidente de la Confederación de Trabajadores de América Latina, según un grabado de Alberto Beltrán.

La noche de la democracia

Al igual que en Europa, donde en los años treinta y más tarde, durante la guerra, la democracia representativa capituló en buena parte de los países, en América, donde apenas daba los primeros pasos, ocurrió algo similar. Sin embargo, aquí no sólo capituló, sino que se configuró, más que nunca, como un ideal sin encanto ni credibilidad, obsoleto y anacrónico, incapaz de representar la nueva realidad social. En el clima de época, signado por el advenimiento de las masas a la vida política y la difusión del moderno conflicto social, prevalecieron ideologías y modelos políticos contrarios o indiferentes a la democracia liberal y a las instituciones del estado de derecho, las cuales parecían meras ficciones inventadas por la burguesía para engañar al pueblo –como era el caso para las corrientes revolucionarias inspiradas en la revolución bolchevique y en el régimen soviético– o, en su defecto, artificiosas divisiones en el organismo cohesionado de la nación, introducidas por una clase dirigente sometida bajo diversas formas, como en el caso de los nacionalismos atraídos por el fascismo europeo.

El hecho es que el encuentro entre las masas y la democracia política comenzó a hacerse añicos a fines de los años treinta. Si por un lado el empuje hacia la democratización continuó y se intensificó, por otro encontró menos cauce en las instituciones representativas, a las que, por lo demás, raramente apeló. Además, si ya se había revelado dificultosa la integración política de los nuevos estratos medios –casi siempre blancos y alfabetizados, y socialmente moderados–, es fácil imaginar la enorme presión que gravitó sobre aquellas instituciones cuando la protesta comenzó a emerger de los sectores populares, a menudo indígenas o negros, a veces analfabetos, y en ocasiones impregnados de ideologías radicales o revolucionarias.

Diversos factores históricos pesaron entonces sobre el destino de la democracia. En primer lugar, las abismales desigualdades sociales, que eran fruto tanto de los ingresos económicos como de la etnia y la historia. Dicha desigualdad condujo a que las elites estuvieran mal predispuestas o temerosas de cuanto en general fuera a abrir las puertas de la representación política. En segundo lugar, la desigualdad era de tal naturaleza que volvía a la democracia liberal extraña y hostil a los ojos de los sectores étnicos y sociales que presionaban por su inclusión, los cuales se mostraron propensos a sostener una idea distinta y más arcaica de democracia: una orgánica, invocada por los líderes populistas, intolerante hacia las mediaciones y las instituciones de la democracia representativa y abocada a unir al pueblo contra sus supuestos enemigos, internos y externos. En tercer lugar, ni siquiera la tradición jugó a favor de la democracia política, ya que esta no había alcanzado a echar raíces en los diversos estratos sociales en que los modernos conflictos se parecían un poco a todas las patologías de un organismo social que, por historia y cultura, tendía a concebirse fisiológicamente unido. La carencia de una cultura del conflicto (natural a la sociedad moderna) y de que para gobernarlo se requieren instituciones fuertes y democráticas pesó más que cualquier otro factor sobre el resultado de las numerosas crisis políticas de la época.

De hecho, los casos en los que las instituciones de la democracia liberal resistieron las presiones y sobrevivieron a este delicado pasaje se cuentan con los dedos de una mano, e incluso entonces, como demostraron Chile, Uruguay y Costa Rica, estaban lejos de quedar exentos de peligrosos problemas. En los otros, la embestida democrática fue detenida por bruscas reacciones autoritarias, como en Perú, Bolivia y Nicaragua, entre otros, al precio de hacerla más difícil y traumática en el futuro; o bien fue absorbida en el seno de los regímenes populistas,

como en México, Brasil y la Argentina, los cuales respondieron a la creciente demanda de democracia apelando a la parafernalia nacionalista. Con ello, volvían la espalda al liberalismo caro a las viejas clases dirigentes y se esforzaban por adaptar a la sociedad moderna el antiguo ideal orgánico y corporativo, sobre la base del cual dichos regímenes organizaron a las masas y las incluyeron en los nuevos órdenes sociales, aunque al precio de una fuerte intolerancia al pluralismo.

Los militares: cómo y por qué

En la mayor parte de los países, la crisis de los regímenes liberales condujo a las fuerzas armadas al escenario político, ya sea a través de golpes de estado –como en la Argentina, Brasil y Perú– o bien en funciones políticas, tal como ocurrió en Venezuela, sobre la que se cernió la larga dictadura de Juan Vicente Gómez. ¿Quiénes eran esos militares que tan a menudo tomaban posesión del poder y por qué lo hacían? No es fácil encontrar respuestas unívocas que sean válidas tanto para la pequeña y poco desarrollada república de El Salvador como para la grande y avanzada Argentina. Sin embargo, existen algunos elementos generales a considerar.



Juan Vicente Gómez, dictador de Venezuela, en sus últimos años. *Rostros y personajes de Venezuela*, El Nacional, 2002.

En primer lugar, es preciso tener en cuenta que los militares ya habían estado en el poder en el pasado, pero si por entonces habían gobernado como civiles, ahora reivindicaban su estatus militar y pertenencia a las fuerzas armadas. Lejos de ser simples caudillos de uniforme, ahora eran miembros de instituciones profesionales organizadas y relativamente disciplinadas. De hecho, en muchos casos conformaban las instituciones más modernas y eficientes del estado, como en el caso de la Guardia Nacional organizada por las fuerzas armadas de los Estados Unidos en el área centroamericana, o como los ejércitos profesionales creados por las misiones militares europeas en Sudamérica. De las diversas condiciones estructurales de cada país antes que de la naturaleza de los militares que tomaron el poder dependió que más tarde en América Central y en el Caribe nacieran regímenes personalistas, como ocurrió con Somoza en Nicaragua y con Trujillo en República Dominicana, y que en Sudamérica se consolidaran regímenes autoritarios propensos a la modernización, como en Brasil con el Estado Novo y en la Argentina con el golpe de 1943.



Anastasio Somoza García, 1948.

Sin embargo, la pregunta que persiste es por qué fueron precisamente los militares quienes ocuparon esos roles. Tampoco en este caso la respuesta es unívoca. En general, en países que eran presa de profundos conflictos, las fuerzas armadas subrogaron con la potencia de las armas la debilidad de las instituciones representativas. A ello se añade que, allí donde las divisiones sociales y étnicas eran demasiado profundas

para resolverse en el marco de una democracia liberal, las instituciones militares –que en muchos países sometían a jóvenes de todas las clases y regiones a la conscripción obligatoria– se erguían como órganos democráticos. En definitiva, mientras los gobiernos constitucionales intentaban ampliar las bases de su consenso incluyendo nuevas clases y los sistemas políticos se hallaban, en su mayoría, sujetos a violentas convulsiones, las fuerzas armadas parecían elevarse por encima de la contienda: sólidas por su espíritu de cuerpo y a menudo dotadas de competencia técnica en varios campos, comenzaron a sentirse en el deber y el derecho de tomar las riendas del gobierno y guiar la modernización nacional, arrebatándoles el lugar a las elites políticas, a las que concebían como poco fiables e incapaces.

Todos esos factores sirven para comprender las razones de la era militar que comenzó entonces en gran parte del área. A ello es preciso sumar una consideración más, en la cual acaso resida el motivo más íntimo de aquel militarismo endémico. A juzgar por lo diverso y múltiple de las intervenciones políticas de las fuerzas armadas –en cada país y a veces en reiteradas ocasiones–, parece evidente que estas no se debieron a meros factores contingentes, ni a sus vínculos con las elites, ni a que los oficiales provinieran de los sectores medios; tampoco que siempre se hayan llevado a cabo contra "el pueblo". En realidad, en estas sociedades hendidas por profundas fracturas, los militares reivindicaban para sí una función tutelar sobre la nación entera. Sus intervenciones pretendían imponer o restaurar la unidad allí donde las instituciones democráticas y los pactos constitucionales fallaban: la unidad política, entendida como armonía entre sectores o clases, y la unidad espiritual, entendida como adhesión a la identidad eterna de la nación, de la cual las fuerzas armadas se proclamaban depositarias, al punto de convertirse en el mayor foco de nacionalismo.

Mientras estuvieron abocados a la misión de velar por la unidad de la nación (cuya división adjudicaban al liberalismo), los militares fueron el más potente vehículo de la reacción organicista, expresada en la denominada "democracia funcional", en la cual la representación no se manifestaba a través de los partidos y las mediaciones políticas, sino directamente a través de los cuerpos sociales: los sindicatos, los colegios profesionales, la universidad, la iglesia, etcétera. Se trataba, en verdad, de un rasgo clásico del nacionalismo latinoamericano, que, buscando las raíces de la identidad local en respuesta al cosmopolitismo de una época, las halló en el antiguo y todavía bien arraigado imaginario organicista. No sorprende entonces que lo encarnaran las fuerzas armadas,

institución orgánica por excelencia; tampoco que entendieran de ese modo su misión, fuera su intervención conservadora o reformista, es decir, dirigida a conservar el orden y la unidad ante las amenazas, o a promover el desarrollo y la integración de las masas para devolver la armonía al organismo social.

El renacimiento católico

La reacción antiliberal sería incomprensible en su esencia más íntima si se obviara el resurgimiento del catolicismo, que comenzó a producirse en América Latina desde los años treinta. Aunque, por supuesto, no en todas partes con la misma intensidad ni velocidad, ya que la iglesia presentaba diversas improntas en cada región y el catolicismo estaba radicado de manera desigual en cada nación. Tampoco era análogo su estatus jurídico ni su fuerza política. Por ejemplo, existe una gran diferencia entre México, donde la iglesia había capitulado tras largos y feroces enfrentamientos con los liberales, antes de ser reducida a la marginalidad por la revolución, y Chile, donde la separación entre la iglesia y el estado se había llevado a cabo en forma incruenta. Lo mismo ocurrió entre el Uruguay laico y la Colombia clerical, o bien entre el quieto y tradicionalista catolicismo peruano y el inquieto y radical de la Argentina. No obstante, lo cierto es que el renacimiento católico contribuyó en todas partes al ocaso de la edad liberal. Esto fue así tanto en Brasil y en la Argentina, o en Perú y Ecuador, donde los viejos enfrentamientos con los liberales sólo la habían relegado a un segundo plano, como también donde tuvo éxito (por ejemplo en México), donde finalmente logró convivir con el régimen revolucionario. (De hecho, en este país incluso un intelectual de punta de la revolución como José Vasconcelos se convirtió al catolicismo y se transformó en su prestigioso portavoz.) Algo semejante ocurrió en Colombia, donde el dominio liberal de los años treinta alimentó la impetuosa reacción católica del decenio siguiente. Por otra parte, ¿quién más que la iglesia católica encarnaba el ideal de una sociedad orgánica? ¿Quién mejor que ella para erguirse en emblema creíble de la unidad política y espiritual, en guardiana de la identidad de la nación? Para comprender su resurgimiento en todas sus dimensiones es preciso considerar tanto los elementos institucionales como los doctrinarios, o, mejor dicho, ideológicos y culturales.

En el plano institucional, la iglesia latinoamericana alcanzó una incipiente madurez gracias en particular a los esfuerzos de la Santa Sede por centralizar su gobierno, vigilar la disciplina y dictar doctrina. Además, siguió

los pasos de la modernización general del continente, por lo cual crecieron las diócesis, se multiplicaron los seminarios, se retomaron las escuelas católicas, proliferaron la acción social católica, y los diarios, periódicos e incluso las radios ligadas a la iglesia. De ese modo, impuso un torbellino de actividad hasta conformar un verdadero mundo propiamente católico, una guía y jerarquía: la eclesiástica, encarnada a su vez en la Acción Católica, una organización de masas nacida en los años treinta, que crecería con mayor o menor suceso hasta convertirse en una fuerza de choque de la iglesia y su ideario. Se trató de una fuerza activa en la sociedad y en la educación, en el debate público y en las grandes disputas ideológicas, pero extraña u hostil a la política de los partidos y más bien propensa a simpatizar con los ideales corporativos de los movimientos nacionalistas, con los cuales en muchos casos estrechó íntimos contactos –desde la Argentina hasta Chile y desde Brasil hasta México–.

Pero si la iglesia y la corriente ideal que encarnó pesaron a tal punto en la acentuación de la crisis de los regímenes oligárquicos y del liberalismo, no fue tanto por la madurez institucional que alcanzó entonces. Mucho más importante fue, de hecho, el mundo ideal que evocó, en torno al cual tendían a reunirse cada vez más fuerzas sociales e intelectuales, desilusionadas por el desembarco de la modernización liberal, o desde siempre hostiles a ella. Dejada de lado durante decenios debido a la ofensiva liberal y luego revalorizada en su función de argamasa social por los regímenes oligárquicos, la iglesia comenzó a alimentar sueños de revancha, es decir, a aprovechar el ocaso de la fe liberal en el progreso para volver a ocupar el centro de la sociedad. No por casualidad fue aquella una época en la cual prevaleció entre católicos y eclesiásticos un vibrante clima revanchista que gestó la ilusión de restaurar un orden político y social íntegramente católico, alimentada por el florecimiento de nuevos y dinámicos cenáculos intelectuales católicos, a través de los cuales la iglesia católica –durante décadas, sinónimo de oscurantismo– irguió la cabeza, ofreciendo sus viejas recetas a los dilemas de la modernidad. Así, propuso recetas políticas, invocando un orden corporativo, y recetas sociales, reclamando la colaboración entre las clases sociales en sintonía con las encíclicas sociales del pontífice, especialmente la *Rerum Novarum* de León XIII y la *Quadragesimo Anno*, de Pío XI.

De esa forma, no menos que las fuerzas armadas –con las cuales la unían fuertes vínculos–, la iglesia se erigió en depositaria de la identidad de la nación amenazada por las fracturas políticas y sociales, y por las ideologías revolucionarias. Una identidad de por sí católica, hacia la cual ambicionaba converger y unir la nación. Buscaba hacerlo venciendo al liberalismo, con

sus corolarios políticos y económicos, a los cuales singularizaba en la democracia individualista y en el capitalismo desenfrenado; combatiendo al comunismo, en el que denunciaba la apoteosis materialista de la sociedad que había vuelto la espalda a Dios; afirmando el resurgimiento de una civilización católica, expresada en una sociedad armónica organizada en corporaciones y representada por una democracia orgánica. No es azaroso que los modelos políticos de ese catolicismo fueran los regímenes católicos, autoritarios y corporativos de Oliveira Salazar en Portugal y de Engelbert Dollfuss en Austria, el fascista de Benito Mussolini en Italia y, en especial, del general Francisco Franco en España.

Los populismos

La crisis del liberalismo y la ofensiva antiliberal se desplegaron en un número cada vez mayor de países, desde el Brasil y el México de los años treinta a la Argentina posterior a 1945, y tomaron la forma de fenómenos peculiares, denominados con la categoría de "populismos". Se trató de fenómenos universales, pero que en América Latina encontraron un terreno más que fértil, tanto que, si los primeros rasgos aparecieron en los años treinta, las sucesivas oleadas continuaron agitándose en la región hasta la actualidad. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de populismo?

En términos sociales y económicos, los populismos fueron regímenes fundados sobre amplias bases populares, a las cuales guiaron a la integración a través de políticas más o menos vastas de distribución de la riqueza. Dichas políticas fueron posibles debido al cambio de modelo económico impuesto por la crisis de 1929. La nueva centralidad conferida al estado y la necesidad de incentivar el crecimiento de la industria y ampliar el mercado interno crearon las condiciones para una peculiar aunque transitoria convergencia de intereses entre productores y trabajadores, unidos en la necesidad de incrementar el consumo y la producción, y erosionar el poder antes concentrado por los sectores económicos ligados a la economía de exportación. De esa forma, se creó una suerte de frente nacionalista en el que incidirían de manera extensa los populismos.

Si bien tal interpretación tiene su fundamento, no explica en su totalidad estos fenómenos políticos basados en un núcleo ideológico análogo, pese a su apariencia diversa. En cuanto a su naturaleza política, los populismos se caracterizaron por una concepción antiliberal de la

democracia, entendida en términos de organización de relaciones sociales. A tal punto que un régimen autoritario pero popular, abocado a la justicia social –como fueron en su mayoría con más o menos fortuna los populismos de la época–, era presentado como la verdadera democracia. Típica de los populismos fue la pretensión o la convicción de representar al pueblo en toda su complejidad. Un pueblo concebido como una comunidad cohesionada y homogénea, unida por una historia, una identidad y un destino comunes, al que se consideraba oprimido por enemigos que desde el exterior o desde el interior amenazaban su unidad, su intrínseca pureza e inocencia. Se identificaba como enemigos a la oligarquía liberal, el comunismo ateo o el imperialismo anglosajón. En ese sentido, los populismos se propusieron reunificar aquello supuestamente dividido por el liberalismo y la modernización: la sociedad, el pueblo, la nación como unidad orgánica. En los hechos, los populismos no solían erguirse en representantes de intereses específicos o ideologías particulares, sino que aparecían como movimientos y doctrinas nacionales, es decir, como la verdadera encarnación política de la identidad eterna de la nación, que resucitaba a través de ellos. Como tales, tendían a absorber el monopolio del poder político en nombre del pueblo y a negar legitimidad a sus adversarios, transformados en enemigos irreductibles.

Tales rasgos hicieron de los populismos fenómenos cargados de consecuencias tan importantes como permanentes, de las cuales está poblado el panorama histórico de América Latina. En primer lugar, interpretaron una reacción antiliberal que se reclamaba parte de la tradición organicista y corporativa, enraizada ya en la historia de la región. Una historia a la que se le había añadido y superpuesto la unidad política y la espiritual o ideológica. Postulando la unidad y homogeneidad del pueblo, el populismo también tendía a expresarse de modo unívoco, puesto que parecía natural que un pueblo cohesionado lo hiciese a través de una sola voz. No es casual que su jefe fuese un líder carismático, que desde el balcón dialoga con su pueblo en un ritual destinado a saltearse la mediación y las instituciones políticas como si fueran obstáculos molestos. Fortalecido en su misión histórica de devolverle al pueblo la soberanía y la identidad perdidas, el populismo también tendió a transformar la política en una guerra religiosa entre la virtud y el pecado, la verdad y el error, el pueblo y el antipueblo, en un juego de suma cero que a menudo suscitó destructivos conflictos de larga duración, con graves daños para las ya frágiles instituciones políticas de naciones en fase de consolidación. No sólo eso, sino que, animados

por la inspiración religiosa conferida a su misión de redimir y salvar al pueblo, los populismos tendieron a anteponer la fe a la razón, la voluntad a la racionalidad, la política a la economía, a menudo adoptando políticas sociales y económicas dispendiosas y exitosas en lo inmediato, pero insostenibles en el tiempo.

En síntesis, los populismos que surgieron de la crisis del liberalismo en América Latina contenían una intrínseca ambivalencia. Por un lado, fueron extensos y populares canales de integración y nacionalización de las masas antes excluidas o marginadas de la vida política y social. Se propugnó así una integración económica –a través del otorgamiento de beneficios efectivos– y moral, puesto que se les otorgó a estas masas la centralidad y se les reconoció la dignidad de la que habían estado privadas. Al hacerlo, recurrieron a una ideología y a prácticas políticas autoritarias, impermeables u hostiles al pluralismo, en nombre de la unidad política y doctrinaria del pueblo. Sancionaron de ese modo la muerte precoz de la democracia liberal en América Latina y celebraron el divorcio histórico entre ella y las masas, que en su mayoría hicieron su ingreso en la vida política a través de canales corporativos y en contextos autoritarios, como en los años treinta revelaron los casos del Brasil de Getúlio Vargas y del México de Lázaro Cárdenas.

Getúlio Vargas y el Estado Novo

Desde 1930 hasta 1945, la historia brasileña estuvo dominada por Getúlio Vargas, que la protagonizó hasta su suicidio en 1954. Hasta 1937, su gobierno fue constitucional, aunque en su origen estuvo el golpe de estado de 1930 y a sus espaldas, el apoyo del ejército. En estos primeros años, Vargas promovió la centralización política, lo cual condujo a violentos enfrentamientos con el estado más potente de la federación, San Pablo, celoso de su autonomía. Consolidado por el apoyo de los *tenentes*, cultivó un decidido nacionalismo económico, que se puso de manifiesto en el crecimiento del papel del estado en la promoción de la industria y en la protección del mercado interno. Así, nacionalismo y corporativismo encontraron expresión en la Constitución de 1934, a cuya redacción hicieron una decisiva contribución ciertos destacados juristas católicos. El espíritu que la guiaba era el de la colaboración entre las clases y la representación política de las corporaciones. Partidario convencido de un estado fuerte y unitario, encargado de tutelar la identidad nacional, enemigo de la democracia liberal e intolerante con el pluralismo, Vargas recurrió a la represión. Primero golpeó al Parti-

do Comunista, acaso el más organizado del país, que en 1935 quedó expuesto a la reacción al intentar la vía revolucionaria. Más tarde, fue confinado fuera de la ley junto al otro gran partido surgido por entonces, la Acción Integralista Brasilera, de clara inspiración fascista, con el que Vargas compartía sin embargo gran parte de sus ideales. Tras ello, sostenido por las fuerzas armadas y en sintonía con la iglesia católica, en 1937 impuso una dictadura a la que, inspirándose en la dictadura católica y corporativa fundada en Portugal por Oliveira Salazar, llamó "Estado Novo".



Getúlio Vargas, rodeado de sus seguidores, en el contexto de la revolución de 1930.

El Estado Novo fue lo más semejante al fascismo europeo que se haya creado en América Latina, habida cuenta de las peculiares características sociales y el limitado nivel de desarrollo de Brasil en aquella época. Vargas cerró el Parlamento, silenció a la oposición, censuró la prensa, recurrió sin reparos a la tortura y al encarcelamiento y, ante el estallido de la guerra, no ocultó su admiración por Hitler y Mussolini, fuertes en Brasil debido a los numerosos connacionales instalados allí. En coincidencia con su visión organicista de la sociedad y su firme condena del liberalismo, impuso al país la unidad política y espiritual. No escatimó esfuerzos para atraer hacia su ideología nacionalista a los sectores medios y populares, que en las grandes ciudades, donde crecían la indus-

tria y los servicios, constituían el centro de la escena política. Si por un lado echaba las bases de un sistema corporativo –el estado controlaba las organizaciones de los trabajadores–, por otro introducía leyes sociales y concedía ciertas ventajas a los obreros de la industria, acaso para prevenir la adhesión a los ideales revolucionarios, a los que juzgaba extraños a la identidad brasileña, o porque así lo requería su vaga ideología corporativa. De esa forma, comenzó a sembrar las raíces del mito de Vargas "padre del pueblo" y protector de los humildes, que tuvo su culminación en los años cincuenta.

La Segunda Guerra Mundial sancionó el ocaso del Estado Novo y la caída de Vargas, destituido por los militares en 1945. Sin embargo, ello no lo condenó a la declinación política. Muy pronto fue evidente que su dictadura no lo había vuelto impopular para el grueso de la población, en su mayoría ajena a los mecanismos de la democracia representativa, de la que, por otra parte, estaban excluidos los millones de analfabetos brasileños; antes bien, alimentó el mito de su acción social a favor del pueblo. Durante la guerra, debido a la presión del cuerpo de oficiales, Vargas había decidido colaborar con los Estados Unidos. Fue una elección racional sobre lo que más convenía a Brasil, dada su colocación geopolítica y la evolución de la contienda, por la cual renegó de la afinidad con las potencias del Eje y se alineó con los Aliados, a tal punto que envió a combatir a Europa una fuerza expedicionaria. Con ello, abrió el camino de una estrecha alianza con la mayor potencia mundial y hemisférica, se vio favorecido en la competencia con la Argentina, que, por el contrario, se atascó en la trinchera de la neutralidad, y se benefició en términos de ayuda militar y económica, gracias a lo cual Brasil pudo sentar las bases de su industria pesada. No obstante, la elección de alinearse con los Aliados, es decir, de luchar por la democracia contra el totalitarismo, colocó a Vargas ante una estridente contradicción, dado que puso en evidencia cuánto se asemejaba su régimen a aquellos contra los cuales había tomado las armas. Ello lo obligó a aflojar la cincha de la dictadura, a dar principio a una liberalización y a inspirar aquello que hasta ese momento se había negado a fundar: un partido político para participar en las tan demoradas elecciones.

Para ser precisos, se trató de dos partidos políticos, puesto que, en su ambición de encarnar la identidad de la nación misma y de reconducirla a la unidad orgánica, Vargas se propuso representarla en su totalidad. De allí nacieron el Partido Trabalhista Brasileiro, surgido para dar voz al alma obrera y urbana de sus seguidores, y el Partido Social Democrático, que de socialdemócrata tenía en realidad poco y nada,

puesto que reunía la base más moderada del Estado Novo y aspiraba a organizar el consenso de las elites políticas de los estados más atrasados del país, donde los trabajadores no tenían voz ni voto.

Aunque presentaba los rasgos típicos de los populismos latinoamericanos, el de Vargas en los años treinta exhibía evidentes peculiaridades. Surgido en plena noche de la democracia representativa, no se legitimó a través del rito electoral, como sucedería después de la guerra, sino que impuso una dictadura, algo habitual en aquella época. Se trató de una dictadura tan inspirada en el ideal corporativo que indujo a Vargas a no dotarla de un partido oficial, como habían hecho a veces las más modernas dictaduras europeas, sino a guiarla en primera persona, contando con el apoyo directo de las más potentes corporaciones, en especial de las fuerzas armadas y la iglesia católica, así como de los sindicatos y los organismos de los productores. En segundo lugar, en esta década distinguió al populismo de Vargas su perfil parcial, debido a las peculiares condiciones del país y a su intrínseca moderación. Parcial en el sentido de que, mientras el esfuerzo de integración social se concentró en las áreas urbanas y en los nuevos sectores sociales, no incidió mayormente sobre las condiciones de las grandes masas rurales, en gran parte todavía sujetas a relaciones de tipo tradicional. En ese sentido, su populismo fue limitado tanto social como territorialmente, y comportó una baja tasa de movilización política de masas. Una última característica a destacar fue la naturaleza de su liderazgo: lejos de ser el tipo de líder histriónico capaz de encender a las multitudes, Vargas fundaba su carisma en el misterio que solía rodear a su singular figura evanescente.

Lazaro Cárdenas y la herencia de la revolución mexicana

La revolución había conmovido las más profundas fibras de la sociedad mexicana a tal punto que continuaría vibrando con fuerza mucho tiempo después de su finalización. Antes de que se estabilizara su herencia y emergiese el régimen político que quedaría en pie por el resto del siglo, México atravesó numerosas convulsiones. En especial en los años veinte y a comienzos de los años treinta, durante el llamado "Maximato", época en la que imperó Plutarco Elías Calles, y que suele ser recordada por la violenta guerra cristera, que tuvo lugar entre 1926 y 1929. Fue una guerra campesina y religiosa desencadenada por la sublevación de la población rural del centro de México, guiada por el clero contra las duras medidas anticlericales tomadas por Calles. En tanto, la institucionalización de la revolución y la organización de las masas dentro del cauce

del régimen se hicieron realidad entre 1934 y 1940, durante el mandato presidencial de Lázaro Cárdenas. Se trataba de un hombre que Calles había escogido como su sucesor, pensando que podría controlarlo, pero que tomó distancia rápidamente. Sus medidas fueron cruciales en todos los ámbitos. En el campo social, dio extraordinario impulso a la reforma agraria, gozne del programa revolucionario y base imprescindible de la adhesión al nuevo orden de la mayoritaria población rural. La impulsó distribuyendo tierras en gran cantidad y promoviendo la gestión colectiva por medio del ejido, una práctica precolombina coherente con la reacción comunitaria que Cárdenas encarnaba.



Lázaro Cárdenas, impulsor de la reforma agraria, hacia 1930, antes de acceder a la presidencia de México. Memoria Política de México.

Destacable también, ya sea en refuerzo del vínculo entre el estado revolucionario y las masas trabajadoras, ya en la promoción del nacionalismo económico, fue la nacionalización del petróleo en 1938, al final de una larga temporada de agitación obrera que Cárdenas secundó favoreciendo la creación de la Confederación de Trabajadores Mexicanos. Una medida de la que nació la gran empresa petrolífera del estado, Petróleos Mexicanos, que, así como causó grandes tensiones con las compañías extranjeras y sus países de origen –Gran Bretaña y los Estados Unidos–, fortaleció el nacionalismo local.

Nacionalista más que socialista, hijo de una revolución que había combatido a la iglesia reivindicando la tradición liberal, hospitalario y generoso con los republicanos españoles que huían de la reacción franquista, Cárdenas desembocó también en un resultado corporativo basado en su concepción organicista de la sociedad. Es decir, antepuso a todo la unidad de la nación, moderando con tal fin, en la última parte de su gobierno, el ímpetu de la reforma, y escogió como sucesor a un líder católico moderado, con el objetivo de absorber los conflictos que sus medidas habían reforzado y equilibrar las relaciones entre los distintos sectores sociales y los diversos ánimos revolucionarios.

De su concepción corporativa, que compartía con los otros populismos, fue fiel reflejo el partido que fundó para institucionalizar el régimen nacido con la revolución: el Partido de la Revolución Mexicana. Un partido organizado en sectores, cada uno dedicado a representar una parte de la sociedad a la que aspiraba a abarcar en su complejidad (los campesinos, los trabajadores urbanos, los militares, entre otros), y en el cual estaba permitida la adhesión corporativa, es decir, a través de la pertenencia a sindicatos, cooperativas u otros organismos.

El orden que surgió de allí fue en sustancia un régimen semiautoritario con base de masas, durante largo tiempo estabilizado en su exitoso esfuerzo por reconducir a la unidad política e ideológica revolucionaria la compleja nación en que se había convertido México después de décadas de modernización y trastrocamientos políticos. Con base de masas puesto que el estado y el partido que lo encarnaba se mantuvieron desde entonces ligados, por un doble mandato, a las grandes organizaciones populares, tanto urbanas como rurales; autoritario porque funcionó en los hechos como una suerte de régimen de partido único, con una oposición restringida a legitimar con su presencia residual la hegemonía del partido de gobierno, que a partir de 1946 sería denominado, emblemáticamente, Partido Revolucionario Institucional.

La buena vecindad y la guerra

A comienzos de los años treinta, el arribo a la Casa Blanca de Franklin D. Roosevelt comportó importantes cambios en las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina. Comenzaba entonces la política que el presidente estadounidense llamó "de buena vecindad", con la cual se comprometió a desestimar el corolario de Theodore Roosevelt a la Doctrina Monroe, renunciando a las sistemáticas intervenciones militares

en defensa de los intereses políticos y económicos estadounidenses. La nueva política se fundó sobre dos pilares fundamentales: la no intervención, reclamada a viva voz por los países de América Latina, y el multilateralismo, entendido como la disposición a relacionarse con ellos sobre un plano de igualdad en el cuadro de las instituciones panamericanas.

Las razones de aquel viraje fueron numerosas y válidas. La primera y más evidente fue la que el propio Roosevelt había expresado con anterioridad: "Nos odian". Fue la conciencia, en otros términos, de que tres décadas de continuo recurrir a la fuerza habían alimentado en América Latina la planta del nacionalismo antinorteamericano y de que, por tanto, urgía cambiar de estrategia, como en efecto sucedió tras la renuncia de los Estados Unidos a la Enmienda Platt, que les daba derecho a intervenir en Cuba, y tras el retiro de las tropas asentadas en diversos países. Una segunda razón fue la constatación de que la política intervencionista del *big stick* [gran garrote] no había arrojado los resultados esperados y se había convertido en algo cada vez más costoso. A esto se sumaba la certeza de que las intervenciones no habían conseguido poner orden, y menos aún imponer la democracia, obligando a los Estados Unidos a injerencias cada vez más largas, costosas y frecuentes. A ello hay que añadir que la crisis de 1929, al empujar a las mayores potencias a estrategias proteccionistas para asegurarse mercados y fuentes de materias primas, indujo a los Estados Unidos a intensificar los esfuerzos para hacer de América Latina su propia esfera de influencia económica.

Esto ocurrió no sólo en las regiones más próximas a sus límites (donde de hecho ya era así), sino cada vez más en los grandes y populosos países de Sudamérica, en los que –y aquí reside la última razón importante de aquel cambio– la influencia europea, ya resquebrajada tras la Primera Guerra Mundial, sufrió un duro golpe por efecto de la Gran Depresión, que operó como un acelerador del distanciamiento de América Latina con respecto a sus raíces europeas. En suma, la debacle europea en el hemisferio americano le facilitó a Roosevelt la búsqueda la hegemonía, empleando la política antes que las armas, el diálogo antes que los actos imperiales. Vista así, la política de buena vecindad puede ser entendida como un nuevo modo de obtener los antiguos objetivos, aunque la forma, en este caso, dista de ser secundaria.

Ahora bien, la pregunta que se impone es cuáles fueron los efectos que produjo aquella política. Por un lado, no cabe duda de que mejoró el clima entre ambas partes del hemisferio y ayudó a echar las bases de una comunidad panamericana, de la cual se hicieron eco las numerosas asambleas que en los años treinta reunieron a todos los países america-

nos, y en las cuales fue una vez más reiterado el principio, tan caro a los latinoamericanos, de la no intervención en los asuntos extranjeros. El panamericanismo se afirmó además, a partir de allí, como la ideología a través de la cual los Estados Unidos aspiraban a atraer la parte latina de América hacia los valores de su propia civilización: la democracia política y el libre mercado, y a contrastar el portentoso crecimiento de las corrientes nacionalistas –que tendían en América Latina a seguir la sirena europea–, que por aquellos años cantaban loas al fascismo, en especial los católicos, cuya inspiración orgánica y corporativa cosechaba consensos en varios países americanos.

Sin embargo, si bien el clima mejoró y los intercambios económicos entre el norte y el sur del hemisferio se incrementaron, no todo fueron rosas para la política de Roosevelt, que encontró numerosos escollos. En principio, chocó con las tendencias proteccionistas y dirigistas impuestas en parte de América Latina tras la crisis de 1929, también en auge en los mismos Estados Unidos (al menos, en algunos aspectos), donde Roosevelt llevaba a cabo su *New Deal*. Claro que dichas tendencias constituían serios obstáculos para la difusión de la filosofía económica liberal estadounidense, así como para sus intereses económicos. Lo mismo era válido para la difusión del liberalismo, bajo ataque en toda la región, y de la democracia, que la Casa Blanca renunció, en los hechos, a difundir, al adherir a la política de no intervención. Con ello, se exponía a las duras críticas de varias fuerzas latinoamericanas, que la acusaban de sostener proficuos y amigables vínculos con las numerosas dictaduras que se afianzaron en el continente después de 1930. Una circunstancia que sin embargo no impidió a los Estados Unidos ejercer más que discretas presiones allí donde aún eran amenazados sus intereses, en zonas del hemisferio cada vez más vitales; por ejemplo, en Cuba, cuando en 1933 el advenimiento al poder de Ramón Grau San Martín parecía representar un peligro.

Los dilemas ínsitos en la política de buena vecindad se tornaron cada vez más ingentes a medida que una nueva guerra mundial se cernía, inminente, bajo el impulso del revisionismo hitleriano. La prioridad que hasta ese momento los Estados Unidos habían reservado a la economía debía ahora ser otorgada a la seguridad del hemisferio. En Washington, la doctrina de la no intervención comenzó a ser vista como un impedimento para la lucha contra la penetración de las potencias totalitarias en la región, en especial dado que en varios países de Sudamérica dichas doctrinas estaban haciendo pie con fuerza. En diciembre de 1941, la política estadounidense en América Latina sufrió importantes ajustes

cuando los Estados Unidos ingresaron en la guerra, luego del ataque japonés a Pearl Harbor. Su prioridad pasó a ser asegurar el apoyo político latinoamericano unánime a la causa de los Aliados, garantizar la provisión regular de materias primas estratégicas para la industria bélica, y obtener la colaboración contra las potencias del Eje. Los Estados Unidos consiguieron esos objetivos, incluso en México, donde la disputa por el petróleo finalmente se resolvió, y en el Brasil de Vargas, quien a pesar de sus simpatías ideológicas eligió, como se ha visto, el frente aliado, al punto de convertirse en el principal receptor de la ayuda militar estadounidense en la región.

No obstante, encontraron también fuertes obstáculos. En parte, en Chile, país que permaneció neutral durante más tiempo que otros, y en especial en la Argentina, por diversos motivos que hicieron de este país, de ahí en más, la principal espina en el flanco del panamericanismo: por sus ya antiguos y por entonces sólidos vínculos con Europa y por su dependencia del comercio con Gran Bretaña, que la indujeron a permanecer neutral para no poner en peligro sus vitales relaciones comerciales. A esto se sumaba que buena parte de su población estaba formada por inmigrantes de origen italiano y, por tanto, declararle la guerra al Eje, del cual Italia formaba parte, habría suscitado problemas políticos; además, la elite argentina se consideraba investida de liderazgo entre las naciones de América, lo que la llevaba a descartar con desdén el reconocimiento de la hegemonía estadounidense; en fin, porque el golpe de estado de junio de 1943 puso en el poder a un gobierno militar empapado de nacionalismo extremo, muy cercano al fascismo europeo y decidido a ser el portaestandarte de la civilización hispánica y católica, en contraposición a la protestante y anglosajona conducida por los Estados Unidos. En este contexto, la Argentina quedó sola en el reconocimiento de las potencias del Eje hasta enero de 1944 y fue la última en declararles la guerra en marzo de 1944, cuando los combates ya casi habían concluido.

7. La edad del populismo clásico

Además de cortar los antiguos y ya debilitados vínculos que habían unido a América Latina con Europa y establecer desde los albores de la Guerra Fría su pleno ingreso a la órbita estadounidense, la Segunda Guerra Mundial aceleró en toda la región los procesos de modernización en curso desde hacía ya varios decenios. De hecho, creció la industrialización, alentada por la amplia adopción de un modelo económico orientado a protegerla y a sustituir importaciones, y también se incrementó, a ritmo sostenido, la movilidad de la población en cada país, a menudo atraída por el desarrollo de la economía urbana y expulsada por la concentración de la tierra en el campo. La madurez de la sociedad de masas se expresó, en principio, en una oleada de democratización política y social. Sin embargo, en la mayor parte de los casos rompió de inmediato los marcos de la democracia representativa y encontró expresión en una creciente polarización política e ideológica. El ejemplo más típico lo constituyen los regímenes populistas, los cuales perseguían la integración social de los nuevos sectores y, en nombre de la unidad nacional, conculcaban la democracia política.

Entre democracia y dictadura

La Segunda Guerra Mundial apenas rozó América Latina, salvo en el caso de los soldados brasileños caídos en Europa y los pilotos mexicanos desplegados sobre el Pacífico. No obstante, y de manera inevitable, sus efectos se hicieron sentir con mayor profundidad que los de la Primera Guerra. Ya sea en forma inmediata, porque la victoria aliada favoreció una oleada de democratización sin precedentes, o con posterioridad, cuando el inicio de la Guerra Fría facilitó un ciclo de restauración.

En tanto, la oleada democrática que se extendió por la región en la segunda mitad de los años cuarenta no tenía precedentes en América Latina, y presentó manifestaciones diversas en los distintos países. En cuanto a las causas, tuvieron gran importancia las de orden económico y social. Durante la guerra, la urbanización e industrialización habían dado pasos gigantescos, al menos en su dimensión continental, creando los presupuestos de una intensa movilización social y una creciente demanda de participación política, en definitiva, de democracia. El contexto era favorable desde el momento en que la democracia había salido vencedora del enfrentamiento titánico con los totalitarismos y, por lo tanto, jugaba a su favor la indiscutida hegemonía sobre el continente con la que los Estados Unidos surgieron del conflicto.

Dicha hegemonía se manifestaba a través de la prensa, la radio y la industria cinematográfica, que solía cumplir un rol cada vez más importante en la difusión en América Latina de los valores del liberalismo estadounidense. La alianza de guerra entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, por su parte, y las alianzas derivadas de ella en numerosos países latinoamericanos –incluso en el seno de los gobiernos– entre partidos y movimientos comunistas y burgueses parecían haber disuelto uno de los nudos que en el pasado más había pesado sobre la democratización de la región. Tal es así que, por efecto de dichas alianzas, los partidos comunistas –activos en Brasil y en Chile, aunque de dimensiones reducidas– y sus sindicatos, más fuertes puesto que estaban concentrados en los sectores clave de la economía nacional, salieron de la clandestinidad a la que habían sido constreñidos y predicaron el antifascismo incluso más que la revolución. Se trataba de una consigna promovida con determinación también por los Estados Unidos, que de Bolivia a Brasil y de Paraguay a la Argentina no escatimaban medios para poner contra la pared a los regímenes que juzgaban versiones americanas del fascismo europeo.

Sin embargo, ¿cómo podían estas elites latinoamericanas volver la espalda a la democracia luego de haber tomado partido durante la guerra a favor de la potencia democrática por excelencia? Los resultados, de hecho, se hicieron sentir tanto en términos políticos como sociales. Baste decir que, aunque en 1944 los gobiernos con credenciales democráticas aceptables eran apenas cuatro –en Chile, Uruguay, Costa Rica y Colombia–, se multiplicaron en sólo un par de años, dejando prácticamente solas, obligadas a atemperar la represión, a las dictaduras de Nicaragua y República Dominicana. Incluso el régimen militar argentino

tuvo que liberalizarse y llamar a elecciones, de las que salió triunfante Juan Domingo Perón. Por su parte, el régimen mexicano pareció por un instante abrir una grieta en su coraza. En todas partes crecieron las manifestaciones democráticas de los estudiantes y empleados, de los intelectuales y de los trabajadores de cuello blanco en general. A menudo fueron, entre otros, los jóvenes oficiales de las fuerzas armadas quienes dieron el golpe definitivo a los regímenes elitistas y autoritarios que se habían quedado sin sustento, lo cual confirma que los militares tendían a actuar en función de lo que creían era el justo equilibrio entre las diferentes fuerzas sociales, en el seno de la comunidad nacional, de la cual se erigían en tutores. El hecho es que así fue como se vivió la primera experiencia democrática en algunos grandes países como Perú y Venezuela, e incluso en otros más pequeños y menos desarrollados, como El Salvador y Guatemala.

Lejos de ser sólo un fenómeno político, la democratización fue ante todo un gran movimiento social, que se expresó en la cada vez más frecuente agitación obrera por la obtención de mejoras salariales y en la introducción de modernas legislaciones sociales, así como en el crecimiento exponencial de los afiliados sindicales, capaces de actuar con mayor libertad en el nuevo contexto, alcanzando hacia 1946 casi los cuatro millones de personas. Sin embargo, pronto el clima cambió y aquella estación colmada de esperanza en la democratización de la vida política y social de América Latina se destiñó hasta transmutarse en una década de restauración autoritaria, que cubrió la mayor parte de los países del área en los años cincuenta, desde Perú y Venezuela –donde en 1948 las propias fuerzas armadas, de las cuales habían salido los oficiales reformistas pocos años antes, pusieron brusco fin a aquella breve experiencia–, a varias naciones de América Central, en las que, salvo en Costa Rica, la brisa democrática fue mermando hasta casi desaparecer. Desde la Argentina, donde Perón no tardó en manifestar sus rasgos dictatoriales, a México, donde el régimen nacido de la revolución selló las puertas de su monopolio político. También fue así en Chile y Brasil, que, en el afán de conservar sus regímenes democráticos, los blindaron adoptando duras medidas contra partidos y sindicatos comunistas. Por su parte, en Cuba, en 1952, Fulgencio Batista puso fin a un convulsionado decenio democrático; en Guatemala, en cambio, fueron los Estados Unidos quienes decretaron el fin de una experiencia que se les había tornado inquietante. En Washington, a medida que se imponía la Guerra Fría, la unidad antifascista fue poco a poco reemplazada por la unidad anticomunista.



Fulgencio Batista y Zaldívar, militar y presidente de Cuba en los períodos 1940-1944 y 1952-1959.

Por supuesto que la declinación de la democracia política no dejó indemnes a las organizaciones sindicales, sujetas a menudo a severas restricciones, legislativas o represivas, aunque en los países donde se insertaron regímenes populistas, como en la Argentina, México, Bolivia y Brasil, fueron en su mayoría unificadas bajo el ala del estado. Con ello, los trabajadores obtuvieron efectivos beneficios sociales, pese a que los sindicatos tendieron a transformarse en correas de transmisión de la política del gobierno antes que en representantes de los asalariados en los conflictos con las patronales. Además, varios se convirtieron en corpulentos aparatos de poder privados de democracia interna, dependientes de las corporaciones de mayor peso en el seno de los regímenes populistas.

La pregunta que se impone entonces es por qué fue tan breve la estación democrática y cuáles fueron sus consecuencias. Una de las causas más citada es la Guerra Fría, principal responsable del súbito cambio de clima político después de la guerra; no obstante, tal respuesta les atribuye demasiado peso a los factores sistémicos externos y desdeña las leyes endógenas, que parecen haber sido decisivas. En verdad, la confrontación política e ideológica entre las dos grandes potencias y sus sistemas económicos y sociales en muchos casos sirvió como legitimación de la reacción de fuerzas que en América Latina creían tener buenos motivos

para clausurar o imponerle serios límites a la incipiente democratización. Más allá de esto, resulta evidente que otros factores contribuyeron a la precoz crisis de gran parte de aquellas democracias. En primer lugar, la frágil cultura democrática de la región en todos los niveles de la escala social, donde la persistencia del imaginario organicista y la tendencia a ejercer el monopolio del poder fueron potentes obstáculos para la consolidación de regímenes políticos democráticos y pluralistas. En segundo lugar, las débiles instituciones representativas llamadas a metabolizar aquella demanda de participación, tan grande como repentina. En tercer lugar, la reacción social de los sectores medios y burgueses ante la marea creciente de radicalismo plebeyo, todo lo cual volvía la democratización bastante menos prometedora de lo imaginado, ya fuera porque solía estar teñida de violencia, corrupción e inestabilidad, o porque en muchos casos asumía la forma del populismo, el cual, como se ha visto, conjugaba la integración social con el autoritarismo político, y trocaba el pluralismo por la intolerancia, desencadenando así escaladas peligrosas y destructivas entre facciones contrapuestas.

Casi una década después del fin de la Segunda Guerra, la lista de los estados democráticos no era más larga ni muy distinta de la de diez años antes o diez años después. Junto a Chile, Uruguay y Costa Rica, que aún en medio de los obstáculos continuaban su marcha por las vías de la democracia representativa, gravitaban naciones encarriladas por otras vías. Sobre la efervescencia política de la posguerra cayó una pesada tapa de acero que, al saltar hecha añicos algunos años más tarde, dejó fluir una realidad aún más ingobernable. Una realidad que la democracia liberal y sus frágiles raíces en aquella sociedad y aquella cultura política no pudieron ni supieron absorber, a tal punto que dieron comienzo a la época de la revolución y la contrarrevolución.

La violencia en Colombia

Por diversos motivos, el caso más extremo en América Latina en la época fue el de Colombia, donde el desafío lanzado por el líder populista Jorge Eliécer Gaitán al orden político tradicional dominado por conservadores y liberales fue tronchado por su asesinato en abril de 1948. A este crimen siguió una enorme violencia –en la capital del país primero y en las zonas rurales durante la década siguiente–, donde los crónicos enfrentamientos entre guerrilleros de uno y otro partido causaron un gran número de víctimas –más de 200 000 según algunas estimaciones–. De aquella larga

etapa de violencia e inestabilidad, acompañada sin embargo por una rápida modernización social y económica, Colombia emergió en 1958, cuando los dos principales partidos buscaron la conciliación e institucionalizaron su reparto del poder. Así, el caso colombiano muestra la otra cara de la edad populista: la de lo que sucede cuando el populismo es bloqueado al nacer y cuando sus instancias de integración social quedan sin respuesta, en la medida en que los partidos tradicionales no quieren o no saben hacerse cargo. El resultado fue la conservación de la democracia representativa, aunque de bases sociales restringidas y sujetas a enormes presiones y embates, que desde entonces agitan la historia política de Colombia más que la de cualquier otro país del subcontinente.



Jorge Eliécer Gaitán. Casa Museo JEG.

La industrialización por sustitución de importaciones

Fue entonces, en especial en 1948, al asumir la dirección de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de las Naciones Unidas, que el economista argentino Raúl Prebisch sentó las bases teóricas del modelo ISI –basado en la industrialización por sustitución de impor-

taciones–, que en los años sesenta tomó el nombre de Teoría de la Dependencia. Según esta, la estructura del intercambio internacional era la causa de la desigualdad entre el centro y la periferia del sistema económico mundial y de la brecha que tendía a ampliarse cada vez más entre unos y otros. En su base se identificaba un constante y progresivo deterioro de los términos del intercambio en perjuicio de los países periféricos (y por ende de América Latina), por lo cual –sostenía Prebisch– se requerían cada vez más bienes exportados para adquirir de los países más avanzados una misma cantidad de bienes elaborados, a medida que las innovaciones tecnológicas incrementaban el valor, en su mayoría retenido en las economías del norte bajo la forma de ganancias y altos salarios. Sobre la validez de esa teoría se desataron ásperas polémicas entre economistas y entre historiadores. Lo que resulta indiscutible es que propuso una vía de desarrollo orientada hacia el ámbito interno, centrada en medidas proteccionistas, en el crecimiento del mercado local y la integración económica regional. Dichas medidas (a veces con mayor moderación, como quería su ideólogo, pero en otras ocasiones en términos más radicales, imbuidas de nacionalismo económico) inspiraron las políticas económicas de los gobiernos de la época.

Lo que con el tiempo se convirtió en el "modelo ISI", que reemplazó a aquel basado en la exportación de materias primas (definitivamente en crisis), en realidad ya había tomado su lugar de un modo espontáneo antes de que se lo conceptualizara como tal. Había sido estimulado por los límites del viejo esquema, puestos de manifiesto durante la Primera Guerra Mundial; también influyeron la crisis de 1929 y la Segunda Guerra. Finalmente, en los años cuarenta y cincuenta, se convirtió en hegemónico en gran parte de la región. Ello no implica que la industria se transformara en todas partes en el sector conductor de la economía, puesto que el modelo podía echar raíces en especial en los países que más habían crecido en el pasado y en los que hubiera capitales disponibles o con un mercado interno suficiente para alimentar la industrialización. Ejemplos de ello eran la Argentina, Brasil, Chile y México, en los cuales, a mediados de los años cincuenta, la industria contribuía al producto nacional en más de un 20%, proporción que duplicaba la de la mayor parte de los países andinos y más aún la de los de América Central. No obstante, esto no implica que la transición de un modelo económico basado en las exportaciones de materias primas a uno centrado en la producción de bienes para el mercado interno resolviese la crónica vulnerabilidad de las economías latinoamericanas. La industria sustitutiva se concentró en sectores de escaso valor agregado e inno-

vación tecnológica reducida, y fueron aún más escasos los pasos hacia adelante en los ámbitos clave de la industria pesada y de punta, donde, por ende, no disminuyó la dependencia respecto de las potencias económicas más avanzadas.

En ese sentido, las ayudas y estímulos económicos o tecnológicos provistos por los Estados Unidos durante la guerra para incentivar la producción de materias primas estratégicas con fines militares tuvieron una importancia considerable para la expansión de las industrias latinoamericanas. En ese contexto, en 1946 abrió sus puertas en Brasil Volta Redonda, la primera gran empresa siderúrgica de Sudamérica, que, además de contribuir a desarrollar la ocupación industrial, funcionó como base para el nacimiento de una industria pesada nacional, símbolo de orgullo y superioridad económica en contraposición a los países vecinos, en especial a la Argentina, que, por el contrario, pagó su neutralidad durante la guerra permaneciendo en gran parte exceptuada de las inversiones y la transferencia tecnológica estadounidenses durante la etapa peronista, que se prolongó hasta 1955.

En el decenio posterior a la Segunda Guerra Mundial, la economía creció en toda América Latina, aunque en algunos países como Brasil y México lo hizo a un ritmo más veloz que en otros, como Perú y la Argentina. Se desarrolló impulsada, en particular en los primeros años, por la elevada demanda mundial de bienes primarios latinoamericanos, que luego disminuiría a medida que varias economías se recuperaban de los desastres de la guerra, hasta que, hacia mediados de los años cincuenta, sobrevino un sustancial estancamiento. Sin embargo, el crecimiento no fue sostenido dado que, deducida la elevada tasa de crecimiento demográfico prevaleciente en la época, alcanzó apenas un 2% anual, ni tampoco fue equilibrado respecto de los distintos sectores productivos. Se acentuaron entonces ciertas distorsiones de fondo de la estructura económica regional, destinadas a alimentar las convulsiones sociales y políticas. De hecho, tanto se expandieron la industria y el sector minero como se desaceleró la agricultura, afectada en gran parte del continente por una pésima distribución de la tierra, concentrada en latifundios, y víctima de su escasa utilización, fruto de dicha concentración. Por esta razón no se allanó el camino a una revolución agrícola dirigida a mejorar la productividad de la campaña, ni fue posible absorber el crecimiento de la población, que tendió a derramarse, cada vez con mayor intensidad, hacia las grandes ciudades. Estas urbes adquirieron definitivamente los típicos rasgos de las grandes metrópolis y se convirtieron en escenarios de enormes contradicciones sociales.

En general, el motor del crecimiento económico en la posguerra fue la exportación de materias primas, a menudo agrícolas, que proveyeron los recursos que la mayor parte de los gobiernos emplearon luego para promover la industria de sustitución, protegida por elevadas barreras aduaneras y el consumo de los estratos urbanos. Esto fue así hasta que a fines de los años cincuenta dicha política comenzó a manifestar graves limitaciones, en especial cuando la exportación –por el atraso de la agricultura o porque los gobiernos tendían a presionar a los productores para favorecer a la población urbana– comenzó a estancarse y América Latina empezó a perder cada vez más su parte en el mercado mundial, lo que le impuso alternativas delicadas y dolorosas.

Un volcán siempre activo: las transformaciones sociales

Durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los cambios sociales asumieron un ritmo cada vez más frenético y se extendieron hacia áreas no alcanzadas hasta entonces. Comenzó una verdadera transformación que, en el lapso de casi dos décadas, le confirió a América Latina las connotaciones sociales que la caracterizan hasta hoy. Estas fueron de tal naturaleza que acentuaron muchos de los contrastes que tanto contribuyeron a los grandes conflictos y las enormes tensiones de los años sesenta y setenta.

El dato más sorprendente es el de la población, que creció a un ritmo sostenido en los años cuarenta (al parecer hasta un 2,3%), e incluso más en los años cincuenta, cuando la tasa de crecimiento llegó al 2,7%. En virtud de ello, los latinoamericanos, que eran cerca de 126 millones en 1940, pasaron a ser 159 millones diez años más tarde y 209 millones en 1960. A diferencia de lo sucedido en el pasado, ello no se debía tanto al empuje recibido por la oleada inmigratoria, la cual sí se disparó en la Argentina y sobre todo en Venezuela, país hacia el cual fue atraída por el *boom* de la industria petrolífera y que registró tasas récord de crecimiento demográfico (aunque no fue este el factor determinante). Así, mientras que los países del Cono Sur en los que mayor había sido la inmigración crecieron menos que el promedio, el verdadero incremento tuvo lugar donde el aumento poblacional había sido lento: México, América Central, Brasil y el área andina. Esto ocurrió debido a la brecha, cada vez más acentuada, entre las tasas de mortalidad, que tendieron a caer acercándose a veces

a la media europea, y las tasas de natalidad, que continuaron siendo muy elevadas, cercanas a las de los países en vías de desarrollo.

Las consecuencias de aquel crecimiento no tardaron en manifestarse, ya en forma virtuosa, dado que en promedio la esperanza de vida de la población creció, ya en forma peligrosa, desde el momento en que la campaña fue incapaz de absorber la enorme masa juvenil que pronto se volcó al mercado de trabajo. Claro que tampoco lo logró la ciudad, donde la industria no creció tan rápidamente como habría sido necesario. La urbanización, más rápida, extendida y masiva, fue la nota dominante de esa época. Durante su transcurso, se asistió a una verdadera carrera hacia la ciudad, de efectos profundos y duraderos, que configuró un cuadro general confuso, que presagiaba tensiones sociales cada vez más intensas. No sólo porque por lo general tendieron a crecer unas pocas ciudades por país, absorbiendo un porcentaje exorbitante de la población, pero sin ser realmente capaces de preparar a tiempo las obras de infraestructura, o las redes cloacales e hídricas, con el resultado consabido de que los barrios marginales se expandieron en forma desmesurada, sino también porque el abandono progresivo del campo era un signo evidente del problema en países que aún dependían en gran parte del fruto de sus productos.

La brecha entre ciudad y campo se profundizó y se puso de manifiesto en la disparidad abismal entre los indicadores sociales, en dos contextos: en los datos sobre la mortalidad infantil, la escolarización, el acceso al agua potable y demás, mucho mejores en los centros urbanos que en las zonas rurales, y dentro de las mismas ciudades, en las diferencias de zona a zona y de barrio a barrio, que se tornaban más aguzadas a medida que crecía la distancia entre ingresos, por un lado, y entre clases, etnias y culturas, por otro. Sólo una pequeña parte de la población urbanizada encontró trabajo en las fábricas, los talleres, o en sectores productivos; en cambio, la mayoría se quedó sin ingresos o acabó en el rubro de servicios. De hecho, la mayor parte de los servicios involucraba a los trabajadores humildes y poco productivos, en los cuales luchaba por sobrevivir la franja creciente de marginados, con ocupaciones de tiempo parcial y pago exiguo, ajenas al sistema previsional y mucho más parecidas al arte del rebusque que a verdaderos trabajos. Otros más afortunados ingresaron a la gran maquinaria clientelar del empleo público, utilizado a menudo como amortiguador social, poco o nada productivo y en general causa de crecientes abismos en las cuentas públicas.

Lejos de promover una mayor homogeneidad social, una de las más inmediatas consecuencias de la modernización, es decir, del crecimien-

to económico, la urbanización y la industrialización, fue traer a la superficie las antiguas y profundas segmentaciones de estas sociedades heterogéneas, en especial porque buena parte de la población urbana que se mantuvo en los márgenes de la ciudadanía social y del mercado de trabajo era indígena, afroamericana, mestiza y mulata. A esto se sumaban los problemas de seguridad e integración, criminalidad y mortalidad, que pronto indujeron a reacciones conservadoras y a reclamos de orden por parte de los otros sectores sociales, en particular de las clases medias, quienes más temieron los efectos de aquel repentino crecimiento de una sociedad de masas, fuera del control de la autoridad o incluso activada por los gobiernos populistas.

Entre nacionalismo y socialismo: el panorama ideológico

Comprender todos los aspectos del vasto universo de las ideologías y corrientes culturales y espirituales durante los quince años posteriores a la Segunda Guerra Mundial no es sencillo, en especial porque la volatilidad y movilidad de idearios e ideologías fueron por entonces más intensas en el marco de la efervescencia de la región, sacudida en los fundamentos de la transformación social, económica y política. Asimismo, ese fue el momento en el cual comenzaron a tomar forma los puntos de referencia ideológicos que impregnaron los grandes conflictos de las dos décadas posteriores, por lo cual es conveniente tratar de comprender sus elementos clave.

El primero y más importante es que, así como el modelo económico tendía a proyectarse hacia lo interno, y mientras los cambios sociales alumbraban por doquier el problema de la integración nacional de las masas, en términos ideológicos la nota dominante de la época fue el nacionalismo. Este dejó de ser sólo una corriente ideológica y política entre otras de distintos orígenes, e impregnó cada vez más a fondo el entero panorama ideológico. Se convirtió entonces en una suerte de trasfondo imprescindible en toda disputa y en un nexo entre ideas que parecían en las antípodas, como socialismo y nacionalismo –los cuales, de hecho, tendieron a confluir en el seno de amplios movimientos populistas–. Ello no significa, por supuesto, que las ideologías en lucha en América Latina fuesen distintas de las que se enfrentaban en el resto de Occidente en el contexto de la Guerra Fría; también en América Latina tronaban las luchas en nombre de la democracia liberal o del comunismo. Pero lo que más se imponía era el esfuerzo por conjugar y legiti-

mar aquellas ideologías en términos nacionales. Comenzaron entonces a destacarse un socialismo nacional, un catolicismo latinoamericano, un modelo de desarrollo adaptado a la región y a su peculiaridad, y así sucesivamente. Este proceso culminó en las doctrinas nacionales que los movimientos populistas, entonces más en boga que nunca, pretendieron encarnar.

El segundo elemento clave para orientarse en el panorama ideológico de la posguerra es la cuestión social. Si el principal frente de disputa había sido durante mucho tiempo el religioso, y si, primero durante los años treinta y después con la Segunda Guerra, se habían impuesto en América Latina –aunque por breve tiempo– las confrontaciones universales entre fascismo y democracia, en la posguerra el horizonte fue ocupado por la moderna cuestión social. Algo inevitable, por otra parte, en un continente en el que esta se volvía cada vez más urgente, a la luz de las transiciones hacia la sociedad de masas.

Así, durante veinte años, nacionalismo y cuestión social se impusieron sobre el trasfondo de la lucha política e ideológica de la época. No obstante, es preciso analizar en qué términos tuvo lugar esta preeminencia, dado que no todas las corrientes ideológicas afrontaron la situación del mismo modo y puesto que algunas –que alimentaron los populismos– tendieron a imponerse. Al hacerlo, se conectaron al sustrato ideológico del organicismo, cuya extraordinaria vitalidad pusieron de relieve. En principio, en casi todas partes se consumó la declinación del liberalismo, al menos en su versión doctrinaria elaborada por las elites intelectuales decimonónicas. De ese modo se vio confirmado su fracaso en gran parte de América Latina –como había ocurrido ya antes en Europa–, en especial debido a su incapacidad para guiar la transición hacia la democracia política y la inclusión social. Por lo tanto, pese a que América Latina tendió a gravitar aún más que en el pasado en la órbita de la gran potencia liberal, los Estados Unidos, y a sostener su causa durante la Guerra Fría, no puede decirse que el liberalismo fuese protagonista, sino más bien objeto de los dardos de su enemigo, el populismo.

En suma, la tradición liberal y democrática parecía residual. En este marco, tendieron a aparecer como sus abanderadas algunas voces de distinto origen, que se esforzaron por adecuarlas a los imperativos nacionales y sociales de la época. Tal fue el caso del catolicismo liberal inspirado por el filósofo francés Jacques Maritain, orientado en América Latina por el brasileño Alceu Amoroso Lima y los jóvenes que en 1957 fundaron la Democracia Cristiana en Chile, una corriente mino-

ritaria que intentó conciliar la tradición corporativa católica con la democracia liberal. Pero si el liberalismo lloraba, el marxismo tampoco tenía motivos de festejo, no sólo porque la oleada anticomunista que barrió el área tras la guerra había impedido su acción y organización, sino porque, en su versión internacionalista, modelada sobre la horma atea y materialista del canon soviético, se mostró poco atractivo para atraer a las masas –salvo en raras ocasiones, en las que, sin embargo, su desempeño electoral, pese a verse beneficiado por el prestigio de la Unión Soviética durante la posguerra, raramente alcanzó el 10%–. No es casual que los movimientos populistas en ascenso les arrebataran las bases proletarias a los dirigentes e intelectuales marxistas, lo cual indujo al marxismo latinoamericano a nacionalizarse para entrar en sintonía con las masas que ambicionaba representar, evitando así el aislamiento y la marginalidad. En muchos casos, también lo incitó a ingresar en las filas de los movimientos o sindicatos de tendencia populista, donde en ocasiones se unieron a intelectuales o militantes de origen nacionalista, como sucedió en el peronismo argentino y en la revolución boliviana de 1952, entre otros. Pero si tal fenómeno alimentó por entonces el anticomunismo, que tendió a ver el espectro marxista infiltrado en todas partes, lo que en realidad ocurrió con el tiempo fue que, al nacionalizarse, también se convirtió en la vía de la conciliación con el imaginario popular, que en América Latina permanecía inficionado de organicismo católico, con el que pronto encontró muchos puntos de contacto. De ahí el peculiar connubio entre católicos y marxistas, del cual se hablará al considerar los años sesenta y setenta.

No obstante, lo que dominó el panorama ideológico de la época fue el populismo, el cual no es, en sentido estricto, una ideología, desde el momento en que nadie suele definirse como populista, aunque presentaba un núcleo ideológico específico, al que ya hemos aludido. Nacionalismo y socialismo tendieron a encontrar en los populismos el punto de fusión. De hecho, se conectaron a un imaginario social antiguo que, por un lado, les permitía erigirse en herederos de la más pura tradición nacional y, por el otro, en defensores de la justicia social, en nombre de la armonía y el equilibrio entre los diversos miembros del organismo social. Aunque el resultado de los fenómenos que aspiraban a encarnar la identidad nacional y monopolizar el poder era la instauración de regímenes autoritarios, ello no quita que tanto ellos como la ideología que profesaban fuesen muy populares, a tal punto que, al contar con el apoyo de buena parte de la población, en especial de las clases medias

bajas, y ser capaces de imponerse en elecciones libres, ocuparon todos los resquicios del poder.

De hecho, los gobiernos y líderes más recordados se sucedieron en diversos países en el curso de aquellos años, aunque no todos crearon regímenes consustanciados con el núcleo ideológico del populismo: desde Carlos Ibáñez en Chile hasta Getúlio Vargas en Brasil, ambos llegados al poder por la vía electoral a inicios de los años cincuenta; de Velasco Ibarra en Ecuador al general Rojas Pinilla en Colombia; desde Víctor Paz Estenssoro en Bolivia hasta la primera fase del gobierno del general Odría en Perú, sin olvidar el peculiar caso de México, después de todo, parte de aquella familia. Sobre el prototipo de esos regímenes, el más maduro y completo, que no por casualidad pretendió elaborar una ideología coherente, fue el peronismo argentino y su doctrina denominada "justicialista". En definitiva, lo que llamamos "populismo" era en realidad la vía latina a la democracia y a la justicia social; una vía extraña y adversa tanto al comunismo ateo y estatista como al capitalismo y la democracia liberal del mundo protestante anglosajón. Se trataba de una tercera vía católica, puesto que católica era la más profunda fibra de la civilización latinoamericana.

El régimen peronista fue largo, complejo y pasó por diversas fases. Sintetizando algunas de sus características, es posible comprender ciertos elementos sociales, económicos, políticos e ideológicos que, aunque no bastan para explicarlo de manera exhaustiva, dan la medida de cuánto encarnó el tipo ideal del populismo. Por empezar, en sus aspectos sociales: no hay duda alguna de que el peronismo nació y perduró como un gran movimiento popular, cuyo núcleo más activo y sólido fue la clase obrera. A ello es preciso añadir que, como movimiento nacional y no como partido de clase o ideológico, el peronismo tendió a englobar en sus bases a sectores muy heterogéneos e incluso enfrentados entre sí. De hecho, atraídos por su nacionalismo o por los intereses que favorecía, ingresaron a sus filas radicales y conservadores, miembros de las elites provinciales y de la burguesía urbana, empresarios y profesionales. En lo que respecta a la política social, es indudable que el peronismo, que después de la guerra disponía de una envidiable condición económica, propició la distribución de la riqueza a favor de los sectores populares, logrando elevar el poder adquisitivo de los salarios o incrementando las prestaciones sociales, así como garantizando créditos accesibles a la industria nacional. En general, las condiciones de vida de las clases populares conocieron en los primeros años del peronismo una mejora neta, aunque ya alrededor de 1950 su política social

comenzó a mostrar graves fisuras. Finalizado el *boom* económico, se hizo evidente la falta de sustento de dicha política, dados los enormes costos y derroches y las actitudes parasitarias que había incentivado, de las cuales eran reflejo el ausentismo galopante, la bajísima productividad y el anormal crecimiento del aparato estatal. No por casualidad, si la primera presidencia de Perón estuvo inspirada en el dogma de los derechos del trabajador, la segunda lo estuvo en el de la producción.

En otro aspecto, los pilares de la política económica peronista fueron los típicos del modelo ISI, el estado y la industria, y la principal modalidad para aplicarla fue la planificación. Fue tarea del estado proteger el mercado interno, estimular el crecimiento por medio de los instrumentos del crédito y el gasto público, tomar posesión de la infraestructura clave a través de nacionalizaciones (desde los teléfonos hasta el ferrocarril) y, en general, transferir recursos del sector exportador a las clases urbanas y la industria. Todo ello fue llevado a cabo a través del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), que entre tantas otras funciones tenía la de adquirir granos y carnes a los productores a precios bajos para revender a precios mucho más altos en el mercado mundial, por lo que el gobierno podía utilizar luego las sustanciosas ganancias para financiar la inversión y el gasto públicos, las prestaciones sociales, el consumo, etcétera. En cuanto a la industria, su proliferación fue para Perón un objetivo tanto económico como político. Económico puesto que estaba convencido de que no habría desarrollo sin industrialización; político porque, como buen militar, veía en la industria el necesario soporte de la soberanía nacional, la base sin la cual la Argentina quedaría a merced de las economías extranjeras y no tendría la fuerza suficiente para agrupar a su alrededor a las otras naciones de la región.

En términos políticos, el peronismo fue un régimen híbrido, algo típico de los populismos. Lo fue en el sentido de que, pese a que llegó al poder por medios electorales y fue reconfirmado por la misma vía, y habiendo mantenido en pie la arquitectura liberal del estado, gobernó de forma autoritaria, violando su espíritu. Se trataba de un autoritarismo popular, o una tiranía de la mayoría, puesto que fue invocando la voluntad del pueblo que el peronismo amordazó a la oposición, monopolizó la información, impuso la obediencia a la primera magistratura, purgó a fondo el sistema educativo y trató por todos los medios de asegurarse la plena adhesión de la iglesia y las fuerzas armadas, las dos potentes corporaciones que tanto lo habían apoyado en su lucha por erradicar las bases del régimen liberal de la Argentina. En tanto

no se convirtió en un régimen de partido único, el peronista creó un embrollo tan inextricable entre el estado y el partido que llegaron a asemejarse sobremanera. Sin llegar a ser un verdadero régimen totalitario, no hay duda de que su vocación de concentrar los poderes e impregnar con su ideología todos los ámbitos sociales demostró que iba en esa dirección.

De estas y otras tendencias fue expresión su ideología, que Perón llamó "justicialismo", cuyas premisas eran la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, sus tres puntos cardinales. Más allá de eso, su doctrina pretendió erigirse en una Tercera Posición, en el plano interno y en el internacional, entre el Occidente liberal y el Oriente comunista. A tal punto que se proclamó hostil al individualismo y al colectivismo, a la civilización protestante y a la atea, con las cuales identificaba a las dos grandes potencias. Mientras, indicaba el retorno a una sociedad impregnada de valores comunitarios, hijos de la civilización católica, a la que Perón nunca, ni siquiera cuando se enfrentó con la iglesia, dejó de invocar como fundamento de su propia doctrina. Emblema de su ideología fue el objetivo de crear una comunidad organizada, en la cual el pueblo estuviera unido política y espiritualmente en el peronismo, y organizado en corporaciones, también peronistas, dentro de las cuales Perón trató, con resultados diversos, de incluir a los diferentes sectores de la población.

A la cabeza de aquel organismo social reconducido a su unidad primigenia y enmendado de las divisiones infligidas por la modernidad, Perón se erigía en jefe indiscutido y carismático, autorizado a la reelección por la reforma constitucional de 1949. Se ha afirmado también que el de Perón fue en realidad un peculiar régimen bicéfalo; a su lado, no menos potente e incluso más popular, figuró hasta su muerte precoz en 1952 su mujer, Evita, la cual entró en el mito y la devoción popular en el rol de una virgen pagana, madre de los desheredados que sacrificó la vida derramándose en sus innumerables obras sociales. Sin embargo, Eva fue un personaje mucho más complejo y controversial de lo que el mito indica, ya que en realidad ejerció, en el más absoluto y arbitrario de los modos, un enorme poder político. Se trataba de un poder organizado en el Partido Peronista Femenino, a través del cual canalizó el voto de las mujeres, que había contribuido a hacer aprobar, y en la potente Fundación Eva Perón, que se extendería al vértice de los sindicatos (la CGT) y a los poderes públicos en general, en los que contaba con innumerables fieles. Asimismo, Eva resultaba controversial por su acción social, que acarreó enormes beneficios a amplios estratos

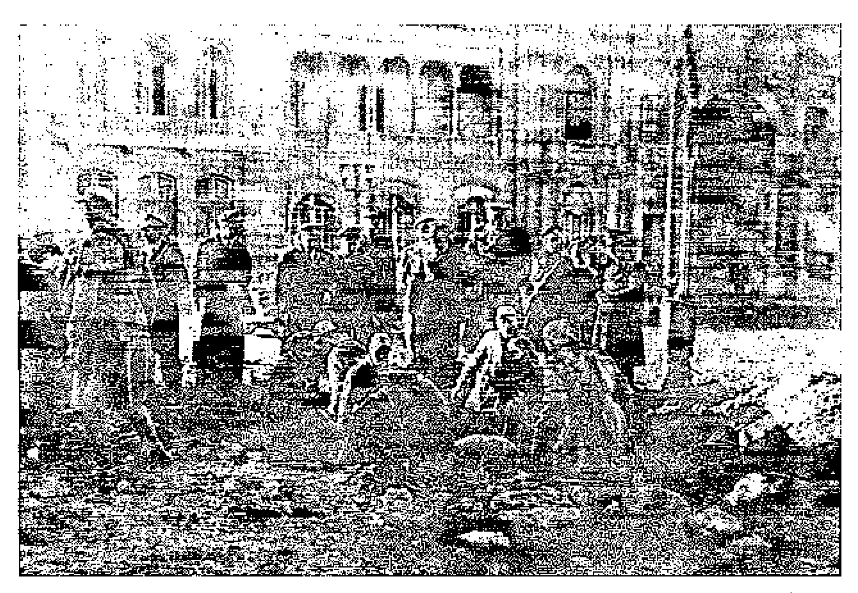
populares, pero que no estuvo privada de sombras, puesto que su accionar pesó en gran parte sobre el erario público, y descansaba sobre exacciones impuestas a empresas y trabajadores, de los que sustraía enormes recursos que administraba sin rendir cuentas a nadie. A ello se sumaba que, además de la inmensa popularidad conseguida por esos medios, propaló una intensa y ensordecedora propaganda ideológica a favor del peronismo y de odio hacia sus enemigos.



Eva Duarte de Perón, "Evita", el 22 de agosto de 1951, en el Cabildo Abierto del Justicialismo. En esa ocasión, ante 2 millones de personas, renunció a la candidatura a la vicepresidencia de la nación argentina.

En general, Eva Perón encarnó el alma más popular aunque más maniquea del peronismo, en la medida en que era capaz de encender el entusiasmo de las multitudes, pero de una forma tan violenta que le restaba simpatías y consensos, en especial entre las corporaciones eclesiástica y militar, que le habían tomado inquina. En este sentido, Eva imprimió al peronismo una suerte de hálito religioso que le confirió una fuerza extraordinaria, aunque, en su milenarismo, representó el alma más totalitaria, que, al reducir a cenizas toda forma de mediación política, aisló al peronismo en su popularidad. Esto se prolongó hasta que, muerta Eva y con una economía que requería

ajustes, la pretensión peronista de hacer del justicialismo una suerte de religión política resultó en un violento conflicto con la iglesia católica, la cual se sintió traicionada por un movimiento en el que había vislumbrado cierta voluntad de llevar a cabo una política católica, pero que había acabado por querer absorber a la propia iglesia en nombre de su catolicidad. En dicho conflicto, la causa de la iglesia halló el apoyo decisivo de las fuerzas armadas, que derrocaron a Perón, aunque fueron incapaces de pacificar un país dividido entre peronistas y antiperonistas.



El 16 de junio de 1955, aviones de la Marina bombardearon y ametrallaron la Plaza de Mayo y la Casa de Gobierno. Los bombardeos provocaron la muerte de 364 civiles, además de numerosos heridos.

La Guerra Fría: los primeros pasos

Aquello que los populismos combatían y el modelo ISI confrontaba, es decir, la hegemonía estadounidense en América Latina, se afirmó tras la guerra en el plano geopolítico, básicamente en el de la seguridad, aunque no sin traspiés ni resistencia. No obstante, fue en ese momento cuando el nuevo equilibrio mundial creó las condiciones para que dicha hegemonía se expresase en forma más extendida y profunda que

en el pasado, no sólo por el superpoder global que los Estados Unidos detentaban en el terreno económico y militar, sino también porque Europa se había convertido en un socio menor para América Latina y la Unión Soviética no estaba en condiciones de pesar sobre los destinos de un área tan remota. Nada, en definitiva, parecía poder interponer obstáculos a la preeminencia estadounidense.

Ese contexto permitió la institucionalización de las relaciones interamericanas y la creación de instituciones hemisféricas permanentes, de las que todos los estados del área entraron a formar parte. Con ello, se consolidó el objetivo histórico de los Estados Unidos de hacer de las Américas una comunidad de defensa; un continente unido por el principio de que la seguridad de cada uno de sus miembros era vital para todos los otros y que, por ende, cualquier amenaza a alguno de ellos debía entenderse como un peligro para el hemisferio en su totalidad. Un gran paso adelante había sido la premisa ideológica del panamericanismo, a cuyo imperativo de enfrentar a un enemigo global se dio un gran impulso durante la Guerra Fría: la idea según la cual ya había perdido sentido –si es que alguna vez lo había tenido– distinguir una América anglosajona de una latina, puesto que se postulaba al continente entero como una civilización común: la occidental y cristiana. Se trataba, no obstante, de una idea indigesta a los nacionalismos latinoamericanos de toda clase, que jamás la hicieron propia.

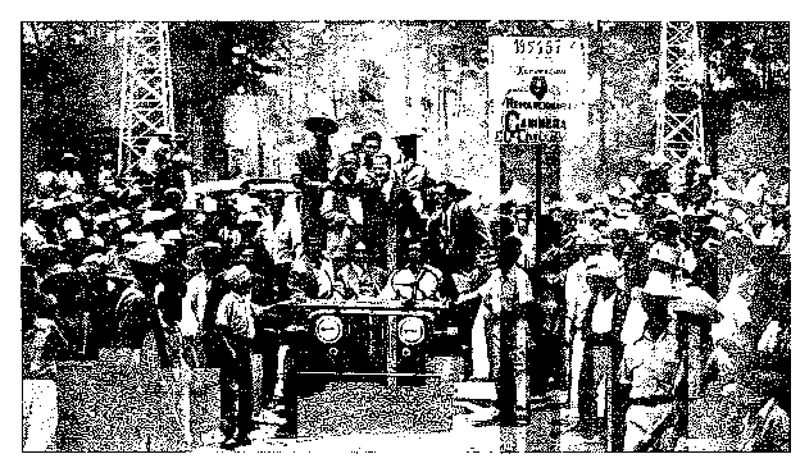
Panamericanismo y anticomunismo fueron los puntos cardinales de la política hemisférica de los Estados Unidos, en íntima conexión entre sí. Bajo la presidencia de Harry Truman, cuando el acento recayó sobre el primero de los términos, o bajo la de Dwight Eisenhower, en que prevaleció el segundo, aunque entre una y otra no había en realidad una gran discontinuidad. En lo que comprende al panamericanismo, sus etapas fueron tres. La primera en 1945, cuando las Actas de Chapultepec establecieron los principios generales de la nueva comunidad hemisférica: igualdad jurídica entre todos los estados, no intervención en los asuntos extranjeros, seguridad común. La segunda y más concreta, en 1947, cuando en Río de Janeiro las naciones americanas crearon el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), un pacto militar basado en el principio de que un ataque a uno de los estados miembros justificaría la reacción de los otros. Dicho pacto legitimó la tutela militar de los Estados Unidos contra toda eventual amenaza comunista, real o no, pero su influjo fue en parte limitado por la resistencia de algunos países, como la Argentina y México, que se reservaron el derecho a decidir en cada caso su par-

ticipación en la respuesta colectiva. La tercera etapa, en 1948, fue la fundación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), durante la Conferencia de Bogotá, con la que el sistema interamericano asumió su ropaje institucional.

En lo que respecta al anticomunismo, no hay duda de que, con la incidencia de la Guerra Fría, se volvió una prioridad estratégica estadounidense para la región. No es que ello no fuera compartido por la mayor parte de los gobiernos de América Latina, conservadores o populistas –ni qué decir por sus fuerzas armadas–. Sin embargo, aun cuando no lo consideraban una amenaza inminente, tendían a magnificarlo, buscando así obtener la atención de Washington. Lo que sí es cierto es que el gobierno se movilizó para crear un sólido frente anticomunista en las Américas, aunque no por ello la juzgaba un área de alto riesgo, en especial frente a Europa o Asia. Dicho lo cual, para comprender la naturaleza del anticomunismo en América Latina, ya sea del alentado por los Estados Unidos o del que hundía profundas raíces en la cultura política de la región, es preciso considerar que no solía presentarse tanto como reacción a la amenaza de una potencia externa, sino más bien como la forma prevaleciente que tomaba por entonces la reacción contra un enemigo interno, el cual comenzó a ser visto bajo el color que exhibía en la militancia, o en su tendencia a confluir con el nacionalismo.

En términos concretos, sin embargo, las presiones de los Estados Unidos, por un lado, y el anticomunismo de muchos gobiernos latinoamericanos, por el otro, crearon el clima para que en numerosos países los partidos comunistas fuesen puestos fuera de la ley o sujetos a restricciones; para que, salvo raras excepciones, una gran parte de ellos rompiese relaciones con la Unión Soviética; y para que encontrase apoyo el esfuerzo de los sindicatos estadounidenses por fundar una Confederación Sindical hemisférica que pudiera contener a la guiada por Vicente Lombardo Toledano, cercana a Moscú. Con el tiempo, en especial cuando a la Casa Blanca arribó Eisenhower agitando la doctrina del *roll back* (la "vuelta atrás" del comunismo), las medidas para combatirlo se intensificaron aún más, ya en el frente militar, donde Washington firmó numerosos pactos militares bilaterales con los gobiernos de América Latina, o en el plano político, donde no declinaron el recurso a la *covert action*, es decir, al empleo indirecto de la fuerza para deshacerse de los pocos gobiernos que juzgaban con aroma a comunismo, como el de Jacobo Arbenz en Guatemala durante 1954.

La Guatemala de Jacobo Arbenz



Jacobo Arbenz Guzmán, durante la campaña electoral de 1950, en las Verapaces, Guatemala.

La historia guatemalteca después de la guerra contiene los principales rasgos de la época, aunque en forma exasperada. Guatemala se destacaba por la rigidez de la segmentación social, que separaba a la mayoría indígena de la oligarquía criolla, y también por la elevada concentración de la tierra, la pobreza extrema y la dependencia de la exportación de productos tropicales, en su mayoría explotados –como en gran parte de América Central– por las grandes compañías estadounidenses, como fue el caso de la United Fruit Company. Esta empresa había creado cierta infraestructura moderna útil para su comercio, pero también poseía enormes extensiones de tierras prácticamente exentas del control del estado. Como en otros lados, en Guatemala se vivió una estación de democratización e integración social. Caída en 1944 la larga dictadura que había dominado los años treinta, se estableció un gobierno constitucional que amplió la participación política a las mujeres y los analfabetos. Presidente desde 1951, el coronel Arbenz introdujo un cambio radical mediante una reforma agraria dirigida a recuperar parte de las tierras de la United Fruit para distribuir entre los campesinos, medida a la que se opuso la compañía con su enorme poder y que generó un conflicto sobre la indemnización con el gobierno de los Estados Unidos, colmado de personajes

vinculados a la empresa. Al igual que en otros lados, la democracia guatemalteca se reveló frágil. Por un lado, estaba sujeta a la reacción social de las elites y, por otro, a la creciente tendencia del gobierno a monopolizar el poder, presionando a la prensa, los sindicatos y el Parlamento. En el contexto de la Guerra Fría, Eisenhower comenzó a ver a Guatemala como un caso típico de fusión entre nacionalismo y socialismo, es decir, como una evidente amenaza comunista, mucho más sospechosa aún debido al papel asumido por el pequeño Partido Comunista local, que apoyaba a Arbenz. De ahí a la decisión de ordenar una acción conducida por una facción de militares guatemaltecos financiados por los servicios secretos estadounidenses faltaba sólo un paso, que fue dado en 1954. Sin embargo, los Estados Unidos no pudieron cantar victoria por el orden restaurado, ya sea porque Guatemala no cesó de ser un foco de inestabilidad, ya porque ese precedente le confirió rasgos más radicales al proceso que vino a continuación: Cuba.

Todo esto no impidió que la hegemonía estadounidense encontrase serios obstáculos, algunos de pequeña magnitud y otros, más relevantes. Todos, empero, presagiaban los conflictos más importantes que le reservaba el futuro. Tampoco significa que América Latina fuera un mero espectador del nuevo contexto. Ya sea porque trató de obtener ventajas, ya porque contra aquella hegemonía no cesaron de crearse reacciones en su seno, de las cuales el comunismo fue el emblema, que de hecho heredaba y desplegaba las más antiguas y profundas raíces del antiamericanismo hispánico y católico. Además, en él tendían a menudo a confluir los nacionalismos antes dispersos, de derecha e izquierda, económicos y políticos, espirituales y culturales, todos mancomunados en la aversión a los Estados Unidos y a la civilización que representaban, es decir, unidos en lo que llamaban "antiimperialismo".

De aquellos obstáculos, el mayor fue la Argentina de Perón: debido a su política de la Tercera Posición, por su esfuerzo de exportar el peronismo y crear un frente latinoamericano hostil a los Estados Unidos, y como emblema de la convergencia en el populismo del nacionalismo de derecha y de izquierda. Por un lado, las ideas y la propaganda peronistas hallaron un terreno fértil donde arraigarse. Incluso por la enorme frustración causada en todas partes en América Latina debido a la escasa ayuda que los Estados Unidos le reservaron en la posguerra, mientras la dispensaban a discreción en Europa. Por otro, no obstante, muchos gobiernos reaccionaron con temor ante las ambiciones hege-

mónicas argentinas, lo que los empujó aún más hacia los Estados Unidos, en busca de protección.

Sin embargo, derrocado Perón, no desaparecieron los fantasmas que su gobierno había movilizado en Washington. En todo caso, tendieron a regresar en diferentes formas y estilos, en los más variados lugares: ora en Bolivia y en Guatemala, ora en Perú y Venezuela, donde en 1958 el presidente Richard Nixon arriesgó su incolumidad a causa de las protestas antiamericanas. Y, finalmente, en Cuba, donde el 1º de enero de 1959 triunfó la revolución.

8. Los años sesenta y setenta (I)
El ciclo revolucionario

En 1959, la revolución cubana echó fuego a la pólvora de un ciclo revolucionario que se prolongaría durante veinte años. Acentuados por la Guerra Fría y el conflicto ideológico que la caracterizaba, los efectos a menudo traumáticos de las rápidas transformaciones sociales de la posguerra y el frecuente colapso de las instituciones democráticas bajo el peso del militarismo o del populismo alimentaron, en la década de 1960, un clima imbuido de utopías revolucionarias y violentas reacciones contrarrevolucionarias. En muchos casos, el camino del nacionalismo y el socialismo confluyeron en el terreno político e ideológico, inspirados por el régimen castrista y la teoría y praxis revolucionarias de Ernesto Guevara –que influyeron en el nacimiento de numerosos movimientos guerrilleros–, o en el terreno económico, donde la Teoría de la Dependencia propició un desenlace socialista de las injusticias y contradicciones de la economía global. También incidió en el terreno religioso, en el que la Teología de la Liberación teorizó el diálogo y la colaboración entre cristianismo y marxismo. Finalmente, en el plano internacional, el antiamericanismo se robusteció y se extendió a gran parte del continente, creando serias preocupaciones en los Estados Unidos acerca de su hegemonía en el hemisferio.

La edad de la revolución

Desde la revolución cubana de 1959 hasta la revolución sandinista en Nicaragua veinte años después, América Latina vivió una larga etapa revolucionaria. "Revolución" devino palabra clave de la época, reclamada por todos los sectores para legitimar el propio pensamiento y la propia acción, el horizonte hacia el cual parecía deber dirigirse la región entera. La revolución, socialista pero nacional, fue invocada tan-

to por los revolucionarios como por los reformistas, para mostrar que ellos también intentaban remover las raíces del orden existente (empezando por el chileno Eduardo Frei, acaso el más importante, quien en 1964 asumió el gobierno anunciando la "revolución en libertad"). Además, y por paradójico que pueda parecer, la invocaban incluso quienes tanto hicieron por combatirla, en especial los regímenes militares que surgieron como hongos hacia mediados de los años sesenta, los cuales no se limitaron a la contrarrevolución, sino que se propusieron transformar el orden político y social.

El hecho mismo de que "revolución" se convirtiese en la palabra clave es indicativo de varias cosas. La primera es que las grandes transformaciones sociales y económicas que tuvieron lugar durante y después de la guerra (y continuaron a un ritmo acelerado a lo largo de gran parte de los años sesenta) exigían respuestas que no llegaron, no lo hicieron a tiempo o fueron insuficientes. La segunda es que, una vez más, como ya había sucedido en los años treinta e incluso luego de 1945, en la mayoría de los casos las instituciones democráticas no parecían ofrecer respuestas ni a los revolucionarios ni a quienes combatían la revolución. Ya sea allí donde, luego de la guerra, la democratización había sido bloqueada por un retorno autoritario y conservador, o donde, en cambio, se habían impuesto regímenes populistas, en la mayoría de los casos quedó demostrada su ineficacia. En los primeros porque la demanda de participación acumulada y por tanto tiempo comprimida tendió a abrumarla, y en el segundo porque la lógica de la confrontación amigo-enemigo, típica de los populismos, la había reducido a escombros. La tercera razón es que la fuerza del horizonte revolucionario señalaba la gran vitalidad, en amplias franjas de la población, de un imaginario político palingenésico, es decir, de ideologías que aspiraban a crear una comunidad cohesionada y armónica, para las cuales la democracia era un concepto social, más allá de la forma política que se le diera. Así, si prometían curar las profundas heridas sociales, no lo harían con las contundentes herramientas de la democracia parlamentaria, sino con la fuerza de la violencia revolucionaria; en suma, a través de una suerte de catarsis religiosa.

La revolución llevada a cabo en Cuba –cuya fecha hito es el 1° de enero de 1959– bajo la guía de Fidel Castro tuvo diversas causas que la inscriben como un caso peculiar en el panorama de las revoluciones socialistas del siglo XX. Entre ellas se destaca la cuestión nacional, es decir, el nudo irresuelto de la independencia cubana y las relaciones con los Estados Unidos a partir de 1898, cuando la isla fue emancipada

sólo para caer bajo una suerte de protectorado político, económico y militar estadounidense. A dicho panorama se sumaba la grave cuestión social: mientras disfrutaba de discretos indicadores de niveles de vida en América Latina, la expansión del cultivo de caña de azúcar y de las relaciones de producción capitalistas en el campo había convertido a la mayoría de los campesinos en braceros, desocupados durante gran parte del año, cuando el trabajo en los cultivos se detenía. Más que por el retraso y la miseria, la revolución fue facilitada por los efectos de los profundos cambios de la estructura social cubana. El peso del capital estadounidense en la economía de la isla transformó la cuestión social y la cuestión nacional en caras de una misma moneda. A tales causas se añadió, a partir de 1952, una explosiva cuestión política, cuando el golpe de Fulgencio Batista clausuró los ya frágiles canales de la democracia representativa y empujó a la insurrección a la generación de jóvenes nacionalistas que se enfrentaba en la escena política. Puesto que, en los años sucesivos, Batista se constituyó en uno de los más sólidos aliados de la administración Eisenhower en la región, la cuestión política tendió a confluir con la cuestión nacional, preludiando la confrontación entre el régimen revolucionario y los Estados Unidos.

Las causas estructurales fueron acompañadas por otra circunstancia igualmente decisiva: sobre ese inmenso pajar listo para arder, la figura carismática del joven Fidel Castro tuvo el efecto de un fósforo encendido.



Fidel Castro junto a otros atacantes del cuartel Moncada, al llegar a la cárcel de la ciudad de Santiago de Cuba, en julio de 1953.

Las principales y célebres etapas que hasta 1959 constelaron la marcha triunfal de la revolución estarán ligadas al nombre de Fidel Castro: desde el fallido asalto al cuartel Moncada en 1953 a la sucesiva fundación del Movimiento 26 de Julio y desde la expedición del Granma en noviembre de 1956 a la creación del foco guerrillero en la Sierra Maestra, donde él y otros "barbudos", entre los cuales se destacarían el comandante Raúl Castro, Ernesto "Che" Guevara y Camilo Cienfuegos, echaron las bases del éxito militar junto al nuevo orden revolucionario. A la victoria de la revolución contribuyeron también otras numerosas fuerzas y factores, en particular la extrema polarización causada por el gobierno autoritario de Batista y su brutal violencia. Esto les permitió a los guerrilleros de la Sierra (hábiles en la invocación de un programa político y una serie de ideales nacionalistas y democráticos) reunir, en torno a la inevitabilidad de la vía insurreccional y a la preeminencia de la guerrilla rural sobre la lucha de masas en la ciudad, a las fuerzas más variadas y dispares. Entre ellas se contaban desde los estudiantes del Directorio Revolucionario a las organizaciones del laicado católico; desde los referentes de los partidos tradicionales a los comunistas del Partido Socialista Popular (en un principio hostiles al método castrista); desde los liberales estadounidenses (contrarios al connubio entre la Casa Blanca y los dictadores de América Latina) a los demócratas latinoamericanos, decididos –en particular el venezolano Rómulo Betancourt– a limpiar el área de los caudillos militares que aún les infligían estragos.



Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos, a comienzos de 1959. Oficina de Asuntos Históricos de Cuba.

Muchos de ellos, sin embargo, abandonaron el proceso o fueron marginados y acabaron por combatir la revolución cuando Castro, tras una fase inicial en la cual consintió la formación de un gobierno moderado, se comprometió con decisión en el camino de la revolución social y del antiimperialismo militante, en la patria y en el extranjero, dejando de lado el compromiso de restablecer la democracia parlamentaria y el imperio de la Constitución de 1940. Cuánto de ello estaba inscrito en los ideales del líder revolucionario y en las condiciones estructurales de la isla, y cuánto fue debido a una reacción a la obsesión estadounidense por renovar la propia tutela sobre los destinos de Cuba es materia de infinita controversia historiográfica y política. Lo que sí es cierto es que la revolución adoptó reformas económicas, sociales y políticas que con el tiempo se asemejaron al modelo socialista, coronadas con la explícita adhesión a los principios del marxismo-leninismo y al lado soviético en la Guerra Fría tras el intento de invasión patrocinado en abril de 1961 por los Estados Unidos en Bahía Cochinos.

En el terreno económico, el gobierno revolucionario procedió a la nacionalización de la industria y los servicios, y a la realización de una reforma agraria radical: en pocos años el estado asumió el control de los medios de producción. No obstante, el proyecto de industrializar la isla y diversificar la economía no dio los resultados esperados y, debido a la complicidad del embargo estadounidense, a Cuba no le quedó más opción que integrarse al Consejo de Ayuda Mutua Económica (COMECON) y confiarse a la generosa subvención soviética. En el terreno social, la revolución actuó movida por una radical inspiración igualitaria, ya sea en la política salarial y ocupacional, ya en el esfuerzo, en gran parte exitoso, de mejorar y universalizar el acceso a la educación pública y a los servicios sanitarios. En el terreno político, los revolucionarios cubanos imaginaron una democracia popular o directa, alimentada por la fuerza moral del "hombre nuevo" surgido de la catarsis revolucionaria, nada distinta, en sustancia, de aquella democracia hostil al pluralismo propia de los otros populismos latinoamericanos. A tal fin, hilvanaron un sistema de participación política alternativo a la aborrecida "democracia burguesa", fundando numerosas organizaciones de masas: desde los Comités de Defensa de la Revolución hasta la Federación Cubana de Mujeres; de la Unión de Pioneros a la Federación Estudiantil, entre otras. Sin embargo, muy pronto, con el debilitamiento fisiológico del espíritu revolucionario y ante la necesidad de hacer funcionar la maquinaria del estado y la economía, los organismos del denominado "poder popular" perdieron el brillo y la espontanei-

dad para convertirse, en su mayor parte, en órganos a través de los cuales se ramificaba el poder y el control social del Partido Comunista de Cuba, el único permitido. A medida que se fue institucionalizando, el régimen político de la revolución cubana asumió los rasgos típicos de los regímenes socialistas de partido único e ideología de estado. Esto fue sancionado por la Constitución de 1976 y nuevamente por la reforma constitucional de 2002, que definió como "irreversible" la vía socialista en la cual Cuba se había embarcado. Hija en gran medida de una cuestión nacional engangrenada, sin embargo, la revolución cubana nunca abandonó por completo –incluso bajo la gruesa capa del régimen socialista– su matriz populista originaria.

La revolución cubana encendió un polvorín puesto que, en especial en los primeros años, trató de exportar su modelo de guerrilla armada, financiando o adiestrando grupos, aunque sería erróneo suponer que era el único foco de un fenómeno que en verdad tenía antiguas raíces endógenas en todas partes. La revolución se llevó adelante mientras la oleada autoritaria iniciada un decenio antes estaba en pleno reflujo, es decir, cuando la mayor parte de los países en los que había golpeado había vuelto a gobiernos constitucionales: de Perú a Colombia, y de Venezuela a la Argentina. Caído Fulgencio Batista en Cuba, quedaban pocas dictaduras verdaderamente tales, y sólo perduraban en países pequeños y poco desarrollados, como Paraguay, Haití, Nicaragua y El Salvador.

Pronto, una larga y poderosa oleada de convulsiones políticas y sociales tumbó gran parte de las democracias, incluso algunas antiguas y sólidas como las de Chile y Uruguay. Estas convulsiones no se expresaron sólo por medio de las guerrillas armadas, punta de un iceberg con una base más amplia, conformada por grandes movilizaciones y luchas sociales. De todas ellas fueron protagonistas los estudiantes y los trabajadores urbanos, obreros y empleados, y en ciertos casos también se sumaron los campesinos sin tierra, en especial en los países de mayoría aborigen o mestiza, donde la cuestión rural e indígena tendió a superponerse. De hecho, las primeras guerrillas fueron rurales y estaban inspiradas en lo ocurrido en Cuba, a través de la doctrina del foco guerrillero elaborada por Guevara –el médico argentino que tan destacado papel había cumplido junto a Fidel Castro–, sobre la base de la cual la voluntad y motivación ideológica de un núcleo de combatientes decididos y disciplinados serían suficientes para provocar en el campo, sujeto a tan graves injusticias, la chispa capaz de encender el incendio revolucionario, sin necesidad de atender, por tanto, a las condiciones objetivas postuladas por el

marxismo clásico. No por azar surgidas en países donde los movimientos populistas no habían hallado salida y la integración social y política de las masas había permanecido bloqueada, estas guerrillas no obstante fallaron en todas partes: en Guatemala y Perú, en Venezuela y Bolivia (donde en 1967 fue asesinado el Che Guevara).

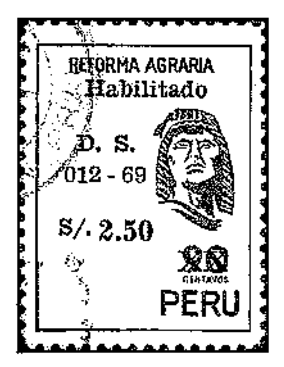


Ernesto Che Guevara es tomado prisionero y luego asesinado en La Higuera, Bolivia, octubre de 1967.

Esto fue así por varias razones, diversas de país en país, entre las cuales cabe enunciar la dura reacción de los gobiernos y de los militares locales apoyados por los Estados Unidos; las condiciones a menudo distintas de las vividas en Cuba y, por tanto, la dificultad de hacer pie entre la población; las divisiones entre los revolucionarios, en muchos casos adversos a los partidos comunistas locales, que repudiaban una estrategia considerada aventurera, prenuncio de violentas represiones. Sólo en Nicaragua se crearon, en los años setenta, las condiciones para el triunfo de una guerrilla de aquel tipo, cuando la dictadura de la familia Somoza acabó por aislarse de sus aliados externos e internos, hasta caer bajo los golpes del vasto frente opositor conducido por los sandinistas en 1979.

En los años setenta, mientras los movimientos armados de tipo rural morían o languidecían, nacían otros nuevos, esta vez en los países más desarrollados de la región, en los que predominaban las bases urbanas y estudiantiles. En algunos casos nacieron de las costillas de los viejos movimientos populistas y en lucha contra los regímenes militares, como los Montoneros argentinos o los grupos surgidos en Brasil entre los

años sesenta y setenta, ligados al Partido Comunista; en otros, debido a la desilusión ante el reformismo de los partidos tradicionales, como los Tupamaros uruguayos. Sin embargo, ni siquiera estos tuvieron éxito o, si lo tuvieron en un primer momento, lo pagaron luego con intereses, sufriendo violentas represiones. No obstante, este escenario indica, en general, la fuerza y persistencia de los populismos porque, en diversas dosis y en forma más radical que en el pasado, solían proponer una mezcla de marxismo y nacionalismo, autoritarismo político y democracia social.



Sello postal en homenaje a la reforma agraria, Perú, 1969.

En este marco, es posible identificar numerosos ejemplos de la vitalidad del populismo como respuesta a las transformaciones y los conflictos en curso. Desde el gobierno de João Goulart en Brasil, el viejo ministro de Getúlio Vargas, depuesto por los militares en 1964, al retorno triunfal al poder de Juan Domingo Perón en la Argentina en 1973, donde murió al año siguiente. Desde la presidencia de Luis Echeverría en México en los años setenta, que respondió a la carnicería con la que su predecesor había tratado de acallar las protestas de 1968 intentando resucitar las tradiciones revolucionarias del régimen, al caso (fundamental y trágico) de la victoria electoral en Chile, en 1970, de Salvador Allende y su coalición de partidos marxistas y radicales. De tendencia análoga, aunque expresada de diversas formas, fueron los numerosos populismos militares –dictaduras imbuidas de nacionalismo y defensoras de la integración social de las masas– que tendrían cabida en muchos países donde antes el populismo había sido frustrado. Tales fueron los casos del Perú del general Velasco Alvarado, que aplicó la reforma agraria, o el Panamá del general Omar Torrijos, quien se propuso mejorar las condiciones de la población reapropiándose de la soberanía sobre el Canal y de la riqueza que producía.

El desarrollo distorsionado y los conflictos sociales

Lo que es válido para la esfera política, donde por motivos históricos y contingentes las instituciones democráticas fueron en casi todo el mundo abrumadas por la polarización entre revolución y contrarrevolución, con mayor razón lo es para la esfera económica y social, donde las tendencias maduradas al comienzo de la guerra y que explican el polvorín en que cada vez más se fue convirtiendo América Latina, no sólo no se aplacaron, sino que alcanzaron su culminación entre la década de los sesenta y mediados de los años setenta, la etapa más dramática de la historia latinoamericana del siglo XX. Durante esos años, las luchas sociales rompieron a menudo los diques institucionales y los modelos de desarrollo fueron en muchos casos impuestos *manu militari*.

El crecimiento económico continuó siendo bastante débil: un poco más alto que en los dos decenios precedentes, en términos absolutos, pero insatisfactorio dado que creció también la población (que recién dio sus primeras señales de modernización demográfica, con una ligera reducción, en la segunda mitad de los años setenta). En síntesis, el nivel medio de crecimiento de la economía continuó rondando el 2% anual: demasiado poco para una región en la cual las masas presionaban en busca de ocupación y la expectativa de ascenso social de los sectores recientemente urbanizados permanecía frustrada. Como en el pasado, avanzaba la industria pero se estancaba la agricultura, reduciendo la población de la campaña. En este marco, el sector que más se desarrolló fue el de los servicios (denominado "terciario"), que no era índice de modernidad, aunque sí marcaba la expansión del aparato público o de los empleos marginales. Entonces, el desarrollo no se verificaba en los sectores productivos, lo cual dice mucho tanto acerca del déficit estructural de aquellas economías como sobre su incapacidad de absorber mano de obra, ya sea la no calificada (que, junto a la proveniente de las regiones rurales, se amontonaba en las villas en los márgenes de la ciudad) o la especializada y escolarizada (que poblaba las universidades, en muchos países al alcance de gran parte de las clases sociales urbanas, donde nacieron los conflictos más violentos y las ideologías más radicales).

En relación con el primer punto, se consolidó en América Latina un perfil social peculiar, más semejante al de las áreas periféricas que a la típica pirámide de la sociedad europea; un perfil en el cual el proletariado urbano no ocupaba los escalones más bajos de la pirámide social, donde en cambio yacían las muchedumbres del subproletariado,

incrementado por doquiera y con rapidez a partir de 1960. En otras palabras, se trataba de multitudes de marginados que no se caracterizaban tanto por sus exiguos ingresos, por su pertenencia étnica o por ser en gran parte jóvenes sin instrucción de origen rural reciente, sino por su sustancial ajenidad a las instituciones públicas, por lo cual suele ser llamado a menudo el sector informal. En lo que respecta a los estudiantes, en cambio, aunque las diferencias de país a país sean enormes –con la Argentina, Uruguay y Cuba en un extremo, y Guatemala y Haití en el otro–, es posible identificar algunas tendencias comunes, dado que la población escolar creció a un ritmo mayor que la población en general, y que tal crecimiento contempló la enseñanza secundaria y superior, universitaria.

A ello se añade el hecho de que la urbanización no se detuvo: incluso se volvió más impetuosa, vaciando la campaña y sobrepoblando peligrosamente la ciudad. Tanto que, si en 1960 la población urbana se calculaba en alrededor del 50%, veinte años más tarde alcanzaba el 63%. También hay que agregar que el caudaloso flujo de capitales extranjeros invertidos en aquellos años en la economía de la región –más del doble respecto de las dos décadas precedentes– acrecentó la dependencia (o, al menos, la percepción de que ese era el efecto), lo cual, a pesar de sus efectos virtuosos en términos de ocupación y transferencia de tecnología, alimentó el nacionalismo antiimperialista de las corrientes revolucionarias. A todo esto se agrega el hecho de que, en el campo, las numerosas reformas agrarias introducidas a comienzos de los años sesenta, en buena medida por el empuje de la Alianza para el Progreso lanzada por la administración Kennedy, crearon expectativas que se empantanaron ante la resistencia de los grandes propietarios territoriales. Finalmente, la concentración de la riqueza, lejos de reducirse, creció aún más, y en algunos casos alcanzó extremos sin igual, como ocurrió en el Brasil de los años setenta, donde el 5% más rico de la población detentaba poco menos de la mitad de la riqueza nacional, contra apenas el 3,4% en manos del 30% más pobre.

Sin embargo, un panorama económico y social de los años sesenta y setenta reducido a esos elementos sería parcial. Por ello, en el próximo capítulo consideraremos algunos elementos que hasta ahora han permanecido en la sombra. Lo que importa subrayar aquí son los elementos de inestabilidad, capaces de provocar implosiones reales. Dichas implosiones no se hicieron esperar, como tampoco faltaron grandes conflictos sociales, por demás crónicos. En principio, estudiantiles, en las mayores ciudades de América Latina: desde Córdoba, en la Argen-

tina, donde en 1969 las protestas cumplieron un rol clave al poner de rodillas al régimen militar del general Onganía, hasta Ciudad de México, donde las reivindicaciones abrieron una brecha en la coraza del régimen instaurado desde la revolución, que insistió, no obstante, en la utilización de la violencia. También se produjeron conflictos rurales por la recuperación de tierras comunitarias o por la distribución de grandes propiedades parasitarias. A estos se sumaron conflictos protagonizados por nuevos y amplios movimientos campesinos, a veces guiados por líderes sindicales o dirigentes comunistas; más a menudo por sacerdotes o laicos a cargo de movimientos católicos, incluida la Acción Católica. De estos fueron emblema las organizaciones campesinas que crecieron en el nordeste brasileño, el movimiento surgido en el Cuzco en Perú, y los que se difundieron en México en los años setenta, o los sindicatos rurales que maduraron en Chile durante la reforma agraria, entre muchos otros. Por último, a este panorama es preciso agregar los conflictos industriales, en especial en la industria minera en Chile, Perú y Bolivia, donde los sindicatos habían crecido a la sombra del estado en la era de los populismos, como en la Argentina, Brasil y México.

No obstante, todos estos movimientos fueron doblegados por la oleada contrarrevolucionaria que barrió la región en aquellos años, y a los que es común sumarles dos nuevas dimensiones, destinadas a asumir mayor peso en el futuro. La primera es el indigenismo, entendido como movimiento de reivindicación política y cultural de una específica comunidad étnica y cultural de origen precolombino, que asomó en algunos grupos insurgentes, en especial en Bolivia. La segunda es el feminismo, más político e intelectual pero minoritario, entre las mujeres instruidas de los sectores medios, y más cultural y espiritual (y por lo tanto a menudo tradicionalista) entre las de los sectores populares, que tendría mayor influencia en las corrientes populistas.

Estructuralismo, desarrollismo, teoría de la dependencia

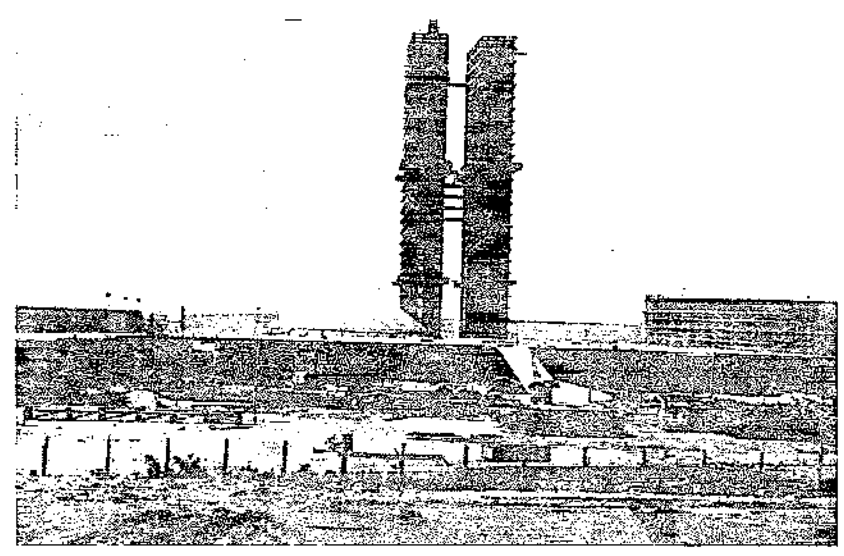
Entre fines de los años cincuenta y los años setenta cobraron forma y comenzaron a establecerse las premisas intelectuales y maduraron las consecuencias políticas del pensamiento económico elaborado en la posguerra por Raúl Prebisch y la CEPAL. Dichas concepciones señalaban la estructura del mercado mundial como el principal obstáculo para el desarrollo de la periferia, de la que América Latina era parte, y al que suele referirse como estructuralismo. Este, sin embargo, en el

transcurso de su parábola sufrió también profundas críticas y significativos cambios, debidos en gran parte a las corrientes que más impregnaron el panorama ideológico de la región en los años sesenta y setenta, dialogando y confundiéndose entre sí: nacionalismo y marxismo.

En un primer momento, la corriente estructuralista asumió en América Latina la forma del denominado "desarrollismo", teoría del desarrollo económico que inspiró a varios gobiernos, entre los cuales se destacan el de Juscelino Kubitschek en Brasil entre 1956 y 1961 y el de Arturo Frondizi en la Argentina entre 1958 y 1962, y que habían dejado una huella profunda en los primeros esfuerzos de integración comercial realizados hasta ese momento: la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) y el Mercado Común Centroamericano (MCCA), ambos creados en 1960, o la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en 1969, entre otros. Al igual que los populismos que los habían precedido y que en todas partes pujaban por imponerse, también fundaban el desarrollo sobre la base de la industria, el papel motor del estado y la protección y expansión del mercado interno. No obstante, a diferencia de aquellos, que habían hecho de la distribución de la riqueza el foco de la propia ideología, al punto de sacrificar a veces la sustentabilidad económica, el desarrollismo inscribía su principal objetivo político y fuente de su legitimidad en el desarrollo, dejando de lado la típica sumisión populista de la economía a la política y profesando la virtud de la tecnocracia. El mejor ejemplo de ello fue el compromiso profuso del presidente Kubitschek y el arquitecto Oscar Niemeyer por construir Brasilia, ubicada en el corazón del territorio y elevada a símbolo de proyección hacia el interior (ya no más hacia el exterior) de la vida nacional.

Pronto, el desarrollismo fue sometido a numerosas críticas. De parte de los liberales, se lo fustigó por doblegar y distorsionar las leyes del mercado con el fuerte intervencionismo público, pero la voz liberal era tan débil en aquellos años que tuvo escasa incidencia. Mucho más influyente fue la crítica marxista, que le imputaba en primer lugar su permanencia plena en el ámbito de la economía capitalista, algo cierto a todas luces, desde el momento en que el desarrollismo se proponía aprovechar lo más posible las oportunidades del mercado mundial, en lugar de volverles la espalda en nombre del socialismo. Se trataba de atraer la mayor cantidad posible de capitales del exterior para ampliar la industria nacional y volver más autónomo el mercado interno, como sucedió con la instalación de las grandes empresas automotrices en la mayor parte de los países latinoamericanos. Finalmente, a la crítica

marxista se superponía la nacionalista, que acusaba al desarrollismo de replicar los lineamientos del desarrollo occidental sin proponer una vía adecuada a América Latina y, por lo tanto, de funcionar como instrumento de perpetuación del dominio imperialista.



Vista de la ciudad de Brasilia en construcción. La obra comenzó en 1956, con Lúcio Costa como urbanista y Oscar Niemeyer como arquitecto.

Así, a mediados de los años sesenta y a partir de estas críticas, surgió la teoría de la dependencia, en la cual de un modo u otro abrevaron todas las corrientes revolucionarias de la época, algunas más ligadas a la tradición marxista clásica, otras –como la personificada por el sociólogo brasileño Fernando Henrique Cardoso– más eclécticas y con reminiscencias del estructuralismo. Se trató de una teoría que desde el inicio se configuró como un esfuerzo por conjugar marxismo y nacionalismo, o encaminar el desarrollo de América Latina hacia el horizonte revolucionario del socialismo sobre la base del análisis de las "estructuras de dominación" en el seno de las sociedades latinoamericanas y de la doctrina leninista sobre el imperialismo. Los teóricos de la dependencia condujeron ásperas batallas contra los intelectuales de otras escuelas, en especial contra los liberales, a quienes criticaban la teoría de las ventajas comparativas, en la medida en que inhibía la industrialización de la región. También confrontaron con los teóricos de la modernización que por entonces inspiraban la Alianza para el Progreso, porque

elevaban a modelo el camino de los países occidentales más avanzados, y además establecían un nexo entre modernización y democracia que América Latina parecía desmentir. Pero si bien fueron tan eficaces sobre el terreno de la crítica que impregnaron con su pensamiento el clima intelectual de la época, lo fueron mucho menos en el plano propositivo, puesto que, al llegar a la conclusión de que el socialismo era la única vía de salida de las injustas estructuras de la economía mundial, no fueron tan específicos en aclarar de qué modo se haría ni qué socialismo tenían en mente, por lo que su pensamiento se prestó a salidas utopistas y numerosas vulgarizaciones.

La guerra civil ideológica: el frente revolucionario

En los años sesenta y setenta, América Latina se vio desgarrada por una suerte de guerra civil ideológica, es decir, por una violenta confrontación entre visiones del mundo inconciliables. Todos estaban convencidos de que, hasta que no se impusieran a sus adversarios, la paz y la justicia no serían alcanzadas. Dada la dimensión de masas alcanzada por la sociedad y el *boom* de la escolarización, y dada la cada vez más profunda diferencia de país a país, es comprensible que el panorama ideológico fuese variado, aunque con algunos rasgos comunes, que por ahora veremos en el frente revolucionario, antes de analizarlos, en el próximo capítulo, en el frente opuesto.

En términos generales, para los revolucionarios de la época la nota dominante fue la apelación al marxismo (aunque a un marxismo "latinoamericanizado", en la estela abierta muchos años antes por José Carlos Mariátegui) y la difusión, a partir de los años sesenta, de la obra de Antonio Gramsci. Claro que, en la búsqueda de una vía nacional al socialismo, los marxistas de América Latina a menudo apelaron a ciertos rasgos de la tradición nacionalista, la cual, a medida que crecían los conflictos y que el ciclo populista se cerraba, sometido a una nueva oleada de militarismo, descubrió a su vez numerosos puntos de contacto con el marxismo, a tal punto que resulta una empresa ímproba medir cuánto el marxismo se nacionalizó y cuánto el nacionalismo se empapó de marxismo. Todo ello agudizó la obsesión por la difusión del comunismo en la región que, cómplice de la Guerra Fría, indujo a sus enemigos al cada vez más brutal recurso a la violencia represiva.

La impresión es que tal mezcla radical de marxismo y nacionalismo reprodujo, aunque en forma inédita y de un modo inconsciente, una

antigua y profunda esencia del universo ideal latinoamericano, rastreable en la tendencia al monopolio del poder y en la aversión al pluralismo político en nombre de la homogeneidad del pueblo. También en la hostilidad hacia las formas y procedimientos del estado de derecho y la democracia liberal, condenada como formal, y la contraposición de una genérica democracia sustancial, fruto de la igualdad impuesta por la revolución y, por último, en la prevalencia de un imaginario ético no pragmático, fundado en la fe y la voluntad más que en la razón y la convicción, aspectos ya observados en los populismos y a su vez herederos de la antigua concepción social organicista en su esencia holística. Con respecto a este último término, complejo, se aplica porque explica mejor que otros la recurrente pulsión, tan intensa en la historia política e intelectual latinoamericana, a concebir el orden social como una totalidad, esto es, como un conjunto superior a las partes (en este caso los individuos), que son por lo tanto sacrificables, ya sea en nombre de la revolución que purificaría aquel orden, o en el de la contrarrevolución, que expulsaría el virus revolucionario. A tal punto era concebido de este modo que aquella pulsión antigua, pero de profundos orígenes, es rastreable tanto en las corrientes revolucionarias como en las contrarrevolucionarias.

Típico en tal sentido fue el guevarismo, es decir, la corriente marxista que, inspirándose en el Che Guevara, tuvo incidencia en buena parte de la región y que, más que cualquier otra, encarnó la vía latinoamericana a la revolución. Dicha corriente era distinta tanto del marxismo científico soviético como del marxismo rural chino, con el que sin embargo tenía mayor afinidad; se encontraba mucho más lejos aún de los socialismos en boga en Yugoslavia, Albania o en los partidos comunistas de Europa occidental o de la propia América Latina. Sin embargo, lo que de hecho la distinguió de la ortodoxia marxista no fueron sus elementos fundamentales (la socialización de los medios de producción, la planificación económica, la dictadura del proletariado, el antiimperialismo, etcétera), que Guevara compartió y profesó, acusando al régimen soviético de haberlos traicionado o desnaturalizado, sino la apelación a la ética y a la voluntad como principales motores de la revolución, para superar las limitaciones impuestas por la realidad y la razón. Todo esto hizo de él el apóstol del hombre nuevo, un hombre que la revolución purificaba de egoísmos e imperfecciones, no distinto de aquel, redimido del pecado y la esclavitud de las pasiones, caro a la tradición cristiana. El propio Guevara y su sacrificio (su muerte en combate) se convirtieron en el más sólido *trait d'union* simbólico entre marxistas y católicos, cuyo encuentro fue por entonces tan frecuente e

intenso que impregnó el panorama ideológico de la época. Un encuentro por lo demás inherente al cruce genérico entre el nacionalismo (del cual el catolicismo era el más sólido baluarte ideal) y el marxismo.

Múltiples ideologías de origen marxista y nacionalista hallaron numerosos puntos de contacto en el *boom* de la sociología y en su enorme influencia en América Latina, ejercida de modo directo e indirecto a través de los sociólogos católicos o marxistas de Europa y los Estados Unidos. A la par de la teoría de la dependencia y de la distinción entre democracia formal y democracia sustancial que pobló por entonces la vulgata revolucionaria, el auge de la sociología validó la firme convicción de ambas corrientes de que el mal y las soluciones de los conflictos y las injusticias que plagaban América Latina residían en las estructuras sociales y que las instituciones eran meras superestructuras, apenas un reflejo de las relaciones de dominación social. Esto fue así a tal punto que el lenguaje del estructuralismo, tan familiar para los intelectuales marxistas, imbuía incluso los documentos de la iglesia, que denunció, a través del Episcopado Latinoamericano, reunido en el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), las injusticias estructurales de las sociedades de la región.

Una iglesia quebrada

Las convulsiones que sacudieron a la iglesia y el catolicismo de América Latina entre los años sesenta y los ochenta son un factor clave para comprender el panorama político e ideológico, así como las más profundas fibras y los perdurables traumas. Los elementos que las provocaron fueron varios, comenzando por los conflictos originados por la modernización, la cual, al sacar a la superficie las violentas grietas sociales de la región, interpelaba a la iglesia, que por su unidad y armonía se había erigido siempre en mentora y defensora de los débiles. Esta época de grandes cambios tampoco dejaba indemne a la institución: ya sea porque la secularización, de especial incidencia en los centros urbanos, la obligaba a repensar los métodos de apostolado y las relaciones con las diversas clases, o porque las convulsiones sociales ponían en crisis la vida eterna, es decir, la relación de la jerarquía con los fieles y con el propio clero.

El Concilio Vaticano II, realizado en Roma entre 1962 y 1965, vino a catalizar los cambios en curso; de hecho, fue un poderoso detonante para las transformaciones en este continente católico. La población,

los gobiernos e incluso las iglesias de América Latina fueron dándose cuenta de su importancia, lo que no quita que alentase una imponente agitación entre los católicos y, por reacción, en los sectores e instituciones que concebían a la iglesia como el baluarte del orden. En 1968, fue seguido por el gran estrépito que causaron los documentos aprobados por el CELAM en la asamblea de Medellín, los cuales, de lenguaje inédito y tono radical (en especial en materia social), tuvieron un enorme impacto sobre los estados y las sociedades de la región. Finalizado el Concilio, buena parte del clero latinoamericano confluyó en la ola de renovación planteada por aquel, tratando de quebrar la obstinada resistencia de las jerarquías eclesiásticas. Se trataba de jóvenes prelados imbuidos de estudios sociológicos o de religiosos movilizados por el contacto cotidiano con ambientes obreros y estudiantiles, o en condiciones sociales intolerables.

La edad de oro de la *révanche* católica contra el liberalismo había quedado atrás en estas sociedades a las que el rápido crecimiento de la industria les confería un perfil de masas y en las cuales se extendía la influencia de ideologías extrañas al catolicismo. En este marco, los métodos de evangelización y los sistemas clericales eficaces treinta años antes resultaban inadecuados. Como en Europa, muchos sacerdotes y laicos hicieron propia la perspectiva clasista y la crítica social aprendida en las fábricas, en las que desarrollaban su apostolado y donde la voz de la iglesia sonaba lejana. Sin embargo, estas experiencias se toparon con la censura de las autoridades eclesiásticas, quienes comprendieron la creciente demanda de reformas tanto sociales como eclesiásticas, aunque en ciertos países (como Colombia y la Argentina) más que en otros (como Brasil y Chile). Así, el Concilio legitimó en buena medida los cambios, otorgando un nuevo rol al laicado católico y compartiendo el espíritu de muchas iniciativas sociales anteriormente consideradas casi como herejías, lo cual no anuló la resistencia ni detuvo la radicalización del catolicismo progresista. Más aún, la iglesia se halló a menudo dividida entre ambas trincheras en la guerra ideológica y política en curso. No obstante, para comprender el impacto del Concilio en América Latina es preciso considerar también el trasfondo internacional contra el que se recorta. El clima creado en la región por la revolución cubana y la tendencia de los Estados Unidos a no ahorrar esfuerzos en el combate contra el comunismo dieron un renovado vigor al nunca domesticado antiimperialismo católico, el cual tenía profundas raíces y no había aceptado jamás la alianza anticomunista de la Santa Sede con los Estados Unidos, que veían al comunismo como la única amenaza

que incumbía a América Latina, y que no dejó de encontrar un terreno fértil común con el marxismo en la asidua búsqueda de una vía latinoamericana al socialismo.

En realidad, no puede decirse que los religiosos progresistas representasen la mayoría del clero; tampoco todos concebían la renovación del mismo modo: los había más radicales, más moderados, más políticos o más espirituales. Pero su impulso reformador creció en sintonía con el que se ocultaba en aquellas sociedades en transición, a tal punto que impregnaba los documentos del episcopado continental. Se produjeron así documentos que, hasta fines de los años setenta, es decir, hasta que comenzó a manifestarse la reacción de la Santa Sede y del clero moderado, revelaron una peculiar y selectiva lectura de la renovación conciliar. Se trató de una lectura latinoamericana, en la que la cuestión social era preponderante y la denuncia de las injusticias se acoplaba a soluciones radicales y, en los casos más extremos, a la justificación de la violencia revolucionaria, que algunos religiosos eligieron sostener y practicar, como el caso extremo de Camilo Torres, el sacerdote colombiano muerto en combate en 1966.



Camilo Torres. Fotografía de Hernando Sánchez.

En ese contexto nació la Teología de la Liberación, en la que la refutación del orden social y la condena del capitalismo se hizo más dura, la deuda con las ciencias sociales más directa, el recurso a la crítica marxista más abierto y el enlace entre teología y praxis más orgánico. Muchos de sus seguidores asumieron la búsqueda de justicia social como una cruzada revolucionaria imprescindible para fundar un orden terrenal coherente con el del Evangelio. En cambio, mucha menos atención prestó el clero latinoamericano a los ejes de la actualización conciliar,

como los relativos a la libertad religiosa, el ecumenismo y la democracia política, es decir, aquellos que mejor ilustraban la apertura del diálogo entre la iglesia y el mundo moderno. Al énfasis en la creación de una sociedad justa y desprovista de opresiones no correspondió sin embargo una reflexión equivalente sobre la democracia y el pluralismo, temas prácticamente ausentes del panorama ideológico de la época.

La onda expansiva de la renovación católica abrió una etapa de dramáticos conflictos en la iglesia y en la sociedad latinoamericanas. Se trataba de conflictos doctrinarios, en los cuales el clero conservador acusó a los renovadores de renegar de la misión sobrenatural de la iglesia identificándola con una particular clase social (el proletariado) o con una ideología. Vulgarizada, esta acusación se tradujo a menudo en la de prestar colaboración a la subversión marxista, abriéndole la puerta a feroces represiones, de las que muchos sacerdotes y militantes fueron víctimas en los años setenta. También se produjeron conflictos disciplinarios que, sumados a los rápidos cambios en las costumbres sociales, se reflejaron en el fulminante incremento del abandono del sacerdocio y en la caída de las vocaciones eclesiásticas; conflictos políticos e ideológicos, en fin, que trascendieron el terreno religioso e invistieron el ámbito social y político. Todo ello se reveló inevitable, dado el poder y enraizamiento social de la iglesia y la profesión de catolicidad de la mayor parte de los regímenes políticos, que se vieron conmovidos en sus fundamentos cuando la controversia se manifestó en forma radical y masiva en el propio seno de la institución católica.

La Teología de la Liberación

Producto original de la reflexión teológica de un sector del clero latinoamericano, la Teología de la Liberación tuvo sus raíces en la puesta al día eclesial promovida por el Concilio Vaticano II y luego por la II Conferencia del Episcopado Latinoamericano, realizada en Medellín en 1968, que conjugó el esfuerzo de adaptar las enseñanzas conciliares a la realidad continental, con el fermento social e ideológico de la época. En los debates de Medellín se inspiró Gustavo Gutiérrez, el teólogo peruano que la pergeñó y le dio nombre. A pesar de que se trataba de una corriente bastante heterogénea, presentaba ciertas constantes. Ante todo, la opción preferencial por los pobres, es decir, la determinación de la dimensión social como terreno de la evangelización, que se realizaría promoviendo la liberación del hombre de las estructuras sociales opreso-

ras. En tal perspectiva, los teólogos de la liberación se propusieron concientizar a los sectores populares sobre las injusticias sociales, en el seno de las comunidades eclesiales de base, a través de pequeños círculos en los que la lectura de la Biblia era el instrumento para interpretar la realidad cotidiana, los que se difundieron ampliamente en los años setenta y ochenta, en especial en Brasil, Chile, Perú y América Central. Se trataba una teología fundada en la praxis, es decir, en la acción social, respecto de la cual el clero desarrollaba no tanto una acción pastoral, sino más bien una obra de organización y guía intelectual. Esto la indujo al rechazo de la tradicional distinción teológica entre la esfera natural y sobrenatural, y a emplear las categorías analíticas caras a la teoría de la dependencia y el marxismo. Antiliberales en el plano ideológico y anticapitalistas en lo económico, los teólogos de la liberación invocaron en algunos casos la revolución social, pero en general se atuvieron a un rol de testimonio y estímulo de las reivindicaciones populares. Sobre los aspectos más radicales de la Teología de la Liberación se abatió finalmente, entre los años ochenta y noventa, la censura pontificia, preocupada por la heterodoxia doctrinaria y la vena antijerárquica que introducían en el seno de la iglesia.

La Alianza para el Progreso y el fracaso del reformismo

Atrapado entre los extremos opuestos de la vía revolucionaria y la reacción contrarrevolucionaria, el reformismo fracasó en América Latina. Del mismo modo, fallaron los sujetos que en otras partes eran protagonistas: desde los sectores medios legalistas hasta el catolicismo democrático, desde el socialismo reformista hasta los militares profesionales. Sin embargo, a su existencia y crecimiento apostó el presidente John F. Kennedy al entrar en la Casa Blanca en 1961, quien lanzó el más ambicioso proyecto de cooperación con América Latina concebido en los Estados Unidos: la Alianza para el Progreso, presentada como un plan Marshall para la región. Era lo que se esperaba después de la guerra, pero que nunca había llegado; sin embargo, en sustancia fracasó.

Las preguntas al respecto son múltiples: ¿por qué Kennedy lanzó ese plan; cuáles fueron sus premisas teóricas y objetivos? ¿Por qué fracasó? Las razones que indujeron al joven presidente estadounidense a anunciarla fueron varias. En principio, contó el imperativo impuesto por la Guerra Fría y la Doctrina Monroe, de prevenir el nacimiento de una "nueva Cuba", es decir, de regímenes comunistas en el área, cosa que

la Alianza para el Progreso se proponía lograr promoviendo el desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida, lo cual se llevaría a cabo por medio de una cuidadosa estrategia contrarrevolucionaria. Ello no obsta que el detallado plan de financiamiento y reformas sociales propuesto a los países latinoamericanos correspondiese también al genuino espíritu reformador de Kennedy y al proyecto de regenerar el liderazgo político y moral de los Estados Unidos, bosquejado en la región durante los años cincuenta.

El espíritu de la Alianza se basaba en la teoría de la modernización, a cuyos principales exponentes debía su inspiración y elaboración, comenzando por Walt W. Rostow. Se trataba de una teoría que, partiendo de la identificación de las etapas del desarrollo social en los países más avanzados, se proponía estimular su reproducción en los de la periferia, en este caso, en América Latina. Dicho enfoque fue objeto de duras críticas por parte de los teóricos de la dependencia, para quienes la estructura misma de las relaciones entre centro y periferia impedía a esta última replicar el camino recorrido por el primero. En cambio, los teóricos de la modernización sostenían que nada impedía a los países de la periferia –si eran ayudados y encaminados– emprender un virtuoso proceso de desarrollo, que no estaría privado de violentas desgarraduras, pero cuyos frutos superarían largamente los sacrificios. Se concebía entonces un proceso orgánico, no limitado a la esfera económica, sino antes bien dirigido a crear las condiciones sociales favorables a la democracia política. Las ingentes ayudas económicas habrían estado destinadas a activarlo, permitiendo el despegue del desarrollo industrial en la región, que a su vez era causa de radicales cambios sociales y del crecimiento de las clases medias, las cuales habían reducido la enorme distancia entre la cima y la base de la pirámide social latinoamericana, otorgando equilibrio y estabilidad a estas sociedades, presa de crónicas convulsiones. Se entendía entonces que dichas sociedades, con un mejor pasar y guiadas por el innato espíritu democrático de los sectores medios, acabarían fundando democracias sólidas y, por lo tanto, fieles a Occidente ante el desafío global del comunismo.

En concreto, la Alianza para el Progreso consistía en un conspicuo paquete de ayudas e inversiones económicas cercanas a los 20 000 millones de dólares, a realizarse a lo largo de una década. Sin embargo, su caudal y objetivos trascendían en gran medida el ámbito económico, a tal punto que, así como fue objeto de las críticas de marxistas y estructuralistas, lo fue también de liberales y conservadores, contrarios tanto al papel activo que el gobierno de los Estados Unidos y los de América

Latina estaban llamados a desarrollar, como a las medidas que intentaba promover, cuyo efecto habría sido el incremento del rol del estado en las economías locales. A la cabeza de esas medidas se destacaban la reforma agraria y fiscal, créditos para la industria, urgentes inversiones públicas en el campo sanitario y educativo para reducir la brecha entre clases y sectores sociales, etcétera, todo con el objetivo de obtener un crecimiento promedio del 2,5% anual para los años sesenta y mejorar los más importantes indicadores sociales, en forma sustancial y cuantificable en los precisos gráficos de la Alianza.

Sin embargo, la Alianza para el Progreso fracasó. Sobre ello no hay dudas, aunque acerca de la responsabilidad de dicho fracaso existen variadas versiones. Algunas de ellas acusan a Lyndon B. Johnson –quien sustituyó a Kennedy después de su asesinato en 1963– de haber traicionado su espíritu, mientras otras extienden el juicio a su recorrido entero y a sus premisas erradas. No obstante, es preciso señalar que obtuvo algunos resultados, en particular en el campo educacional y sanitario, donde en cualquier caso sus éxitos se vieron en gran medida frustrados por el rápido crecimiento demográfico de la población latinoamericana. En cuanto al crecimiento económico, si bien efectivo, no fue ni tan veloz ni tan vigoroso como se esperaba. En lo que respecta a la reforma agraria y fiscal, que debía servir para crear condiciones de mayor equidad social, se encontraron en la mayor parte de los casos con la resistencia de los potentados locales y la ineficacia administrativa de los gobiernos latinoamericanos, por lo que el resultado fue en general decepcionante. Donde más se evidencia el fracaso de sus ambiciosos objetivos es en el hecho de que los sectores medios actuaron tal como los teóricos de la modernización habían previsto, puesto que, asustados por las movilizaciones de la clase obrera y el crecimiento del subproletariado, tendieron a privilegiar el orden a la democracia y a sostener a los nuevos regímenes autoritarios; en este contexto, la democracia política no se amplió y pronto fue eliminada en gran parte de la región.

Volvamos entonces a la pregunta inicial: ¿por qué fracasó la Alianza para el Progreso? De hipótesis y explicaciones está colmada la historiografía. Para algunos, los fondos disponibles no eran equivalentes a las ambiciones, y además fueron empleados para saldar viejas deudas. Para otros, desde un principio estaba errado el diagnóstico acerca del comportamiento de los sectores medios, los cuales, por posición social y composición étnica, tenderían a hacer frente común con la elite amenazada por el ascenso de las masas. Otros han observado que el paralelo con el plan Marshall era engañoso, ya que lo ocurrido en Europa no

era posible aquí: mientras que los países europeos habían atravesado la democracia y la industrialización, estos eran procesos aún pendientes en las naciones latinoamericanas, portadoras de constantes tensiones. Otros han observado que Kennedy precisaba un tipo específico de aliados para dar cabida a su proyecto: hombres y partidos reformistas y democráticos, anticomunistas pero no conservadores, de los que carecía mayormente el continente, salvando algunas excepciones, como el venezolano Rómulo Betancourt y el chileno Eduardo Frei, a cuyas elecciones en 1964 los Estados Unidos dieron un gran apoyo. Esta ausencia acabó por hacer depender la suerte de la Alianza del apoyo de gobiernos a menudo dispuestos a usar el anticomunismo como arma para combatir la movilización social, con el resultado de dañar a la población.

Por último, también se ha focalizado la atención sobre las contradicciones estadounidenses. En efecto, los Estados Unidos no habían considerado un deber el hecho de que el cambio social que intentaban promover sucediera en un contexto de paz social y política, porque cuando advirtieron que las reformas eran fuente de peligrosa inestabilidad, antepusieron el imperativo de la seguridad al precio de renunciar a las ambiciones de la Alianza. Eso se puso de manifiesto en 1964 con la Doctrina Mann, con la cual el gobierno de Washington identificó el anticomunismo y el crecimiento económico como su prioridad en América Latina, por sobre la democracia política y las reformas sociales. Por último, es lícito afirmar que el fracaso de la Alianza para el Progreso se debió también a ambiciones excesivas y a la sobrevaloración del poder estadounidense para operar sobre la historia latinoamericana.

El Chile de Salvador Allende

En septiembre de 1970, el socialista Salvador Allende fue electo presidente de Chile al frente de una coalición llamada Unidad Popular, compuesta de partidos en su mayoría marxistas –aunque también en parte "burgueses"–, entre los cuales se contaba el Partido Comunista Chileno. Tres años después fue destituido e inducido a suicidio por un violento golpe de estado conducido por el general Augusto Pinochet, que dio curso a una brutal represión e instauró una larga dictadura. La historia de aquellos tres años hizo de Chile el mayor emblema del punto muerto entre revolución y contrarrevolución, y de su resultado trágico, pero también ocupó durante mucho tiempo el centro de la

atención mundial, encarnando esperanzas y temores. Varios fueron los factores que concurrieron a hacer del gobierno de la Unidad Popular un caso mundial. El primero y más evidente era que por primera vez un gobierno marxista nacía por la vía electoral y afirmaba querer construir el socialismo con métodos democráticos, lo cual volvía a Chile un caso único, distinto de todos aquellos en los que el modelo socialista se había impuesto con la revolución, como la Unión Soviética, Europa oriental, China y Cuba. Se trataba de un caso que ponía a todos, amigos y enemigos, ante un desafío teórico y práctico de enormes dimensiones. El segundo factor a tener en cuenta como un desafío radical era que Chile se destacaba por su antigua y sólida democracia. Era, por lo tanto, uno de los países menos sensibles a las sirenas del comunismo, cuya capacidad de conquistar el gobierno de modo legal era percibida como un terremoto. El tercer motivo es que el éxito de Allende en un país democrático del hemisferio occidental era en sí mismo una delicada crisis en el marco de la Guerra Fría. Su victoria en un país de régimen político por tantos motivos similar al de algunos países europeos, Italia en primer término, y por lo demás buque insignia de la Alianza para el Progreso en los años sesenta, fue un *shock* para los Estados Unidos, que no sólo lo vieron como una afrenta a su liderazgo y un excelente instrumento propagandístico para los soviéticos, sino también como el potencial detonante de un efecto dominó capaz de extender su influencia a Europa. Tanto es así que Richard Nixon, quien llegó a la Casa Blanca en 1969, se decidió desde el principio a acabar con él, por las buenas o por las malas.

¿Qué había llevado a Allende a la victoria electoral? Hubo causas sociales y políticas. En principio, Chile es el ejemplo típico de cómo las transformaciones sociales se habían llevado a cabo con excesiva rapidez. Crecimiento demográfico, escolarización, urbanización y todos los otros fenómenos ya indicados cambiaron de hecho con gran velocidad el panorama social del país, aunque el esfuerzo del gobierno democristiano de Eduardo Frei, entre 1964 y 1970, a través de la reforma agraria y las ambiciosas reformas escolar y urbanística, no obtuvieran los efectos esperados. A los conservadores les pareció demasiado audaz y a la izquierda demasiado tímido. La víspera de las elecciones de 1970, el partido de Frei no sólo había perdido el apoyo de los católicos más radicalizados, que se pasaron a la coalición de Allende, sino que se vio constreñido al centro de un sistema político dividido en tres partes, a la cabeza de las cuales emergió precisamente Allende, aunque con el 36,3% de los votos y, por ende, sin mayoría en el Parlamento. La esci-

sión entre la derecha y el centro fue crucial para su victoria, así como su acuerdo se revelaría decisivo para su caída.



Salvador Alende en el Palacio de la Moneda, casa de gobierno, una vez electo presidente de Chile.

En cuanto al gobierno de Allende en sí, sus medidas fueron las típicas de los gobiernos socialistas, aunque eran llevadas a cabo en un clima de efervescencia revolucionaria y grandes movilizaciones que lo volvían aún más amenazador a los ojos de la oposición. Además de nacionalizar el cobre (la reserva clave del país) con el voto de todos los partidos, el gobierno de la Unidad Popular llevó a cabo una radical reforma agraria, tomó el control de numerosas industrias y nacionalizó el sistema financiero, le imprimió un impulso a la economía mediante el crédito y el gasto público, y sostuvo las reivindicaciones salariales de los trabajadores. ¿Qué causó, por tanto, la crisis y el violento colapso? Las razones fueron variadas y tampoco hay consenso entre los historiadores acerca del peso de cada una de ellas. De hecho, la caída de Allende dividió a Chile y al mundo tanto como los divide aún hoy la memoria de aquello que lo causó. Entre otros, pesaron factores exógenos. Los Estados Unidos hicieron todo lo posible para impedirle a Allende asumir la presidencia en 1970, tanto por la vía constitucional como a través de un camino violento y secreto. No obstante, fracasaron al no obtener el apo-

yo de la Democracia Cristiana ni de las fuerzas armadas chilenas, que permanecieron fieles a la Constitución. Entonces, el gobierno de Washington adoptó una política de boicot al gobierno de Allende y de sostén financiero a sus opositores, con efectos importantes pero no decisivos.

Aquí entran a jugar factores endógenos, sin los cuales la hostilidad de Washington no habría producido los efectos deseados. Entre ellos tuvieron especial peso los económicos. La política económica de Allende estimuló en el primer año un enorme crecimiento, aunque pronto se mostró insostenible. Como ya había sucedido con la economía de los populismos, la inflación se elevó y el gobierno se vio compelido a importar cada vez más bienes para satisfacer la creciente demanda. En poco tiempo, la balanza comercial y la solvencia financiera de Chile colapsaron y la economía se precipitó en el caos: comenzaron a faltar bienes de primera necesidad y se propagó el mercado negro. Esto no hizo más que echar combustible a los ya encendidos conflictos sociales que minaban el país y que estimularon el ansia de reacción social de la burguesía y de buena parte de los sectores medios chilenos. Mineros, transportistas, amas de casa y numerosos sectores, algunos próximos al gobierno y otros en las antípodas, organizaron huelgas y protestas cada vez más exaltadas.

Finalmente, las causas políticas fueron las que dieron el peor golpe al gobierno, y esto fue así en dos sentidos. En primer lugar, la coalición de Allende se mostró dividida entre quienes presionaban por acelerar la transición al socialismo forzando el orden constitucional y los que, por el contrario, consideraban prudente proceder por la vía legal para no exponerse a una reacción violenta. No se obtuvo ni lo uno ni lo otro, y se empujó a la oposición a unirse contra un gobierno que hacía uso intenso de la retórica revolucionaria. En segundo lugar, la derecha conservadora y el centro democristiano, antes divididos, unieron sus votos en el Parlamento con la creencia de que el gobierno estaba violando la Constitución y llevando a Chile hacia el comunismo, hasta dejarlo en minoría denunciando la inconstitucionalidad, lo cual allanó el camino para lo que los militares se habían negado a hacer tres años antes, pero que ahora contaba con un amplio apoyo: el violento golpe de estado del 11 de septiembre de 1973.

9. Los años sesenta y setenta (II)
El ciclo contrarrevolucionario

En América Latina, la oleada revolucionaria de los años sesenta y setenta fue sofocada por una violenta oleada contrarrevolucionaria, de gran envergadura, que condujo al nacimiento de numerosos regímenes militares, incluso en países de sólida tradición democrática. La Guerra Fría (y la Doctrina de la Seguridad Nacional, su fruto) funcionó como legitimación de la acción militar, que se injertó en la ya consolidada cepa del militarismo latinoamericano. Quienes tomaron el poder por la fuerza no se limitaron a restablecer el orden, sino que se propusieron desbaratar la coalición populista y transformar la estructura económica de los respectivos países, favoreciendo la acumulación del capital necesario para el despegue industrial. Fueron regímenes a veces tan largos que, a partir de los años setenta, se caracterizaron no tanto por el elevado grado de represión indiscriminada, sino por la decisión de dejar atrás el modelo desarrollista e invocar las reformas neoliberales.

La era de la contrarrevolución

Colmados de vientos revolucionarios, los años sesenta y setenta también estuvieron azotados por los vientos de la contrarrevolución, que sostenía que la única manera de detener la revolución era una solución drástica y definitiva (es decir, revolucionaria). Esto fue así a punto tal que los regímenes militares que asolaron la región en la segunda mitad de los años setenta se denominaron a sí mismos "revoluciones".

No obstante, resulta evidente que no todos los gobiernos autoritarios de la época fueron iguales, ni unívocas sus causas y fundamentos. Sus diversos niveles de desarrollo o la gravitación que ejercían los Estados Unidos en sus equilibrios internos –en el contexto de la Guerra Fría– incidieron en profundidad sobre las formas y modalidades de gobier-

no. Se trataba, en particular, de autocracias personalistas (como la de la familia Somoza en Nicaragua y el general Alfredo Stroessner en Paraguay), que mantuvieron el poder y afrontaron el desafío del cambio social empleando, por un lado, una fachada constitucional y cierta dosis de paternalismo social, y por otro lado, la represión.

No obstante, en América Central (en especial en Panamá y El Salvador), o en el área andina (Perú, Bolivia y Ecuador), diversos tipos de autoritarismo se alternaron y combatieron entre sí: un autoritarismo nacional y populista, y uno más tradicional, guardián del orden social y fiel a la causa occidental en la Guerra Fría. En aquellos países en vía de rápida transformación, en los cuales algún movimiento o régimen populista se había afirmado con anterioridad, las fuerzas armadas –dueñas del campo ante la fragilidad de las instituciones representativas– a menudo se hallaban divididas acerca de la forma de lograr sus principales objetivos: la seguridad y el desarrollo. Para algunas de ellas, no había seguridad sin desarrollo, por lo cual la prioridad era llevar a cabo reformas sociales incisivas que permitieran integrar a las masas. Para otros sectores militares era impensable el desarrollo en tanto no se hubiera impuesto el orden, a fin de permitir el despegue de la producción y la necesaria acumulación de capital. No es casual que gran parte de estos países viviera entonces una larga etapa autoritaria, aunque atravesada de una inestabilidad crónica, en la medida en que los golpes se sucedían y las diversas facciones militares se sustituían unas a otras. Algo así ocurrió en Bolivia, donde los oficiales conservadores derrocaron en 1971 al general populista Juan José Torres e impusieron una dictadura brutal; o en Perú en 1975, donde los oficiales moderados destituyeron a los populistas de Velazco Alvarado, entre otras asonadas.

Mientras en México el régimen que giraba en torno al PRI se mantenía firme, sin intervención militar, y afrontaba los nuevos desafíos sociales (por un lado, con la represión de la policía, y por otro, alentando nuevamente la parafernalia populista), en los demás países grandes y desarrollados de la región se impuso una larga cadena de intervenciones militares, inaugurando un nuevo autoritarismo, fundador de regímenes caracterizados como burocrático-autoritarios. Se conformó entonces una cadena que invistió no sólo a Brasil y la Argentina, donde los militares ya habían invadido la arena política en el pasado, sino también a Chile y a Uruguay, la democracia hasta entonces más sólida del continente. Es así que quedaron en pie sólo unas pocas: la de Costa Rica, donde el ejército había sido abolido en 1948 tras una guerra civil,

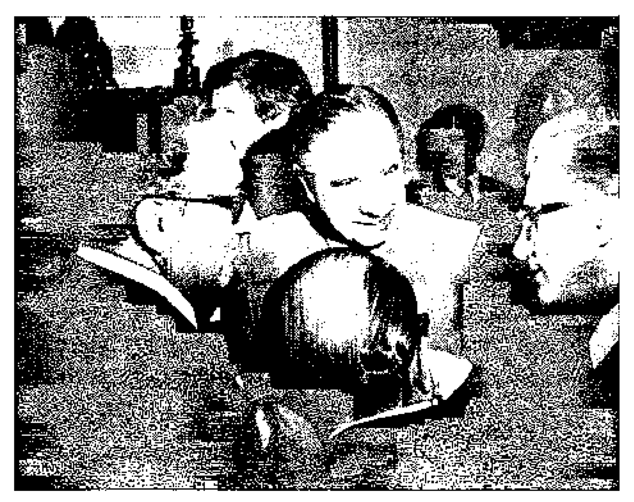
y otras, que se sostuvieron más allá de sus evidentes problemas, como las de Colombia y Venezuela.



Representante del llamado "socialismo militar" latinoamericano, Juan Francisco Velasco Alvarado ocupó la presidencia de facto de Perú entre 1968 y 1975. El autodenominado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas impulsó medidas como la reforma agraria, la reforma empresarial y las reformas minera y pesquera, por las que expropió y estatizó importantes sectores de la economía peruana.

¿Dónde, cuándo y por qué se manifestó este nuevo autoritarismo? El primero y más largo de dichos regímenes fue el que se instauró en Brasil en 1964, que se institucionalizó y se prolongó, si graves crisis políticas, hasta 1985. Distinto fue el caso de la Argentina, donde un primer régimen, instalado en 1966 bajo la guía del general Onganía, no alcanzó a consolidarse –doblegado por la reacción de la oposición y las divisiones de los militares–, hasta el punto de verse forzado a abrirle las puertas a su peor enemigo: Juan Domingo Perón, quien retornó triunfante a la patria y venció en las elecciones presidenciales de 1973. Sin embargo, pronto las diversas facciones del peronismo se debatieron entre ellas y confrontaron con la tercera mujer de Perón, María Estela Martínez (Isabel Perón), quien arribó al poder tras la muerte de su marido (el 1° de julio de 1974), pero se mostró incapaz de gobernar. Poco después, el 24 marzo de 1976, el poder cayó nuevamente en manos de las fuerzas

armadas, las cuales arrasaron toda forma de oposición, aunque fallaron en su intento de consolidar el régimen, que colapsó debido a los resultados económicos adversos, las divisiones en el ejército y la derrota en la guerra de Malvinas en 1982. A su vez, de 1973 datan los dos golpes de estado en que desembocaron las largas crisis de Uruguay y Chile, punto de partida de los regímenes militares que se prolongaron hasta 1985 y 1989 respectivamente. El golpe en Uruguay llegó como culminación de un prolongado conflicto social y armado, y de la paralela militarización del estado. El golpe en Chile fue el traumático punto de inicio de una larga dictadura, en la que el poder personal del general Pinochet se consolidó y comenzó, con las fuerzas armadas concertadas con las tecnocracias civiles, una recuperación económica que inauguró en América Latina la vía de las reformas neoliberales (un camino a lo largo del cual marcharía con el tiempo el resto de los países, con distintas modalidades).



Henry Kissinger (a la izquierda) junto al general Augusto Pinochet (de frente), junio de 1976. Reuters.

¿Pero qué tenía de "nuevo" aquel autoritarismo, en particular en un continente que había visto tantos? Lo que se verá a continuación acerca de sus fundamentos sociales, los modelos económicos en los que se inspiró y sobre su ideología lo aclarará mejor. Por ahora, basta observar la intensidad del impulso "revolucionario" de las fuerzas armadas (aunque menos de lo que parecía a primera vista), es decir, su ambición de regenerar la nación, y la determinación con la que tendieron

a hacerse cargo del poder como institución, repartiéndoselo entre las diversas armas o delegándolo en un alto oficial sobre el que trataban de ejercer el control. En tal sentido, a menudo se ha hablado de regímenes militares institucionales, que en realidad se erigían en guardianes de la cohesión política y la unidad ideológica de la comunidad nacional. Guardianes de naciones entendidas como organismos, a los que se creían llamados a mantener en armonía y equilibrio, erradicando las que juzgaban como causas remotas de la inestabilidad política, la agitación social y el subdesarrollo político; en suma, de sus divisiones. En ese sentido, se trataba de causas que, para las fuerzas armadas, abrevaban en el comunismo, es decir, en las fuerzas sociales, en los modelos económicos y en las orientaciones ideológicas de las cuales se nutría la mezcla entre marxismo y nacionalismo que crecía entonces en la región y contra la cual desencadenaron su violencia.

No es casual que los países en los que se establecieron estos regímenes fueran también aquellos en los que más fuertes y profundas habían sido las raíces del populismo, como la Argentina y Brasil, o donde por primera vez parecía posible lanzar el socialismo, como Chile y Uruguay. Al respecto, la percepción de la amenaza que representaban dichas corrientes para la alianza con Occidente y para la economía capitalista influyó en la naturaleza misma de estos regímenes. De hecho, en los años sesenta fueron, en proporción, menos violentos y estuvieron mejor dispuestos hacia los pilares económicos del desarrollismo; en cambio, durante los años setenta se volvieron violentos hasta el límite del terrorismo de estado y cambiaron radicalmente el modelo económico, inclinándose hacia el neoliberalismo, como respuesta a una amenaza que consideraron grave e inminente, y a la que se propusieron extirpar de raíz.

Un régimen militar típico fue el surgido en la Argentina en marzo de 1976, cuando el gobierno de Isabel Perón se derrumbó víctima de sus contradicciones internas y de su incapacidad para frenar tanto la incontrolable espiral inflacionaria como la oleada terrorista que barría el país, desgarrado por los atentados cometidos por la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), un grupo paramilitar de extrema derecha, por un lado, y por el otro, por los Montoneros, la guerrilla peronista que invocaba el socialismo nacional. En este marco, cuando las fuerzas armadas tomaron el poder, no sólo no suscitaron protestas sino que a muchos argentinos, en particular a los sectores medios, cansados de tantos años de violencia y retórica revolucionaria, les pareció natural, cuando no deseable. Ese consenso implícito y el clima de terror que

reinaba en el país convencieron a las fuerzas armadas de que eran lo bastante fuertes y legítimas para erradicar las raíces de la denominada "subversión" de una vez y para siempre, sin reparar en los modos. Para ello, los militares argentinos buscaron evitar el aislamiento internacional y recurrieron a una masiva represión clandestina, que involucraba la desaparición de personas, secuestradas de sus casas por la noche, encerradas en lugares secretos de detención, torturadas al extremo y por lo general asesinadas, tras lo cual hacían desaparecer los cuerpos. Fuera de toda norma y control legal, la represión se abatió a diestra y siniestra, y a la violencia política se unió no pocas veces la violencia privada, todo dentro de una apariencia de normalidad, cuyo punto cúlmine fue la realización pacífica en la Argentina del campeonato mundial de fútbol de 1978.

De hecho, la represión era la mayor argamasa entre las diversas facciones de las fuerzas armadas y el orden restaurado a hierro y fuego era el único "éxito" que podían proclamar a los ojos de la población, ante la cual no podían exhibir logros económicos como los que detentaban el régimen brasileño y, en parte, el chileno. Finalizada la fase más intensa de la represión, reaparecieron con fuerza las antiguas fracturas que minaban a las fuerzas armadas argentinas, tanto respecto del modelo económico (los nacionalistas pusieron palos en la rueda a los liberales) como del tiempo y los modos de la liberalización del régimen. Este se encontró cada vez más en el plano inclinado de los conflictos internos, agravados por la debacle económica y la protesta contra las violaciones de los derechos humanos, encabezada con coraje por las Madres de Plaza de Mayo. Esto fue así hasta que el riesgo de vigorizar el régimen y conferirle popularidad ocupando en 1982 las islas Malvinas, bajo soberanía británica pero reivindicadas desde siempre por la Argentina, se les reveló fatídico.

El Brasil de los militares

Surgida del golpe de estado del 1º de abril de 1964, la dictadura brasileña se prolongó hasta 1985; abarcó así una larga fase de la historia nacional durante la cual Brasil cambió profundamente. En sus orígenes estaban los temores expresados por los militares acerca de la seguridad y el desarrollo del país; seguridad que juzgaban amenazada por el gobierno a cargo de João Goulart, a quien acusaban de simpatizar con Cuba y el mundo comunista, separando de ese modo a Brasil de la causa occidental.



João Goulart, durante un desfile en Nueva York en 1962.

Respecto del desarrollo, creían que se encontraba obstruido por el populismo del gobierno, al que acusaban de estimular el caos social y dilapidar preciosos recursos alentando la organización campesina y secundando las cada vez más numerosas luchas obreras, causa de la inflación. Con esa percepción y el apoyo estadounidense, los militares tomaron el poder mediante un golpe incruento, al que denominaron *revoluçao*. Se abrió entonces el largo régimen que pasó por varias y diversas fases, y presentó no pocas peculiaridades en el panorama de las dictaduras de la época. En el campo político y militar, gobernaron a través de actos institucionales que les daban poder constituyente y, a partir de 1968, poderes absolutos. Realizaron así profundas purgas en la administración pública, en la universidad y en el ejército. Además, prohibieron los partidos políticos tradicionales, ejercieron un estrecho control sobre los medios de comunicación, desmantelaron las ligas campesinas, impusieron sus funcionarios al frente de los estados de la federación, mantuvieron abierto el Parlamento, aunque lo limitaron en buena parte de sus funciones. Con ese propósito, impusieron un bipartidismo coercitivo, es decir, un sistema político limitado y vigilado, en el cual figuraba un partido de gobierno y uno de oposición moderada. Entre fines de los años sesenta y principios de los setenta, cuando se organizaron protestas estudiantiles y sindicales, surgió la guerrilla y la iglesia católica tomó distancia del gobierno, el régimen no titubeó en

utilizar la fuerza. Se calcula que hubo cerca de 50 000 arrestados, 10 000 exiliados y varios centenares de asesinados y desaparecidos. La tortura se volvió habitual; varios sindicatos fueron cerrados y numerosos diputados expulsados del Parlamento. A partir de 1974, ya fuera porque la represión había dado los resultados deseados, o porque la oposición tendió a reunirse al amparo de la iglesia, o bien porque las divisiones (siempre al orden del día entre los militares) minaron su disciplina, el régimen abrió una larga fase de liberalización, que se vio obligado a pilotear con el objetivo mayor de aterrizar en una democracia fuerte y controlada.

Garantizada de este modo la seguridad, los militares se comprometieron con el desarrollo, su principal meta, porque estaban convencidos de que, en tanto Brasil no estuviese desarrollado, sería fácil presa del comunismo, y también porque entendían que a la nación le correspondía un destino de grandeza. El núcleo del proyecto era la profundización del proceso de industrialización, extendiéndolo a los sectores más avanzados y aprovechando los inmensos recursos nacionales. Sus protagonistas serían el estado, el capital privado nacional y el extranjero. En términos absolutos, los resultados no fueron desdeñables, a tal punto que durante varios años el producto nacional creció a un ritmo del 10% anual y se habló en todas partes del milagro brasileño.

Brasil vivió una modernización autoritaria, durante la cual se elevaron las exportaciones industriales y la ocupación laboral en la industria. Además de autoritaria, esa modernización fue desigual. Invirtiendo la prioridad populista, los militares postularon una política en dos fases (no proporcionales): primero el crecimiento, luego el mejoramiento de las condiciones sociales. Por un lado, se produjo un *boom* demográfico sin precedentes, una rápida urbanización y una sustancial reducción del analfabetismo; por otro, la desocupación continuó siendo muy elevada y, mientras los salarios caían, la ya amplia brecha entre los sectores pudientes y la masa de desheredados se ensanchó aún más. De este modo, los militares modernizaron Brasil, pero dejaron pendiente el problema de su integración social. No obstante, durante largo tiempo contaron con un vasto e implícito consenso, en especial entre los sectores medios, que se beneficiaron del crecimiento económico, al igual que del orden social restaurado por el régimen. Esto fue así hasta que, a mediados de los años setenta, estos mismos sectores comenzaron a sufrir el peso de la opresión y a hacer valer su voz para inducir al régimen a liberalizarse.

Del desarrollismo al neoliberalismo: la economía de los militares

No es posible afirmar que todos los regímenes militares que se impusieron en la época en América Latina abrazaran el mismo dogma económico. En tal sentido, ya hemos mencionado cómo, entre los años sesenta y setenta, se inició la transición del modelo dirigista prevaleciente luego de la crisis de 1929 –cuyos límites eran evidentes desde que se rompió el enlace virtuoso entre crecimiento económico y distribución de la riqueza– hacia un modelo liberal, es decir, abierto al mercado mundial, que comenzaba a dirigirse hacia lo que luego se llamaría "globalización". No obstante, más allá de las diferencias profundas, todos tenían un objetivo común, antes político que económico. A excepción de algunos de tendencia populista que se impusieron en los Andes o en Centroamérica, el resto de los regímenes apuntó a desmantelar la política económica de los populismos y las bases sociales que los habían nutrido, y a la inversa, a imponer un gobierno destinado a desarrollar la economía, es decir, más eficiente y competitivo, orientado a favorecer la acumulación de capital interno y la atracción de los capitales externos necesarios para el despegue económico. A tal fin, los regímenes desarrollistas y autoritarios de los años sesenta o los liberales (incluso más autoritarios) de la década siguiente confiaron, por un lado, en la eliminación de la política y, por otro, en los tecnócratas (formados en las mayores academias estadounidenses), a quienes consignaron el manejo de la economía.

Las bases sociales y el modelo económico del nuevo autoritarismo fueron explícitos en los regímenes de los años sesenta y tuvieron evidentes rasgos clasistas. Esto ocurrió también en México, donde se gestó un autoritarismo corporativo cimentado a lo largo del tiempo, aunque bajo la enorme presión de la modernización. En general, se trató de regímenes en los cuales el estado mantuvo un rol clave, de manera directa (en especial en el campo de las industrias de base consideradas estratégicas), o indirecta, asegurando las condiciones políticas y jurídicas que los militares en el poder y sus aliados consideraban imprescindibles para el desarrollo, esto es, para promover su premisa de la acumulación de capital, un desarrollo que concebían anudado a la industria. Para ello, era preciso una industria integrada, no sujeta a la importación de bienes de capital y tecnología, sino en condiciones de asegurar el ciclo productivo de los bienes vitales para el mercado interno en su totalidad. Para profundizar el grado de industrialización y favorecer la transferencia tecnológica de los países más avanzados, confiaron en el capital

privado nacional, pero sobre todo en el externo, que se esforzaron por atraer en gran cantidad e inducir a inversiones productivas.

Ese modelo no se distanciaba en sí del desarrollista más que por la radicalidad y los métodos autoritarios que en general adoptó. En su base era explícita la convicción de que en estos países periféricos no existían las premisas sociales y culturales para la democracia política, la cual tendía a desembocar en el populismo, y a las que se endilgaba la responsabilidad por la frustración del desarrollo. La solución –siempre según estos regímenes– residía en la suspensión de la democracia hasta tanto el desarrollo hubiera generado condiciones sociales que la hicieran sostenible, lo que comportó la clausura de los Parlamentos y los partidos, la censura a la prensa, la represión de la oposición y el control de los sindicatos. Todos estos factores, además de neutralizar a los movimientos populistas, crearían la calma social y la seguridad jurídica requeridas por los capitales externos para arriesgar inversiones productivas ingentes y de larga duración, que de hecho se triplicaron en la segunda mitad de los años sesenta.

De allí surgieron las bases sociales de los nuevos autoritarismos, las cuales comprendían, grosso modo, a los sectores medios excluidos por los populismos, a los sectores burgueses y propietarios, y también a vastos estratos de los sectores sociales intermedios y de un nuevo grupo intelectual de formación tecnocrática, que siempre estuvo en la primera línea junto a los militares, proclamando la causa de la modernización autoritaria. Esto comportó una transferencia masiva de recursos de la coalición populista (de los asalariados en particular y los sectores populares en general) a la nueva coalición social en el poder, que se proponía conducir el desarrollo económico una vez liberado de obstáculos políticos. En este sentido, de un país a otro los resultados fueron diversos. En proporción a las expectativas, los únicos que tuvieron éxito fueron los dos países con el mayor mercado interno y en los que estas políticas fueron sostenidas largo tiempo y con mayor coherencia: Brasil y México, que a mediados de siglo concentraban el 42% de la producción industrial latinoamericana, pero que a mitad de los años setenta alcanzaban ya el 60%. Ello no quita que ambos dejaran una pesada herencia a sus sucesores, en términos de desigualdad social y endeudamiento externo.

Todo era peor en la Argentina y Chile, donde el pasaje a una fase más madura de la industrialización encontraba límites estructurales poderosos y donde la resistencia de las coaliciones populistas fue más amplia. De hecho, en esos países los regímenes militares se propusieron

desanudar el modelo económico basado en la industria y el mercado interno, y llevar a cabo una radical liberalización económica. Esto se realizó dándole nuevo aliento a la teoría de las ventajas comparativas, es decir, sacrificando la industria que había crecido al amparo del proteccionismo y concentrándose en la producción de bienes requeridos por el mercado mundial que se podían producir en condiciones ventajosas –en particular, materias primas–, o bien proponiéndose desmantelar la coalición de intereses conformada con el tiempo alrededor del nacionalismo económico. Sin embargo, los resultados en la Argentina y en Chile fueron distintos. Mientras que en el primer caso el intento de introducir *manu militari* el modelo liberal fracasó, aunque no evitó los enormes costos sociales, y la lucha intestina en las fuerzas armadas distorsionó o limitó sus efectos, en el caso chileno fue introducido y propulsado con mano de hierro, con resultados sobre cuya valoración hay juicios en parte discordantes.

El Chile de Pinochet: vidriera neoliberal

La larga dictadura militar conducida por el general Augusto Pinochet en Chile, que se prolongó desde 1973 hasta 1989, tuvo el típico hálito regenerador de los regímenes de la época, en el sentido de que no se concibió como un breve paréntesis autoritario debido a una peculiar crisis, sino como el inicio de una nueva era en la historia nacional. Más que otros regímenes, persiguió sus objetivos con nuevos y drásticos métodos, no escatimando medios en la represión de los opositores, y lanzando a los cuatro vientos las recetas económicas prevalecientes durante varias décadas y creyendo en los libretos de los tecnócratas liberales, en su mayoría formados en la escuela de Milton Friedman, los llamados *Chicago Boys*. Sólo de ese modo –pensaban– y con el auxilio clave de un régimen autoritario que impidiera la reacción política y sindical, Chile liquidaría el aparato dirigista y proteccionista consolidado con los años, y considerado un lastre para el desarrollo. Asimismo, aplicando la necesaria liberalización, el país se embarcaría en el camino del crecimiento económico y de la reducción de la pobreza, premisas clave del retorno a un sistema democrático que el régimen suponía al final de aquel proceso (aunque lo concebía, claro, como una democracia protegida, bajo la tutela de las fuerzas armadas).

Con ese objeto, el régimen chileno aplicó en forma más radical en ciertos momentos (en particular en los años setenta), y de modos más flexibles

y heterodoxos en otros, las típicas recetas económicas liberales. Para ello, redujo drásticamente el peso del estado en la economía, realizando privatizaciones masivas; abrió el mercado nacional al comercio exterior, obligando al sistema productivo local a volverse competitivo o desaparecer; liberalizó el mercado financiero y desreguló el mercado de trabajo; eliminó el control sobre los precios e incentivó la exportación y la diversificación, entre otras acciones. El balance, no obstante, es complejo. Los críticos ponen el acento en los costos sociales, que fueron enormes, tanto que sólo una dictadura podía imponer una política económica tan radical. La recesión de los primeros años llevó la tasa de desocupación más allá del 15%; la causada por la caída del sistema financiero al inicio de los años ochenta fue aún más grave, tanto que provocó vastas protestas, duramente reprimidas. Hacia el final de la dictadura, el poder adquisitivo de los salarios era más bajo que veinte años antes y el gasto social también se había reducido. El crecimiento económico mismo, lejos de ser espectacular, estuvo sujeto a fuertes oscilaciones.

Junto a los argumentos críticos existen, sin embargo, argumentos favorables al balance económico de la dictadura. Fue su política –afirman quienes valoran positivamente sus resultados– la que echó las bases del largo, constante y extraordinario crecimiento económico chileno desde mediados de los años ochenta, a tal punto que los gobiernos democráticos que la sustituyeron, aunque se esforzaron por atenuar sus más intolerables efectos sociales, no demolieron sus fundamentos. En efecto, el régimen de Pinochet habla revolucionado la estructura productiva chilena, tornándola en general más eficiente y capaz de resistir, mejor que las otras de la región, los desafíos del mercado global. Incluso había conducido la transformación de un país, en gran medida agrícola y prisionero de los vaivenes del precio internacional del cobre, hacia una economía más articulada y con una base industrial más vasta, en el vértice de la cual creció durante la dictadura una robusta clase empresaria, a menudo beneficiada por sus lazos políticos con el régimen, pero también fruto del despegue de la actividad productiva. Se trató de una clase que le brindó amplio apoyo a Pinochet, como le aseguraron por largo tiempo los vastos estratos de los sectores medios a los que la modernización económica de la época le permitió mejorar su tren de vida, a tal punto que, derrotado en el plebiscito de 1988 (posibilitado por la Constitución que el propio régimen había redactado ocho años antes), el general Pinochet dejó la presidencia con el apoyo del 43% de los chilenos. Un porcentaje ciertamente elevado después de quince años de gobierno dictatorial.

La antipolítica y la Doctrina de Seguridad Nacional

La ideología más o menos oficial de los regímenes militares fue la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), elevada a dogma en las academias militares de la mayoría de los países, en la que se formaron los oficiales que luego asumieron los gobiernos y estuvieron al frente de grandes empresas públicas o de organismos destacados.

A menudo entendida como un trasplante, es decir, fruto del adoctrinamiento masivo de los ejércitos latinoamericanos en las escuelas militares estadounidenses, en realidad la DSN tenía raíces locales más profundas y antiguas. No es que la influencia profesional e ideológica ejercida por las fuerzas armadas estadounidenses sobre las latinoamericanas fuese insignificante. De hecho, creció rápidamente, llevando a su culminación el proceso iniciado durante la guerra, a través del cual la influencia militar estadounidense había minado a la europea entre los ejércitos de la región. Pero de ello se hablará luego; por ahora basta señalar que la DSN fue bien acogida porque expresaba ideas y valores que les eran cercanos, empezando por el anticomunismo y siguiendo por las funciones que les reconocía a las fuerzas armadas en la custodia de la identidad y la unidad de la nación. Elementos todos que los ejércitos de los grandes países latinoamericanos habían elaborado y asimilado desde tiempo atrás y que, allí donde no se prestaban a ser interpretados en sintonía con los dictámenes de Washington, como en Perú o en Panamá, desembocaron en regímenes militares populistas. Eso ocurrió pese a que sus miembros habían frecuentado las mismas academias militares estadounidenses que sus pares argentinos, brasileños, chilenos o uruguayos.

Ahora bien, ¿en qué consistía la DSN? Se trataba, ante todo, de una doctrina típica de la Guerra Fría, que partía del presupuesto de que el mundo estaba dividido en bloques, que el bloque occidental representaba el mundo libre amenazado por un enemigo totalitario y que a él, por historia y civilización, pertenecía y debía continuar perteneciendo América Latina. Como tal, era una doctrina de reflejos prácticos inmediatos en el contexto inmediatamente posterior a la revolución cubana, cuando América Latina se volvió la frontera más candente de la Guerra Fría. Establecidas tales premisas, la DSN definía los rasgos fundamentales de las naciones que deseaba proteger y preservar y los de la civilización en la que quería que permanecieran. Una y otra se condensaban en la noción de un Occidente cristiano, en nombre del cual dichos regímenes buscaron legitimarse.

Se trataba de una concepción que conducía a dos resultados, ambos familiares para el imaginario organicista que desde siempre atrajo a los militares. Imaginario común al de los mismos populismos que combatían, de los cuales replicaban sus premisas (es decir, la idea de nación como comunidad orgánica), invirtiendo el papel entre amigos y enemigos, nación y antinación. El primer resultado era que la nación por la cual velaban era un organismo dotado de una esencia, la cristiandad, abocada a la unidad con Occidente; el segundo, que un enemigo atentaba contra una y otra. Ese enemigo era el comunismo, en boca de todos por entonces y que, desde hacía un tiempo, había cobrado sentidos cada vez más vagos y vastos en el vocabulario y el pensamiento latinoamericanos. Concebido como el virus que amenazaba la esencia y la unidad de la nación, el comunismo excedía los límites fijos y se confundía con otros fenómenos; de ahí que apareciese, a ojos de los militares, como un enemigo enmascarado, interno e ideológico, que acechaba en los rincones más recónditos e impensados. Interno porque habitaba la más profunda fibra de la sociedad sin mostrar signos distintivos; ideológico porque, al cultivar una visión del mundo incompatible con la civilización occidental y cristiana, la erosionaba desde adentro. Además, había tomado las armas invocando la revolución y con el tiempo también se distinguiría por su militancia, convicción ideal o estilo de vida, que parecían extraños a la sociedad o dedicados a minar sus bases "envenenando" a la juventud con su ideología. Establecidas esas premisas, no sorprende que la represión no conociese límites precisos y atacara, con especial intensidad, los ambientes intelectuales: estudiantes, docentes, periodistas, escritores, etcétera.

Más allá de la DSN y de su concepto de seguridad, estos regímenes aspiraban al desarrollo; con ese propósito confiaron ampliamente en los tecnócratas, que ostentaban la ciencia económica necesaria para obtenerlo. Para ello, replicaron la horma –en un contexto más moderno– de los regímenes oligárquicos de fines del siglo XIX y del positivismo que los impregnaba. Al igual que aquellos, vieron en la política y sus conflictos un factor que obstaculizaba y distorsionaba el desarrollo económico y la armonía social. En suma, fueron regímenes antipolíticos que, libres de los estorbos de la dialéctica política y social, crearon las condiciones en las cuales aplicar las leyes y la ciencia del desarrollo económico, con resultados muy variados.

La represión

La violencia política fue en gran medida la nota dominante de los años sesenta y setenta en América Latina. Violencia revolucionaria en nombre del pueblo y la justicia social, violencia contrarrevolucionaria en nombre de la defensa del Occidente cristiano. Por intensidad y alcance, esta última superó en gran medida a la primera, diferenciándose además de los modos de ejercer la violencia en el pasado. No es casual que durante los años setenta el problema de las violaciones a los derechos humanos en las dictaduras latinoamericanas se impusiera en la opinión pública mundial. En general, el panorama fue análogo en todas partes, desde el Chile del general Pinochet hasta el Paraguay del general Stroessner, de la Bolivia del general Bánzer al Uruguay, pasando por la Argentina del general Videla. Países que, a través del plan Cóndor, se prestaron asistencia recíproca para perseguir con mayor eficacia a los opositores en los países vecinos y donde los arrestos, la tortura, los asesinatos y la desaparición de personas se volvieron la norma. Al respecto, es lícito hablar de estado terrorista, puesto que todos ejecutaron vastas y brutales represiones, violando las propias leyes. La cantidad de personas que sufrieron tortura y secuestros alcanza, en total, varias decenas de miles, mientras que los que perdieron la vida superaron los 200 en Uruguay, los 300 en Brasil y los 3000 en Chile. Pero el caso donde la represión asumió formas más sistemáticas y modalidades más siniestras fue el de la Argentina, donde el régimen militar instalado en 1976 causó la desaparición de cerca de 11 000 personas, según las estimaciones oficiales, o 30 000, según algunas de las organizaciones de derechos humanos.

Los Estados Unidos y su hegemonía en riesgo

Los años comprendidos entre la revolución cubana y la década de 1980, cuando la Guerra Fría comenzó a dar los primeros signos de su ocaso, fueron los de más intensa presencia estadounidense en la región, tanto en términos políticos y económicos, como diplomáticos y militares. Incluso con el retorno a las intervenciones directas prohibidas desde la época de la "buena vecindad" (como en 1965 en República Dominicana), por no referirnos a las operaciones secretas, abundantes entonces, ni al cordón sanitario creado alrededor de Cuba con el embargo eco-

nómico y su expulsión –decidida en 1962– de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Si así fue se debió al hecho de que la influencia conquistada por los soviéticos gracias al régimen de Castro imponía a los Estados Unidos problemas inéditos de seguridad. Aunque no sólo eso, porque la misma revolución en Cuba y la oleada revolucionaria posterior, extendida a gran parte de la región, les planteó el problema de la hegemonía, es decir, de la credibilidad de su liderazgo y la capacidad de ejercerlo en su propia zona de influencia, con el consenso de los gobernantes y la población. Por primera vez después de la guerra, el fuerte viento que soplaba contra Occidente en los países apenas emancipados del dominio colonial o en vías de descolonización se sintió con fuerza también en América Latina, donde la reunión de nacionalismo y socialismo encontraba en el antiimperialismo su punto de fusión, y ponía en cuestión no sólo la potencia de los Estados Unidos, sino los fundamentos de su civilización, esto es, el mercado, la democracia política y el estado de derecho liberal. En síntesis, si los Estados Unidos se encontraban entonces presentes en América Latina y si su presencia acabó, la mayoría de las veces, por manifestarse de un modo agresivo y nada beneficioso, fue porque la región era para ellos "la más peligrosa del mundo", como señaló Kennedy, es decir, la frontera de la Guerra Fría. Una frontera tan caliente que estuvo a un paso de causar el incendio planetario en ocasión de la crisis de los misiles de Cuba en octubre de 1962, cuando los espías aéreos estadounidenses avistaron en la isla las rampas de los misiles soviéticos, listas para alojar cabezas nucleares.

A esto se sumaba la debilidad del liderazgo estadounidense. El uso creciente de la fuerza para combatir el comunismo en la región y su alianza con las fuerzas armadas de los distintos países fue el segundo pilar, junto a la ayuda económica, de la Alianza para el Progreso en los años sesenta. Se trataba de una estrategia reformista para regenerar el liderazgo político estadounidense en América Latina a favor del desarrollo, que además buscaba frenar el desafío comunista, contra el cual el gobierno estadounidense se preparó de diversos modos. En principio, actualizando la doctrina, es decir, estableciendo que, desde la óptica de la seguridad hemisférica, las fuerzas armadas latinoamericanas no estaban llamadas a velar contra una eventual agresión externa, sino sobre la seguridad interna. El enemigo ya estaba en casa y, de acuerdo con la Doctrina de la Seguridad Nacional, era preciso actuar contra él. Desde ese punto de vista, la contrarrevolución se volvía la principal

función de los ejércitos continentales, los cuales estaban más que predispuestos a desplegarla.



Crisis de los misiles en Cuba. Fotografía tomada por el ejército estadounidense en noviembre de 1962.

Las consecuencias de esta doctrina fueron profundas e inmediatas. Desde 1962, la ayuda militar de los Estados Unidos a las fuerzas armadas latinoamericanas creció a ritmo sostenido. En 1963, el Southern Command estadounidense fue transferido a Panamá para coordinar mejor los generosos Military Assistance Programs ofrecidos a los militares del subcontinente, quienes se beneficiaron en gran manera al recibir un creciente número de consejeros militares estadounidenses (particularmente elevado en las repúblicas de América Central), o al participar en cursos de adiestramiento y adoctrinamiento en Panamá o en las academias militares norteamericanos. Se trataba de cursos en los que los oficiales latinoamericanos eran instruidos en la guerra irregular contra las guerrillas y la acción cívica, es decir, la actividad civil destinada a quitarles a los guerrilleros el consenso de la población, como construir caminos o escuelas en lugares apartados donde el estado estaba ausente. A esto se sumaba la obtención de nuevas y

modernas armas, ligeras, precisas y fácilmente transportables, útiles para combatir la guerrilla.

Si bien es cierto que estas acciones fortalecieron las relaciones entre las fuerzas armadas latinoamericanas y el gobierno de los Estados Unidos, deducir que todo corrió por cuenta de Washington desafía la historia y los hechos. La historia, porque ya se ha visto que, en gran parte de los casos, las instituciones profesionales aseguraron a un mismo tiempo la tutela de la seguridad y de la identidad nacional. Los hechos, porque no se verifica relación efectiva entre la cantidad y la calidad de la ayuda estadounidense a las fuerzas armadas latinoamericanas y su grado de fidelidad política a Washington. De hecho, los militares argentinos y brasileños, que en los años sesenta se aliaron con los Estados Unidos, por ejemplo, tenían relaciones menos intensas con sus colegas estadounidenses que los peruanos o panameños, que en 1968 fundaron regímenes populistas.

Los nuevos golpes de estado que tuvieron lugar en el área en los primeros cinco años de la Alianza para el Progreso no representaron un mayor éxito para la Casa Blanca, que se hallaba empeñada en acreditarse como fuente de progreso económico y democracia política. Es cierto que en 1964 la Doctrina Mann los legitimó al inscribir la lucha contra el comunismo como prioridad absoluta de la política estadounidense. No obstante, antes que poner de manifiesto su poderío, sancionó el fracaso del gran diseño de John F. Kennedy, obligado a reconocer la propia incapacidad para conciliar hegemonía y democracia, y a llegar a un acuerdo, o directamente privilegiar los regímenes militares en nombre de la seguridad.

Hasta qué punto los Estados Unidos estaban en dificultades, y a la cola más que en la vanguardia de los eventos latinoamericanos, lo confirmó la administración Nixon. Primero, en 1969, cuando el informe que el presidente encomendó a Nelson Rockefeller no hizo más que avalar lo que el nuevo autoritarismo ya estaba haciendo, al afirmar que los Estados Unidos no podían imponer a nadie el mejor modo de marchar hacia la democracia y que, allí donde esta había fracasado, los militares eran los únicos en condiciones de garantizar el orden, el progreso y la lealtad internacional. Más tarde, en 1970, cuando no supo impedir la victoria electoral de Salvador Allende en Chile ni pudo convencer a los militares chilenos de bloquear su asunción, hasta que su brutal intervención tres años después satisfizo la voluntad estadounidense de liberarse de aquel gobierno incómodo, aunque al precio de fundar un régimen más largo y menos dócil que lo deseado.

Las relaciones de los Estados Unidos con América Latina parecen haber cambiado luego de 1976, con el arribo a la Casa Blanca de James Carter, heredero natural de la tradición política de sus predecesores demócratas y, por lo tanto, de sus intentos de reafirmar el liderazgo político y moral estadounidense en el hemisferio, predicando y favoreciendo la democracia. Sin embargo, Carter se encontraba ante un contexto distinto. Ya fuera en los Estados Unidos, donde el resultado de la guerra de Vietnam, el escándalo *Watergate* y el *shock* petrolero, entre otros factores, habían debilitado aún más el prestigio del país y con él el poderío presidencial, o en América Latina, donde, salvo en América Central, la amenaza comunista ya no dominaba el clima, sino que la marea de represión y militarismo cubría gran parte de la región. Una marea que, más allá del brete moral que creaban a los Estados Unidos sus relaciones estrechas con regímenes de credenciales a veces sanguinarias, los ponía también ante un serio problema político. ¿Cómo enfrentar con eficacia a la Unión Soviética en el terreno de la libertad, los derechos humanos y la democracia si los Estados Unidos no procuraban la vigencia de esos valores en su propia órbita?

Dadas esas premisas, Carter basó su política en dos elementos clave. El primero fue la localización de los conflictos, es decir, lejos de afrontar cada uno de ellos desde la óptica de la Guerra Fría, como un desafío soviético en América Latina, se propuso desactivarlos reconduciéndolos a su dimensión local, es decir, nacional. De allí el tímido deshielo con Cuba, la apertura inicial hacia los revolucionarios que accedieron al poder en Nicaragua en 1979 y, en especial, la firma, en 1977, de los acuerdos con el presidente panameño Omar Torrijos, que preveían el retorno del Canal a la soberanía de Panamá hacia 1999, con lo cual se cerró la antigua herida a menudo invocada por el nacionalismo latinoamericano. El segundo punto fue el de los derechos humanos, a partir de la decisión de imponer su respeto en el centro de la política hacia América Latina, amenazando con sanciones a los regímenes que continuaran violándolos.

Sin embargo, la política de Carter tuvo escaso éxito y acabó pronto en la mira de los republicanos y de las corrientes neoconservadoras, que cobraban forma en los Estados Unidos. Ni su esfuerzo de localizar los conflictos impidió que los sandinistas nicaragüenses virasen hacia Cuba y que América Central deviniese un foco de la Guerra Fría, ni la restitución a Panamá de la soberanía sobre el Canal aplacó el antiamericanismo en América Latina, al tiempo que suscitó el rencor de los conservadores de Washington. En fin, tampoco su política de dere-

chos humanos –aplicada, no obstante, con gran circunspección– tuvo efectos concretos: en los Estados Unidos generó la acusación de que Carter debilitaba a los aliados, haciéndoles el juego a los soviéticos, mientras que en las dictaduras latinoamericanas estimuló el siempre latente nacionalismo.

1965, los *marines* en República Dominicana

Si el uso de la fuerza para imponer el orden en la propia esfera de influencia es índice de debilidad más que de fortaleza (en el temor de que los medios pacíficos no basten para mantenerlo), los 18 000 *marines* y demás tropas enviadas por el presidente Lyndon B. Johnson en 1965 a República Dominicana fueron su emblema. Ello a pesar de que una intervención militar destinada a imponer un gobierno leal, al tiempo que a evitar la asunción de un presidente sospechado de simpatías comunistas –algo evidente bajo todo punto de vista–, fue disfrazada como una acción de paz para separar las facciones contrapuestas del ejército dominicano y cubierta por una resolución de la OEA. No obstante, quedó ampliamente demostrado que los *marines* favorecieron el éxito de la facción que al año siguiente permitió la elección de Joaquín Balaguer, aliado de los Estados Unidos, e impidieron el retorno al poder del presidente Juan Bosch, depuesto por los militares en 1963 tras apenas siete meses de gobierno. De hecho, Bosch era considerado cercano a Fidel Castro y por lo tanto una amenaza, pero había sido elegido democráticamente con cerca del 60% de los votos.

Varios son los factores que contribuyeron a hacer de esta intervención militar un evento tan significativo en la historia dominicana y latinoamericana en general. El primero es que ningún caso se prestaba tan bien para establecer un paralelismo con Cuba, ya fuera por su proximidad geográfica –que hacía de Cuba el espacio natural para los revolucionarios dominicanos–, o porque la República Dominicana había estado sujeta durante décadas a la feroz dictadura de Rafael Trujillo y su familia –a quienes los Estados Unidos les habían garantizado amistad y protección–, y tenía una estructura económica y social semejante a la cubana en épocas de Fulgencio Batista. Es cierto que en 1961 el asesinato del dictador había contado con el beneplácito de los estadounidenses, ya decididos a descartarlo en el clima de la Alianza para el Progreso. Pero también lo es que la transición que se abrió tras su muerte les ofreció pocas garantías contra la amenaza comunista, vista la elección de Juan Bosch y la convic-

ción estadounidense de que aquel intelectual nacionalista y antiamericano estaba siendo atraído por el ejemplo cubano.



Juan Bosch, durante un discurso en República Dominicana. El 25 de septiembre de 1963, tras siete meses de gobierno, Bosch fue derrocado por un golpe de estado.

El segundo motivo que hizo de aquella intervención militar un evento clave en la historia regional y en las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina es que fue la primera vez desde los años veinte (cuando la Buena Vecindad de Franklin Delano Roosevelt había proclamado la doctrina de la no intervención) que las tropas norteamericanas desembarcaron y combatieron en la región. Ni en la Guatemala de 1954, cuando Dwight Eisenhower había pergeñado la acción para derrocar a Jacobo Arbenz, ni en la Cuba de 1961, donde John F. Kennedy autorizó el fallido desembarco de Bahía Cochinos en el intento de hacer caer el aún fresco régimen castrista, habían entrado en acción las fuerzas armadas estadounidenses. El hecho de que lo hicieran en la República Dominicana y que fuesen decisivas para el resultado de aquella crisis da la medida del grado de tensión sin precedentes que había alcanzado la Guerra Fría en la región y de los medios a los que la Casa Blanca estaba dispuesta a recurrir para mantener la fidelidad en el área. Además, pone de manifiesto la precoz declinación del espíritu originario de la Alianza para el Progreso y de la ya imparable polarización política de toda la región, precursora de la violencia que marcaría la historia durante los siguientes años.

10. La década perdida y la democracia (re)encontrada

En el transcurso de los años ochenta, la mayoría de los países latinoamericanos que en las dos décadas precedentes había entrado en el oscuro túnel del autoritarismo, recuperó la democracia, por lo general después de largas tratativas y algunos pactos entre las fuerzas armadas y los partidos políticos. Así fue al menos en la parte meridional del hemisferio. En cambio, para América Central esa misma década fue la de mayor violencia política, durante la cual los conflictos intestinos en varios países del istmo se mezclaron en forma explosiva con la última y virulenta fase de la Guerra Fría, y en cuyo transcurso el presidente estadounidense Ronald Reagan no escatimó medios para aislar y derrocar al régimen sandinista de Nicaragua. La democratización convivió durante largo tiempo con una tremenda recesión económica, cuyo aspecto más dramático fue la crisis del endeudamiento que afligió a casi todos los países de la región. En general, las nuevas democracias nacieron en un contexto desfavorable y, en la mayor parte de los casos, se revelaron frágiles y sujetas a antiguos vicios.

Las transiciones democráticas

La cita con la democracia que en gran parte de los países de América Latina había fracasado en diversas ocasiones –en los años treinta, después de la guerra, y en los años sesenta y setenta– se renovó en la década de 1980. Al igual que en el pasado, no se trató del fruto de una larga y virtuosa evolución histórica: la democracia enfrentó diversos obstáculos, de distinta envergadura (crisis económica, desigualdades sociales, cultura política autoritaria, conflictos intestinos), y hondos traumas, causados en muchos casos por la violencia del decenio que acababa de finalizar y sus secuelas políticas, morales y jurídicas. Al mis-

mo tiempo, parecían reunirse entonces por primera vez –y con tiempos y modos variables de país a país y de zona a zona– diversos factores que facilitaban la aclimatación de la democracia.

Por un lado, la oleada revolucionaria ya se había extinguido o había retrocedido en casi toda la región. Donde aún persistía, como en América Central, se acabaría durante la década, ya sea como respuesta al panorama mundial, donde el modelo socialista que tantos sueños había alimentado en una época marchaba hacia su triste ocaso, o bien por las derrotas sufridas y el rechazo por parte de vastos estratos sociales tras un decenio de violencia. Incluso la fascinación desatada durante un tiempo por la revolución cubana se nubló luego de que el régimen de Castro tomara rasgos típicos de las dictaduras comunistas. Por otro lado, la oleada contrarrevolucionaria estaba llegando a su fin y suscitaba, en los sectores que en principio la habían aceptado o tolerado, un rechazo masivo, a tal punto que en numerosos países de la región se manifestó por primera vez, de modo concreto, una nueva sociedad civil, consciente de la importancia de la democracia política y de los tremendos daños causados por las guerras ideológicas aún frescas. No sólo eso, sino que también estaba decidida a pedirles cuentas a los militares por las arbitrariedades cometidas. Se trató de una sociedad en la cual, con el tiempo, afloraron límites y fragilidades, pero que en el pasaje a la nueva etapa democrática suscitó grandes esperanzas y reunió amplios consensos.

El hecho de que en la segunda mitad de los años ochenta el contexto internacional mutase hasta tal punto que llevó al colapso del mundo bipolar sólo acarreó beneficios a la transición latinoamericana hacia la democracia, dado que se atenuaron y desaparecieron las excusas o las razones que la Guerra Fría había ofrecido a los protagonistas de la vida política latinoamericana para negarle valor a la democracia: ya fuera en nombre de la justicia social y la democracia "sustancial", o en el de la seguridad y la democracia "protegida". El triunfo fue de Occidente, puesto que parecía que el colapso progresivo del imperio soviético le brindaría a la democracia un prestigio y un sentido nuevos. Claro que primero había que llegar a ella, dado que la América Latina de los años ochenta estaba en gran parte gobernada por dictaduras; por tanto, su calidad y solidez dependían de muchos factores, tanto históricos como políticos, económicos y sociales. Además, dependían del modo en el que cada país cambiara de régimen (de la dictadura a la democracia), pasaje que tuvo diversas formas y cuya historia cubrió gran parte de la década de transición a la democracia y los primeros pasos –inciertos y colmados de obstáculos– de los nuevos regímenes políticos.

Dejando por un momento de lado el istmo centroamericano, el arco cronológico cubierto por la transición se extiende desde las elecciones de 1979 en Ecuador a las de 1989 en Chile –donde se escogió democráticamente como presidente a Patricio Aylwin–, pasando por las elecciones en las que Perú eligió a Fernando Belaúnde en 1980, y por las que en 1983 llevaron al poder a Raúl Alfonsín en la Argentina, hasta llegar a aquellas aún restringidas que, en 1985, sancionaron en Brasil la victoria de Tancredo Neves, y tantas otras que en la mayor parte de Sudamérica pusieron fin a la larga era militar. Además, hubo evidentes signos del nuevo clima y la democratización en curso en México, donde se abrieron las primeras grietas serias en el dominio del PRI: primero con la victoria de la oposición en las elecciones de algunos estados y luego, en 1988, cuando grandes masas se congregaron para protestar contra el fraude de que se acusó al gobierno en ocasión de la elección a presidente de Carlos Salinas de Gortari. No obstante, en su mandato, Salinas de Gortari no bloqueó las reformas, que de hecho avanzaron con mayor rapidez a partir de entonces, para democratizar el ya desgastado sistema político mexicano.



Ulysses Gimarães, José Sarney y Tancredo Neves, juntos en un palco en Goiana, Brasil, durante la campaña presidencial. Candidato a la presidencia por la Alianza Democrática, Tancredo Neves fue el primer presidente civil electo en el curso de más de veinte años, el 15 de enero de 1985. Archivo de la Agencia Estado Goiana.

En ningún caso la transición a la democracia siguió la vía revolucionaria: los militares no fueron expulsados del poder por vías violentas, lo cual es fundamental a la hora de comprender el gran peso que conservaron durante mucho tiempo en el seno de los nuevos regímenes democráticos. Incluso allí donde su fracaso fue más evidente, como en la Argentina, no fue la presión popular el determinante de la precipitada retirada, sino sus incurables divisiones internas y las humillaciones a las que expusieron al país y a sí mismos en la guerra de Malvinas. No obstante, las riendas de la transición democrática estuvieron mucho más firmes en manos de las fuerzas armadas allí donde se jactaban de su éxito en el campo económico y con el tiempo fueron capaces de crear regímenes estables e institucionalizados. Así fue en Brasil, donde en 1985 las plazas se colmaron de multitudes que reclamaban elecciones directas, al grito de *diretas já*, pero el nuevo presidente fue electo por el Parlamento, de acuerdo con el procedimiento previsto por el régimen. Por otra parte, aún más que las presiones civiles, fueron las preocupaciones sobre el efecto de un gobierno tan largo en la disciplina de las fuerzas armadas lo que las convenció de iniciar una larguísima transición, piloteada por los mismos militares, quienes mantuvieron una enorme influencia en el régimen democrático. Así fue también en Chile, donde el plebiscito con el que el general Pinochet esperaba prolongar su gobierno no tuvo los resultados esperados –puesto que sus ambiciones fueron vetadas por el 56% de los votos–, pero donde la transición siguió las etapas previstas por la Constitución instaurada por el régimen en 1980 y sobre la base de la cual, aun derrotado Pinochet, los militares conservaron un amplio poder tras el retorno de la democracia.

A menudo, las transiciones comportaron verdaderas negociaciones y pactos entre los militares y la oposición, a través de las cuales los primeros impusieron a los segundos las amnistías que ellos mismos aprobaban para sustraerse a los eventuales procesos por violaciones a los derechos humanos. Así sucedió en Uruguay, donde la derrota súbita del gobierno militar en el referéndum con el cual buscaba legitimarse abrió las puertas al retorno de la democracia en 1985. Sin embargo, ello no les impidió negociar con los partidos tradicionales las condiciones de la transición y garantizarse la inmunidad por los crímenes cometidos. El pacto entre militares y civiles caracterizó también la transición democrática en Perú, donde la democracia encontró enormes dificultades para echar raíces.

La economía en los años ochenta: la década perdida

La pésima coyuntura económica volvió aún más complejos los primeros pasos de estas jóvenes democracias, ya minadas en gran parte por una historia de convulsiones políticas y por la herencia de los regímenes militares. Acompañada por el empeoramiento de los más significativos índices sociales –de la desocupación al porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza, de la distribución de la riqueza a la movilidad social–, fue una coyuntura negativa al punto de que incluso hoy se la recuerda como la década perdida, es decir, un decenio sin desarrollo, durante el cual la región retrocedió en el campo económico y social. A fines de los años ochenta, los datos hablaban por sí solos: el producto medio por habitante era menor que el de diez años antes y la deuda externa había crecido en forma desmesurada, a tal punto que su devolución se había vuelto un enorme lastre para la economía de la región, atravesada por crisis tan profundas que desestabilizaron el sistema económico internacional en su conjunto, del cual América Latina se había vuelto el eslabón más débil. Todo comenzó en 1982, con la crisis en México, que explotó cuando su gobierno anunció que no estaba en condiciones de pagar la deuda externa y adoptó una drástica devaluación de la moneda; crisis que amenazó con extenderse, barriendo a los acreedores, y que indujo a los gobiernos, la banca y los organismos internacionales de financiación a tratar de ponerle remedio. El período finalizó en 1989, con la crisis argentina, donde la inflación quedó fuera de control y se transformó en hiperinflación, fenómeno que causó pánico económico, dramáticos efectos sociales y una aguda crisis política. Además, dicha crisis, lejos de quedar confinada al territorio argentino, se manifestó en forma virulenta en otros países, desde Brasil hasta Perú, y de Bolivia a Nicaragua.

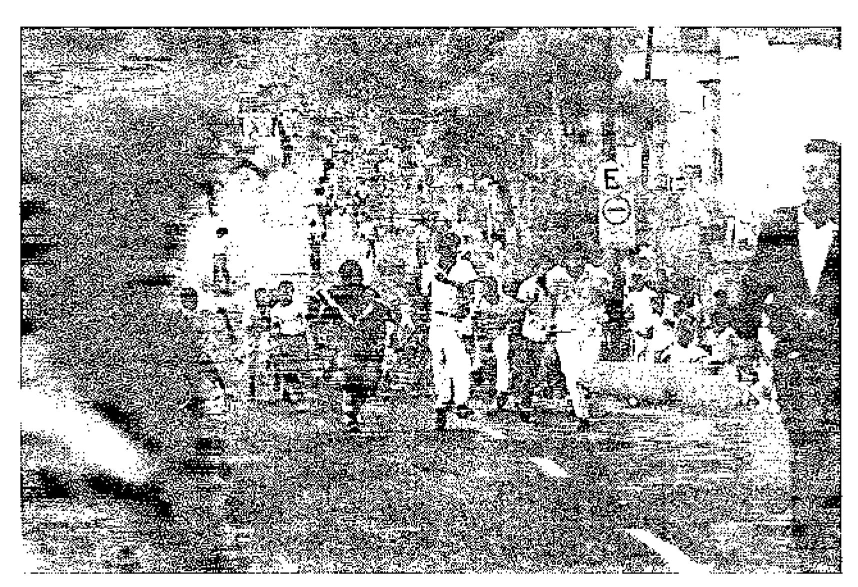
En la base de esta profunda debacle que golpeaba a la región justo en el delicado pasaje hacia la democratización (motivo por el cual se necesitaba, más que nunca, un robusto crecimiento económico que le permitiese responder a las enormes expectativas creadas en torno a ella) es posible identificar varios factores. Algunos eran exógenos, es decir, vinculados a la economía mundial y fuera de la influencia de los gobiernos latinoamericanos; otros, numerosos, eran endógenos, y condujeron a la toma obligada de dolorosas decisiones. Entre los primeros se destacan el estancamiento económico mundial, el consecuente drenaje del flujo de inversiones y créditos que hasta entonces estaban dirigidos hacia América Latina, y la brusca subida de las tasas de interés, por lo cual los

amplios préstamos obtenidos a tasas reducidas en los años setenta presentaron vencimientos a tasas muy elevadas y la deuda externa de numerosos países se transformó en una avalancha a punto de abrumar a la ya frágil economía regional. En tanto, los factores endógenos se revelaron estructurales y pusieron de manifiesto que el modelo de desarrollo de los últimos decenios (dirigista y volcado al mercado interno) había cumplido su ciclo. Dicho modelo, obsoleto ya en los años ochenta, se estaba transformando en un peligroso obstáculo. La estructura productiva de América Latina parecía inadecuada para soportar los desafíos de un mercado cada vez más abierto y global, en el cual perdía cuotas de comercio y quedaba rezagada respecto de la revolución tecnológica en curso en otras áreas del globo.

Tales fenómenos eran observables en la ineficiencia del parque industrial (desarrollado a la sombra del proteccionismo y poco apto para absorber los gigantescos flujos de población hacia las ciudades) y en el envejecimiento de la infraestructura. A esto se sumaban los cada vez más inmanejables desequilibrios en las cuentas públicas, plagadas de enormes déficits fiscales y muchas veces a punto de desencadenar espirales inflacionarias en toda la región, así como en la depresión crónica de la inversión. En fin, la fuga masiva de capitales hacia los tranquilizadores réditos de la banca de los países más avanzados (aproximadamente equivalente a la cantidad de la deuda externa de la década) fue el golpe de gracia para las economías en problemas y con urgente necesidad de reconversión.

Superar esos obstáculos y sanear las cuentas no eran tareas fáciles ni indoloras, puesto que comportaban pesados costos sociales, de los cuales eran consecuencia los planes de ajuste estructural negociados por los gobiernos del área con el Fondo Monetario Internacional, que preveían bruscos recortes a la inversión pública para mantener en equilibrio el balance fiscal, políticas monetarias restrictivas para contener la inflación y radicales devaluaciones para estimular la exportación. En todos los casos se trataba de medidas gravosas para democracias aún jóvenes y lejos de consolidarse, en las cuales la fe en las instituciones políticas era baja y donde la adopción de duras medidas sociales, impuestas por los acreedores externos, corría el riesgo de alimentar la siempre latente reacción nacionalista, o de despertar la apenas dormida cruzada ideológica contra el imperialismo –de lo cual hubo algunas señales cuando Fidel Castro trató de asumir, sin lograrlo, la conducción de los países deudores–, o bien de desencadenar verdaderas revueltas sociales. Algo así ocurrió en Venezuela en 1989,

cuando el presidente Carlos Andrés Pérez, acorralado por la caída de los ingresos petrolíferos tras los *dorados* años setenta adoptó un plan de austeridad (recortando subsidios a algunos bienes primarios) que desencadenó una oleada de protestas populares. Dichas protestas fueron reprimidas con violencia y costaron cerca de trescientas vidas, en lo que aún se recuerda como el Caracazo, que marcó el inicio de la profunda crisis de uno de los pocos regímenes políticos que había atravesado indemne los años sesenta y setenta.

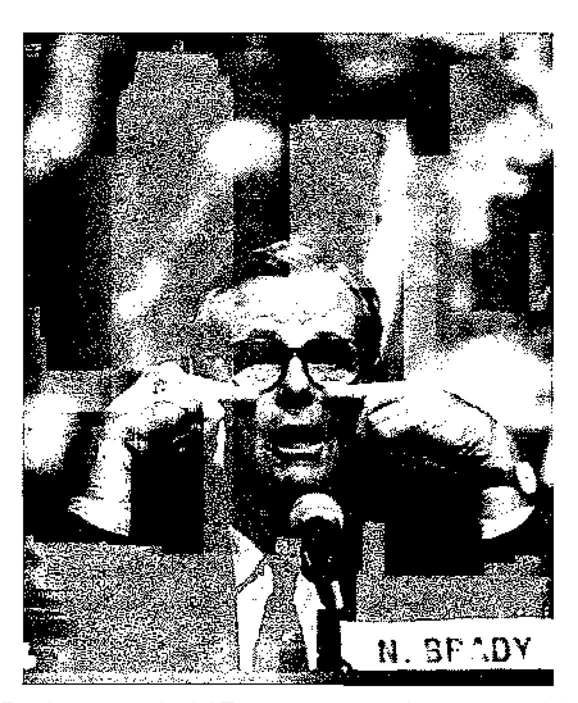


Imágenes del Caracazo, 4 de febrero de 1989. Archivo Telesur.

Por estos motivos, el panorama económico y social de los años ochenta en América Latina fue oscuro e indujo a la CEPAL a un doloroso aprendizaje. No obstante, hacia finales de la década era observable la recuperación de algunos sectores industriales y agrícolas, que se habían vuelto competitivos. El enfoque de los problemas económicos tendía a asumir un perfil menos ideológico y más pragmático; asimismo, estaban echándose prometedoras bases para una más estrecha integración regional, en particular entre los países del Cono Sur, que resultaba impensable apenas una década antes. En definitiva, comenzaban a perfilarse los profundos cambios de los años noventa.

La crisis de la deuda externa

En el origen de la crisis de la deuda que en los años ochenta estranguló a los países latinoamericanos se hallaba la peculiar coyuntura financiera mundial de la década precedente. En los años setenta, cuando los precios del petróleo se dispararon a niveles vertiginosos, los países exportadores de crudo se encontraron con enormes capitales disponibles que depositaron en buena medida en la banca estadounidense y europea, la cual buscó a su vez extraer el mayor beneficio posible de aquella ingente liquidez, haciendo generosos y abundantes préstamos a los países en vías de desarrollo, entre los cuales figuraban los más grandes e industrializados de América Latina. A comienzos de los años ochenta, este mecanismo –en apariencia virtuoso, pero en realidad muy peligroso– se atascó. El estancamiento mundial, la contracción de las exportaciones latinoamericanas y en especial el alza de las tasas de interés transformaron las deudas en una soga al cuello tan apretada que durante varios años la región se volvió exportadora neta de capitales hacia los países centrales.



Nicholas Brady, secretario del Tesoro norteamericano, autor del plan de reestructuración de la deuda externa latinoamericana.

Desde que en 1982 México suspendió el servicio de la deuda haciendo temblar a los acreedores y, en los años sucesivos, en América Latina comenzó a aparecer el fantasma de un cártel de deudores –alentado en forma radical por Fidel Castro y en términos más moderados por el presidente peruano Alan García–, la solución al problema de la deuda encabezó la agenda (política y económica) del continente. De hecho, la burbuja de la deuda comenzó a desinflarse sólo hacia el final de la década, no porque el problema desapareciera, sino debido a la nueva estrategia adoptada por el gobierno estadounidense de George Bush. El llamado plan Brady –nombre del secretario del Tesoro de los Estados Unidos– de 1989 tenía en cuenta que la mayor parte de los países latinoamericanos no estaba en condiciones de pagar la deuda en los términos previstos y que los costos sociales eran tan elevados que ponían seriamente en riesgo los nuevos regímenes democráticos, con la grave posibilidad de provocar el caos en la región entera, en el preciso momento en que se definía la Guerra Fría y, por primera vez después de tanto tiempo, los temores estadounidenses por la seguridad del área se atenuaban.
Por ello, el plan Brady desestimó la estrategia orientada a reestructurar de vez en cuando la deuda y a proporcionar nuevos créditos para servir los intereses vencidos. En su lugar, preveía un paquete de medidas destinadas a reducirlos y que buscaban alentar las reformas económicas de los países beneficiarios. Se trataba, claro, de reformas liberales, que redujeran el peso económico del estado, abrieran el mercado a la competencia exterior, incentivaran el ingreso de capitales extranjeros, etcétera. Al plan, que en general obtuvo resultados positivos, se adhirieron los países más grandes y endeudados de la región, que así pudieron volver al mercado de capitales, que les había cerrado sus puertas durante esos años. En 1991, por primera vez desde el inicio de la crisis de la deuda, entraron en la economía latinoamericana más capitales que los que salieron.

América Central en llamas

Mientras el autoritarismo y la violencia política disminuían en los años ochenta en numerosos países de la región, lo contrario ocurría en América Central, donde ambos fenómenos alcanzaban su cénit. Ello se debió a diversas razones; en primer lugar porque, a excepción de Costa Rica (donde la democracia era más sólida y los indicadores sociales bastante razonables, a pesar de los golpes propinados por la crisis económica), los otros países del istmo presentaban estructuras sociales y regí-

menes políticos mucho más atrasados que el resto de América Latina. La acelerada modernización de los años sesenta había sentado las bases para cambios políticos y sociales radicales similares a los que ya habían afectado a los países más avanzados. Se trataba de trastornos surgidos debido a la creciente demanda de integración social, que encontró un insuperable obstáculo en las rígidas jerarquías étnicas y sociales, y en la violenta reacción de las oligarquías en el poder. El resultado fue la explosión de tres guerras civiles que ensangrentaron durante mucho tiempo la región, en especial en Guatemala, El Salvador y Nicaragua (donde los revolucionarios arribaron al poder en 1979). Todo ello alimentó el fantasma del efecto dominó de los golpes de la guerrilla contra otros regímenes en riesgo.

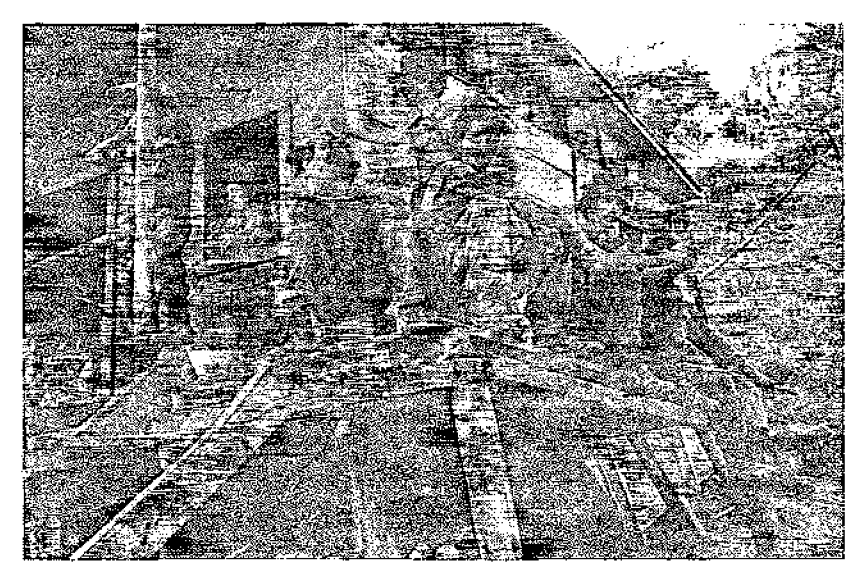
El segundo motivo que transformó al istmo centroamericano en la zona más conflictiva de la región y una de las más candentes del mundo fue su relevancia en el contexto internacional de la época. Ello se debió a su ubicación geográfica y sus peculiares relaciones con los Estados Unidos (de larga data), también a la influencia que Cuba y, a través de ella, la Unión Soviética ejercían en el área, y al giro impuesto por el presidente Ronald Reagan en 1981, cuando llegó a la Casa Blanca, que a partir de entonces hizo de la región el vía crucis de conflictos que la trascendían ampliamente. Entonces, los ya graves y radicales problemas de América Central se internacionalizaron, y al hacerlo se volvieron aún más desgarradores y violentos.

De las guerras civiles centroamericanas, la más larga y sangrienta fue la de Guatemala, donde, entre los años sesenta y los noventa, las víctimas fueron cerca de 200 000, el 90% de las cuales fueron causadas por masacres perpetradas por el ejército y los grupos paramilitares. En verdad, se trataba de una guerra que tenía en sus lejanos orígenes la brusca interrupción del experimento populista de Jacobo Arbenz en 1954, pero que sufrió una escalada a fines de los años setenta. Por un lado, el gobierno militar llevó a cabo una política de tierra arrasada, es decir, orientada a crear un vacío alrededor de los insurgentes recurriendo a la violencia indiscriminada y a la concentración de la población rural, en su mayoría indígena, en villas especiales. Dicho proceso alcanzó su punto culminante en 1982, cuando tomó el poder por la fuerza el general Efraín Ríos Montt, quien recuperó de ese modo buena parte del territorio que durante un tiempo había estado bajo el control de la guerrilla. Esta, en el frente opuesto, se reunió el mismo año en una organización única, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), cuya acción se fue limitando con el tiempo.

Más breve, pero igualmente brutal, fue la guerra civil que tuvo lugar en El Salvador en la primera parte de los años ochenta; el más pequeño pero intensamente poblado país de la región, donde la violencia ya se había desatado, pero que recién entonces desembocaba en una guerra civil abierta. Esto ocurrió al día siguiente del éxito revolucionario en la vecina Nicaragua, cuando El Salvador se convirtió –para los militares locales y la administración estadounidense– en la nueva línea de trinchera, de contención primero y derrocamiento después, de una supuesta amenaza comunista. La violencia del ejército y, más aún, la de los escuadrones de la muerte organizados por las derechas políticas se volvió endémica e ilimitada, y alcanzó incluso al arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980, tras haberla denunciado. Por su parte, la oposición política y militar se reunió en un comando único –el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional-Frente Democrático Revolucionario (FMLN-FDR)–, que ejerció el control sobre amplias zonas rurales e intentó en varias ocasiones el asalto a la capital, aunque sin éxito. El imperativo de impedir el flujo de armamentos para la guerrilla salvadoreña y el temor al contagio revolucionario estuvieron entre los argumentos adoptados por la Casa Blanca y los militares de El Salvador, a quienes la primera les proveyó ingentes ayudas y asistencia para alentar una política agresiva en la lucha contra el gobierno sandinista.

Presidida por Daniel Ortega, desde el comienzo a cargo de la junta de gobierno creada por la revolución y luego electo presidente en 1984 en elecciones de las que se ausentó gran parte de la oposición, la experiencia de la Nicaragua sandinista suscitó grandes esperanzas y causó desilusiones no menores. Por un lado, sufrió el cerco de la mayor potencia del mundo, los Estados Unidos, que recurrió a todos los medios –salvo la intervención militar– para doblegarla: embargo económico, *covert actions* y, en especial, financiamiento de un ejército contrarrevolucionario, los "contras", en la frontera del país. Se trató de un ejército que con el tiempo produjo enorme descontento debido al nuevo curso político asumido y que contribuyó en gran medida a minar la economía del país y la popularidad del gobierno. Por otro lado, el gobierno sandinista manifestó los típicos rasgos del populismo latinoamericano, es decir, tuvo ambiciosos planes destinados a integrar a las masas –en particular, la reforma agraria y una masiva campaña de alfabetización–, pero tendió también a concentrar el poder y monopolizarlo en nombre de la revolución, perdiendo en ese proceso el vital apoyo de la iglesia y del sector privado –que rápidamente se

pasó a la oposición–, a lo cual también contribuyeron los estrechos lazos con Cuba.



Campamento de "contras". Nicaragua, 1984. Fotografía de Marcelo Montecino.

Dadas tales premisas, no sorprende que la transición democrática en América Central llevada a cabo en la segunda mitad de los años ochenta resultase una de las más precarias y que las instituciones democráticas nacidas tras las derrotas del autoritarismo fuesen frágiles y poco representativas, sujetas a fuertes condicionamientos, ya fuera de parte de los ejércitos locales o de los Estados Unidos. Así fue en Guatemala, donde el gobierno surgido de las elecciones de 1986 estuvo sujeto a enormes presiones militares y evitó investigar las violaciones a los derechos humanos; también ocurrió algo semejante en El Salvador, donde las elecciones de 1984 no pusieron fin a la violencia, la cual bloqueó las negociaciones entre las partes en lucha, que se reanudarían recién a inicios de los años noventa. En cuanto a Nicaragua, los esfuerzos diplomáticos de los vecinos sentaron las bases de un diálogo entre el gobierno y los contras, que culminó en las elecciones de 1990, cuando el despliegue de fuerza de los Estados Unidos y la crisis económica provocaron el colapso sandinista y la victoria electoral de Violeta Chamorro, candidata de la oposición. Con este triunfo se terminaron los enfrentamientos armados.



Monseñor Romero y la iglesia

El asesinato de monseñor Oscar Romero en la Catedral de San Salvador, el 24 de marzo de 1980, levantó una oleada de indignación y fue emblema del estadio de violencia ciega que sembró de muerte a América Central. Una etapa de la cual la iglesia católica fue testigo y protagonista, además de víctima en muchas ocasiones. Tanto es así que, en la mayor parte de los casos, los conflictos que desgarraron la región se presentaron como guerras religiosas que la escindían en su interior. Algo así ocurrió en El Salvador, donde a un gobierno que pretendía legitimar el exterminio, invocando la defensa del Occidente cristiano del comunismo, se oponía una guerrilla en la que los militantes católicos y marxistas luchaban lado a lado; o en Nicaragua, donde la iglesia contribuyó a la caída de Somoza, pero se halló dividida ante el gobierno sandinista, que reivindicó desde el primer momento su naturaleza a la vez cristiana y socialista, y nombró ministros a tres sacerdotes, agudizando los conflictos con las autoridades eclesiásticas, que se convirtieron en sus más intransigentes opositoras. ¿Por qué en todos los frentes la invocación al Dios de la cristiandad resonó con tanta intensidad como legitimación de causas opuestas? ¿Por qué hubo tantos mártires católicos en países católicos, gobernados por militares cristianos en lucha contra guerrillas marxistas *y* cristianas? Como ya había sucedido en otras partes, en América Central se sumaron la crisis de la modernidad y la crisis de la cristiandad. La primera fue provocada por la rápida erosión de las relaciones sociales tradicionales y la apertura al mundo de las comunidades típicas del universo rural y provincial, y su corolario: la fractura del orden político elitista y el *boom* de la demanda de participación política y democracia social. Baste decir, por ejemplo, que en los veinte años anteriores al asesinato de Romero la población de El Salvador casi se había duplicado (en especial la urbana); que el producto nacional se había multiplicado por tres, el comercio exterior por diez y la escolarización se había triplicado. Por su parte, la crisis de la cristiandad se puso en evidencia en la lectura latinoamericana de la actualización eclesiástica propiciada por el Concilio Vaticano II, que halló terreno fértil en las condiciones sociales de América Central, donde prosperó la iglesia de los pobres o iglesia progresista, inspirada en la Teología de la Liberación.

En aquella sociedad en rápida modernización, atravesada por grietas abismales, la iglesia católica conservaba un vasto poder moral y un profundo arraigo social. A eso se sumaba que las diferentes facciones

opuestas se remitían a la doctrina católica para legitimarse. Se trataba, en definitiva, de una sociedad poco secularizada en la que no era común distinguir entre "pueblo" y "pueblo de Dios", entre política y religión, y donde a los militares –que siempre se erigían en pilares de la unidad política y espiritual de la nación y que habían tenido su más firme aliada en la iglesia– les resultaba inconcebible e intolerable que los jóvenes tomaran las armas en nombre de la misma cristiandad que ellos invocaban, disputando así las fuentes de legitimidad política y espiritual sobre las cuales construían su rol y su función. Por lo tanto, en su contra y en contra del clero al que acusaban de tolerancia con el enemigo desencadenaron la furia típica de quien arremete contra herejes culpables de haber traicionado la causa común: la de la nación católica, de la que se sentían guardianes. Visto a través del prisma del imaginario del cuerpo de oficiales, aquellos militantes a menudo movidos por el sueño de hacer la revolución para echar las bases de una sociedad verdaderamente cristiana, antiliberales y antiamericanos, no eran otra cosa que la manifestación del virus que había atacado el organismo de la nación; un virus que era preciso erradicar, de ser necesario eliminando también a los envenenadores de las mentes, a los débiles, a los "traidores": todas acusaciones odiosas de las que monseñor Romero no escapó y que finalmente le costaron la vida.



Monseñor Romero.

La doctrina Reagan y América Latina

La política de la administración Reagan (quien asumió en 1981 y ejerció dos mandatos) se focalizó en América Latina, y en particular en América Central, a las que consideraba escenarios clave de la confrontación con la Unión Soviética, es decir, de la última y decisiva fase de la Guerra Fría, que se cerró con la implosión del imperio soviético. En tal sentido, la política de Reagan imprimió un giro significativo al enfoque hacia la región. De hecho, en la misma medida en que James Carter se había visto forzado a regionalizar los conflictos locales, Reagan hizo lo posible por globalizarlos, por cuanto comprendió que eran una pieza menor del rompecabezas mayor de la Guerra Fría, en la que la credibilidad de la potencia estadounidense y su capacidad para imponerse a los soviéticos y sus aliados estaban en discusión. Así ocurrió con Nicaragua, contra la que su gobierno se lanzó llegando a recurrir a medios ilegales, eludiendo el Congreso –que le había negado los fondos para los contras– y procurándoselos a través de la venta clandestina de armas a Irán, enemigo de los Estados Unidos. Así fue con El Salvador, cuyo ejército obtuvo más ayuda que cualquier otro de la región; y lo mismo ocurrió en general en toda América Central, una región en la que los intereses estadounidenses se habían reducido, pero que, por desgracia, fue llevada –con la revolución sandinista– al terreno de la lucha entre las grandes potencias. Lo mismo tuvo lugar, finalmente, en la pequeña Granada, una isla británica que de latina tenía poco, pero adonde Reagan envió en 1983 a los *marines* para deponer un régimen favorable a Cuba.

En verdad, Reagan y sus colaboradores acusaban a las administraciones precedentes de haber sido fuertes con los amigos y débiles con los enemigos, imponiendo sanciones y presionando a regímenes aliados (en especial respecto de las denuncias de violaciones a los derechos humanos), sin obtener otro resultado que su debilitamiento. Asimismo, los culpaban de haber sido condescendientes con los regímenes nacionalistas –como en el caso de Panamá y de la restitución de la soberanía sobre la zona del Canal–, o comunistas, como Reagan creía que era la Nicaragua sandinista, hacia la que Carter había observado una discreta apertura. A partir de entonces, el criterio de la política estadounidense hacia la región fue explicitado por Jeane Kirkpatrick, embajadora ante las Naciones Unidas, quien distinguió entre regímenes autoritarios y regímenes totalitarios, "recuperables" los primeros, "irrecuperables" los segundos. Se trató de una diferenciación que in-

cluyó entre los primeros a las dictaduras amigas –censurables, pero capaces de evolucionar hacia la democracia–, y entre los segundos a los regímenes de tipo comunista –entre ellos, Cuba y Nicaragua–, sin intención alguna de convertirse en democracias. Hacia los primeros, por ende, los Estados Unidos debían tener una política firme pero amigable, de forma tal de alentarlos hacia la democratización. En cuanto a los segundos, no escatimaron medios para dejarlos en el más completo aislamiento, como en el caso de Cuba, o de estrangularlos, como en el caso de Nicaragua. Se trató de una doctrina que el propio Reagan enunció en 1985, cuando proclamó el compromiso estadounidense de sostener a quienes luchaban contra la agresión comunista, y que no hizo más que confirmar principios análogos a los cuales su gobierno de hecho se atuvo.

La interpretación en clave bipolar de los conflictos en América Central generó reacciones y tensiones con varios países latinoamericanos, muchos de los cuales –incluso con relaciones buenas o normales con Washington– la consideraban inadecuada, puesto que desconocía las raíces sociales y económicas de la crisis en curso, amenazante en la medida en que legitimaba el intervencionismo de los Estados Unidos en el área. Por ello, en 1983 nació el llamado "Grupo de Contadora", formado por Colombia, México, Panamá y Venezuela, que dos años más tarde dio su apoyo a los grandes países de Sudamérica que, ínterin, habían retornado a la democracia. Con ello se sentaba como precedente el primer esfuerzo diplomático con que los países latinoamericanos se proponían resolver "en familia" las crisis regionales. Esfuerzo que chocó con la hostilidad de los Estados Unidos, determinados a no reconocer de ningún modo al gobierno de Nicaragua, pero que todavía tenía un papel clave en la firma de los acuerdos de paz alcanzados por los presidentes de América Central en 1987, que le valieron el premio Nobel de la Paz al presidente de Costa Rica, Oscar Arias.

En enero de 1989, cuando George Bush asumió la presidencia y, a los pocos meses, la caída del Muro de Berlín revolucionó de un golpe el orden internacional, el contexto de América Latina había cambiado profundamente respecto del decenio anterior. No sólo en Sudamérica, donde hasta Chile concluiría su transición y en Paraguay sería depuesto el más antiguo dictador de la región, el general Stroessner, sino también en América Central, donde se hallaban en curso negociaciones de paz y se anunciaban elecciones en Nicaragua. Más allá de que todo ello se debiera a la política de Ronald Reagan, o que fuese el fruto de una evolución histórica sobre la cual los Estados Unidos incidieron sólo

hasta cierto punto, lo cierto es que la administración Bush se encontró ante un contexto mucho menos conflictivo que el de su predecesor. Y tal vez por eso comenzó a dar vuelta la página de la política estadounidense hacia la región, prefiriendo un enfoque más diplomático y cuidando en especial de contribuir a subsanar las profundas fallas abiertas en la "década perdida". De aquí el compromiso asumido en el frente económico con el ya mencionado plan Brady.

Por otra parte, con el enemigo soviético de rodillas, la obsesión estadounidense por la seguridad disminuyó de golpe y las relaciones con América Latina se encaminaron hacia sendas más tradicionales. Sin embargo, hubo un caso en el cual el arma usada por Bush no fue la política y la diplomacia, sino la invasión militar. Fue en Panamá, donde en diciembre de 1989 desembarcaron 20 000 militares estadounidenses para deponer y capturar al general Manuel Noriega, el hombre fuerte que detentaba las riendas del poder. Con ello, las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina entraron en una fase nueva, ya no dominada –como en la Guerra Fría– por el espectro comunista que se cernía sobre el hemisferio, sino por otros problemas, más prosaicos pero no menos importantes, a la cabeza de los cuales se destacaba la producción y el tráfico de estupefacientes en numerosos países latinoamericanos.

1989: invasión a Panamá

Acaecida mientras el mundo seguía, estupefacto, el estrepitoso colapso del imperio soviético en Europa oriental, la Operación Causa Justa –como fue denominada en código la invasión a Panamá– fue una operación militar al viejo estilo, es decir, una intervención armada destinada a cambiar el régimen político local y exportar la democracia. El hecho de que el propio Noriega hubiera sido en el pasado un precioso colaborador de los servicios secretos estadounidenses durante el conflicto centroamericano no bastó para mantenerlo en el poder. En el momento en que dichos conflictos se resolvían y la amenaza soviética perdía su atractivo, aquellos que, como Noriega, habían sido aliados útiles aunque indigestos comenzaron a ser vistos por los Estados Unidos como sujetos dedicados sólo al ejercicio de poderes dictatoriales, que ahora representaban una mancha en el centro de una región en fase de democratización, y también como corruptos protectores del tráfico de drogas, cuyo destino final eran los Estados Unidos.



Con un bombardeo simultáneo a todos los objetivos militares, el 19 de diciembre de 1989 comenzó la invasión norteamericana en Panamá, denominada "Operación Causa Justa". De acuerdo con el presidente George Bush, el objetivo era capturar a Manuel Antonio Noriega y proteger los intereses de los Estados Unidos en ese país.

En el caso de Panamá, la política de sanciones procurada por Reagan en 1987 para liberarse de un hombre demasiado incómodo y favorecer la transición democrática no había surtido efecto. Antes bien, había instado a Noriega a montar la causa nacionalista y endurecer aún más su régimen, manchándose de numerosos crímenes, el más notable de los cuales fue el asesinato de Hugo Spadafora, un destacado opositor. Fue entonces cuando, desestimando las reacciones internacionales (tan indignadas como ineficaces) y fortalecidos por el enorme prestigio y poder que les confirió el colapso del enemigo soviético, George Bush y su gobierno consideraron emplear las viejas maneras, reminiscentes de la lejanísima época del *big stick* [gran garrote]. En verdad, tuvieron éxito, ya que Noriega, que primero se había refugiado en la nunciatura vaticana, fue capturado y deportado a los Estados Unidos, donde fue procesado y condenado. Además, el grueso de la población panameña le atribuyó lo sucedido. No obstante, los costos fueron muy altos, dado que la Operación Causa Justa, lejos de ser una operación quirúrgica como se prometió, comportó grandes bombardeos a los cuarteles, donde mayor era el número de seguidores del dictador depuesto,

bombardeos que causaron numerosas víctimas –entre 1000 y 4000 según las estimaciones–, en su mayoría civiles.

Las nuevas democracias: esperanzas y límites

El retorno de las democracias o su inédito advenimiento en gran parte de América Latina suscitó, tanto en la opinión pública como en las ciencias sociales, un acalorado debate y encendidas esperanzas sobre la nueva era. Las grandes manifestaciones que las acompañaron eran de tal magnitud que las nutrían y hacían pensar que el futuro sería muy distinto del pasado. Lo que solía reivindicarse no era un orden justo y puro en nombre de alguna ideología redentora, sino elecciones transparentes y justicia para los crímenes de las dictaduras contra los derechos humanos; en definitiva, libertad y democracia. En América Latina parecía haberse expandido una nueva cultura democrática producida por una aún más novel sociedad civil, capaz de poner fin a la crónica alternancia entre la inclusión populista y la exclusión militar, y de que la democracia se volviera por primera vez sostenible en el tiempo. Una sociedad civil que se caracterizaba por su creencia en las instituciones democráticas como medio para alcanzar una mayor equidad social, o para obtener su independencia del estado. Con los numerosos movimientos sociales que formaron aquella nueva galaxia (ya fueran movimientos sindicales, grupos religiosos, organizaciones de derechos humanos o asociaciones feministas), en aquel clima de efervescencia parecía cerrarse la larga parábola histórica del corporativismo latinoamericano y su imaginario, el cual, concibiendo el orden social como una unidad orgánica, llevaba de un modo u otro a negar la pluralidad, a inhibir las instituciones designadas para gobernarla y a imponer la unanimidad política y espiritual. Por el contrario, parecía abrirse una etapa propicia porque en la región habrían echado raíces la cultura del derecho y de la libertad individual, de la tolerancia y el pluralismo.

No todas esas esperanzas se revelaron infundadas. De hecho, varios países sentaron los fundamentos de un orden democrático que aún perdura. Sin embargo, numerosas crisis indujeron pronto a reconocer que ni la sociedad civil era siempre tan robusta y virtuosa como se pensaba, ni las estructuras mentales y materiales del pasado habían sido pulverizadas. Cómplice de la dramática crisis económica, muchos y bien trenzados nudos llegaron al límite en las jóvenes democracias e incluso en aquellas que, siendo aún más antiguas, no gozaban de mejor

salud. Los ejemplos sobran, por empezar, en los países más grandes de la región, y en especial en el caso argentino, donde la brecha entre las expectativas y los resultados no podría haber sido mayor. Llegado a la presidencia sobre la ola de una catarsis democrática sin precedentes y llevado por ella al proceso donde los comandantes de la dictadura fueron condenados ante los admirados cronistas de todo el mundo, Raúl Alfonsín se vio pronto aplastado entre la reacción militar y la sindical. La primera fue expresada en numerosas revueltas en los cuarteles y la segunda, en la larga cadena de huelgas generales que constelaron aquellos años, hasta que quien en 1983 había personificado el renacimiento del país fue obligado a ceder antes de tiempo el poder a su sucesor, Carlos Menem, en 1989.

Ni siquiera en Brasil la nueva democracia se encontraba en un lecho de rosas. La nueva Constitución aprobada en 1988 sin duda le hizo dar un gran paso hacia adelante al introducir las elecciones directas a presidente con sufragio universal, restaurando el principio federal pisoteado por los militares, reconociendo el derecho de huelga y otras numerosas libertades civiles. Pero su rigidez rápidamente fue obstáculo para las profundas reformas económicas y sociales de las que el país tenía urgente necesidad si se buscaba evitar el fracaso del plan de austeridad introducido poco antes. Debido a ello, la primera presidencia democrática se cerró con una grave crisis económica y numerosos escándalos, lo cual obró a favor de la elección de Fernando Collor de Mello, un *outsider* que recurrió a la típica retórica antipolítica de los populismos, en un paréntesis poco propicio para la consolidación de la democracia en Brasil. No obstante, se trató de un paréntesis breve, que se cerró en 1992, cuando Collor abandonó el cargo implicado en una red de corrupción.

También en México las expectativas democráticas de los años ochenta se estrellaron contra viejos y nuevos obstáculos. El ya decrépito sistema del PRI parecía llegar a su fin en la medida en que sus planes de austeridad fracasaban, el descontento crecía y la población reclamaba cambios eligiendo candidatos de la oposición en algunos estados. Del cuerpo del PRI surgió una fracción que, invocando más democracia y equidad, fundó un nuevo partido y se coaligó con otras fuerzas opositoras en vistas a las elecciones presidenciales de 1988. El avance parecía inminente, pero una vez más, en medio de insistentes denuncias de fraude masivo, la victoria llevó al PRI de vuelta al poder (aunque por poco).



Venezuela y Colombia, democracias enfermas

En los años setenta, cuando gran parte de América Latina yacía bajo las botas militares, Colombia y Venezuela se distinguían como raros oasis de gobiernos civiles y democracia representativa. Sin embargo, en los años ochenta, cuando la región viró hacia la democracia, los defectos de ambos se pusieron en evidencia y si Colombia, plagada de violencia, no cambió de régimen político, Venezuela entró en una larga crisis que causaría drásticas mutaciones una década después.

En los años ochenta, la violencia que había caracterizado la historia colombiana se tornó aún más áspera y endémica. El sistema político tradicional, monopolizado por los partidos liberal y conservador, cuyos planes de pacificación habían fracasado, se reveló insuficiente para contener sus causas. Aunque los orígenes de la violencia eran múltiples, dos prevalecieron sobre los demás. El primero era la guerrilla, que sobrevivía en las zonas rurales de Colombia mientras desaparecía en el resto de la región, y su opuesto, los violentos grupos paramilitares surgidos en vastas áreas del país para combatirla; fuerzas que se añadían a los servicios de seguridad estatales (el ejército o la policía), donde el recurso a la violencia indiscriminada se volvió cada vez más frecuente. La segunda causa de la violencia era el narcotráfico, a la cabeza del cual se colocaron los grandes carteles criminales de Medellín y Cali, cuyos ricos y potentes tentáculos se introducían en cada ganglio de la vida nacional, de la política a las fuerzas armadas, de la guerrilla a sus enemigos, corrompiendo y asesinando.

En tanto, las bruscas oscilaciones del precio internacional del petróleo dieron entonces un golpe brutal al sistema político venezolano. Los dos partidos tradicionales, la democristiana COPEI y la socialdemócrata Acción Democrática, habían aprovechado las vacas gordas de los años setenta para llevar a cabo ambiciosos planes de desarrollo y ampliar sus propias bases electorales distribuyendo la renta, pero sufrieron en demasía durante el decenio siguiente. Debido a ello, cuando recurrieron a drásticos planes de austeridad, arreciaron las protestas, tanto en los sectores populares, que soportaron el mayor peso, como en los estratos medios, a los que les resultaba difícil adaptarse a los severos recortes en un país que había crecido en el mito de la infinita riqueza petrolífera. El trágico y ya mencionado Caracazo de 1989 y el intento de golpe tres años más tarde, a cargo del coronel Hugo Chávez, fueron síntomas evidentes de que el sistema estaba llegando a su límite.

Si tantos y de tal naturaleza fueron los obstáculos para la democracia en los países más grandes, y si eran aún mayores y más graves los que atenazaban a las pequeñas repúblicas de América Central, la situación tampoco se presentaba alentadora en los países andinos, donde la democracia mostraba evidentes signos de fragilidad. Comenzando por Perú, bajo la espada de Damocles de la violenta guerrilla de Sendero Luminoso, un movimiento terrorista desprendido del Partido Comunista Peruano, creador de la ideología revolucionaria indigenista que resucitaba el mito del comunismo incaico, y donde el mandato del joven Alan García, que por primera vez llevó a la presidencia al APRA, se cerró en medio del desastre económico y de graves escándalos. Las dificultades continuaron en Bolivia y Ecuador, donde la recesión económica agravó aún más las heridas de un tejido profundamente dividido en términos tanto étnicos como sociales. Ello fue así a tal punto que los rígidos planes de ajuste estructural adoptados por los gobiernos de ambos países desencadenaron vastas protestas y, al final de la década, la oposición comenzó a conjugar las viejas corrientes marxistas con el nuevo indigenismo. Se produjo desde entonces una mezcla destinada a crecer cada vez más, desafiando las bases de la democracia liberal apenas fundada.

11. La edad neoliberal

Si bien los años noventa habian comenzado bajo el signo del Consenso de Washington –un vasto plan de reformas económicas liberales con el que terminaba la larga etapa de los modelos de desarrollo dirigistas en la región–, se cerraron con evidentes señales de crisis, anunciadas por recurrentes cimbronazos financieros. En algunos países las reformas liberales fueron aplicadas de manera gradual y coincidieron con la consolidación de las instituciones democráticas, mientras que en otros acentuaron su fragilidad, desembocando en graves crisis sociales y reiterados episodios de inestabilidad política. Las transformaciones provocadas por la apertura económica y las reformas del estado fueron acompañadas por el retorno de las corrientes antiliberales y el nacimiento de nuevos movimientos sociales, entre los cuales emergieron con fuerza inédita los indigenistas. Entretanto, el clima democrático alentó los procesos de integración económica entre los países latinoamericanos así como con los Estados Unidos, aunque en este último encontraron fuertes oposiciones.

Apertura de mercados y globalización

Si la política había dominado la agenda latinoamericana de los años ochenta –la década de la transición democrática–, los noventa sancionaron la primacía de la economía. Fue entonces cuando el giro liberal de algunos países, con Chile a la cabeza, se impuso en toda la región, confiriendo su impronta a gran parte del decenio. Esto ocurrió no sólo en el plano económico, sino también en el político e ideológico, en los que ocupó el centro de la escena tanto para sus partidarios como para quienes, en el transcurso de esos años, organizaron una creciente oposición. Sin embargo, aunque las medidas económicas fueron

similares y aunque el rumbo puede haber parecido unívoco, las profundas reformas adoptadas entonces no tuvieron las mismas modalidades ni fueron en todas partes iguales. Tampoco tuvieron idéntica salida política ni iguales consecuencias sociales.

Veamos, entonces, de qué se trató esta época, recordando que existía entonces un amplio consenso acerca de la necesidad de introducir cambios y que los gobiernos contaron a menudo y durante largos años con el apoyo popular. A ese consenso contribuyeron varios motivos, entre los cuales pesó más que ningún otro el punto sin retorno alcanzado en muchos países tras la crisis económica, lo cual obligó a los gobiernos entrantes a realizar las reformas de mercado pospuestas hasta entonces, en algunos casos, como por ejemplo en la Argentina y Perú, "sin anestesia", como se decía en la época; en otros, como en Uruguay y en cierta medida en Brasil y México, con mayor gradualidad y respeto por los procedimientos democráticos.

¿En qué consistían en concreto aquellas reformas? En principio, eran estructurales, es decir, buscaban modificar las bases mismas del sistema productivo y financiero de los países de América Latina, tal como se había conformado en las décadas de desarrollo, mirando hacia el interior. El objetivo de fondo era abrir las economías locales a la competencia internacional para obligarlas a ser más eficientes e innovadoras, e incrementar el rol del capital privado a expensas del papel del estado. Desde el comercio a las finanzas, y del mercado de trabajo a la previsión social, todos los sectores fueron transformados, aunque en distinta medida y magnitud. La prioridad fue restablecer el equilibrio macroenómico, a través de la reabsorción del enorme déficit público, el control de la inflación y el saneamiento de la balanza de pagos. Para alcanzar esos objetivos, los gobiernos de la región recurrieron a masivos planes de privatización de las empresas públicas, a la liberalización de sectores antes considerados estratégicos y por ello vedados al capital privado, y a la reducción de las barreras comerciales. Dichas medidas alentaban el flujo de ingentes capitales exteriores, a menudo atraídos por legislaciones propicias.

¿Cuál fue el balance general? En principio y en relación con su efecto en lo económico, es posible afirmar que, antes de que se iniciara una grave recesión (que haría temblar y colapsar el nuevo modelo), la economía creció, aunque con mayor rapidez en la primera mitad de la década. Claro que no lo hizo a ritmos excepcionales, sino inferiores a los de otras áreas e incluso a los registrados en el pasado en la propia América Latina; tampoco llegó a achicar las grandes brechas sociales

del área, aunque sí permitió revertir el signo negativo de la "década perdida". En los años noventa, el producto per cápita creció una media del 1,6% anual, aunque a ritmos distintos de país a país, con Chile, Perú y la Argentina a la vanguardia, y Venezuela, Ecuador y Paraguay en la retaguardia. Mayores fueron los esfuerzos realizados para cancelar las cuentas públicas, cuyo déficit descendió de manera pronunciada, y los ingentes sacrificios para reducir la inflación, llevada a los niveles más bajos en décadas. De hecho, este último resultado tuvo un rol fundamental en el éxito electoral de numerosos gobiernos, beneficiados por el voto masivo de los vastos estratos sociales, afectados de manera profunda en el pasado por la inflación.



El Consenso de Washington

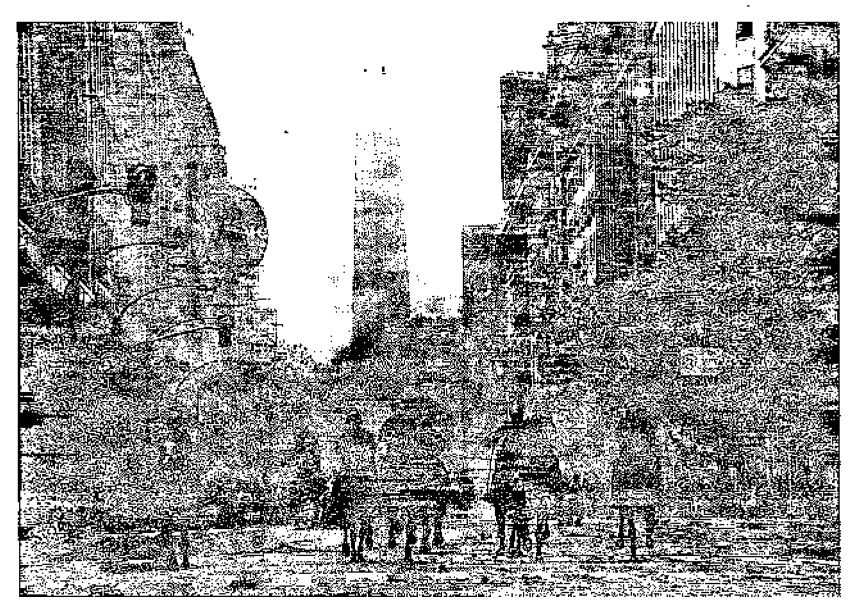
Dados sus rasgos dominantes, los años noventa suelen ser recordados como la era del Consenso de Washington, sintagma con el cual se alude, a menudo en tono polémico, a una época de armónica sintonía entre el gobierno de los Estados Unidos y los grandes organismos financieros internacionales, quienes acordaban imprimir una brusca aceleración a la liberalización de los mercados latinoamericanos. Dicha expresión se transformó en sinónimo de neoliberalismo, es decir, de una filosofía económica fiel a los dictados del monetarismo y determinada a desmantelar el estado o bien a crear un estado mínimo, desinteresado de las políticas del *welfare*, lo cual tuvo como consecuencia, entre otras, el agravamiento de la pobreza y la desigualdad en América Latina.

No obstante, aunque esa lectura sea admisible, es preciso distinguir casos y resultados. En primer lugar, es preciso recordar que el término "Consenso de Washington" fue acuñado en 1990 por el economista John Williamson, quien no escribió para proponer un determinado modelo de desarrollo neoliberal, sino para aludir a los elementos comunes y más adecuados para América Latina en las recetas económicas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Tesoro de los Estados Unidos, instituciones con base en Washington. Se refería así a las recomendaciones de liberalizar el comercio, privatizar, adoptar tasas de cambio que favorecieran la competitividad, favorecer el ingreso de capitales extranjeros y brindar garantías jurídicas a la propiedad privada, pero también a las de adoptar reformas fiscales capaces de ampliar las bases de recaudación de impuestos y concentrar el gasto

público en los sectores sanitario y educativo, de forma tal de favorecer la distribución de la riqueza, medidas estas con las que Williamson defendía propuestas ajenas a la filosofía neoliberal.

Fue también entonces cuando la economía de América Latina entró de lleno en el flujo de la llamada "globalización", es decir, que se integró a ritmo acelerado a los veloces cambios en el mercado internacional, en el que participó no sólo a partir del *boom* de las exportaciones (incrementadas a tasas más elevadas que en cualquier otra época de su historia, y con México como el país que se llevó la parte del león), sino también de su creciente diferenciación, es decir, de la inclusión de una mayor cantidad de bienes diversos, aunque con mayor énfasis en América Central y en México que en Sudamérica, donde el proceso fue mucho más lento. En síntesis, las reformas estructurales buscaron la disciplina económica y la apertura comercial antes que el crecimiento económico, que sólo recibió un tenue impulso. A ello tampoco contribuyeron las bajas tasas de inversión ni la reducida competitividad del tejido industrial latinoamericano, que volvieron más lenta aún la necesaria transformación de la estructura productiva regional y el crecimiento de su productividad, bastante baja en general, salvo en los sectores recién privatizados.

Durante los años noventa, la mayoría de los países latinoamericanos incrementó la dependencia de los flujos financieros internacionales. Mientras que en la primera mitad de la década voluminosos capitales fueron atraídos por las ambiciosas privatizaciones en curso, las reformas, en general, dieron buenos resultados y se presentaron como sostenibles. En cambio, cuando el ciclo se invirtió y el flujo se interrumpió (o se volvió más errático), se puso en evidencia la elevada vulnerabilidad de las economías latinoamericanas con respecto a los factores externos, en especial en relación con los ciclos del mercado financiero global. No es casual que las crisis financieras, de diversa magnitud, se fueran sucediendo en diversos países, comenzando por su estallido en México en 1994 y el llamado "efecto tequila", que contagió el área, y culminando por la crisis argentina de 2001, la más dramática y profunda, cuando el gobierno nacional anunció la cesación de pagos a los acreedores, con lo cual entró en lo que técnicamente se denominó *default*, producto de una crisis debida a la enorme volatilidad de los capitales externos, pero también a la política monetaria de numerosas naciones latinoamericanas.



Calles del centro de Buenos Aires, durante los sucesos del 19 y el 20 de diciembre de 2001. *La Tercera*, 19 de diciembre de 2011.

La integración regional

Aunque en los años noventa América Latina no haya estado exenta de conflictos, e incluso, en 1995, de una breve guerra entre Perú y Ecuador debido a una antigua cuestión limítrofe, la década se caracterizó por un rápido crecimiento de las relaciones económicas y políticas entre los países de la región. Si bien es cierto que las primeras tentativas ambiciosas de promover su integración económica se remontaban a los años sesenta, en la mayor parte de los casos las instituciones creadas a tal fin habían tenido un alcance limitado o un final abrupto. Cómplice de la apertura de las economías locales, en el último decenio del siglo se produjo un fuerte crecimiento de los intercambios entre países latinoamericanos, ya sea por los acuerdos preexistentes, como el Pacto Andino, o por los recién surgidos, como el Mercosur (el Mercado Común del Sur, fundado en 1991 por la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). De la creciente diferenciación de la estructura productiva de ciertos países, en particular de los más grandes e industrializados como Brasil y México, dio prueba la multiplicación de las inversiones directas realizadas por algunas de sus empresas, tanto públicas como privadas, en otras naciones de la región,

en especial para la adquisición de derechos en el campo minero y el usufructo de materias primas. Los duros efectos de la grave crisis de finales de la década sacaron a la luz los límites estructurales de estas propuestas y, en especial, la debilidad institucional de estos procesos de integración. Un caso aparte lo constituye el North American Free Trade Agreement (NAFTA), formado por Canadá, Estados Unidos y México. Puesto en vigencia en 1994, después de largas y complejas negociaciones, el NAFTA creó la más vasta zona de libre comercio del mundo, que abarca cerca de 450 millones de personas. Sobre sus efectos existen opiniones muy divergentes, aunque algunos datos son indiscutibles, en particular el aumento del comercio entre los países miembros tras la firma del tratado y la creciente radicación en México de numerosas industrias estadounidenses, en su mayoría de ensamblaje y, en el norte del país, las llamadas "maquiladoras". En general, el NAFTA ha contribuido a incrementar, en algunos estados, la ocupación y la renta per cápita; como contrapartida, ha dañado ciertos sectores agrícolas, golpeados por la competencia estadounidense. Ciertamente, ha estrechado aún más los vínculos entre México y los Estados Unidos, vínculos que la historia, la geografía y los millones de mexicanos emigrados, muchos legalmente y otros en forma clandestina, consideran especiales, y que hacen de México un país escindido por los dilemas de la integración política y económica.

La sociedad latinoamericana en los años noventa: los nuevos movimientos sociales

El panorama social de América Latina en la edad neoliberal no fue en absoluto brillante, dado que se produjo una profunda brecha entre el retorno del crecimiento económico (no imponente pero concreto) y numerosos indicadores sociales, marcados por un empobrecimiento claro, con enormes diferencias de país a país, dado que fue más tenue en algunos casos, como en Uruguay y Chile, México y Panamá, y decididamente peor en otros. En principio, el impacto se sintió en el ámbito del empleo, que disminuyó en lugar de crecer; por otra parte, allí donde la desocupación fue en parte reabsorbida, se crearon en verdad empleos marginales, de escasa o nula productividad. Si bien es cierto que muchas mujeres antes excluidas ingresaron entonces al mundo del trabajo (en claro signo de modernización social), también lo es que la brecha entre los ingresos de los trabajadores especializados y los del vasto sector informal se amplió aún más, confirmando la heterogeneidad

estructural, es decir, la existencia de sectores productivos y mercados de trabajo ajenos entre sí.

El aumento de la desocupación y la subocupación tuvo como contrapartida el crecimiento del gasto social, que llegó a niveles nunca antes alcanzados en la historia del área, algo inesperado en una era neoliberal. Esto fue así en algunos países conocidos por llevar la voz cantante en la materia, como Costa Rica, Uruguay, Panamá y Brasil, pero también en otros que en otras épocas le habían dedicado cuotas muy menores de su presupuesto, como Bolivia y Colombia, lo que no quita que la calidad de los servicios sociales presentase enormes variaciones según el sector social al que se beneficiaba, siendo en muchos casos deficitaria en las zonas rurales y en las barriadas populares.

El impacto de esta tendencia sobre las elevadas tasas de pobreza de América Latina no produjo una reducción significativa en ellas, o mejor dicho, las familias que vivían en la pobreza se redujeron del 41 % al 37% desde inicios de la década hasta 1997, pero volvieron a crecer a inicios del nuevo milenio, cuando tuvo lugar una nueva recesión. No obstante, en términos absolutos los pobres siguieron siendo unos 200 millones, más de los que eran antes de la "década perdida". Por otra parte, las diferencias de un país a otro fueron tan amplias que volvieron más agudas las distancias respecto de los niveles de desarrollo, ya sea por la enorme brecha entre los países donde la tasa de pobreza fue contenida en alrededor del 20% de la población (como Uruguay, la Argentina, Chile y Costa Rica), y aquellos donde se declaró del orden de alrededor del 50% (como Bolivia, Ecuador y Colombia); o porque dicha tasa descendió en algunos casos, sobre todo en Chile, pero también en Brasil, Perú y la Argentina, pero se redujo menos o no lo hizo en absoluto en muchos otros.

No obstante, la verdadera nota gravosa del escenario social latinoamericano en los años noventa fue la desigualdad, ya muy aguda, que en general permaneció sin cambios e incluso empeoró en el transcurso de la década. Sólo hubo dos excepciones: Uruguay, donde el crecimiento económico y la distribución de la renta mantuvieron cierto equilibrio, y Cuba, donde las diferencias sociales fueron menores que en los otros países de la región, pero estuvieron sujetas a una fuerte reducción del ingreso por habitante. Historiadores y economistas no concuerdan en su valoración del fenómeno, es decir, en la determinación de hasta qué punto tales desigualdades son imputables al modelo económico de la etapa neoliberal o a tendencias de un período más extenso. Para los críticos del liberalismo, viejo y nuevo, no hay duda de que, una vez más,

este había causado heridas en un tejido social otrora más equitativo y cohesionado. Para otros, liberales o de otras tendencias, los elevados niveles latinoamericanos de desigualdad social (que se encontraban entre los peores del mundo) habrían sufrido el impacto negativo de las políticas neoliberales de la época, pero eran mucho más antiguos, producto de las fracturas históricas que lesionaban la región desde sus orígenes. Para sanar dichas fracturas no bastarían algunas reformas económicas, sino que serían necesarias transformaciones políticas y culturales más largas, lentas y fatigosas.

Claro que el panorama social de América Latina en los años noventa parecería sesgado si no se señalase el creciente surgimiento de variados movimientos sociales, algunos sólidos y duraderos, otros más efímeros; unas veces espontáneos y autónomos, y otras vinculados a sujetos tradicionales como sindicatos e iglesias, o al estado y su clientela; a veces surgido entre sectores medios y profesionales y otras, la mayor parte, entre grupos marginados. Esos movimientos nacieron con el retorno a la democracia y en años posteriores, con el objetivo de dar respuesta y representación a una gran variedad de instancias sociales: del feminismo al ecologismo; de la defensa de los servicios públicos a la autoorganización de los barrios para hacer frente a la crisis y la desocupación; de nuevas formas de sindicalismo (como en el caso de los "cocaleros" bolivianos, productores de hoja de coca contrarios a los planes de su erradicación), a las organizaciones de ocupación de grandes propiedades territoriales para obtener la distribución, como los *Sem Terra* brasileños. A pesar de las diferencias, lo que los unió en una red que, a partir de 2001, dio vida en Porto Alegre al Foro Social Mundial fue un radical antiliberalismo y la invocación de un horizonte social comunitario. Esto hizo de dichos movimientos los herederos naturales del sedimento cultural e ideológico acumulado en el tiempo como resultado de la confluencia del marxismo con el cristianismo en América Latina, en el cual el comunitarismo y el antiliberalismo eran –y continúan siendo– sus principales ingredientes.

El alma más robusta y arraigada en la historia y las sociedades locales era ya por entonces el indigenismo, con una larga historia a sus espaldas, aunque fue a partir de los años noventa cuando comenzó a manifestarse en los países de la región de América Latina donde las divisiones étnicas seguían siendo profundas y constantes. Lo hizo no sólo como un movimiento social capaz de atraer un creciente consenso, sino como una corriente ideológica y un movimiento político, e incluso como un movimiento armado, como sucedió en Chiapas, en el México

meridional, donde en enero de 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció que empuñaría las armas contra el estado.

El Chiapas zapatista



Marcha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional sobre el estado de Chiapas, en 1994.

Estado indígena por excelencia (y aún más a partir de los años ochenta, cuando comenzaron a confluir en masa los refugiados –indígenas también– que huían del conflicto en la vecina Guatemala), el estado mexicano de Chiapas poseía (y aún posee) una estructura social más semejante a la de las repúblicas centroamericanas que a la mayor parte de los otros estados mexicanos. Lo caracteriza la superposición de dos profundas grietas sociales: la de clase, entre una elite restringida de propietarios territoriales y una mayoría privada de tierras, y la étnica, con una minoría mestiza y una mayoría indígena. Dadas estas premisas, tanto el crecimiento del clero dedicado a la defensa y organización de la población indígena, como la nueva atención prestada por militantes marxistas a la cuestión indígena tras el reflujo de las ideologías revolucionarias crearon las condiciones de la insurrección, que asumió un significado antiimperia-

lista al iniciarse el día que entraba en vigencia el tratado de libre comercio que ligaba a México con los Estados Unidos y Canadá, en el cual los insurgentes denunciaron la liquidación de la soberanía nacional. Reivindicaciones sociales, con la reforma agraria en primer lugar, y reivindicaciones étnicas, es decir el reconocimiento del derecho de la población indígena local a una amplia autonomía y a gobernarse sobre la base de las propias costumbres comunitarias, fueron los pilares del programa del EZLN. Se trataba de un ejército de reducidas dimensiones (contaba con unos 2000 hombres), compuesto en gran parte por campesinos indígenas, pero inspirado por su líder informal, el subcomandante Marcos, un intelectual de la ciudad, célebre por sus hábiles y originales técnicas comunicativas. En realidad, la fase más aguda de la guerra de guerrillas fue breve y poco cruenta (de hecho, causó cerca de 150 víctimas), en particular si se la compara con los feroces conflictos que habían concluido poco antes en América Central. En 1996, el EZLN y el gobierno mexicano firmaron los acuerdos de paz, incumplidos luego por las elites locales –responsables de violentas represiones–, y por el ejército, por lo que pronto comenzaron a manifestarse tensiones que indujeron a los guerrilleros a declarar en forma unilateral la autonomía de algunos municipios. A pesar de que un nuevo acuerdo (al que el Parlamento opuso numerosos obstáculos) entre el gobierno y el EZLN fue firmado en el año 2000, el conflicto se descomprimió en forma paulatina, en parte por los planes sociales adoptados por el gobierno y en parte debido al agotamiento propio del proyecto, que terminó acotado a su cauce local.

Luces y sombras de las democracias latinoamericanas

En términos generales, en los años noventa la democracia continuó difundiéndose por toda América Latina. Al comienzo de la década, incluso Chile la había recuperado, y con el correr de los años comenzó a liberarla de la camisa de fuerza que le habían ceñido los militares. Lo mismo puede decirse de México –que por entonces completó su larga liberalización política– y hasta de los pequeños países de América Central, los cuales, a pesar de las aún vigentes heridas de los conflictos armados, marcharon por primera vez hacia la democracia. En toda la región –con la excepción de Cuba–, las elecciones, el pluralismo, la custodia de los derechos individuales se volvieron los fundamentos de los regímenes políticos latinoamericanos, lo que confirma que, concluida

la Guerra Fría, América Latina se hallaba en condiciones de completar su largo y esforzado camino hacia la confluencia política con el resto de Occidente.

Sin embargo, pronto se hizo visible el revés de esa trama. Si en la década de 1980 se había hablado tanto de las transiciones a la democracia, en la última década del siglo, políticos y cientistas sociales se interrogarían acerca de sus posibilidades de consolidación, es decir, si aquellas jóvenes democracias estaban realmente en la misma senda recorrida un tiempo atrás por las de los países occidentales más avanzados, o si en realidad continuarían manifestándose algunas distorsiones estructurales. No cabía duda de que, así como en algunos países la democracia estaba echando profundas raíces (en especial en aquellos como Uruguay y Chile que ya la habían experimentado durante largo tiempo), y en otros como Brasil y México daba notables pasos adelante, tanto en América Central como en el área andina chocaba con numerosos obstáculos (sociales, económicos y culturales), que ya en el pasado habían impedido su arraigo.

Respecto de las democracias en vías de consolidación, las caracterizó la solidez, la legitimidad y la eficiencia de las instituciones políticas. Solidez en tanto se apoyaron en un vasto consenso y una difundida cultura democrática, es decir, en la convicción de gran parte de la población de que la democracia representativa era el mejor o el menos imperfecto de los regímenes políticos y por ello era preciso protegerla. Legitimidad, ya que la mayoría de los actores políticos (partidos o corporaciones) reconocía en los procedimientos democráticos la única modalidad para afirmar sus ideas y programas, mientras desaparecían o se reducían a la marginalidad las fuerzas extremas. Por último, eficiencia, porque si bien aquellas democracias se revelaron a menudo más lentas y burocráticas en la toma de decisiones que otros sistemas donde los poderes estaban más concentrados, esa misma gradualidad confería a sus elecciones un elevado grado de credibilidad y contribuía a cimentar el estado de derecho, garantizando que cada poder desarrollase sus funciones sin invadir o absorber los otros.

En ese sentido, el más paradigmático fue el caso de Chile, donde en los años noventa se sucedieron en la presidencia los candidatos de la Concertación, una coalición de partidos en el pasado hostiles entre sí, pero luego aliados para consolidar la democracia chilena, emancipándola de los rasgos totalitarios impuestos por el régimen militar saliente (como la prohibición de los partidos marxistas y la nominación de numerosos senadores vitalicios), sin violar la Constitución vigente. Ello fue

así a tal punto que a veces fue acusada de excesiva moderación, como ocurrió en 2000, cuando, tras el arresto del general Augusto Pinochet en Londres en 1998, el gobierno chileno luchó por evitar su procesamiento en España y reclamó su repatriación, con el fin de que fueran los tribunales chilenos los que se ocuparan de sus crímenes. Todo ello ocurrió incluso a pesar de que la ley de amnistía, aprobada en su momento por el gobierno militar, limitaba en gran medida la libertad de acción de la justicia en Chile.



Los cuatro presidentes chilenos de la Concertación (Patricio Aylwin, Michelle Bachelet, Eduardo Frei y Ricardo Lagos), en el aniversario del plebiscito de 1988.

No menos emblemático fue el caso de México, donde por primera vez las elecciones se volvieron competitivas y se completó la reforma del sistema electoral, con el resultado de que, en 1997, por primera vez en su historia el PRI perdió la mayoría parlamentaria y, en 2000, la transición democrática mexicana culminó con la elección de Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN), como presidente. Se trataba de un partido de matriz católica, portavoz de los sectores productivos, orientado a favorecer la economía de mercado y partidario de una estrecha cooperación con los Estados Unidos. De ese modo, terminó el monopolio político de los herederos de la Revolución de 1910. Asimismo, notables progresos hizo la consolidación de la democracia en Brasil, donde, finalizada la breve y fracasada experiencia de Collor de Mello, se abrió un nuevo ciclo político dominado por la figura de Fernando Henrique Cardoso, el otrora teórico de la dependencia, ahora partidario de la urgencia por introducir reformas económicas liberales, cuidando de no

abrir grietas en la joven democracia brasileña, cosa que hizo primero como ministro de Finanzas y luego, desde 1994 a 2002, como presidente, respetando los procedimientos legales y constitucionales, y respaldado por un amplio consenso.

Menos alentadora fue la situación en América Central y en el área andina, donde diversos elementos contribuyeron a demorar la consolidación de la democracia o la desviaron hacia nuevas formas de populismo. Se trató de factores históricos, como las fracturas étnicas y sociales de países heterogéneos, y la escasa confianza de buena parte de la población en las instituciones de la democracia representativa, vista y vivida como extraña y elitista; y de factores sociales y económicos, dado que las crisis de los años ochenta facilitaron la ya natural tendencia a la concentración del poder en manos del presidente, así como la propensión a gobernar sin pasar por los controles institucionales. El resultado fue el debilitamiento de las ya frágiles instituciones representativas y la ampliación desmesurada de la brecha entre representantes y representados, premisas de la peligrosa inestabilidad política, que a fin de siglo y en la primera década del nuevo milenio comenzaría a manifestarse en estas áreas.

Al respecto, sobran los ejemplos. Desde Ecuador, donde ningún gobierno alcanzó a consolidarse y creció año tras año el conjunto de los movimientos indigenistas, hasta Bolivia, donde las políticas neoliberales y la lucha (financiada por los Estados Unidos) contra el cultivo de coca alimentaron la reacción de los campesinos indígenas. Desde Guatemala, donde los acuerdos de paz no fueron capaces de poner fin a la violencia, hasta Nicaragua, donde los escándalos y el personalismo exasperado sometieron las instituciones democráticas a duras pruebas. A estos se sumaron los casos de Colombia, donde una nueva y moderna Constitución, promulgada en 1995, no alcanzó a contener la escalada del conflicto armado ni la propagación de la corrupción alimentada por el narcotráfico, o Venezuela, donde la corrupción, la crisis financiera y las revueltas militares pusieron de rodillas a los partidos tradicionales, creando las condiciones para la victoria electoral de Hugo Chávez en 1998, el cual, con un amplio número de seguidores, anunció su voluntad de crear un régimen revolucionario, empuñando las banderas nacionalistas y socialistas.

No menos significativo fue el caso de Carlos Menem, electo presidente de la Argentina en 1989, quien basó su popularidad en dos elementos clave. El primero fue la estabilidad económica que logró restaurar, tras la dramática hiperinflación, mediante el plan Cavallo (nombre de

su ministro de Economía). Se trataba de un plan basado en la Ley de Convertibilidad, que impuso la paridad cambiaria entre el peso argentino y el dólar estadounidense, y contuvo la inflación, aunque con el tiempo constriñó la economía argentina en una camisa de fuerza de la cual le resultó difícil salir. El segundo núcleo de su consenso fue el peronismo –del cual Menem era dirigente histórico–, que fue sometido por su gobierno a fuertes tensiones (ya que sus drásticas políticas neoliberales estaban en las antípodas de las orientaciones distributivas del primer peronismo), pero que le garantizó la estabilidad social que se le había negado a su predecesor, Raúl Alfonsín, además de una vasta fuente de votos fieles. Fortalecido por el consenso así obtenido e invocando la emergencia en la que se hallaba el país, Menem gobernó a menudo pasando por alto el Parlamento, aplacó las tensiones en los cuarteles amnistiando a los militares presos por violaciones a los derechos humanos, se aseguró el control del poder judicial cambiando la composición de la Corte Suprema y promovió una reforma constitucional que le permitió volver a presentarse a las elecciones de 1995, donde fue cómodamente reelecto. Sin embargo, a fines de la década los vientos cambiaron, ya sea porque la recesión estaba causando estragos, ya porque el gobierno de Menem estaba minado por varios escándalos y numerosas fracturas internas, a tal punto que, en las elecciones de 1999, los peronistas fueron derrotados.

Neopopulismo y neoliberalismo: el Perú de Fujimori

La idea de que las políticas neoliberales de los años noventa fueron siempre excluyentes e impopulares no tiene fundamento: ya se ha señalado que no impidieron la gradual consolidación de ciertos sistemas democráticos en los países grandes de la región. Tampoco tiene fundamento afirmar que fueron incompatibles con la cultura y las prácticas del populismo, del cual en teoría estaban en las antípodas. En este sentido, el caso de Alberto Fujimori en Perú fue emblemático. Electo presidente en 1990, basó su popularidad en una radical retórica antipolítica (es decir, en la condena inapelable de la clase política tradicional respecto de la cual se presentó como un *outsider* sin mácula), y en la determinación de combatir por todos los medios a Sendero Luminoso, el movimiento guerrillero que se había pasado al terrorismo urbano y malquistado con el grueso de los peruanos. De hecho, llevó a cabo su objetivo y aniquiló el movimiento armado, pero a

costa de emplear medios ilícitos que sembraron el terror en varias regiones del país, sometidas al estado de guerra interna, y dejaron una gravosa estela de violaciones a los derechos humanos. Respaldado por este "éxito" contra la guerrilla, Fujimori se sintió lo suficientemente fuerte como para introducir un drástico plan de reformas económicas neoliberales que, aunque en un primer momento causó una aguda recesión, más tarde obtuvo un crecimiento sostenido. Además, en 1992, con el apoyo decisivo de las fuerzas armadas, llevó a cabo un autogolpe, es decir un golpe de estado que le permitió liberarse de los límites impuestos a su poder por el Parlamento y la Constitución, a la que reformó para poder presentarse a reelección. De hecho, en 1995 fue electo con el 65% de los votos; aunque en 2000, cuando volvió a presentarse, se encontró con numerosos obstáculos, ya que el clima había cambiado y clamorosos escándalos habían minado su gobierno. Todo ello, junto a las acusaciones de fraude electoral y la recesión paralizaron los resultados de su modelo económico y sellaron su caída.

Bill Clinton y América Latina

Arribado a la Casa Blanca en 1992, Bill Clinton no imprimió ningún giro radical a la política latinoamericana propugnada por George Bush, en particular durante su primer mandato, en cuyo transcurso el presidente de los Estados Unidos no tuvo oportunidad de viajar a América Latina. Dos factores estaban en la base de tal continuidad: el primero fue que, finalizada la Guerra Fría y desactivados los conflictos centroamericanos, la región había dejado de ser una prioridad para la administración estadounidense, que afrontaba problemas más urgentes en otras zonas del globo. El segundo factor fue que, aplacadas las amenazas inminentes a la seguridad hemisférica, los Estados Unidos se atuvieron a una política orientada a la promoción de la democracia y a las reformas económicas de mercado en América Latina, cuya crisis tendió entonces a involucrar a la Casa Blanca, a tal punto que la cuestión del narcotráfico, la inmigración y la criminalidad internacional dominarían la agenda de las relaciones hemisféricas en esta década.

Continuidad y prioridad en su política interna caracterizaron el primer e importante paso dado por Clinton respecto de los asuntos latinoamericanos: ratificó el NAFTA, por el cual luchó con convicción no menor a la de su predecesor, velando a su vez para que la inser-

ción de ciertas cláusulas acerca del cuidado del medio ambiente y las leyes sobre el trabajo tuvieran su aprobación garantizada en el Congreso. Otro signo de continuidad (y del inédito clima de confianza y optimismo que caracterizaba las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina en esta época de democratización y apertura económica) fue la cumbre de presidentes americanos realizada en Miami en 1994, en la que numerosos países latinoamericanos se comprometieron a acelerar la integración hemisférica hasta crear un área de libre comercio extendida a todo el continente. Se trataba de un proyecto conocido como el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), y que, no obstante, habría de batirse contra miles de obstáculos, que desviarían su camino.

Así las cosas, no sorprende que el gobierno de Bill Clinton tendiese a verse envuelto en las recurrentes crisis latinoamericanas que cada tanto alcanzaban el nivel de alerta o afectaban temas sensibles para la política interna estadounidense, pero también que atinara a mantenerse en los márgenes una vez que todo regresaba a sus cauces. Esto fue así a punto tal que a menudo fue acusado por sus críticos de desinteresarse de la región, aunque lo cierto es que se destacó el empeño decidido de su administración por sostener la democracia allí donde estaba en peligro, en colaboración con los mayores países de América Latina, los cuales asumieron desde entonces un rol cada vez más influyente en el control de las crisis locales. En ese sentido, un caso paradigmático fue el de Haití, donde el golpe que depuso al presidente electo empujó a la Casa Blanca a sostener una resolución de condena del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a dar su mandato de preparar una expedición militar, cuyo desembarco inminente indujo a retirarse a los militares que se habían hecho del poder sobre la isla. No menos importante fueron los profusos esfuerzos por evitar rupturas constitucionales en Ecuador y Paraguay, alcanzar los tan deseados acuerdos de paz bajo el control de las Naciones Unidas en Guatemala, y firmar el acuerdo limítrofe entre Perú y Ecuador. Todo ello sumado a la transitoria ausencia de disputas particulares entre las dos partes del hemisferio durante su mandato hicieron de Clinton el presidente estadounidense más popular en América Latina en las últimas décadas.

En este contexto, el país a cuya crisis la administración Clinton tributó más atención fue Colombia, puesto que allí diversos factores convirtieron al país en el potencial eslabón débil de la estabilidad regional, despertando enorme preocupación en los Estados Unidos. El problema fundamental era el narcotráfico, puesto que de Colom-

bia partía gran parte de la cocaína comercializada en las ciudades estadounidenses, además de que allí, en el transcurso de la década, la criminalidad organizada demostró su capacidad de cooptar las ya débiles instituciones políticas. A esto se sumaba la guerrilla de las FARC, la única aún activa e influyente en América Latina, ligada a Cuba y a la ideología marxista, y en condiciones (por su accionar en las fronteras con dos países sumergidos en profundas crisis, como Ecuador y Venezuela) de internacionalizar el conflicto. A ello se debió, además de la elección a presidente en 1988 de Andrés Pastrana (en quien los Estados Unidos depositaron especial confianza), el anuncio del plan Colombia. Se trataba de un proyecto de ayuda norteamericana sin parangón en otras zonas de la región, destinado en buena medida a combatir el narcotráfico con nuevas y más modernas armas. Aunque dicho plan indujo críticas respecto de la intervención estadounidense, fue defendido a capa y espada por Clinton, quien lo planteó como un esfuerzo por asistir al gobierno local y extirpar las raíces de los males colombianos.



Dos integrantes de las FARC vigilan una autopista cerca de un afiche publicitario en contra del Plan Colombia, en San Vicente, Colombia.

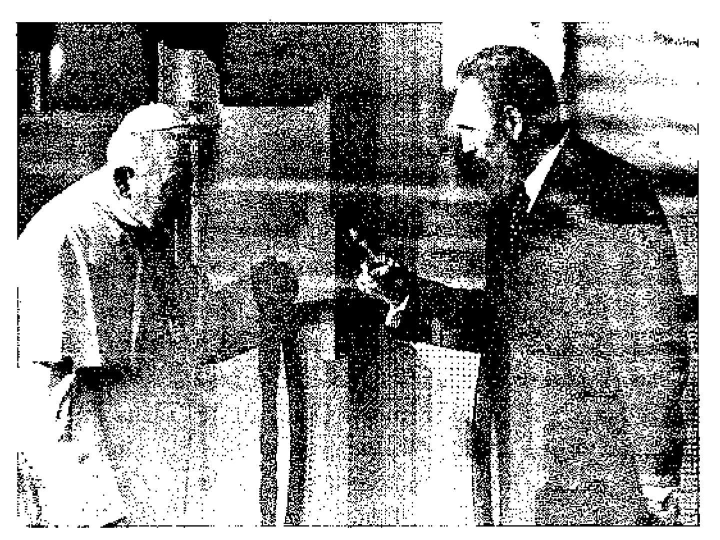


Cuba después de la Guerra Fría

El colapso de la Unión Soviética y del COMECON, del cual había sido pivote, obligaron al gobierno de Fidel Castro a tomar importantes medidas para garantizarse la supervivencia sin la generosa asistencia soviética, que durante décadas le había permitido la venta de azúcar a buen precio y el acceso a valiosos suministros de petróleo. No es casual entonces que se abriera el llamado "período especial" en la isla, durante el cual el gobierno introdujo sustanciales reformas económicas sin por ello tocar los fundamentos del régimen político de partido único e ideología de estado. Ya sin el apoyo soviético, pero sujeto aún al embargo impuesto por los Estados Unidos, en el campo económico Fidel Castro adoptó varias medidas tendientes a incentivar las inversiones exteriores en la isla, en particular para estimular el turismo, y acrecentar la escasa eficiencia del sistema productivo, haciéndole lugar a la actividad privada y reemplazando las gigantescas e improductivas fábricas estatales por nuevas y más ágiles cooperativas agrícolas. En síntesis, creó en la economía de la isla un canal paralelo donde circulaban bienes y moneda (incluido el dólar), ausentes en el mercado oficial. Un canal que, si bien le permitió al gobierno conservar íntegros los pilares de la economía socialista, donde la propiedad privada estaba prohibida, incrementó sin embargo la brecha entre la mayor parte de los cubanos y la nueva elite formada por los dirigentes y funcionarios del partido único, que teniendo acceso al circuito paralelo pudo permitirse numerosas ventajas. En general, los años noventa en Cuba estuvieron caracterizados por las restricciones impuestas en la vida cotidiana, por el racionamiento de numerosos bienes y el largo "apagón" debido a la escasez de aprovisionamiento energético.

En tanto, en el campo político e ideológico el régimen castrista no realizó cambios significativos. En cambio, su prioridad fue impedir que las transformaciones sociales provocadas por la tímida apertura económica impactasen en la política. El único cambio significativo fue la posibilidad de afiliación de los católicos al partido, lo que más que un paso histórico fue el debido reconocimiento de la afinidad ideológica que, desde sus orígenes, el régimen cubano se jactaba de poseer con las corrientes populistas surgidas en América Latina, a partir de la confluencia entre el socialismo y el catolicismo radical, bajo las banderas del nacionalismo. Por otro lado, el gobierno no escatimó la represión de los disidentes y del creciente número de cubanos cuya ideología o necesidad empujaba a procurarse visados para emigrar, al punto de hundir en 1995 una embarcación de

exiliados que se dirigía a Florida. Sin embargo, ante las protestas surgidas en La Habana, hubo de abrir las puertas a la emigración, que a su vez actuó a manera de válvula de escape de las tensiones en la isla.
En el clima de los años noventa, mientras América Latina marchaba por la senda de la democracia política y la apertura económica, el aislamiento de Cuba alcanzó su apogeo y pareció anunciar la caída del régimen. La administración Clinton, presionada por el Congreso y como reacción ante el derribo de dos aeronaves, con que se intentó impedir la actividad de un grupo anticastrista de Miami empeñado en recoger del mar a los exiliados que se fugaban de la isla, endureció el embargo. No obstante, hacia finales de la década el panorama comenzó a cambiar. Por un lado, la economía latinoamericana entró en el túnel de una profunda recesión, que destruyó el optimismo prevaleciente hasta entonces, mientras que la de Cuba recuperó un poco de oxígeno tras haber tocado fondo. Por otro lado, las crisis políticas que minaron la estabilidad de numerosas democracias del área resucitaron el antiliberalismo típico del populismo, comenzando por Venezuela, con la cual Castro no tardó en reencontrar una sintonía natural. La histórica visita del papa Juan Pablo II a Cuba en 1998, que muchos creyeron que alentaría la liberalización de la isla, contribuyó en cambio a aliviar las tensiones y romper el aislamiento.



Fidel Castro recibe al papa Juan Pablo II, el 26 de enero de 1998.

Así, el régimen de Castro sobrevivió al final de la Guerra Fría, lo que confirma que, aunque hubiera abrazado la causa del comunismo

mundial, sus raíces se hundían en la historia y en la cultura política de América Latina.

La crisis del neoliberalismo

En la época de entre siglos, una profunda convulsión, económica y política, diezmó la confianza en el futuro de la región. Claro que no se produjo en todas partes ni con la misma intensidad, dado que hubo países, como Chile y Brasil, que salieron casi indemnes en el plano económico, e incluso fortalecidos en el institucional. Pero fue lo suficientemente fuerte para causar crisis en varias naciones, empezando por Venezuela y la Argentina, que estuvieron entre las más golpeadas. El caso argentino asumió, en ese sentido, valor de emblema. A fines de los años noventa se abrieron profundas grietas en el modelo económico que este país había adoptado, en estrecha sintonía con los organismos financieros internacionales, revelando su enorme vulnerabilidad –la crisis financiera asiática, la revaluación del dólar, la devaluación brasileña–, lo cual redujo drásticamente la ya agotada competitividad de la economía argentina y su capacidad de honrar los plazos de la deuda externa, y obligó al gobierno a procurarse nuevos créditos para poder pagarla. Sin embargo, esto ocurrió en un momento en el que la inestabilidad financiera global y la pésima condición de las cuentas argentinas inducían a los acreedores a huir de los peligrosos conflictos que se vislumbraban en el país.

Así las cosas, en 2000 comenzó la fuga de capitales de los bancos y empresas de crédito, y en 2001, temiendo la inminente devaluación que reduciría los activos, los ahorristas argentinos comenzaron a transferir en masa al exterior los dólares depositados en los años precedentes. Mientras el gobierno estadounidense y el Fondo Monetario Internacional debatían si intervenir y de qué manera, evaluando un nuevo paquete de ayuda (para emparchar lo que muchos consideraban un pozo sin fondo), el gobierno argentino de Fernando de la Rúa se encontró acorralado. Con el objetivo de bloquear la fuga de capitales, introdujo el llamado "corralito", una medida extrema con la que se limitaba en forma drástica el acceso de los ciudadanos a sus cuentas corrientes. A ello siguió, el mismo año, una crisis sin precedentes, que trascendió la esfera económica y resultó en el colapso del gobierno radical, que tantas expectativas había generado respecto de la renovación del sistema político argentino, y la sucesión de cinco presidentes en apenas dos se-

manas. La cesación de pagos y la devaluación, impuestas por la dramática crisis financiera, elevaron en pocos meses la tasa de desocupación a un 25% y sumergieron bajo la línea de pobreza a cerca de la mitad de la población de uno de los países más avanzados de América Latina.

No obstante, si bien la crisis que alcanzó la fase neoliberal de la historia latinoamericana presentó rasgos inéditos, en muchos otros reveló algunos más antiguos y notorios. El liberalismo político y económico dominante durante gran parte de la década chocó una vez más contra los límites que en el transcurso de su historia le habían impedido echar sólidas raíces en la región. Se trataba de límites endógenos, debidos al hecho de que se presentó en muchos casos de forma distorsionada, forzando el espíritu del estado de derecho y del constitucionalismo liberal, y de límites exógenos, impuestos por el contexto global, del cual era por demás dependiente y a cuyos ciclos se mostró altamente vulnerable. A ellos se sumaban los límites impuestos por una nueva reacción nacionalista, que generó, otra vez, una resistencia que asumió particular vigor donde más débiles eran las instituciones políticas, menor el desarrollo económico y más profundas las fracturas sociales y étnicas. Ello tuvo lugar, en especial, en los estados andinos y centroamericanos, y se manifestó con los rasgos típicos de la tradición populista, es decir, reclamando, por un lado, la integración social de las masas excluidas y la lucha contra las potencias extranjeras, e imponiendo, por otro lado, severos límites a la separación de los poderes y el pluralismo político.

En términos económicos, la crisis que ya varias veces había estado a punto de estallar (al punto de inducir a los organismos financieros internacionales a intervenir en ayuda de México en 1994 y de Brasil en 1998, con el objetivo de evitar su colapso financiero) se volvió evidente en toda la región alrededor de 1998. La recesión mundial arrastró a estas economías, cuyos indicadores fueron negativos o se estancaron durante casi cuatro años, en el curso de los cuales no sólo empeoraron las ya graves condiciones sociales, sino que también se difundió, entre las elites políticas y la opinión pública, la convicción de que había llegado el ocaso del Consenso de Washington. Ello ocurrió debido a un problema de vulnerabilidad, vinculado con el exceso de dependencia de la estabilidad económica de las economías regionales del volátil flujo de capitales sujetos a las crisis, que de tanto en tanto sacudían el sistema entero, desde Asia a Rusia, y a una cuestión de sustentabilidad, es decir, del sostenimiento de un modelo económico que, más allá de no garantizar un crecimiento sólido y sostenido, hizo muy poco por reducir las desigualdades sociales. Todo esto colocó el consenso po-

lítico y la integración social a la cabeza de la agenda de los gobiernos latinoamericanos. En suma, se cerró entonces la era del primado de la economía y se abrió una etapa donde tendría preeminencia la política, llamada a demostrar su capacidad de conciliar consenso y crecimiento, democracia y desarrollo.

Esa conciencia comenzó lentamente a hacer pie incluso en Washington, donde el Tesoro americano y la dirección del Fondo Monetario Internacional empezaron a constatar que las recetas económicas durante tanto tiempo anexas a los créditos eran rígidas y onerosas, a tal punto que se transformaban en un búmeran y generaban la inestabilidad que pretendían evitar. En ese sentido, el dramático colapso argentino de 2001 causó un estruendo que anunciaba el fin de una época, no tanto por su efecto en sí (desde el momento en que la cesación de pagos declarada por el gobierno argentino no tuvo, sobre el sistema financiero mundial, el impacto devastador que habría tenido si hubiera sido declarada por países más poderosos y endeudados como Brasil y México) sino porque, más que ningún otro, en los años noventa la Argentina había sido el "estudiante modelo" que con más celo había aplicado las recetas de los organismos financieros; por ende, su caída ponía en evidencia su fracaso.

Claro que la crisis que se abrió entonces no se limitó al horizonte económico; de hecho, abarcó la arena política, con efectos disímiles de país a país. En algunos casos causó la derrota electoral de los gobiernos que adherían al Consenso de Washington, lo cual sin embargo no produjo alteraciones en el orden político y constitucional ni retorno alguno al nacionalismo económico. Así sucedió en Brasil, donde en 2002 fue electo presidente el ex sindicalista Inácio Lula da Silva, y también en México y Colombia, con las elecciones de Vicente Fox y Álvaro Uribe respectivamente, e incluso en Perú, una vez pasada la tormenta levantada por la estrepitosa caída del régimen de Alberto Fujimori. En otras partes, en cambio (primero en Venezuela, pero poco a poco también en Bolivia, Ecuador y Nicaragua), se manifestaron o comenzaron a gestarse verdaderas crisis, que preludiaban radicales cambios constitucionales y la invocación del retorno a modelos económicos dirigistas y nacionalistas.

12. El nuevo siglo, entre el futuro y el *déjà vu*

La primera década del siglo XXI fue un verdadero vía crucis para América Latina. Aunque en ciertos aspectos los diversos países de la región habían alcanzado similares condiciones, con más frecuencia tomaron caminos disímiles debido a las peculiares circunstancias de su evolución histórica. A unir América Latina durante buena parte de la década contribuyeron tanto el sostenido crecimiento económico (impulsado tanto por el de los Estados Unidos como por la demanda china), como la tendencia general a elegir gobiernos de izquierda, decididos a poner un freno a las políticas neoliberales de la década precedente. En cambio, el grado de consolidación de la democracia representativa varió entre cada nación. A los casos en los que esta había echado sólidas raíces se oponen otros que, exhibiendo credenciales revolucionarias, han reverdecido el populismo clásico, a veces en coincidencia con la radicalización del indigenismo.

El giro a la izquierda

El panorama político de América Latina en la primera década del siglo XXI es inédito en muchos aspectos. Excepción hecha de Cuba, todos los países del área están gobernados por democracias representativas. No es casual que algunos historiadores inscriban en tales circunstancias un indicador de la progresiva confluencia de la región con el resto de Occidente. Claro que el vaso medio lleno puede parecer medio vacío si se observan las carencias y los límites de numerosas democracias, que en algunos casos conducen a peligrosas regresiones y a la vieja oscilación entre populismo y militarismo. Algo semejante ocurrió con la crisis de Honduras en 2009, donde las fuerzas armadas depusieron al presidente, Manuel Zelaya, tentado de trasponer los límites constitucionales a su poder recurriendo a una consulta popular

que le permitiera prolongar su mandato, y que no estaba prevista en la Constitución vigente.



Manuel Zelaya, el presidente hondureño destituido, permanece en la localidad nicaragüense de Ocotal, en la frontera con Honduras, a la espera de apoyo internacional, 26 de julio de 2009.

Hacia fines de la década, antes de que se proyectase sobre América Latina la sombra de la grave crisis que golpeó a la economía global, el horizonte parecía abrir grandes esperanzas. Así lo muestran encuestas de opinión, según las cuales cerca del 70% de los latinoamericanos expresaba satisfacción por el presente y confianza en el futuro. Aventurar en qué medida tal expectativa era fruto de los años de fuerte crecimiento económico inmediatamente anteriores y en qué medida correspondía a la mayor estabilidad política es casi imposible. No obstante, en el primer decenio del nuevo siglo la democracia política se consolidó como nunca antes en muchos países en los que la pacífica alternancia de los gobiernos se volvió norma, las crisis políticas son mantenidas dentro del cauce constitucional, los presidentes culminan sus mandatos regularmente, y las elecciones son competitivas y, en número creciente de casos, transparentes.

Sin embargo, la calidad, legitimidad y eficiencia de las instituciones políticas y la difusión de la cultura democrática son escasamente uniformes en la región, como tampoco son en todas partes favorables a la

consolidación de la democracia. Por tanto, junto a democracias más o menos consolidadas y estables, como las de Uruguay, Chile y Costa Rica, y a otras que, pese a sus numerosas imperfecciones y desafíos, lo son en buena medida, como en Brasil, México y la Argentina, persisten otras más inestables, en particular en Centroamérica, donde la concentración del poder en manos del presidente está a menudo privada de contrapesos a causa de la escasa autonomía del Parlamento y la Magistratura, donde los sistemas de partidos políticos son frágiles y volátiles, y la sociedad civil está atravesada por hendiduras atávicas. Reflejo de tales carencias son las recurrentes inclinaciones de varios líderes a gobernar en forma plebiscitaria, es decir, utilizando su popularidad para reformar las constituciones, creando así las condiciones para perpetuarse en el poder, como sucedió en países como la Venezuela de Hugo Chávez y la Colombia de Álvaro Uribe. En fin, en numerosas naciones la corrupción endémica y la difusión de prácticas clientelares minan la credibilidad de la clase política y alimentan la ideología antipolítica que tanto contribuye a erosionar las instituciones representativas.

En tanto, allí donde persisten profundas desigualdades sociales sumadas a antiguas barreras étnicas, las instituciones democráticas intentan satisfacer las enormes expectativas de integración simbólica y llevar una mejora material a vastos sectores marginados, entre los cuales la noción populista de democracia conserva extraordinaria vitalidad. Esta promete su anhelada integración al costo de minar el pluralismo y trasponer a la esfera política la lógica maniquea típica del imaginario religioso, lógica que tiende a transformar el conflicto político en guerra entre amigos y enemigos, mutuamente excluyentes.

En este marco, la primera década del siglo XXI quedará inscripta en la historia como la época del retorno de la izquierda. Retorno que ha caracterizado a gran parte de la región, con las relevantes excepciones de Colombia y México, entre cuyas causas se destaca el fracaso o el agotamiento de las experiencias neoliberales en boga en los años noventa. Se trata de fenómenos seguidos por una creciente demanda de protección social y retorno a la primacía de la política contra la tiranía imputada a los dogmas económicos. En medio de tal oleada se distinguen izquierdas y contextos diversos, puesto que no todas las izquierdas proceden del mismo modo ni todos los contextos están caracterizados por la ruptura con el pasado. Por un lado, se despliega una izquierda reformista, desarrollada allí donde la democracia está más consolidada. Sus rasgos clave son la elección estratégica de la democracia representativa y la cultura política pluralista; la búsqueda de equidad social en

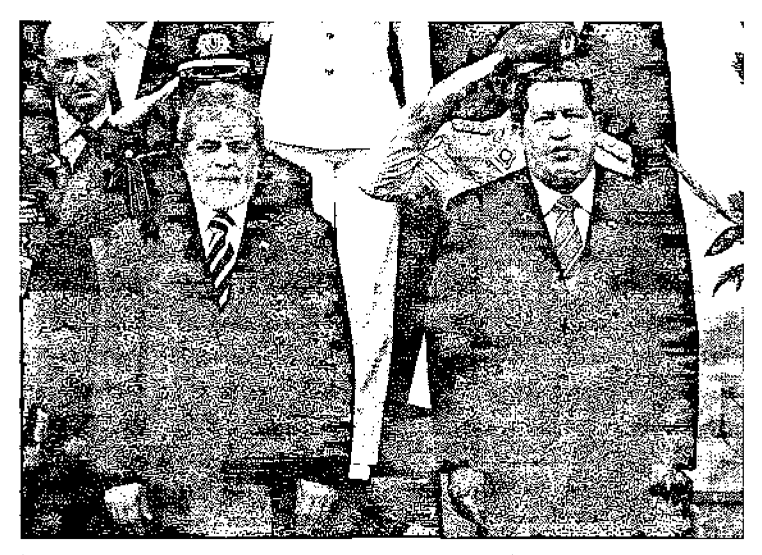
relación con los vínculos macroeconómicos; el pragmatismo destinado a la conquista de los sectores medios (decisivos para conferirle la victoria electoral); una política exterior abierta y multilateral, carente de la tentación del nacionalismo antiamericano; la conciencia de que el mejoramiento social requiere tiempo y no admite atajos, allí donde la evolución es preferible a la revolución. No es casual que los representantes de esas corrientes –Lula da Silva en Brasil, Michelle Bachelet en Chile, Tabaré Vázquez en Uruguay y, en algunos aspectos, Alan García en Perú– hayan sido más moderados como gobierno de lo que fueron como oposición, y que hayan procurado sostener los aciertos institucionales heredados de sus predecesores.

Por otro lado, se encuentra la izquierda populista, desplegada en contextos de crisis política y profundas fracturas étnicas y sociales. Decididamente más radical, utiliza un lenguaje revolucionario y pretende regenerar las estructuras materiales y espirituales de la sociedad. Adecuándose a los procedimientos formales de la democracia liberal, aspira a suplantarla con un modelo participativo, en el cual el pueblo –entendido en términos de una comunidad, homogénea por historia, etnia o condición social– encontraría reparación y protección. A la economía de mercado le opone el dirigismo y al pragmatismo, la polarización, ya sea en términos de conflictos entre las clases o de la contraposición ética entre pueblo y oligarquía. En el plano internacional, es artífice de un frente antinorteamericano, del cual es emblema la Alternativa Bolivariana para America Latina y el Caribe (ALBA), un organismo de cooperación política y económica nacido en 2004, a partir de un acuerdo entre Hugo Chávez y Fidel Castro, al que luego adhirieron los gobiernos de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Honduras. La izquierda populista reniega del contexto institucional heredado y procede, con el apoyo de la mayoría pero a costa de ásperos conflictos, a su radical transformación mediante la redacción de nuevas cartas constitucionales.

Lula y Chávez, destinos cruzados

De las dos tendencias que, grosso modo, constituyen la heterogénea izquierda latinoamericana, son emblema Lula y Chávez: el obrero brasileño y el soldado venezolano, formado el primero en los sindicatos en lucha contra el régimen militar y luego en el Partido dos Trabalhadores (PT), del cual fue uno de sus fundadores, y el segundo en las escuelas militares de su país, imbuido de nacionalismo. Lula, el reformista, llegó al gobierno

de Brasil triunfando en las elecciones de 2002 y nuevamente en 2006, tras haber fracasado varias veces antes. Entretanto, su partido se había ampliado e institucionalizado, formó cuadros, gobernó ciudades y estados, tejió alianzas y, con el tiempo, fue moderando el programa radical de épocas anteriores. Por su parte, Chávez, el populista, llegó al poder como un *outsider*, primero al intentar desbaratar por medio de las armas el agonizante bipartidismo venezolano y luego, al formar un movimiento popular que desde entonces le ha asegurado numerosos triunfos electorales y sobre el cual ejerce un liderazgo carismático. El poder de Lula está sujeto a los límites impuestos por el contexto institucional de su país, mientras que el de Chávez escapa al control y tiende a convertirse en absoluto.



Luiz Inácio Lula Da Silva y Hugo Chávez, en junio de 2008. Fotografía de Marcelo Casal Jr.

Esas diferencias se perciben en sus actos de gobierno. Lula ha llevado a cabo una política pragmática y gradualista, ejecutando ambiciosos planes sociales sin crear desequilibrios fiscales, aumentando el gasto público sin dejar de honrar la deuda, continuando la reforma agraria, aunque con lentitud, para no ejercer una presión amenazante sobre la propiedad privada. Se expuso así a las críticas de la izquierda radical, pero cosechó consensos entre los sectores medios, si bien durante su gobierno estallaron graves escándalos vinculados con casos de corrupción. El crecimiento económico fruto de sus acciones ha sido lento, pero constante y sólido, a tal punto que le permitió atenuar en parte las enormes brechas sociales

de Brasil. Todo esto en el cuadro político y constitucional heredado y mediante complejas negociaciones políticas, en un contexto de estabilidad institucional y reducido conflicto social, con un crecimiento exponencial de la influencia y el prestigio de Brasil en el mundo.
Chávez, en cambio, invocó la revolución bolivariana y transformó radicalmente la estructura política e institucional de Venezuela en medio de furibundas batallas con la oposición y de violentas polémicas con los Estados Unidos. Dichas batallas culminaron en el golpe que en el año 2004 lo depuso, pero del cual fiinalmente salió indemne. En su diseño de lo que denomina "socialismo del siglo XXI", ha modificado dos veces la Constitución, garantizándose el virtual derecho a la reelección perpetua, y ha ampliado el control tanto sobre el poder judicial como sobre los medios de información. En el plano social, ha empleado parte de los enormes recursos obtenidos gracias a los elevados precios del petróleo para poner en marcha numerosas misiones destinadas a llevar instrucción y salud a los sectores populares. Claro que estas acciones no estuvieron exentas de espíritu clientelar, puesto que, si bien reabsorbieron en parte la pobreza, también se convirtieron en espacios de adoctrinamiento político. Un extremo grado de popularización caracteriza su gobierno, proyectado hacia la creación de un nuevo orden mediante la demolición del viejo y de sus restos. Ese estado de revolución permanente y de absoluto dominio de la mayoría sobre la minoría vuelve al panorama venezolano inestable y siempre sujeto a golpes de escena. Fortalecido por la riqueza petrolífera y la vocación revolucionaria de su régimen, Chávez no ha escatimado esfuerzos para difundir su ideología en el resto de la región, obteniendo éxitos donde el nacionalismo y el antiliberalismo encuentran terreno fértil, en especial en Bolivia y Ecuador, Honduras y Nicaragua. No obstante, también ha suscitado vehementes reacciones entre aquellos a los que alarma la reedición del populismo autoritario, hostil al pluralismo y a la democracia representativa.

El crecimiento económico y sus límites

Si bien el ingreso de América Latina en el nuevo siglo había sido, en términos económicos, cualquier cosa menos triunfal, las cosas empezaron a cambiar a partir de 2002, cuando la coyuntura mundial dio un viraje, y se mantuvo de ese modo hasta 2008. En aquellos años, el crecimiento económico del área fue rápido y constante, a tasas medias de alrededor del 6% anual, casi el doble de la tendencia histórica. Le-

jos de limitarse a algunos casos virtuosos, ha abarcado a todos, más allá de orientaciones económicas e ideológicas particulares. Hacia finales de la década, cuando la crisis financiera estadounidense provocó una profunda recesión, América Latina sufrió su impacto, aunque fue menor al padecido veinte años antes, e incluso a cuanto sufrieron países occidentales más poderosos, lo cual confirma que el crecimiento de los años precedentes no había sido un mero fuego fatuo, sino que había robustecido las bases económicas de la región.

De hecho, para algunos economistas, el crecimiento de la primera década del siglo XXI fue distinto del que se verificó en el pasado. A hacerlo más robusto y saludable contribuyeron el pragmatismo y la racionalidad con que se lo administró en la mayoría de los casos, por lo cual la economía se volvió menos vulnerable a las crisis económicas internacionales. Lo confirmarían el fuerte crecimiento del ingreso de capitales del exterior, el *boom* de las bolsas locales y el reforzamiento de las divisas latinoamericanas. A esto se sumó el hecho de que la inflación, la más temida y antigua plaga, fue mantenida bajo control, por no hablar de las cuentas públicas a menudo en superávit, de la reducción de la deuda, las reservas internacionales acumuladas y la balanza de pagos favorable, a tal punto que muchos países ganaron aquello que les había faltado en el pasado: credibilidad y, en el caso de Chile, incluso prestigio a ojos de los inversores.

Sin embargo, otros economistas consideran que el crecimiento económico de América Latina durante la década fue menos prometedor que lo esperable, puesto que se debió, en buena medida, a factores externos, independientes (el crecimiento mundial, los precios elevados de las materias primas y las condiciones financieras propicias), sin los cuales la economía del área habría crecido a ritmos normales. A ello se suma que América Latina creció menos o con tasas de productividad más bajas que otras áreas emergentes. Por ende, de dichos factores externos (más que del virtuoso gobierno de la economía) dependieron siempre los resultados obtenidos en materia fiscal, en los balances, en las cuentas con el exterior, etcétera. La vulnerabilidad a los *shocks* externos permaneció alta y, salvo excepciones, los gobiernos del área habrían perdido la ocasión de realizar profundas reformas destinadas a contener el gasto e incentivar la productividad.

El inicio del siglo XXI se caracterizó también por el creciente rechazo a la economía liberal en gran parte de América Latina y por el despliegue de respuestas que buscaron incrementar el rol del estado en el manejo de la economía. Así, se implementaron acciones reformistas

allí donde las instituciones políticas era más firmes, la sociedad menos dividida y la herencia del modelo neoliberal menos negativa, como en Chile, Brasil y Uruguay, aunque en parte también en México, Perú y Colombia, países donde el estado ha ampliado el propio rango de acción, sin por ello combatir la economía de mercado, sino activando políticas públicas para atemperar algunos efectos sociales. En cambio, se produjeron reacciones nacionalistas en países donde coincidieron con el colapso del sistema político tradicional, como en Venezuela, o con la explosión de antiguas fracturas étnicas, como en Bolivia y Ecuador, o con profundas crisis, como en el caso peculiar de la Argentina. En esos países, tanto los gobiernos como los movimientos sociales e indígenas rechazaron en bloque la economía de mercado y teorizaron en torno a modelos económicos dirigistas y nacionalistas, que a menudo tuvieron como consecuencia nuevas nacionalizaciones y reglamentaciones. Ello no quita que en esta región surcada por profundas grietas étnicas y sociales, impregnada por un imaginario social hostil al capitalismo, a veces impuesto *manu militari* a poblaciones atraídas por políticas populistas, la mayor parte de los latinoamericanos viva el comienzo del nuevo milenio bajo gobiernos democráticos que, con distintos grados de eficacia y transparencia, practicaron políticas económicas de tipo capitalista.

La variante china

El panorama económico de América Latina se modificó en la primera década del siglo XXI al paso de los rápidos cambios en el equilibrio mundial. Dichas transformaciones se verifican en especial en los nuevos socios económicos de la región (enfrentados entre sí), socios entre los cuales se destaca China, sin descartar a los antiguos (los Estados Unidos en primer lugar), que, no obstante, han reducido su peso. Para algunas de las más importantes economías latinoamericanas, China llegó a convertirse una alternativa sólida, tanto en términos de mercado para las propias materias primas, como preciosa fuente de inversiones, en especial en el campo energético. Los viajes realizados en el transcurso de la década por las más altas autoridades de Beijing a diversos países de la región han abierto el camino a la intensificación de las relaciones con América Latina, cuyos intercambios con China prácticamente se han decuplicado, al punto de volverse un socio estratégico para países como la Argentina, Chile, Brasil y Perú. Todo ello sucede en el cuadro de un verdadero *boom* del

comercio exterior latinoamericano, el cual se triplicó en los primeros ocho años del siglo por efecto del crecimiento mundial y la apertura comercial de la región.



Cancilleres de Unasur, reunidos con sus pares de otros países de América Latina y de Asia del Este, en la Cumbre del Foro para la Cooperación que une a estos continentes (FOCALAE), Buenos Aires, agosto de 2011.

La sociedad latinoamericana en el nuevo milenio

Como la economía, también los indicadores sociales que medían pobreza, desigualdad y ocupación pasaron por diversas fases en el transcurso de la primera década del siglo XXI. Para los más optimistas, los resultados fueron alentadores: el porcentaje de población pobre (cerca del 30% de los latinoamericanos) se redujo en un 10% durante la década y más aún disminuyó el porcentaje de indigentes, aunque la brecha entre los países con mayor bienestar (Chile, la Argentina y Uruguay) y los pobres (Honduras, Paraguay y Bolivia, por ejemplo) todavía es abismal. Todo esto a pesar de que esa disminución fue, en la mayoría de los casos, producto del crecimiento económico antes que de eficaces políticas de redistribución de la riqueza, las cuales han producido resultados apreciables sólo en pocos casos, entre los cuales cabe mencionar a Bolivia, Brasil y Chile. En tanto, los más escépticos observan que, como América Latina sigue teniendo un ingreso promedio que lo sitúa a me-

dio camino entre los países más avanzados y las zonas más pobres, no ha modificado su histórica desigualdad social. Además, si bien es cierto que se produjeron mejoras en la primera década del nuevo siglo y que la desigualdad alcanzó el nivel más bajo de los últimos veinte años, los progresos fueron lentos y disímiles de país a país.

La reducción de la pobreza y de la brecha social depende en buena medida de la creación de empleos calificados y más productivos y, por lo tanto, mejor pagos, esto es, que permitan la gradual reabsorción en la economía formal del enorme bolsón de marginalidad que creció en la década. A propósito, se observa que la desocupación retrocedió rápidamente a partir de 2002, lo que no era previsible si se considera que el crecimiento económico de los años noventa no había producido más puestos de trabajo. A ello también se suma el hecho de que jóvenes, mujeres y pobres continúan siendo sectores relegados a los márgenes del mercado de trabajo y de que aún persiste un amplísimo sector informal (el vasto ámbito de ocupaciones de baja calidad y productividad a los que no se garantiza seguridad ni acceso a la previsión social). Baste decir que salvo Chile, donde el 70% de las personas empleadas contribuye al sistema previsional contra apenas el 30% de países como Perú y Bolivia, ese sector ocupa a más del 40% de los trabajadores. Estos porcentajes ponen de manifiesto la enorme persistencia en América Latina de la figura del trabajador pobre, cuya ocupación no es suficiente, no obstante, para asegurarle la subsistencia. Sin embargo, cabe destacar que la pobreza entre los trabajadores descendió en forma sensible después de 2000 allí donde, como en Chile, Brasil y México, creció la productividad del trabajo y, con ella, el salario medio.

A favor del mejoramiento de los indicadores sociales de los países latinoamericanos han comenzado a incidir otros factores, varios de ellos de naturaleza política y, por ende, sujetos a variación. En particular, la propensión de algunos gobiernos a reponer, al menos en parte, la lógica de la distribución indiscriminada de recursos con fines electorales y clientelares, y a realizar inversiones sociales destinadas a dar frutos en el largo plazo. Otros, estructurales, en un momento en que la región se halla en pleno *bonus* demográfico, o sea, en el medio o al inicio de una fase en la que la cantidad de población en edad productiva crece a ritmos más sostenidos que la de edad no productiva, como niños y ancianos. Una circunstancia que se prolongará durante largo tiempo y permitirá aliviar la presión demográfica sobre numerosos servicios públicos, pero que sólo dará frutos si es explotada con una fuerte inversión en pos de la formación de capital humano.

Un capítulo aparte en el panorama social de la América Latina contemporánea está reservado al tema de la violencia, algo de ningún modo inédito en la región, sino que ha tendido a asumir nuevas formas y carátulas, y que en muchos países opera como un grave obstáculo para la consolidación de la democracia y el mejoramiento de las condiciones sociales. La acción de grandes y poderosos grupos criminales que controlan la producción de estupefacientes y su comercio a través de enormes redes capilares se ha instalado en forma progresiva en la región, hasta ejercer el control informal de algunas zonas y penetrar a fondo la sociedad y las instituciones locales. Esto ocurre en especial en México, Colombia, y Venezuela, tres de los países más violentos del área. Asimismo, han crecido otras actividades ilegales, como la extorsión, el robo, los secuestros, a menudo practicados por bandas juveniles en constante ampliación, en particular en Centroamérica. Ni los planes de prevención social ni la represión han dado por ahora resultados satisfactorios, a tal punto que, en muchos países de América Latina, la seguridad se ubica al tope de la agenda política y entre los mayores temores de la opinión pública.

El indigenismo radical

La elección de Evo Morales en Bolivia en 2005 y la de Rafael Correa en Ecuador en 2006 –dos líderes muy distintos, pero ambos a la cabeza de vastos movimientos indígenas, en países donde el componente aborigen de la población es masivo y las barreras étnicas poco flexibles– son un claro índice de la fuerza inédita alcanzada por el indigenismo en la primera década del siglo XXI. Fuerza confirmada luego en diversas elecciones y plebiscitos orientados a legitimar las ambiciones constituyentes, es decir, la idea de que el orden del cual se reputan intérpretes cobre cuerpo en las nuevas constituciones destinadas a inaugurar una etapa de rescate de los pueblos indígenas discriminados. Dichas cartas constitucionales han suscitado vehementes protestas en la oposición de cada país; en el caso boliviano en particular, han agudizado las ya profundas divisiones entre las diversas regiones. En tanto, elementos innovadores y arcaicos conviven en el nuevo indigenismo, nacido de la confluencia de varios y a menudo heterogéneos aportes y, por tanto, sujeto a poderosas tensiones internas, pasibles de evolucionar en direcciones diversas. Nacidas tanto de la experiencia social de las poblaciones indígenas, como, en especial, de las contribuciones de corrientes

marxistas, cristianas progresistas y antropológicas nativistas. Su mayor novedad histórica radica en el hecho de que, a través de ellas, la población indígena, por lo general abandonada en los márgenes de la política y en la base de la escala social, se dispuso a emanciparse material y simbólicamente, y accedió a la arena pública a través de los medios de los que solía estar excluida o que le habían resultado extraños u hostiles: las elecciones, los partidos políticos, la Constitución.



Rafael Correa y Evo Morales, en México, noviembre de 2009.

No menos poderosos son los elementos tradicionales, ya sea en el campo cultural, donde el llamado a la autodeterminación de la nación indígena corre el riesgo de desembocar en el exclusivismo étnico, o en el campo social, donde la invocación del comunitarismo aborigen retoma a menudo los temas de la tradición antiliberal católica y marxista. También en el campo económico, donde se insertan en el surco marcado en el pasado por el nacionalismo, y en el campo político, donde los gobiernos indigenistas acuden al populismo, puesto que buscan monopolizar el poder y limitar el pluralismo en nombre de la unidad del pueblo y la nación, de la justicia social y la homogeneidad étnica.

Las transformaciones del panorama religioso

En el transcurso de la historia, la cultura política y el imaginario social de gran parte de la población latinoamericana han sido plasmados o se han visto profundamente influidos por la antigua pertenencia de la región a la civilización católica. Esta apreciación, válida para la época colonial, cuando la América ibérica era parte del imperio católico de España y Portugal, funciona también para la edad contemporánea, iniciada con la Independencia, dado que numerosas corrientes políticas e ideológicas se han reivindicado como parte del sustrato ideal o moral católico. Corrientes que a menudo han tenido declinaciones divergentes o antitéticas –como en la polémica entre católicos y liberales e integristas, conservadores y progresistas, ortodoxos o liberacionistas–, o han entrado en colisión entre sí porque se disputaban el mismo espacio político y el mismo universo ideal, como sucedió con las tensiones entre la iglesia institucional y los movimientos populistas o radicales, o entre las autoridades eclesiásticas y los gobiernos dictatoriales, que ambicionaban legitimarse exhibiendo su catolicidad.

De hecho, la historia política y social de América Latina está íntimamente impregnada por su historia religiosa. Esto lleva a pensar que ciertas transformaciones fundamentales, aceleradas en las últimas décadas, tendrán en el futuro profundas repercusiones en todos los ámbitos de la vida y la historia latinoamericanas. Dos cambios, disímiles entre sí, se destacan en particular. La primera es la progresiva transformación de América Latina: de continente católico que había hecho de la unanimidad religiosa un factor clave de su identidad, se ha configurado como un continente donde rige un sustancial pluralismo religioso. En efecto, aunque el catolicismo sigue teniendo preeminencia (ya que a él pertenece entre el 70% y el 80% de los latinoamericanos), se encuentra lejos de la posición monopólica que detentaba treinta años antes (cuando aquel porcentaje superaba el 90%), y ya no está en posición de reclamar privilegios públicos especiales o reivindicar la tutela sobre la identidad de las naciones particulares, al tiempo que enfrenta la necesidad de convivir con otros cultos y credos, sobre todo, aunque no exclusivamente, protestantes. Esta transformación de largo alcance reduce y cambia la influencia del catolicismo en América Latina, y la somete a nuevos retos, pero no indica la atenuación del espíritu religioso en la región. De hecho, pone de manifiesto la existencia de una demanda espiritual insatisfecha, principalmente entre las clases populares y marginadas, tanto rurales como de recien-

te urbanización, que con frecuencia buscan en las nuevas confesiones respuestas a sus necesidades.



La Marcha para Jesús, realizada en Brasil cada año por las iglesias evangélicas, reunió en 2010 a 2 millones de personas en San Pablo. *Noticia Cristiana*, 2007.

De signo y naturaleza muy distinta es la segunda y vasta transformación en curso, también de raíces antiguas y extensas, pero acelerada desde el retorno de la democracia, cuando el contexto cultural e institucional le permitió expresarse en libertad. Se trata de la creciente secularización de la población latinoamericana, en especial de la urbana, de los sectores medios e instruidos (más que de los populares y con menor instrucción), y de los jóvenes (antes que de las personas adultas o ancianas), que se produce a ritmos y en dimensiones mayores que en cualquier otra época. En este marco, la secularización incide tanto en el aumento de las personas que se definen ateas o agnósticas y que no se inspiran en su vida social por preceptos de naturaleza religiosa, como en quienes, aunque se declaran católicos, tienden cada vez más a decidir y comportarse de acuerdo con la propia conciencia individual, sin prestar particular escucha al clero ni a la doctrina de la iglesia. Esto se verifica tanto en el campo político como en el terreno moral y sexual, lo que denota la creciente difusión de una cultura de la responsabilidad y de los derechos individuales y lleva a creer que en varios países

latinoamericanos se está restringiendo la inmensa cuenca de la cual en el pasado han procedido las culturas políticas de tipo organicista, fundadas en la preeminencia del todo sobre las partes, de la comunidad sobre el individuo.

En general, tales transformaciones indican ciertas conmociones en curso en las más profundas hendiduras de las sociedades latinoamericanas: unas presionan para incrementar el peso de la dimensión religiosa en la vida pública, las otras, por el contrario, para distinguir de un modo más neto entre los dos ámbitos. Estos movimientos indican una marcada y creciente heterogeneidad espiritual, de la cual hay evidentes signos en la historia política del área. En esa historia conviven movimientos populistas imbuidos de espíritu palingenésico de matriz religiosa –que en ciertos casos, como en el de Evo Morales en Bolivia, llevan a redescubrir o reinventar antiguos ritos precolombinos– y regímenes políticos con una impronta laica más profunda.

América Latina y el mundo

Visto desde América Latina, a comienzos del siglo XXI el mundo se ha vuelto muy distinto del que era dos décadas atrás. Por un lado, porque la Guerra Fría es un lejano recuerdo y la región ya no se constituye en territorio de competencia entre las grandes potencias. Por otro lado, porque los flujos comerciales y financieros se han elevado a tal punto que hicieron del área un espacio económico mucho más abierto, más permeable a los eventos externos y más autónomo en la elección de la búsqueda de socios y mercados. Más allá de esos factores evidentes, las principales novedades son dos: la primera es la dimensión mucho más concreta que asume en la agenda política latinoamericana el tema de la integración regional; la segunda es la atenuación de la influencia estadounidense, tanto en términos políticos y económicos como de hegemonía ideológica. En el plano de las relaciones internacionales, la región entera manifiesta una mayor madurez e independencia respecto del pasado, condición que implica tanto oportunidades como riesgos.

En cuanto a la integración regional, se ha visto animada por numerosos factores: los desafíos de la globalización, la necesidad de reforzar el poder de negociación de la región en los foros internacionales, la tendencia universal a crear macroáreas regionales y la consolidación de las instituciones y los valores democráticos como fundamentos de la comunidad latinoamericana, tanto es así que las redes de las organi-

zaciones políticas y económicas regionales se han visto engrosadas. Al mismo tiempo, resulta cada vez más claro que, en el horizonte de la integración, América Latina tiende a descomponerse en diversas partes, esto es, por un lado, México, América Central y el área caribeña, que gravitan mayormente en la órbita de Washington, como lo impone el peso de la historia, la economía y la geopolítica; por otro lado, las naciones de Sudamérica, que tienden a unirse, aunque encuentran pesados obstáculos (históricos y políticos, geográficos y económicos) en su camino. Dichos obstáculos vuelven complejo el esfuerzo de hacer converger el área andina y el Cono Sur y las instituciones que están surgiendo, el Mercosur y la Comunidad Andina, en un único organismo regional, premisa del futuro pasaje del ámbito comercial a la más desafiante esfera monetaria, militar y política. Tal es la idea central de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), creada en Brasilia en 2008, que ha dado las primeras pruebas de su potencial político asumiendo con relativo éxito la gestión de algunas crisis delicadas (como la confrontación en Bolivia en 2008 entre el gobierno y las provincias contrarias a la nueva Constitución), que en épocas de la Guerra Fría habrían abierto el camino a la intervención política y diplomática de los Estados Unidos. Faro inspirador y clave de esa política es Brasil, tanto por la objetiva hegemonía que deriva de su dimensión y su potencia, como por su peculiar condición de bisagra entre la América indígena y la europea, a lo cual se suma el indudable prestigio adquirido en la arena internacional. De su capacidad diplomática y del tacto para desempeñar el liderazgo dependerá en gran medida el éxito de tales esfuerzos.

De hecho, en la primera década del nuevo milenio la región ha dado algunos pasos importantes hacia una mayor integración, aunque no fueron tan rápidos ni tan eficaces como era lícito esperar. Los obstáculos que siempre han frenado la cooperación regional permanecen vigentes, en especial si se piensa en los contrastes entre intereses nacionales, en particular entre países grandes y populosos, preocupados por proteger los propios mercados, como Brasil, y países más pequeños y muy dinámicos, más que nunca proyectados hacia el exterior, como Chile, y por tanto poco dispuestos a dejarse atar las manos con rígidas barreras impositivas. A esto se sumaría el renacimiento de ideologías nacionalistas poco propensas a propiciar acuerdos e instituciones supranacionales, sin las cuales será difícil transitar desde una endeble integración comercial a una más robusta integración política. El mismo poder extraordinario de Brasil constituye un problema, puesto que es difícil que los otros países del área –temerosos de que la integración se

transmute en implícita anexión– reconozcan sin objeciones el liderazgo. Tampoco contribuyen a la integración los continuos esfuerzos de los regímenes políticos más radicales por hacer de ella el instrumento para ampliar y potenciar el frente antiamericano. Lejos de promover la unión y la institucionalización, tienden a alimentar los contrastes y las defecciones, la rigidez y la inestabilidad. En efecto, la primera década del nuevo milenio estuvo atravesada por tensiones regionales, a veces agudas y portadoras de consecuencias duraderas, como por ejemplo la confrontación entre la Argentina y Uruguay en torno a una espinosa cuestión política y ambiental en la frontera entre ambos países, o bien las disputas entre Colombia y sus vecinos por las bases de las guerrillas instaladas en sus territorios y por la decisión del gobierno de Bogotá de bombardearlas. A estas se sumaron los conflictos entre Brasil y países como Ecuador y Bolivia, que en la nacionalización de sus sectores extractivos han golpeado algunas ingentes inversiones brasileñas.



Ambientalistas de Gualeguaychú (Entre Ríos, Argentina), en una manifestación contra la instalación, en la costa uruguaya, de la fábrica de pasta de papel Botnia, en marzo de 2009. Agencia Télam.

Espejo fiel de esas dificultades es el Mercosur, el más ambicioso esfuerzo de integración jamás intentado en Sudamérica, que ha estimulado los intercambios comerciales favoreciendo un sustancioso incremento, aunque, en casi veinte años de vida, no presenta un balance alentador,

ya sea porque, en términos económicos, se ha constituido como una imprecisa área de libre comercio antes que como un verdadero mercado común (un área minada de conflictos crónicos entre los países miembros a causa de las enormes asimetrías entre sus economías) o bien porque quedó a medio camino entre un proyecto de integración económica y uno de integración política, como lo revelan su escasa institucionalización y la ausencia de cualquier forma de participación de la población en la toma de decisiones.

George W. Bush y América Latina

En 2001, la llegada de George W. Bush a la Casa Blanca suscitó grandes expectativas acerca del futuro de las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina, tanto porque durante la campaña electoral había criticado al presidente saliente por la escasa prioridad reservada a la región, como por la inédita decisión de realizar su primer viaje oficial a México. Ese empeño se vio confirmado en su activa participación en la cumbre de jefes de estado americanos realizada en Quebec, donde fue aprobada la llamada "cláusula democrática", que implicaba el compromiso de defender la democracia en la región, algo que luego sería incorporado también por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Los atentados del 11 de septiembre operaron un cambio de contexto. Por un lado, porque la decisión de la Casa Blanca de concentrarse en la guerra global al terrorismo islámico desterró a América Latina como prioridad, ya que esta es el área del globo donde la amenaza terrorista está menos presente. Por otro lado, porque la reacción de algunos gobiernos y la respuesta hostil de parte de la opinión pública latinoamericana minaron la confianza de Bush en la cooperación de la región con la política que estaba emprendiendo. Esto fue confirmado en 2003, a partir del firme rechazo de los latinoamericanos y de sus gobiernos a la decisión unilateral de la administración estadounidense de lanzar el ataque al Irak de Saddam Hussein. Ello fue así a tal punto que las enormes presiones que ejerció sobre los gobiernos de Chile y México (dos de las administraciones con más sintonía con la Casa Blanca) para obtener su voto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no dieron resultado.

A esto se sumó la total falta de sentido de la oportunidad política manifestada por el gobierno de George W. Bush en 2002, cuando se apresuró a reconocer la autoridad de quienes en Venezuela acababan de deponer al gobierno de Hugo Chávez. Esta actitud resintió aún más su credibilidad

y su imagen en América Latina, donde dicho gesto recordó el inveterado intervencionismo estadounidense, derrotado además en aquella crisis, puesto que el caudillo venezolano volvió pronto al estrado. Esa crisis puso de relieve el nuevo enfoque estadounidense hacia los problemas hemisféricos, que recolocaba la seguridad –y por ende la neutralización de los potenciales focos hostiles– en el mismo plano que la democracia y el desarrollo. Tanto que la dimensión militar del plan Colombia fue potenciada por la administración Bush en detrimento de la dimensión social de sus orígenes, enfoque que despertaría escasas simpatías hacia la administración Bush en América Latina, lo cual le impidió ejercer con eficacia el liderazgo político en un área atravesada por delicadas tensiones políticas e ideológicas.

La importancia asumida por la ideología en la política de Bush hacia la región le atrajo numerosos enemigos y no le permitió desarrollar la función estabilizadora propia de una potencia hegemónica. Sin embargo, ello no le impidió consolidar las relaciones con algunos gobiernos de tendencia opuesta a la suya, en particular con Brasil, donde la administración de Lula garantizó a los Estados Unidos tanto una constructiva cooperación en numerosos campos –empezando por el energético– como una política exterior pragmática y moderada, al punto de garantizar el equilibrio regional que la política estadounidense no estaba en condiciones de asegurar.

El segundo y peculiar rasgo de las relaciones internacionales del área latinoamericana en el primer decenio del siglo XXI es la reducción del peso ejercido por los Estados Unidos (lo que no implica, claro está, ausencia de influencia). Dicha reducción es mucho mayor en Sudamérica que en otras partes de la región, con excepción hecha de Colombia, aliado fiel de los Estados Unidos, a la cual la violencia política, el narcotráfico y los riesgos de la desestabilización regional han vuelto prioritaria a ojos de Washington. En el resto de América Latina, por el contrario, tanto la reacción generada por el Consenso de Washington, como la tendencia unilateral puesta de manifiesto por George W. Bush después del ataque terrorista a las Torres Gemelas en 2001 han dado nuevo vigor al siempre latente antiamericanismo. De hecho, la elección de Barack Obama en 2008, aunque bienvenida por la opinión pública latinoamericana y coronada por algunos gestos iniciales destinados a abrir una nueva etapa en las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina, no ha suscitado particular expectativa, lo que confirma que, para la mayor parte de los sudamericanos, lo que proviene de Wash-

ington no pesa tanto sobre el propio destino, como ocurría un tiempo atrás. No es que los Estados Unidos se hayan resignado a la declinación de su hegemonía sobre el hemisferio –fundamental para su propia seguridad y prosperidad, perseguida por dos siglos–, pero es casi imposible que vuelva a ser la que fue en el pasado, puesto que los ya varios lustros de globalización han ampliado los horizontes internacionales de América Latina, en especial de Sudamérica, cuyos países cultivan con más intensidad y beneficios las relaciones con otros socios, ya se trate de la Unión Europea, Rusia, los tigres asiáticos o China.

Todo esto no quita que América Latina sea aún una región periférica en el nuevo orden internacional, cuyos vertiginosos cambios vive en forma más atenuada que otras áreas, aunque también sufre con menos violencia sus traumas. Atravesada por divisiones internas, atenta a hacer sentir la propia voz de modo unívoco y mostrándose como un área cohesionada en la defensa de intereses comunes, entre los países de la región sólo Brasil y en medida mucho menor México poseen el potencial para ser protagonistas de las relaciones internacionales. Los otros, en cambio, tienen prestigio pero no potencia (como Chile), ambición pero pocas dotes políticas (como Venezuela), mucho potencial pero escasa confiabilidad (como la Argentina), y proceden de manera dispersa, algunos con éxito y otros no tanto, en la política global del siglo XXI.

Bibliografía*

Obras generales e historias por países

AA. VV., *Historia General de América Latina*, Madrid, UNESCO-Trotta, 1999.

Bethell, Leslie (ed.), *Historia de América Latina*, Barcelona, Crítica, 1991-2002 (16 volúmenes).

Caetano, Gerardo y Rilla, José, *Historia contemporánea del Uruguay. De la colonia al siglo XXI*, Montevideo, Fin de Siglo-CLAEH, 2005.

Carmagnani, Marcello (coord.), *Federalismos latinoamericanos: México/Brasil/Argentina*, México, Fondo de Cultura Económica, 1996.

Correa, Sofía, Figueroa, Consuelo, Jocelyn-Holt, Alfredo, Rolle, Claudio y Vicuña, Manuel, *Historia del siglo XX chileno*, Santiago de Chile, Sudamericana, 2001.

Chiaramonte, José Carlos, Marichal, Carlos y Granado, Aimer (comp.), *Crear la nación. Los nombres de los países de América Latina*, Buenos Aires, Sudamericana, 2008.

Devoto, Fernando y Fausto, Boris, *Argentina-Brasil 1850-2000. Un ensayo de historia comparada*, Buenos Aires, Sudamericana, 2008.

Di Tella, Torcuato (comp.), *Repertorio político latinoamericano*, 4 tomos, Buenos Aires, Instituto Di Tella, 2008.

—, *Situaciones e ideologías en Latinoamérica*, Buenos Aires, Sudamericana, 1986.

* El autor agradece la colaboración de Germán Friedmann en la revisión y ampliación de la bibliografía.

Fausto, Boris, *Historia concisa de Brasil*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2003.

Hamnett, Brian, *Historia de México*, Madrid, Cambridge University Press, 2002.

Romero, Luis Alberto, *Breve historia contemporánea de la Argentina*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1994.

Sabato, Hilda (coord.), *Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas de América Latina*, México, Fondo de Cultura Económica, 1999.

Introducción

Altamirano, Carlos (dir.), *Historia de los intelectuales en América Latina. I. La ciudad letrada, de la conquista al modernismo*, Buenos Aires, Katz, 2008.

—, *Historia de los intelectuales en América Latina. II. Los avatares de la ciudad letrada en el siglo XX*, Buenos Aires, Katz, 2010.

Bethell, Leslie (ed.), *Historia de América Latina*, Barcelona, Crítica, 1991-2002 (16 volúmenes).

Carmagnani, Marcello, *El otro Occidente. América Latina desde la invasión europea hasta la globalización*, México, Fondo de Cultura Económica, 2004.

Dabène, Olivier, *América Latina en el siglo XX*, Madrid, Síntesis, 2003.

Halperin Donghi, Tulio, *Historia contemporánea de América Latina*, Buenos Aires, Alianza, 1992.

Lucena Salmoral, Manuel (coord.), *Historia de Iberoamérica. III. Historia contemporánea*, Madrid, Cátedra, 2008.

Malamud, Carlos, *Historia de América*, Madrid, Alianza, 2005.

Meyer, Jean, *Historia de los cristianos en América Latina: siglos XIX y XX*, México, Vuelta, 1989.

Romero, José Luis, *Latinoamérica: las ciudades y las ideas*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2001.

Skidmore, Thomas y Smith, Peter, *Historia contemporánea de América Latina*, Barcelona, Crítica, 1999.

Terán, Oscar (coord.), *Ideas en el siglo. Intelectuales y cultura en el siglo XX latinoamericano*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004.

Korol, Juan Carlos y Tandeter, Enrique, *Historia económica de América Latina: problemas y procesos*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1999.

1. El patrimonio espiritual de la Colonia

Annino, Antonio, Castro Leiva, Luis y Guerra, François-Xavier (coords.), *De los imperios a las naciones: Iberoamérica*, Zaragoza, Iber Caja, 1994.

Bakewell, Peter J. *et al.* (coord.), *El sistema colonial en la América española*, Barcelona, Crítica, 1991.

Brading, David A., *Orbe indiano. De la monarquía católica a la república criolla, 1492-1867*, México, Fondo de Cultura Económica, 1991.

Gallego, José Andrés, *La esclavitud en la América española*, Madrid, Encuentro, 2005.

Garavaglia, Juan Carlos y Marchena, Juan, *América Latina de los orígenes a la independencia*, Barcelona, Crítica, 2005.

Halperin Donghi, Tulio, *Reforma y disolución de los imperios ibéricos, 1750-1850*, Madrid, Alianza, 1985.

Mazín, Oscar, *Iberoamérica: del descubrimiento a la independencia*, México, El Colegio de México, 2007.

Lynch, John, *América Latina, entre colonia y nación*, Barcelona, Crítica, 2001.

Tandeter, Enrique, *Coacción y mercado. La minería de la plata en el Potosí colonial, 1692-1826*, Buenos Aires, Sudamericana, 1992.

—, (dir.), *Procesos americanos hacia la redefinición colonial*, colección Historia General de América Latina, vol. 4, Madrid, UNESCO-Trotta, 2002.

2. La independencia de América Latina

Annino, Antonio y Guerra, François-Xavier (coords.), *Inventando la nación iberoamericana. Siglo XIX*, México, Fondo de Cultura Económica, 2003.

Chiaramonte, José Carlos, *Nación y estado en Iberoamérica: el lenguaje político en tiempos de las independencias*, Buenos Aires, Sudamericana, 2004.

Breña, Roberto, *El primer liberalismo español y los procesos de emancipación de América, 1808-1824. Una revisión historiográfica del liberalismo hispánico*, México, El Colegio de México, 2006.

Carrera Damas, Germán y Lombardi, John (dir.), *La crisis estructural de las sociedades implantadas*, colección Historia General de América Latína, vol. 5, Madrid, UNESCO-Trotta, 2009.

Chust, Manuel (ed.), *Las independencias iberoamericanas en su laberinto. Controversias, cuestiones, interpretaciones*, Valencia, Publicaciones de la Universitat de Valencia, 2010.

Guerra, Francois-Xavier, *Modernidad e independencias: ensayos sobre revoluciones hispánicas*, Madrid, Mapfre, 1992.

Halperin Donghi, Tulio, *Revolución y guerra: formación de una élite dirigente en la Argentina criolla*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005.

Lynch, John, *Las revoluciones hispanoamericanas, 1808-1826*, Barcelona, Ariel, 2008.

— , *Simón Bolívar*, Barcelona, Crítica, 2010.

Palacios, Marco (coord.), *Las independencias hispanoamericanas. Interpretaciones doscientos años después*, Bogotá, Norma, 2009.

Rodríguez Ordóñez, Jaime E., *La independencia de la América española*, México, Fondo de Cultura Económica, 2005.

3. Las repúblicas sin estado

Ayala Mora, Enrique (dir.) *Los proyectos nacionales latinoamericanos: sus instrumentos y articulación, 1870-1930*, colección Historia General de América Latina, vol. 7, Madrid, UNESCO-Trotta, 2008.

Botana, Natalio, *La tradición republicana: Alberdi, Sarmiento y las ideas políticas de su tiempo*, Buenos Aires, Sudamericana, 1997.

Collier, Simon, *Chile. La construcción de una república, 1830-1865. Política e ideas*, Santiago de Chile, Ediciones de la Universidad Católica, 2005.

Hale, Charles A., *El liberalismo mexicano en la época de Mora*, México, Siglo XXI, 1972.

Krauze, Enrique, *Siglo de caudillos*, Barcelona, Tusquets, 1994.

Lynch, John, *Caudillos en Hispanoamérica, 1800-1850*, Madrid, Mapfre, 1993.

Rojas, Rafael, *Las repúblicas de aires. Utopía y desencanto en la revolución de Hispanoamérica*, Buenos Aires, Taurus, 2010.

Sabato, Hilda (coord.), *Ciudadanía política y formación de las naciones: perspectivas históricas de América Latina*, México, Fondo de Cultura Económica, 1999.

4. La era liberal

Annino, Antonio (coord.), *Historia de las elecciones en Iberoamérica. Siglo XIX: de la formación del espacio político nacional*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1995.

Botana, Natalio, *El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1916*, Buenos Aires, Sudamericana, 1994.

Carmagnani, Marcello, *Estado y sociedad en América Latina, 1850-1930*, Barcelona, Crítica, 1984.

Guerra, Xavier François, *México. Del Antiguo Régimen a la Revolución*, México, Fondo de Cultura Económica, 2009.

Malamud, Carlos (coord.), *Legitimidad, representación y alternancia en España y América Latina: las reformas electorales, 1880-1930*, México, Fondo de Cultura Económica, 2000.

Moya, José C., *Primos y extranjeros. La inmigración española en Buenos Aires, 1850-1930*, Buenos Aires, Emecé, 2004.

Murilo de Carvalho, José, *La formación de las almas. El imaginario de la república en Brasil*, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 1997.

Toen, John L., *Guerra y genocidio en Cuba (1895-1898)*, Madrid, Turner, 2008.

5. El ocaso de la era liberal

Barrón, Luis, *Historias de la Revolución mexicana*, México, Fondo de Cultura Económica, 2010.

Caetano, Gerardo (coord.), *Los uruguayos del Centenario: nación, ciudadanía, religión y educación, 1910-1930*, Montevideo, Taurus, 2000.

Knight, Alan, *La Revolución mexicana: del Porfiriato al nuevo régimen constitucional*, México, Grijalbo, 1996.

Leibner, Gerardo, *El mito del socialismo indígena: fuentes y contextos peruanos de Mariátegui*, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1999.

Mc Gee Deutsch, Sandra, *Las derechas. La extrema derecha en la Argentina, el Brasil y Chile, 1890-1939*, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 2005.

Persello, Ana Virginia, *El partido radical. Gobierno y oposición, 1916-1943*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004.

Womack, John, *Zapata y la Revolución mexicana*, México, Siglo XXI, 2006.

6. Corporativismo y sociedad de masas

D'Araujo, María Celina (ed.), *La era de Vargas*, México, Fondo de Cultura Económica, 1998.

González Casanova, Pablo (coord.), *Historia del movimiento obrero en América Latina*, México, Siglo XXI, 1984-1985.

Halperin Donghi, Tulio, *La república imposible (1930-1945)*, Biblioteca del Pensamiento Argentina, vol. V, Buenos Aires, Ariel, 2004.

—, *La Argentina y la tormenta del mundo. Ideas e ideologías entre 1930 y 1945*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2003.

Krauze, Enrique, *Biografía del poder: caudillos de la Revolución mexicana, 1910-1940*, Barcelona, Tusquets, 1997.

Rouquié, Alain, *El estado militar en América Latina*, Buenos Aires, Emecé, 1984.

Thorp, Rosemary (comp.), *América Latina en los años treinta. El papel de la periferia en la crisis mundial*, México, Fondo de Cultura Económica, 1988.

Zanatta, Loris, *Del estado liberal a la nación católica. Iglesia y ejército en los orígenes del peronismo, 1930-1943*, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 1996.

7. La edad del populismo clásico

Caimari, Lila, *Perón y la iglesia católica. Religión, estado y sociedad en la Argentina (1943-1955)*, Buenos Aires, Ariel, 1995.

Groppo, Alejandro, *Los dos príncipes: Juan D. Perón y Getulio Vargas. Un estudio comparado del populismo latinoamericano*, Villa María, Eduvim, 2009.

Palacios, Marco (coord.), *Historia general de América Latina, VIII: América Latina desde 1930*, Madrid, Trotta, 2008.

Torre, Juan Carlos, *Los años peronistas (1943-1955)*, Buenos Aires, Sudamericana, 2002.

Zanatta, Loris, *Breve historia del peronismo clásico*, Buenos Aires, Sudamericana, 2009.

—, *Eva Perón, una biografía política*, Buenos Aires, Sudamericana, 2011.

8. Los años sesenta y setenta (I). El ciclo revolucionario

Altamirano, Carlos, *Bajo el signo de las masas (1943-1973)*, Biblioteca del Pensamiento Argentino, vol. VI, Buenos Aires, Ariel, 2001.

Aricó, José, *La cola del diablo: itinerario de Gramsci en América Latina*, Buenos Aires, Puntosur, 1988.

Hilb, Claudia, *Silencio, Cuba. La izquierda democrática frente al régimen de la Revolución cubana*, Buenos Aires, Edhasa, 2010.

Gazmuri, Cristián, *Eduardo Frei Montalva y su época*, Santiago de Chile, Aguilar, 2000.

Pérez-Stable, Marifeli, *La revolución cubana. Orígenes, desarrollo y legado*, Madrid, Colibrí, 1998.

Sánchez, Gonzalo y Lair, Eric (eds.), *Violencias y estrategias colectivas en la región andina*, Bogotá, Norma, 2004.

Sikkink, Kathryn, *El proyecto desarrollista en la Argentina y Brasil: Frondizi y Kubitschek*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2009.

Taffet, Jeffrey F., *Foreign Aid as Foreign Policy: the Alliance for Progress in Latin America*, Nueva York, Routledge, 2007.

9. Los años sesenta y setenta (II). El ciclo contrarrevolucionario

Bataillon, Gilles, *Génesis de las guerras intestinas en América Central (1960-1983)*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2009.

Chaves Palacios, Julián (coord.), *La larga memoria de la dictadura en Iberoamérica: Argentina, Chile y España*, Buenos Aires, Prometeo, 2010.

Collier, David (comp.), *El nuevo autoritarismo en América Latina*, México, Fondo de Cultura Económica, 1985.

Cotler, Julio (ed.), *Perú, 1964-1994: economía, sociedad y política*, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1995.

Huneeus, Carlos, *El régimen de Pinochet*, Santiago de Chile, Sudamericana, 2000.

Novaro, Marcos y Palermo, Vicente, *Historia Argentina, 9: La dictadura militar 1976-1983. Del golpe de estado a la resistencia democrática*, Buenos Aires, Paidós, 2003.

Valdivia Ortiz de Zárate, Verónica, *El golpe después del golpe. Leigh versus Pinochet*, Santiago de Chile, Lom, 2003.

Vezzetti, Hugo, *Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002.

—, *Sobre la violencia revolucionaria. Memorias y olvidos*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2009.

10. La década perdida y la democracia (re)encontrada

Coronil, Fernando, *El estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela*, Caracas, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad Central de Venezuela-Nueva Sociedad, 2002.

O'Donnel, Guillermo, Schmitter, Philippe C. y Whitehead, Lawrence (comps.), *Transiciones desde un gobierno autoritario*, Barcelona, Paidós, 1994.

Palermo, Vicente, *Sal en las heridas: las Malvinas en la cultura argentina contemporánea*, Buenos Aires, Sudamericana, 2007.

Waisman, Carlos, Rein, Raanan y Gurrutxaga Abad, Ander (eds.), *Transiciones de la dictadura a la democracia: los casos de España y América Latina*, Bilbao, Editorial de la Universidad del País Vasco, 2005.

11. La edad neoliberal

Camp, Roderic, *La política en México*, México, Siglo XXI, 2000.

Novaro, Marcos, *Historia de la Argentina, 1955-2010*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2010.

Palermo, Vicente y Novaro, Marcos, *Política y poder en el gobierno de Menem*, Buenos Aires, Norma, 1996.

Ramírez, Hernán, *Corporaciones en el poder. Institutos económicos y acción política en Brasil y Argentina. IPÊS, FIEL y Fundación Mediterránea*, Buenos Aires, Lenguaje claro, 2007.

Roniger, Luis y Sznajder, Mario, *El legado de las violaciones a los derechos humanos en el Cono Sur: Argentina, Chile y Uruguay*, La Plata, Ediciones al Margen, 2005.

12. El nuevo siglo, entre el futuro y el *déjà vu*

Crabtree, John; Gray Molina, Gregor y Whitehead, Laurence, *Tensiones irresueltas. Bolivia, pasado y presente*, La Paz, Plural, 2009.

Giraudo, Laura (coord.), *Ciudadanía y derechos indígenas en América Latina: poblaciones, estados y orden internacional*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007.

Krauze, Enrique, *El poder y el delirio*, Buenos Aires, Tusquets, 2008.

Panizza, Francisco (comp.), *El populismo como espejo de la democracia*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2009.

Svampa, Maristella, *Cambio de época. Movimientos sociales y poder político*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2008.

Svampa, Maristella, Stefanoni, Pablo y Fornillo, Bruno, *Debatir Bolivia. Perspectivas de un proyecto de descolonización*, Montevideo, Taurus, 2010.